

# TENDENCIAS 2020



AG  FITEL  
FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA



**Tendencias AGFITEL. AÑO 2020**

EDITA: FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA – FITEL  
Atalaya, 29. 28002 MADRID

COORDINACIÓN Y EDICIÓN: Fundación Anastasio de Gracia – FITEL

TEXTOS: José Luis Ábalos Meco  
Pepe Álvarez  
ATD CUARTO MUNDO. Jaime Muñoz, Daniel García  
José Bogas Gálvez  
Miguel Ángel Cilleros  
María Chivite Navascués  
José Vicente De los Mozos  
Antonio Garamendi Lecanda  
José Miguel Guerrero Sedano  
Salvador Illa Roca  
Julio Lacuerda Castelló  
Francisco Javier Lambán Montañés  
Juan Francisco Lazcano Acedo  
Manuel Marchena Gómez  
Carles Navarro Vigo  
Alberto Núñez Feijóo  
Cándid Penalva Peiró  
Ximo Puig i Ferrer  
Gregorio Rabanal Martínez  
Lorenzo Ramos Silva  
Miguel Sánchez-Moñita  
Ángeles Santamaría Martín  
Ismael Serrano  
Iñigo Urkullu Rentería  
Tomás Zarza Núñez

FOTOGRAFÍAS: Centro Documental Fundación Anastasio de Gracia-FITEL. Archivo.

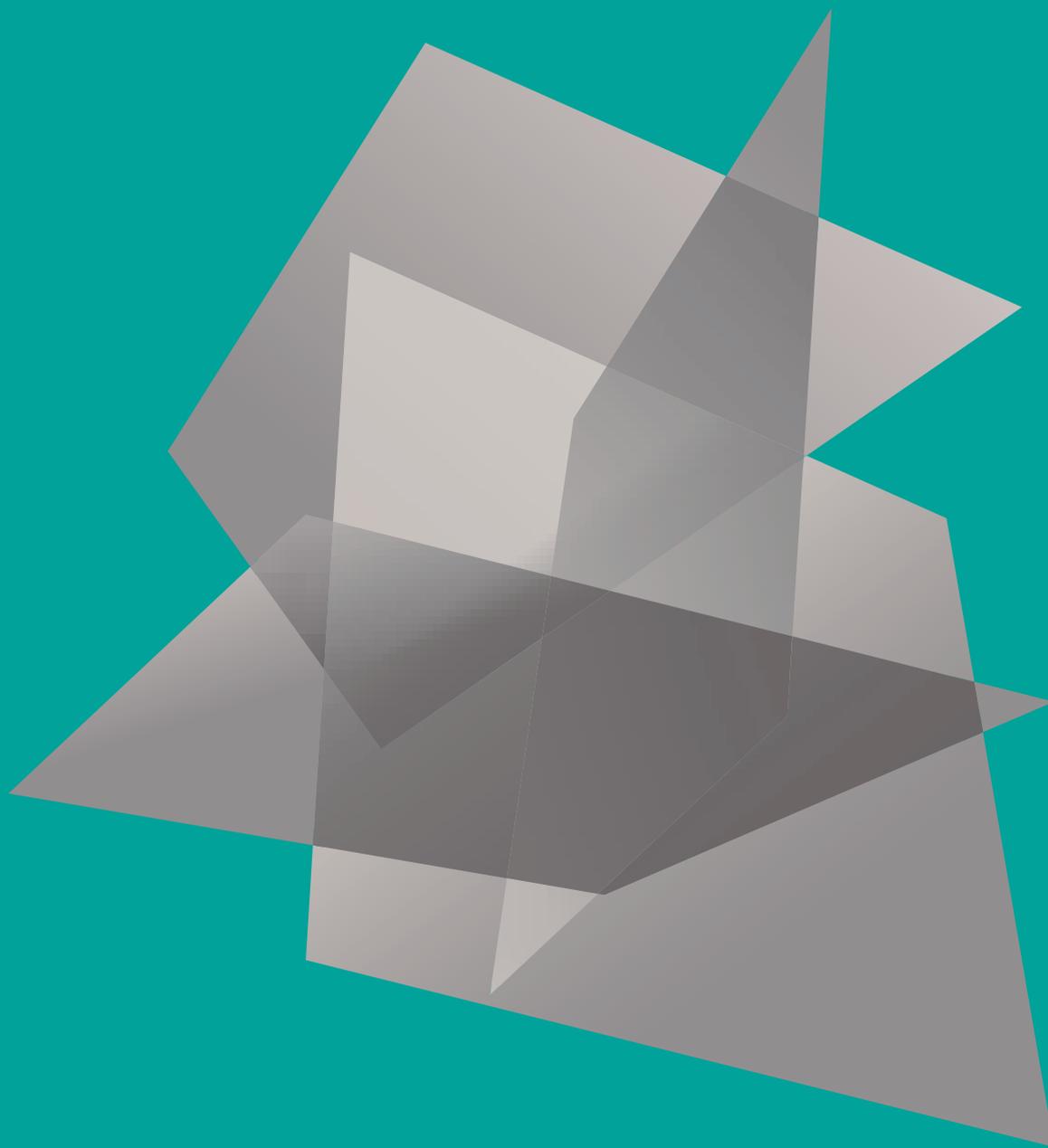
DISEÑO Y PRODUCCIÓN: Composiciones RALI, S.A.

Depósito Legal: M-19947-2011  
ISSN: 2174-9418

TENDENCIAS es un instrumento de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL para la reflexión, la investigación y el debate.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra ([www.conlicencia.com](http://www.conlicencia.com); 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

# TENDENCIAS 2020





**Patronato**

Presidente  
D. Pedro Luis Hojas Cancho

**Vocales**

D. Antonio Deusa Pedrazo  
D<sup>a</sup> Susana Dussailant Sabaté  
D<sup>a</sup> Lucía García Quismondo García Arcicollar  
D. Manuel García Salgado  
D. José Mejías Sarmiento  
D. José Emilio Mesa Ortega  
D. Jesús Ordóñez Gámez  
D. Carmelo Ruíz de la Hermosa Reino

**Secretario (no patrono)**

D. Saturnino Gil Serrano

**Patronato Honorífico**

D. Rami Aboukhair Hurtado  
Banco Santander

D. Ernesto Antolín Arribas  
Grupo Antolin

D. Juan Manuel Cruz Palacios  
Acciona

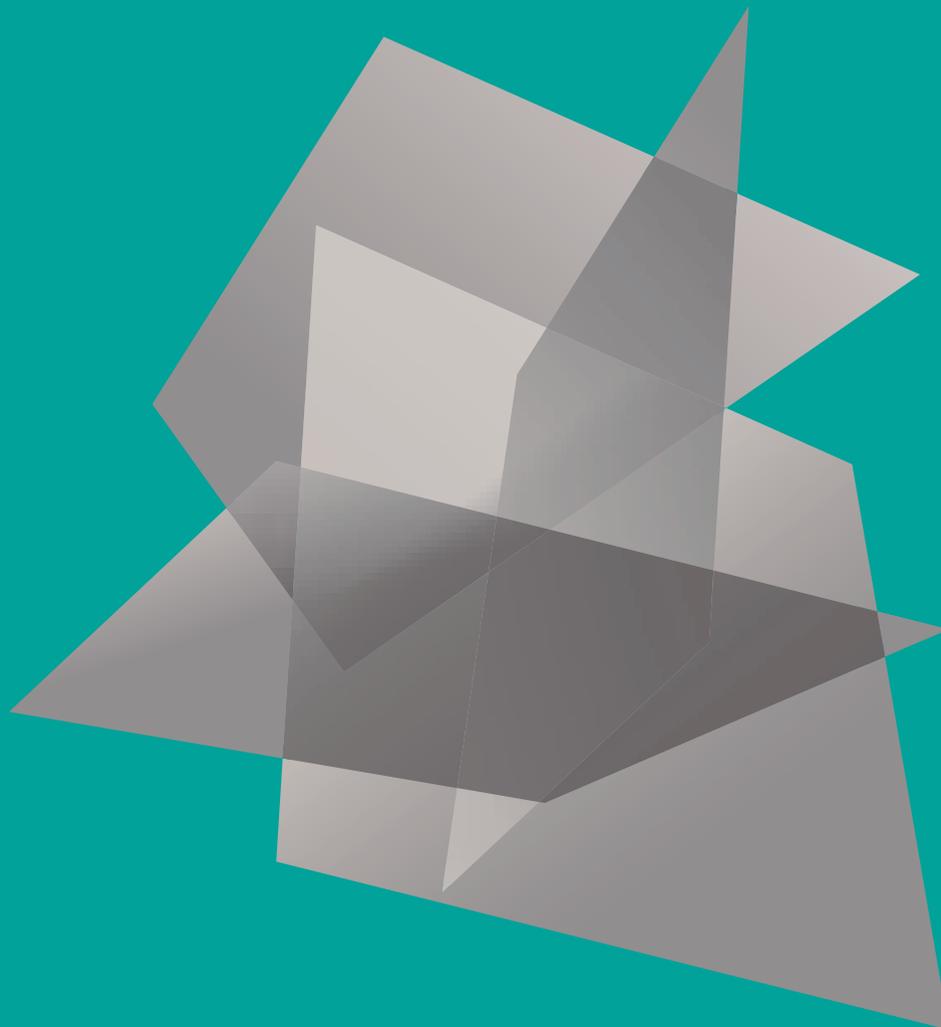
D. Jesús Izcue Irigoyen  
ArcelorMittal

D. José Antonio Jainaga Gómez  
Sidenor

D<sup>a</sup> Esther María Koplowitz Romero de Juseu  
FCC

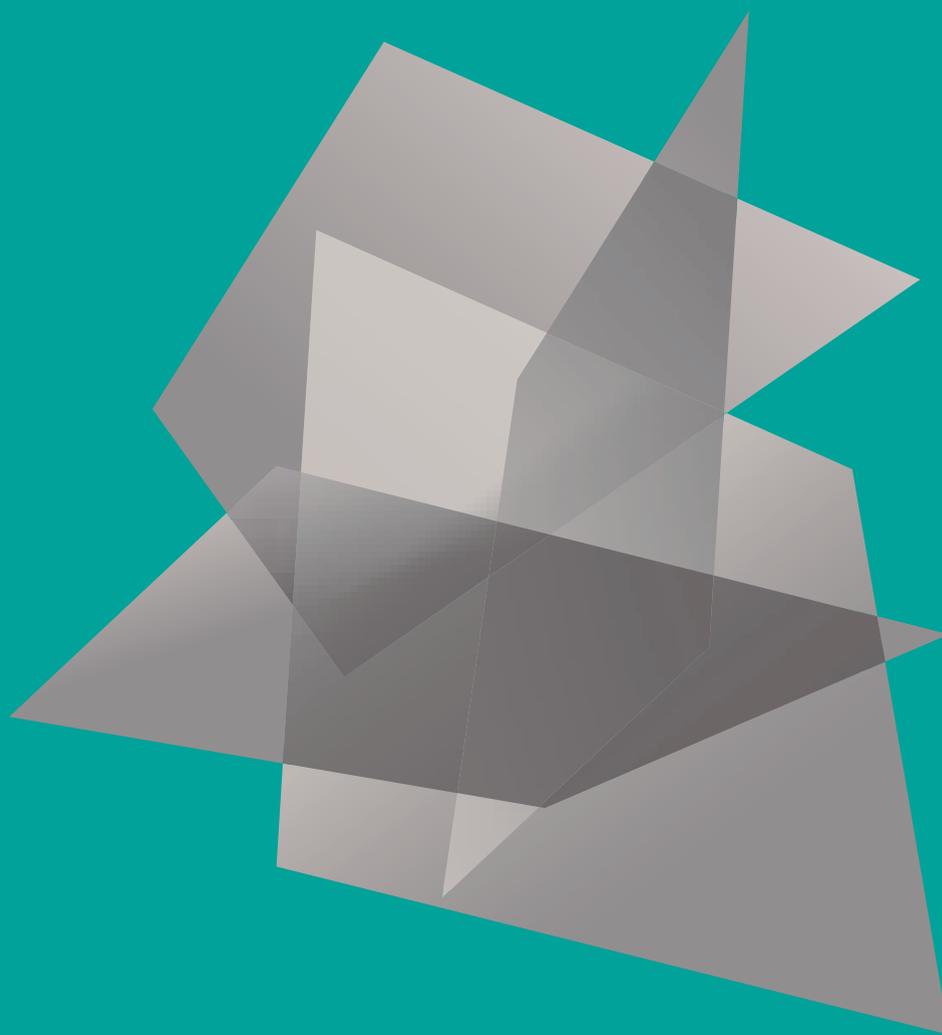
D. Florentino Pérez Rodríguez  
ACS

D. Francisco J. Riberas Mera  
Grupo Gestamp



---

Í N D I C E



PRESENTACIÓN

**Pedro Luí­s Hojas Cancho**

*Presidente de la Fundaci­on Anastasio de Gracia-FITEL* . . . . . 6

PR­OLOGO

**Pedro S­anchez**

*Presidente del Gobierno de Espa­na* . . . . . 14

CAMINOS DE HIERRO

**Colecci­on fotogr­afica**

*Centro Documental Fundaci­on Anastasio de Gracia-FITEL. Archivo* . . . . . 20

FIRMAS

**Jos­e Lu­is ­Abalos Meco**

*Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana* . . . . . 26

**Pepe ­lvarez**

*Secretario general de la UGT* . . . . . 34

**ATD CUARTO MUNDO. Jaime Mu­noz, Daniel Garc­ia**

*Voluntarios ATD Cuarto Mundo* . . . . . 40

**Jos­e Bogas G­lvarez**

*Consejero delegado de Endesa* . . . . . 48

**Miguel ­ngel Cilleros**

*Secretario general de FeSMC-UGT* . . . . . 54

**Mar­ia Chivite Navascu­es**

*Presidenta de Navarra* . . . . . 60

**Jos­e Vicente De los Mozos**

*Presidente de ANFAC* . . . . . 68

**Antonio Garamendi Lecanda**

*Presidente de CEOE* . . . . . 74

**Jos­e Miguel Guerrero Sedano**

*Presidente de CONFEMETAL* . . . . . 80

**Salvador Illa Roca**

*Ministro de Sanidad* . . . . . 88

**Julio Lacuerda Castell­o**

*Secretario general de FeSP-UGT* . . . . . 98

**Francisco Javier Lamb­an Monta­nes**

*Presidente del Gobierno de Arag­on* . . . . . 102

**Juan Francisco Lazcano Acedo**

*Presidente de la Confederaci­on Nacional de la Construcci­on (CNC)* . . . . . 108

**Manuel Marchena G­mez**

*Presidente Institucional de AGA* . . . . . 114

**Carles Navarro Vigo**

*Presidente de FEIQU* . . . . . 122

**Alberto N­nez Feij­o**

*Presidente de la Xunta de Galicia* . . . . . 128

**C­ndid Penalva Peir­o**

*Presidente del Consejo Intertextil Espa­ol* . . . . . 136

**Ximo Puig i Ferrer**

*President de la Generalitat Valenciana* . . . . . 142

**Gregorio Rabanal Mart­nez**

*Presidente de Grupo Hunosa* . . . . . 152

**Lorenzo Ramos Silva**

*Secretario general UPA-UGT* . . . . . 160

**Miguel S­anchez-Mo­ita, Tom­s Zarza N­nez**

*Profesores de la Universidad Rey Juan Carlos* . . . . . 166

**­ngeles Santamar­ia Mart­in**

*Consejera Delegada de Iberdrola Espa­na* . . . . . 172

**Ismael Serrano**

*Cantautor* . . . . . 182

**I­igo Urkullu Renteria**

*Lehendakari del Gobierno Vasco* . . . . . 186

FOTOGRAF­IAS

*Centro Documental Fundaci­on Anastasio de Gracia-FITEL. Archivo* . . . . . 22, 66, 106, 150, 194





# P E D R O L U I S H O J A S C A N C H O

Presidente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL

D

Nacido en Burgos en 1968. Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y Técnico de Formación Profesional, es Secretario General de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) desde mayo de 2016.

Ingresó en UGT en 1989 y desde 1990 ha desempeñado diferentes cargos dentro de la Organización, comenzando como miembro del Comité de Empresa de la empresa Cerámicas Gala (Grupo Roca). En 1992 fue elegido secretario general de MCA-UGT Burgos, cargo que desempeñó hasta que su elección como secretario general de MCA-UGT Castilla y León, en 1998, permaneciendo en el cargo hasta la constitución de UGT FICA en 2016.

Es presidente de la Fundación Anastasio de Gracia-Fitel (AG FITEL) y de la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo, así como vicepresidente de la Fundación Laboral de la Construcción y de la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (CEMA).

Es miembro del Comité Ejecutivo de industriAll Global, industriAll Europa, la Federación Europea de Trabajadores de la Construcción y la Madera (FETCM), y de la Federación Europea de Sindicatos de Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT).



La décima edición de la Revista Tendencias llega en un momento excepcional, sin parangón en nuestra historia reciente, en el que hemos vivido el confinamiento en nuestro domicilio, la práctica paralización de la actividad económica, el desbordamiento de servicios públicos básicos, y otras muchas circunstancias no deseables.

Como contrapunto, también hemos asistido al respeto y colaboración de la ciudadanía con todas las normas sanitarias y de convivencia, así como a multitud de actuaciones de cooperación y apoyo entre ciudadanos. Todo ello ha demostrado, una vez más, el alto nivel de solidaridad de la sociedad española.

El conjunto de la ciudadanía nos hemos visto afectados por esta pandemia, de distinta forma, en distintos grados, pero todos y todas nos hemos tenido que enfrentar a situaciones inéditas, y de ellas sacaremos nuestras propias conclusiones y enseñanzas.

Pero los que nos dedicamos a una actividad de índole social —políticos, sindicalistas, pensadores, profesores universitarios, etc.— tenemos la obligación de aprender de las lecciones que esta situación atípica y desconocida nos está dejando, y de contribuir a repensar qué país queremos en el futuro y cómo hemos de trabajar para construirlo.

AGFITEL, como Fundación impulsada por la Federación de Industria, Construcción y Agro de la UGT (UGT-FICA), implicada directamente en lo social, lo cultural o lo político, no podía dejar pasar la oportunidad de poner su principal medio de comunicación, la Revista Tendencias, al servicio de personalidades de reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos, para que pudieran reflexionar sobre el futuro postcovid o sobre cualquier otro aspecto que consideraran de interés.

Antes de la pandemia, ya hablábamos sobre la necesidad que tenía nuestro país de afrontar profundas reformas en algunas importantes cuestiones, que estaban debilitando nuestra estructura social y económica.

Cometeríamos un grave error si solo actuáramos frente a la Covid-19 con medidas coyunturales para paliar los efectos más inmediatos y desaprovecháramos la oportunidad de acometer decididamente las reformas que el país necesita.

Cuando hayamos vencido el coronavirus, o tengamos medios eficientes para luchar contra él, estaremos en un mundo diferente, en el que muchas cosas de nuestro día a día habrán cambiado, pero en el que los principios que asientan nuestra sociedad no solo no pueden cambiar, sino que habrá que perfeccionarlos para que sustenten mejor nuestra estructura de país.

A lo largo de los años hemos conformado una sociedad con derechos y libertades, que ha de desenvolverse en el marco de un modelo social que garantice y proteja estos derechos y libertades. Y esto no puede dejar de ser así.

Una de las primeras lecciones que hemos de extraer de esta crisis es la importancia de lo colectivo y la solidaridad, frente a la individualidad y el sálvese quien pueda.

Cuando hayamos vencido el coronavirus, o tengamos medios eficientes para luchar contra él, estaremos en un mundo diferente, en el que muchas cosas de nuestro día a día habrán cambiado

## La pandemia se ha cebado con los más vulnerables y ha contribuido a aumentar las diferencias sociales

En las últimas décadas, conceptos como el estado del bienestar o la gestión pública eran muy denostados, y el objetivo que subyacía a todos los demás era el adelgazamiento del Estado.

Ha hecho falta una crisis sanitaria, que ha derivado en una crisis económica sin precedentes, para que, desde cualquier punto del espectro ideológico, se vuelva la vista a «lo público», y se le exijan actuaciones rápidas, contundentes y eficientes ante problemas sobredimensionados.

Hemos aprendido que las medidas tomadas desde las distintas administraciones públicas, dirigidas a los trabajadores y trabajadoras, a las empresas, a distintos sectores económicos, están contribuyendo a paliar, al menos en parte, los graves efectos negativos de la pandemia.

Por ello, en la base de cualquier debate sobre el futuro ha de estar la defensa y potenciación de lo público y qué papel ha de desempeñar.

El futuro ha de pasar por conseguir un sistema redistributivo. Un sistema que articule los mecanismos necesarios para dotarnos de unos servicios públicos de calidad para combatir la pobreza y la desprotección, para intervenir en la economía y garantizar el abastecimiento, la pervivencia de actividades, ...

Esto nos lleva a otro gran debate: la financiación de las políticas y servicios públicos. Es preciso afrontar de manera decidida una reforma del sistema fiscal, necesaria desde hace tiempo, para hacerlo más progresivo, más justo y con mayor capacidad recaudatoria.

La pandemia se ha cebado con los más vulnerables y ha contribuido a aumentar las diferencias sociales.

Los efectos sobre el empleo están siendo devastadores. Una vez más, las peores repercusiones económicas se están cebando en los colectivos con una mayor precariedad laboral, que, en muchos casos, no solo han perdido su empleo, sino que viven en la incertidumbre sobre su futuro laboral.

De nuevo, se ha exacerbado la terrible dualidad que caracteriza nuestro mercado de trabajo. Esta nueva crisis llega cuando aún no habíamos superado la crisis anterior en términos de empleo.

Hay que establecer un modelo de crecimiento inclusivo, en el que la prioridad sea la creación y la defensa del empleo, que acabe con la inestabilidad y con cualquier forma de explotación laboral.

La normativa laboral debe ser objeto de una profunda revisión, que garantice empleos estables y con derechos. Es precisa una nueva regulación que no solo se adapte a los cambios que se han venido produciendo en los procesos productivos, sino que habrá de articular medidas para que, ante situaciones sobrevenidas, ajenas al normal desenvolviendo de las empresas, no sean los trabajadores y trabajadoras los primeros en padecer las consecuencias.

Esta crisis sanitaria, además de llevar más allá de sus límites al sistema sanitario, ha puesto a prueba nuestro sistema económico y ha puesto en primer plano las debilidades del mismo, revelando también, de manera clara, las fortalezas, que han de preservarse.

En este sentido, otra de las importantes lecciones a aprender es que no podemos continuar con un sistema productivo débil y vulnerable ante cualquier vaivén que se produzca en la economía. Debilidad que hizo que la crisis de 2008 nos afectara más que a otros países, igual que está ocurriendo ahora.





## Es el momento de adoptar las actuaciones necesarias para corregir la dualidad productiva entre modernidad y obsolescencia

El futuro ha de pasar por reindustrializar. Como no nos cansamos de repetir, la industria es, sin duda, la actividad económica que mayor solidez confiere a la economía, genera mayor volumen de puestos de trabajo estables y de calidad, y aporta mayor productividad y valor añadido.

Reindustrializar supone crear las bases necesarias, no solo para mantener y desarrollar la industria existente, sino también para recuperar el tejido industrial destruido en los últimos años y el que se está destruyendo hoy.

Por ello, potenciar el desarrollo sostenible de los distintos sectores industriales es imprescindible para contribuir a la bioeconomía, generar crecimiento económico, más empleo de calidad y mayor bienestar social.

La perspectiva medioambiental debe estar presente en cualquier propuesta para la recuperación, en la medida en que lleva implícito una apuesta por el progreso económico y genera unas externalidades y un efecto multiplicador que alcanzan al conjunto de la economía.

Si hasta ahora veníamos defendiendo que España necesitaba una industria sólida, fuerte y diversificada, la pandemia nos ha enseñado que, además, necesitamos una industria adaptada a nuestras posibilidades como país y a la posición que ocupamos en el contexto europeo, y, sobre todo, adaptable a las necesidades que puedan surgir.

Las tensiones generadas por el desabastecimiento de algunos productos sanitarios en el punto álgido de la crisis sanitaria o por el suministro generalizado de una posible vacuna o de medicamentos eficaces contra el virus, hace que nos planteemos la necesidad de definir un «mapa de industrias esenciales», en el que se identifiquen no solo las producciones que pudieran considerarse esenciales, sino también la capacidad de sectores y/o empresas para reconvertirse a las necesidades de cada momento.

Es el momento de adoptar las actuaciones necesarias para corregir la dualidad productiva entre modernidad y obsolescencia; para reducir la polarización territorial entre unos pocos focos industriales

y el enorme desierto industrial en la mayor parte del territorio; y para aminorar la excesiva dependencia de muy grandes empresas y del monocultivo industrial.

Tenemos ante nosotros la posibilidad de construir un país mejor. Es el momento de trabajar para levantar el país.

Un modelo de crecimiento inclusivo, un sistema económico redistributivo y un sistema productivo asentado en bases sólidas, con los múltiples aspectos que de ello se derivan, han de ser los objetivos de cualquier actuación para lo que se ha dado en llamar «reconstrucción del país»

Pero, para ello, necesitamos estar a la altura de las circunstancias como sociedad. Hemos de exigir a nuestros políticos que actúen con altura de miras y con vocación de acuerdo.

Podríamos resumir en cuatro palabras lo que nuestro país necesita para construir un futuro mejor: voluntad, compromiso, cooperación y diálogo.

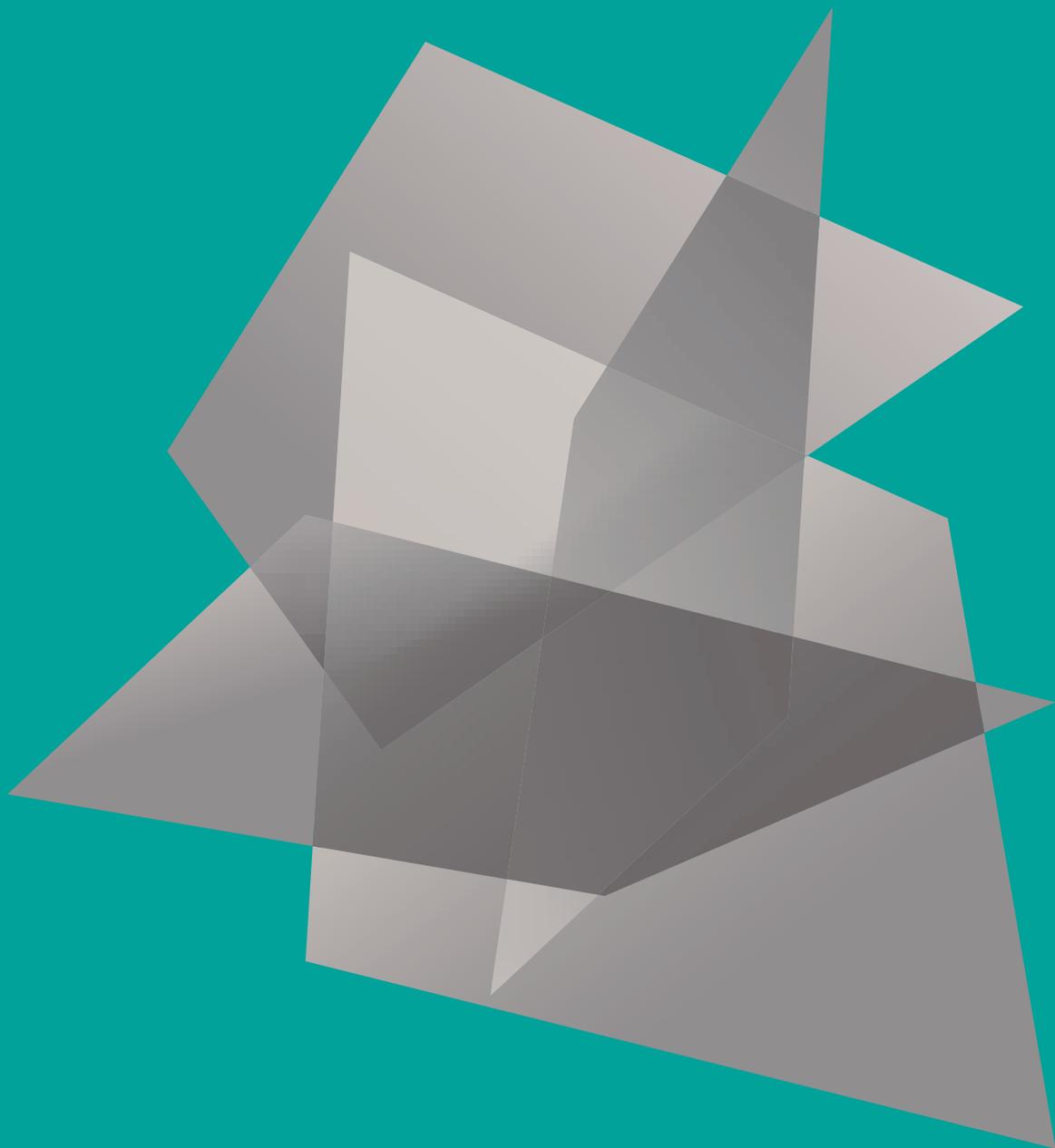
Conceptos que hacemos extensivos también al ámbito de la Unión Europea como institución, donde, una vez más, se han puesto de manifiesto sus debilidades. Estamos también ante la oportunidad, que no podemos desaprovechar, de construir una Europa mejor.

Como en ocasiones anteriores, aunque esta vez con mayor ahínco, quisiera recomendar encarecidamente la lectura de este nuevo número de la Revista Tendencias, desde el convencimiento de que las opiniones aquí vertidas contribuirán a la reflexión y al enriquecimiento de un debate de tanto calado como el futuro tras la pandemia.

Tampoco quisiera dejar de resaltar y de felicitarnos por esta décima edición de nuestra revista. Nos ha deparado muchas satisfacciones ver cómo, año a año, se iba ampliando el panel de colaboradores de la revista y la calidad y profundidad de los artículos.

Deseamos, y a ello nos comprometemos, que la Revista Tendencias siga su senda de crecimiento. •





P E D R O  
S Á N C H E Z

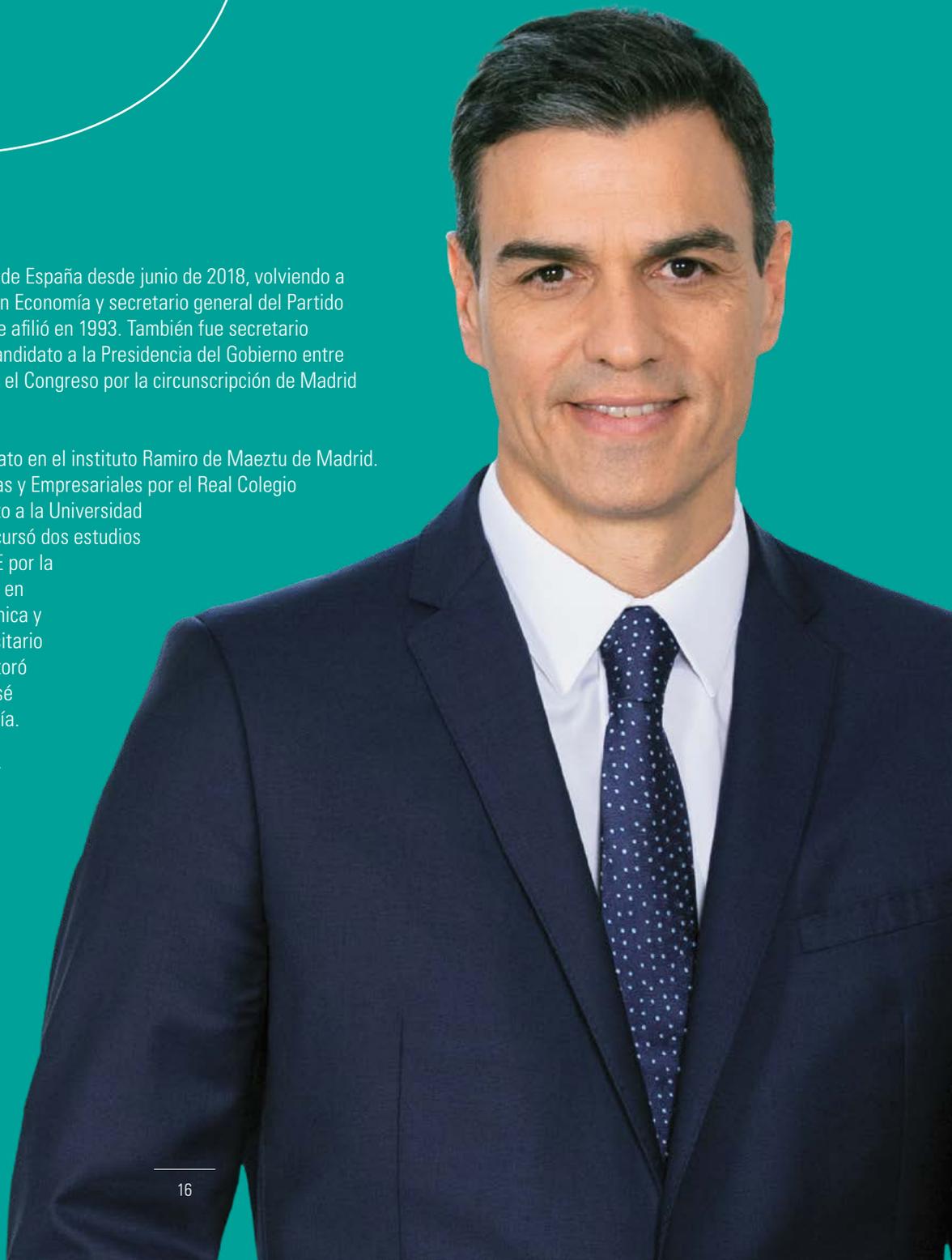
Presidente del Gobierno de España



Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España desde junio de 2018, volviendo a ser investido en enero de 2020. Es doctor en Economía y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que se afilió en 1993. También fue secretario general del PSOE, líder de la oposición y candidato a la Presidencia del Gobierno entre 2014 y 2016. Previamente, fue diputado en el Congreso por la circunscripción de Madrid y concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

Casado y padre, Sánchez estudió Bachillerato en el instituto Ramiro de Maeztu de Madrid. En 1995, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Colegio Universitario María Cristina, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente, cursó dos estudios de posgrado: Máster en Economía de la UE por la Universidad Libre de Bruselas y Diplomado en Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria Europea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. En 2012, Sánchez se doctoró en Economía por la Universidad Camilo José Cela, donde ejerció de profesor de Economía.

Con anterioridad a su etapa como profesor universitario, trabajó como asesor en el Parlamento Europeo y fue miembro del gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia Herzegovina.



# LECCIONES DE LA PANDEMIA PARA UNA MAYOR JUSTICIA SOCIAL

La COVID-19 no sólo ha cambiado nuestras costumbres, nuestra forma de vivir o de relacionarnos: también ha tambaleado, en todos los países del mundo, aquello que creíamos inamovible. A lo largo de este tiempo, hemos actuado de acuerdo con la ciencia para salvar vidas. Salvar vidas era, y sigue siendo, nuestra prioridad. Salvar vidas, que nuestro sistema de salud no colapsara y que esta emergencia conllevara el menor coste posible. Había que responder a una emergencia, y lo hemos hecho —seguimos haciéndolo— con toda la fuerza y los recursos de nuestro sistema público. Y siempre, como no puede ser de otra manera, pensando en las personas.

Esta emergencia no es sólo sanitaria, también es económica. Y es, ante todo social. Por tanto, abarca y afecta a los pilares de nuestro sistema público, especialmente cuando todo el país necesita que un Gobierno actúe, proteja y ampare de manera inmediata.

En los momentos de crisis, la sociedad espera no esperar más. Desea respuestas, seguridad y certidumbre. Y exige que su Gobierno sea determinante en la labor por la reconstrucción y la reactivación del país. Para eso actuamos siendo también conscientes de que la crisis del coronavirus nos está dejando buen número de lecciones.

Esta pandemia ha revelado los errores que nuestro sistema —y los del resto del mundo— pueden tener y que debemos corregir con urgencia y de manera global. Ha revelado también que lo público es el dique de contención frente a cualquier amenaza. Ha revelado lo vulnerables que podemos ser los seres humanos si no estamos protegidos socialmente, porque no se trata de sobrevivir, sino de vivir con dignidad.

También ha revelado que el egoísmo pone en peligro el bien común y los derechos de todos. Esta pandemia ha puesto de manifiesto los principios que un servidor público debe defender con todas sus

Había que responder a una emergencia, y lo hemos hecho —seguimos haciéndolo— con toda la fuerza y los recursos de nuestro sistema público

fuerzas y con toda su convicción. Esta pandemia ha puesto de manifiesto que la unidad para superar esta emergencia es imprescindible para salir juntos con más justicia social. Porque una emergencia sanitaria, como la que estamos atravesando, no puede ser más costosa para los que menos tienen.

El virus no entiende de fronteras, de ideología o género. Sin embargo, las consecuencias de la pandemia en cada persona sí afecta de manera desigual en función de la situación en la que esa persona se encuentre. Sabemos que hay una España que ha superado esta etapa con la certeza de tener una cierta seguridad, un empleo sólido, unos ahorros o un entorno económico favorable.

Pero somos conscientes de que existe otra España más expuesta a los vaivenes económicos producidos como consecuencia de las restricciones sanitarias. Es una España con cicatrices aún abiertas de la pasada crisis económica, de familias en riesgo de pobreza, de jóvenes que vislumbran un futuro incierto afectados por una nueva crisis cuando aún no han terminado de salir de otra.

El Gobierno ha volcado todos sus esfuerzos en esta España. No cabe duda de que la política social ha sido eje vertebrador de nuestras actuaciones y la mejora de nuestro Estado del bienestar. Por eso era imprescindible para nuestro país aprobar el Ingreso Mínimo Vital. Verdaderamente esta es una medida histórica y trascendental en un momento clave de nuestro país que ya anuncié como un compromiso hace más de cinco años y que estaba en nuestro acuerdo de Gobierno de coalición. Una medida que beneficiará —ya lo está haciendo— a más de 850.000 hogares de los que más de la mitad tiene niños a su cargo y en los que conviven alrededor de 2,3 millones de personas, un 30% menores de edad. Nuestro compromiso prioritario es erradicar la pobreza infantil para que no existan en España más infancias rotas ni más generaciones sin futuro. Nuestro objetivo es reducir la pobreza, potenciar la inclusión social e impulsar la economía.

Los ERTes se han mostrado, sin duda, como una herramienta extraordinaria y eficaz para salvar cientos de miles de empleos y empresas que, sin ellos, posiblemente se hubieran destruido. Alcanzamos un primer acuerdo social en defensa del empleo durante el Estado de Alarma y hemos alcanzado un segundo pacto por el empleo en julio con el objetivo de ampliar los ERTes, facilitar la creación de empleo de calidad en la recuperación, luchar entre todos con la economía sumergida, trabajar unidos hacia la adopción de medidas para facilitar la formación y recalificación de trabajadores afectados por dificultades estructurales en su sector y por la mejora de la regulación del teletrabajo y la flexibilidad de jornada, que deben servir para facilitar la conciliación laboral. Las PYMES en nuestro país siguen demostrando su capacidad de adaptación admirable. Pero hay que seguir protegiéndolos y actuar pensando en su impulso y su mantenimiento en un futuro con las máximas garantías. Hay que seguir trabajando en el espacio de una nueva economía más humana, más verde, más digital y más inclusiva.

Desde el primer momento, ampliamos la protección a los suministros de energía y de agua, garantizando los servicios públicos esenciales y, también, los servicios de telecomunicaciones. Garantizamos el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades con la aprobación de una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas. Nuestro objetivo era —y es— que ninguna persona sea desahuciada de su casa por atravesar una situación económica difícil pero que será coyuntural. Y se acordaron los criterios de reparto de 100 millones de euros de los Fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género para proteger y asistir a las víctimas de violencias machistas, explotación sexual, trata o agresiones sexuales durante la crisis de la COVID-19.

La unidad salva vidas y salva empleos. La unidad en España hará que España se recupere con más justicia social. Y la unidad salvará a Europa. El acuerdo europeo al que lleguemos tendrá como objetivo alcanzar la cohesión económica, social y territorial de los países porque, si algo debe salir reforzado de esta crisis, es nuestro Estado de bienestar. •



La unidad en España hará que España se recupere con más justicia social



---

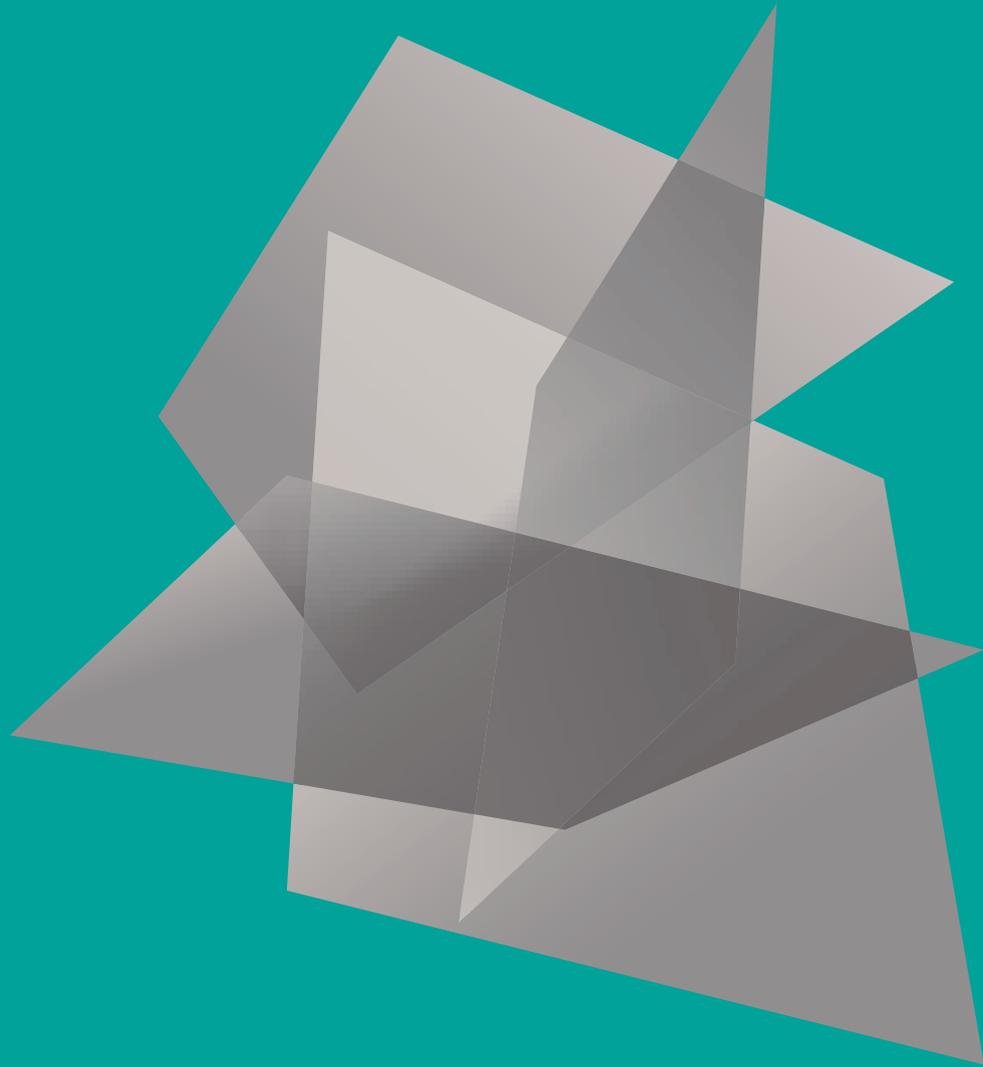
# C A M I N O S   D E H I E R R O

**D**esde la construcción de la primera línea de ferrocarril en la Península Ibérica en 1837 que unió las localidades de Barcelona y Mataró, hasta la llegada de la alta velocidad a gran parte de las capitales de provincia, el tren ha sido siempre sinónimo de progreso. La llegada del transporte ferroviario a una localidad, era y es motivo de alegría para sus habitantes porque mejora las condiciones de vida. Por los motivos opuestos, supone una tristeza cuando una línea es suspendida, algo que desgraciadamente estamos viendo con frecuencia en los últimos años.

Ese primer viaje inaugural efectuado entre las dos localidades catalanas el 28 de octubre de 1848, se realizó con un convoy compuesto por 24 coches con una capacidad de 900 viajeros, arrastrados por la locomotora *Mataró*, que invirtió 35 minutos en realizar el trayecto de 28 kilómetros. Parece poco, en comparación con los más de quinientos millones de viajeros, distribuidos en cientos de líneas, que se movieron por España en 2019 a velocidades que pudieron superar los 300 kilómetros por hora, pero supuso el comienzo de todo lo que vino después.

Las fotografías que ilustran esta edición del *Tendencias* muestran aspectos de este mundo ferroviario correspondiente al primer cuarto del siglo XX. En ese periodo los caminos de hierro ya eran una realidad asentada por toda la geografía española y la construcción de cada nueva línea suponía un importante impulso a la economía de la región, no solo por todo lo que significaba en cuanto a la mejora del transporte, tanto de mercancías como de viajeros, sino también por los puestos de trabajo generados en la construcción de las infraestructuras y en el empujón dado a algunos sectores. Entre estos, además del obvio de la construcción, destaca el de la metalurgia, para la producción de todos los elementos metálicos necesarios, en un momento en el que el hierro aún no había sido sustituido del todo por el hormigón. Todo esto hacía que el ferrocarril fuera, no solo un motor de progreso económico, sino también laboral y social.

Todas las imágenes publicadas en este volumen proceden del Fondo de la Fototipia Thomas, conjunto de negativos usados por la empresa barcelonesa para la realización de postales mediante la técnica de la fototipia, el cual se adquirió por el Centro Documental de la Fundación en 2015. El hecho de que no sea extraño encontrar en esas fotografías destinadas a la producción de postales, imágenes de infraestructuras ferroviarias, estaciones, vías, puentes, etc, nos dice mucho de la relevancia que todavía tenían las mismas en la imagen de modernidad que se quería transmitir, algo que ha perdurado hasta hoy en día.





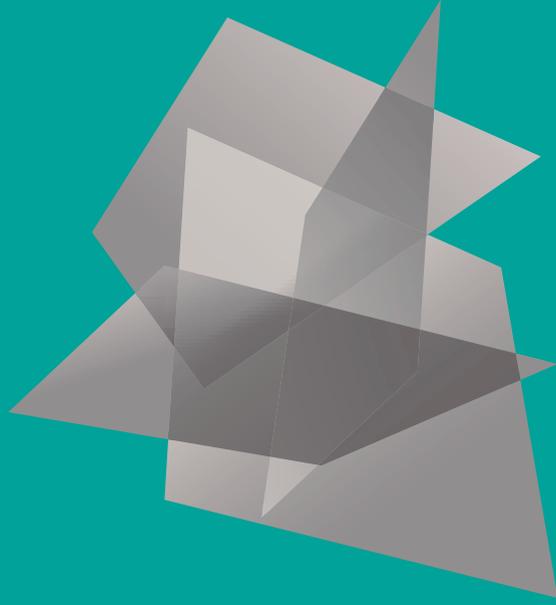


Grupo de gente, en su mayoría niños, posando en el paseo marítimo de Vilassar de Mar junto a la línea de ferrocarril por la que avanza un tren, que siguiendo la línea de costa unía la localidad con Barcelona (1905-1925).



---

T E N D E N C I A S <sub>2020</sub>



# JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO



Nació en Torrent (Valencia) el 9 de diciembre de 1959. Diplomado en Magisterio por la Universitat de València (UVEG).

Experto en cooperación internacional, especializado en fortalecimiento institucional en América Latina, ha ejercido como consultor para diversas agencias de desarrollo públicas y privadas.

Diputado Nacional por Valencia en el Congreso de los Diputados (IX, X, XI, XII y XIII legislaturas), portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista (2012-2014), portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista (2014-2017) y portavoz del mismo Grupo en 2017. Fue miembro de la Asamblea Parlamentaria de OSCE, de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y de la Unión Interparlamentaria.

En la actualidad es Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desde junio de 2018 y Secretario de Organización del PSOE desde 2017.



# MOVILIDAD Y BIEN COMÚN: HACIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL

José Luis Ábalos Meco. Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

**H**abría que retrotraerse un siglo para encontrar una crisis sanitaria parecida a la que hoy golpea el mundo; y habría que remontarse al final de la Segunda Guerra Mundial para hacernos una idea del impacto que esta pandemia está teniendo sobre la economía global.

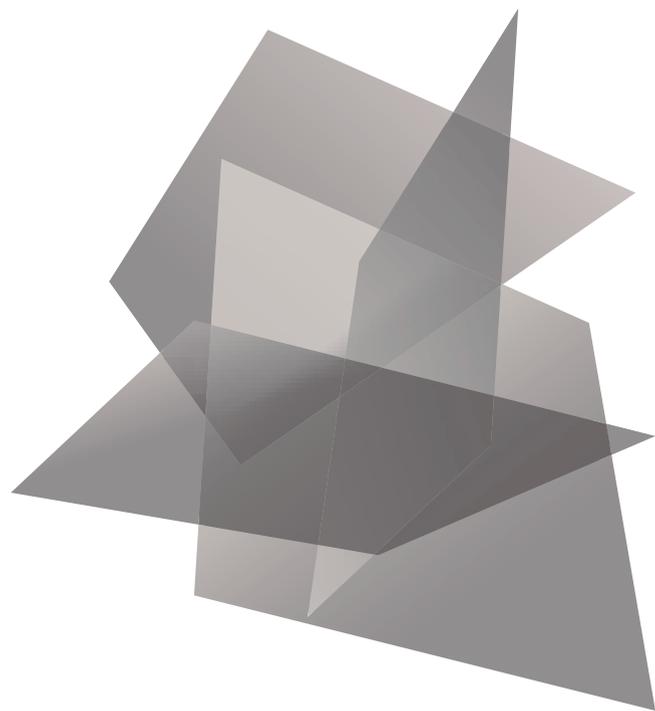
La irrupción de la COVID 19 ha marcado un punto de inflexión en el devenir del planeta. Un punto de inflexión con efectos inmediatos en la ordenación del transporte y la movilidad, en las políticas de vivienda y relativas a la ordenación de las ciudades, en nuestra relación con el medio ambiente, en los sistemas productivos en general, y en la ordenación de prioridades con que afrontamos la vida presente y futura.

Ninguno de nosotros seremos los mismos después del COVID-19, así que la gestión política tampoco puede serlo. Algunos de estos efectos son apreciables a simple vista. La pandemia está acelerando de manera vertiginosa procesos de cambio cuya evolución hubiera sido más lenta de no habernos golpeado el virus.

El salto digital ha cobrado fuerza. La descarbonización pendiente y cuanto tiene que ver con el cuidado del planeta es más una urgencia perentoria e inexcusable que un reto a corto o medio plazo. Y la revisión de la ordenación de las ciudades y de la vida en comunidad también ha recibido un impulso inimaginable hace tan sólo tres meses atrás.

A expensas de identificar los nuevos vectores del cambio en profundidad que acontece para adaptarnos a ellos y ser más eficaces en la gestión política diaria, estoy convencido de que esta crisis puede ser también una oportunidad para fomentar lo que nos hace mejores y para desterrar lo que pueda obstaculizar nuestra capacidad de adaptación.

La COVID 19 ha extremado nuestra resiliencia, con efectos directos en las políticas de transporte, movilidad y Agenda Urbana. Si hay algo que caracteriza al Mitma y al equipo de grandes profesionales que aquí trabajan es un particular sentido del dinamismo, de la agilidad, de la rapidez. Podría resumirlo en la idea de que somos por antonomasia el Ministerio más capacitado para asimilar los cambios inherentes a este nuevo tiempo hasta convertirlos en un activo para el desarrollo de nuestro país.



Ninguno de nosotros seremos los mismos después del COVID-19, así que la gestión política tampoco puede serlo

Esta crisis, en la que la actuación del Ministerio ha sido clave para salvar vidas, condiciona pero no altera la consecución de los principales objetivos que nos habíamos marcado. Y los condiciona porque queda de un modo trágicamente patente que la seguridad sanitaria debe ser una de las bases fundamentales para garantizar la recuperación.

Para avanzar hacia una recuperación económica rápida, sólida e inclusiva, el Gobierno de España está elaborando un Plan de Inversión y Reformas a dos años vista con una inversión prevista de 150.000 millones. Se trata de conectar los objetivos de largo plazo de la economía, como es el cambio del modelo productivo, con la creación de actividad económica y empleo a corto plazo. Todo ello alineado con los objetivos de política económica de la UE y el Plan de Recuperación Europeo.

En este planteamiento el papel del Mitma será muy importante, ya que hay programas previstos en el ámbito del transporte, la movilidad y la agenda urbana que tienen un gran efecto tractor sobre la actividad económica. Por ejemplo, el Plan de Rehabilitación de Edificios y Eficiencia Energética, y el Plan de Vivienda en Alquiler para impulsar la oferta de vivienda en alquiler social o asequible, en el que tiene un papel destacado el Plan 20.000 viviendas. Otro Plan fundamental para impulsar la transformación y mejora del sistema productivo español es el de Impulso a la Digitalización y

Sostenibilidad de la Cadena Logística para el Transporte y Distribución de Mercancías.

Asimismo, también tendrán un efecto tractor sobre la economía el Plan de Choque de Movilidad Sostenible en los Entornos Urbanos y Metropolitanos, el Plan de Choque de Refuerzo de la Seguridad y Conservación de las Infraestructuras y Servicios de Transporte.

Todos estos planes de actuación contribuirán a robustecer nuestra economía adaptándola a la revolución científica y tecnológica y generando empleo de calidad; propiciar la cohesión territorial de nuestro país en base al entendimiento y el equilibrio territorial; y promover la justicia social y amparar a nuestros compatriotas dotados de menos recursos. Aquí quiero hacer una mención al Ingreso Mínimo Vital, un hito histórico para nuestro Estado del Bienestar, que acerca a nuestro país a los sistemas de bienestar más avanzados de Europa.

Las dos grandes cuestiones sobre las que trabajamos son la movilidad sostenible y la vivienda. Para lograr los objetivos anteriores, es fundamental reorientar la política de infraestructuras del transporte hacia la movilidad sostenible y poner en marcha una política de vivienda ambiciosa, con una mayor escala y sostenible en el tiempo.



Estas propuestas inciden en una reorientación de la política de transportes y movilidad. Hasta hace muy poco, al Ministerio que tengo el honor de dirigir era visto como un mero constructor de infraestructuras, ligado a su carácter dinamizador de la economía y a su repercusión territorial, más que como a un proveedor de políticas públicas para el día a día de los ciudadanos.

Este enfoque tenía sentido hace un siglo o hace unas décadas, pero hoy no refleja bien nuestra misión. Y, de hecho, lo hemos podido ver durante la gestión de la crisis del coronavirus, en la que la política de transporte y de ayudas a la vivienda está teniendo gran protagonismo.

De cara al futuro inmediato, creo que es crucial situar a los ciudadanos en el centro de la política de infraestructuras del transporte. Esta nueva visión implica priorizar las Cercanías, la intermodalidad y la innovación tecnológica, entre otras cosas. Inversión sí, toda la que sea posible, pero inversión social y medioambientalmente sostenible.

Esta nueva mirada no obsta para que el Mitma siga siendo el Ministerio de la inversión territorial, si bien con un enfoque más orientado a las necesidades reales de las personas y del sector productivo, como palanca fundamental en la generación de valor.

En esta estrategia cobra cada vez más importancia la asunción de las políticas comprendidas en la Agenda Urbana. No podemos hablar de transportes sin tener una idea de ciudad compacta, humanizada, que minimice las necesidades de movilidad, y en torno a la cual se articularán todas las políticas en materia de vivienda, de acuerdo con los criterios de la Agenda 2030.

Las palancas que determinarán un mayor bienestar en nuestras ciudades y que el precio de la vivienda sea asequible están muy ligadas a vectores como la movilidad, la rehabilitación y regeneración urbana. Por ello, la Agenda Urbana apuesta por un modelo territorial y urbano que se inspira en el principio del desarrollo territorial y urbano sostenible que establece la legislación estatal sobre suelo y rehabilitación urbana. Se trata de un principio necesario para la esperada transición económica, ecológica, social y cultural de las ciudades. Vamos a ser el «Ministerio de las Ciudades».

Con este propósito nos haremos cargo desde el Mitma de las subvenciones tanto para movilidad como para el desarrollo urbano sostenible que actualmente tramita el Ministerio de Hacienda. Y ejerceremos el liderazgo con estrategias globales que tengan un impacto en el territorio y en las poblaciones, situando al sector en la vanguardia de las energías renovables y la eficiencia energética y la sostenibilidad. Se trata de poner en práctica el Plan de Acción



Se trata de conectar los objetivos de largo plazo de la economía, como es el cambio del modelo productivo, con la creación de actividad económica y empleo a corto plazo

de la Agenda Urbana Española que desarrollará medidas concretas para conseguir los objetivos marcados.

Para ello será necesario desarrollar iniciativas que den agilidad y seguridad jurídica a la gestión urbanística para intentar, por ejemplo, simplificar y reducir los tiempos de tramitación de planeamientos urbanísticos y licencias de obra, o impulsar la digitalización en esta materia con el objetivo de favorecer la transparencia y la eficacia en la gestión pública.

Asimismo, vamos a reorientar los programas de ayudas del Plan Estatal de Vivienda y a desarrollar dos Planes Estatales diferenciados que, en ambos casos, recojan medidas de diferente alcance y con un marcado carácter social.

En primer lugar, pondremos en marcha un Plan de Rehabilitación, con el objetivo de promover la rehabilitación edificatoria, así como actuaciones de regeneración y renovación urbana y rural, que sirva además como palanca para la creación de empleo. Y, en segundo lugar, otro Plan de Acceso a la Vivienda, para promover el alquiler, la promoción de vivienda asequible en alquiler social y el fomento y mantenimiento del parque público de vivienda. Buscaremos fórmulas de colaboración público-privadas, mediante modelos de derechos de superficie o concesiones administrativas que fomenten la oferta de vivienda asequible, y movilizándolo suelo público empezando con los Departamentos y organismos públicos de la Administración General del Estado.

Además, por primera vez en la historia democrática de España, estamos trabajando en una Ley de Vivienda estatal que vamos a presentar este año y que contribuirá a garantizar la igualdad de todos los españoles en su derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada.

Estamos trabajando en una Ley de Vivienda estatal que vamos a presentar este año y que contribuirá a garantizar la igualdad de todos los españoles en su derecho a acceder a una vivienda





El objetivo es regular aspectos tales como la provisión de viviendas por parte de los poderes públicos como un servicio público de interés general, el blindaje de la función social que debe cumplir la vivienda o establecer mecanismos para impedir la enajenación de los parques públicos de vivienda, evitando prácticas del pasado que no podemos permitir que vuelvan a repetirse.

En esta misma dirección, estamos desarrollando actuaciones para obtener más información acerca del mercado de la vivienda en alquiler y de las características de la demanda, para dotar de transparencia a este mercado. Con tal fin, en breve presentaremos los resultados del Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda.

También vamos a desarrollar líneas de trabajo para establecer nuevas herramientas con objeto de ofrecer más datos sobre el alquiler que permitan un seguimiento más preciso y actual del mercado, sobre la base de la mejora y digitalización de los procesos y de la información disponible por parte de los diferentes agentes e instituciones, siendo esencial la colaboración entre los diferentes niveles de la Administración. El derecho a una vivienda digna es un derecho nuclear del que se deriva el disfrute de otros derechos básicos.

El segundo gran eje de la política del Mítma será nuestra «Estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada». Partimos de una concepción de la movilidad como un derecho de los ciudadanos y un elemento de cohesión social, de crecimiento económico y de competitividad.

Concebimos la movilidad como una herramienta de la política económica general, ya que debe contribuir al crecimiento de la productividad, a la descarbonización y a la cohesión social. Con este propósito reorientaremos la inversión pública en materia de infraestructuras de transporte, priorizando la seguridad, la conservación, la movilidad cotidiana, la intermodalidad e introduciremos la tecnología y la digitalización para el mejor aprovechamiento de las infraestructuras existentes.

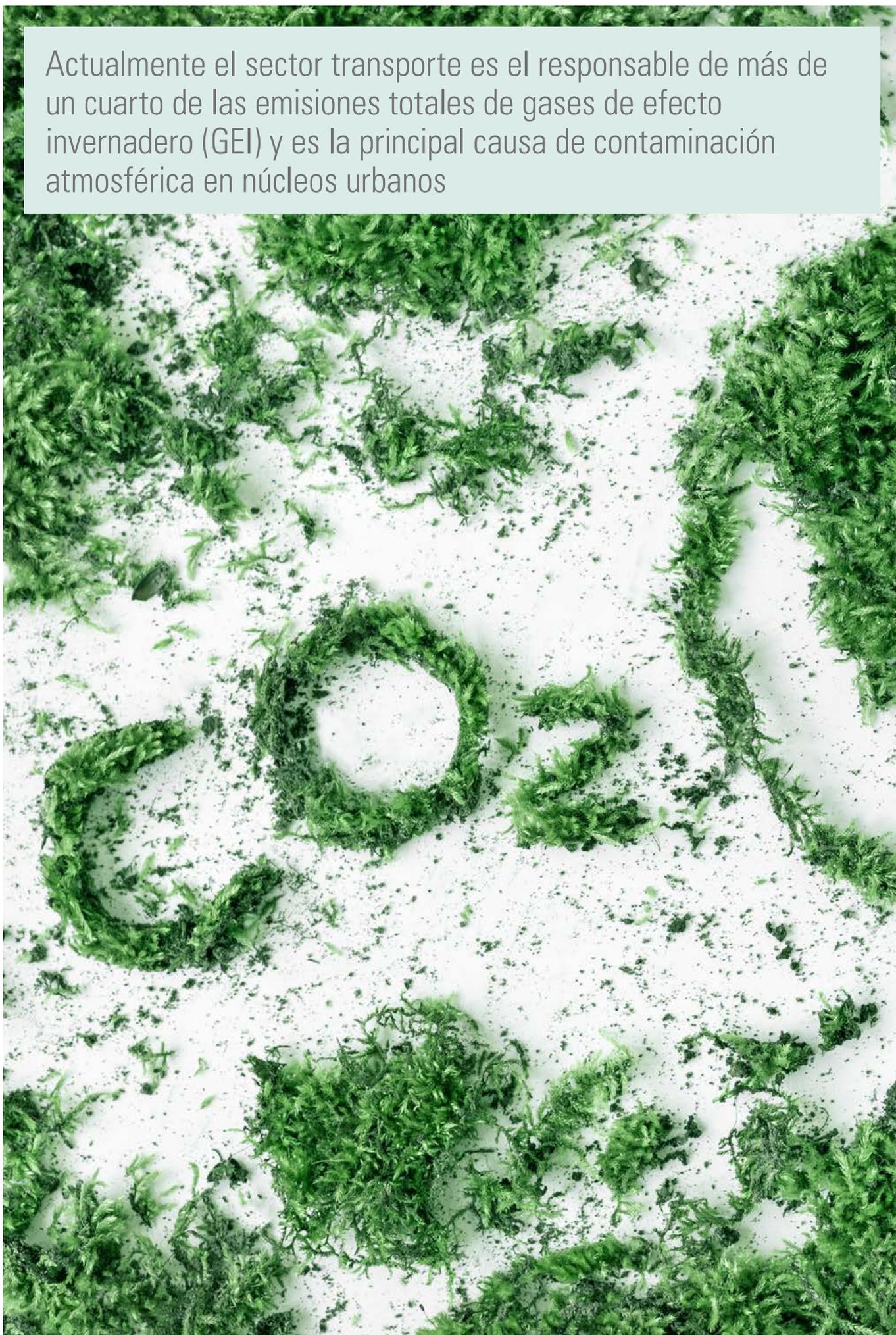
Los objetivos de la Estrategia de Movilidad se complementarán con otras cuestiones transversales tales como la necesidad de gestionar la creciente despoblación del mundo rural, el fomento del turismo sostenible y el necesario impulso de una industria española asociada a la movilidad descarbonizada.

Por lo que refiere a su implementación, las políticas de Movilidad tienen un carácter transversal, ya que todas las administraciones territoriales (Administración del Estado, Administración autonómica, Administración local) tienen competencias en materia de movilidad. Por ello, se concibe con un «enfoque integrador» de todas las acciones que desarrollen unas y otras, mediante los oportunos instrumentos de coordinación y cooperación.

Dentro de la Estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, uno de los puntos en los que estamos trabajando es en la elaboración de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano, cuyo anteproyecto prevemos poder presentar a finales de este año.

Queremos que esta ley establezca normas y procedimientos claros para seleccionar inversiones, fijar la financiación del transporte público, resolver las inconsistencias del modelo viario, profundizar en la normativa de seguridad, fijar principios y responsabilidad de

Actualmente el sector transporte es el responsable de más de un cuarto de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) y es la principal causa de contaminación atmosférica en núcleos urbanos



colaboración entre administraciones y avanzar en la sostenibilidad financiera de las infraestructuras de transporte, entre otros aspectos clave para nuestro país.

Por lo que refiere a la movilidad ferroviaria, seguiremos trabajando, además, en el proceso de liberalización, donde debemos estar satisfechos por la alta participación y elevadísima demanda para optar a los paquetes definidos en la oferta de capacidad que hemos realizado, que sin duda ha resultado más que atractiva.

El éxito de este proceso es el camino para rentabilizar unas infraestructuras que han supuesto una gran inversión pero que están infrautilizadas, al tiempo que beneficiará al usuario, que podrá acceder a más y mejores servicios y a unos precios más bajos y permitirá que la movilidad sea medioambientalmente más sostenible.

El procedimiento de adjudicación de capacidad marco ha culminado recientemente con la firma de los correspondientes acuerdos marco entre el Administrador de Infraestructuras y los distintos operadores adjudicatarios, lo que marca un hito en el proceso de liberalización ferroviaria del país, y que además supone un éxito por el hecho de que van a coexistir tres operadores distintos en la misma red.

También en materia ferroviaria, dada la importancia de los servicios de Cercanías como elemento esencial en el sistema de transporte colectivo, impulsaremos un nuevo Plan de Cercanías 2020-2025 que integre y optimice los planes ya en ejecución. El objetivo último es el de reducir el número de incidencias e incrementar así la calidad percibida por los usuarios.

Este plan tratará de mejorar la puntualidad, la fiabilidad y la información en tiempo real; disponer de servicios para cada vez más personas; garantizar la accesibilidad universal y una óptima calidad del servicio y facilitar la movilidad antes y después del viaje.

En materia de cambio climático, vamos a trabajar con el objetivo de alcanzar una movilidad de bajas emisiones y reducir su contaminación atmosférica y acústica. No olvidemos que actualmente el sector transporte es el responsable de más de un cuarto de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) y es la principal causa de contaminación atmosférica en núcleos urbanos

En este sentido, tenemos que fomentar otros modos de transporte menos contaminantes, como es el caso de la bicicleta. Para ello, estamos desarrollando un plan de fomento de su uso instalando aparcabici en las estaciones de cercanías y nos hemos reunido con los integrantes de la Mesa de la Bicicleta.

Entre otras medidas, estamos impulsando un proyecto fruto de la innovación pero que ya se ha materializado, con una visión muy ambiciosa: la instalación de puntos de carga de coche eléctrico en las estaciones ferroviarias o cualquier punto próximo a la red, que

posibilitará la recarga de vehículos eléctricos aprovechando, además, la energía generada en el frenado de los trenes. Un paso más hacia esa visión integradora del transporte multimodal más sostenible que debe guiar las políticas de movilidad en adelante.

Vamos a acometer una apuesta decidida por el impulso a la Transformación Digital, como instrumento imprescindible para la creación de una cultura de los datos y el conocimiento.

Otro importante aspecto en el que seguimos trabajando es la renovación del material rodante. De hecho, antes de agosto se va a producir la adjudicación del concurso de los trenes de Ancho Métrico para renovar el material de las antiguas líneas de FEVE de Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León y Euskadi.

En lo que respecta a Aena, a pesar de esta considerable disminución de la actividad y de algunas previsiones que apuntan a que la recuperación de los niveles de tráfico aéreo del año 2019, no se producirán hasta el año 2022 o 2023, el gestor aeroportuario mantendrá sus compromisos de inversión del primer periodo DORA 2017-2021.

Por ello, es muy importante reactivar las inversiones afectadas por la Declaración del Estado de Alarma como consecuencia del COVID-19, aunque en algún caso, pueda haber retrasos de inversiones de 2020 que pasen a 2021.

En lo que respecta a la sostenibilidad, los esfuerzos de Aena se centrarán en el impulso a hacia una «recuperación verde» para el sector del transporte aéreo, priorizando aspectos como la reducción de la huella de carbono, la minimización del impacto acústico, la eficiencia energética, el uso de energías renovables y la protección de la biodiversidad, entre lo que se encuentra el Plan Fotovoltaico.

Por otro lado, la innovación y el uso de la tecnología serán las herramientas principales que permitirán a los aeropuertos y al transporte aéreo en general, afrontar los retos de los próximos años en la época POST-COVID. Este reto implicará desarrollar una nueva forma de relacionarse con los pasajeros en un marco de nueva normalidad, en el que la transformación digital de los negocios tradicionales de los aeropuertos será fundamental.

Afrontamos un desafío sin parangón en un mundo globalizado e interconectado. Mejorar la lucha contra la pandemia disminuyendo el riesgo de contagios, preservar lo que podamos la actividad productiva, asegurar el abastecimiento de productos básicos a los ciudadanos, aliviar al conjunto de los ciudadanos, con especial atención a los más vulnerables, protegiendo rentas y buscando la liquidez de las empresas, y preparar el camino de una pronta y firme reconstrucción económica y social del país deberían ser objetivos comunes y compartidos por las fuerzas políticas, los agentes sociales y la sociedad civil. Hagamos de la necesidad virtud y caminemos juntos hacia un nuevo contrato político y social pensando en el bien común. •

# PEPE ÁLVAREZ

# D

**Pepe Álvarez**, es secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) y vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Nació en Belmonte y estudió Formación Profesional en Noreña (Asturias). Empezó a trabajar en la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, hoy Alstom, en 1975. Allí se afilió a la UGT.

Es miembro del comité de empresa de la Maquinista desde las primeras elecciones sindicales en 1978, año en el que es nombrado secretario de Organización de la Federación del Metal de la UGT de Catalunya. Asume diferentes cargos en el sindicato, siendo escogido secretario general del Sindicato del Metal de Barcelona, el sindicato con más afiliación de la Confederación entonces. En 1988 es reelegido secretario de Organización de la Federación del Metal de la UGT de Catalunya y miembro del Comité Confederal de UGT. El VIII Congreso de la UGT de Catalunya lo elige secretario general en 1990 cargo para el que es reelegido en los seis congresos posteriores. Álvarez busca transformar a la UGT de Catalunya en una organización moderna, políticamente autónoma, plural e integrada en la realidad catalana. La organización crece al impulsar el trabajo en áreas sociales y sindicales con servicios específicos como la Asociación de Ayuda Mutua de Inmigrantes en Catalunya (AMIC), la Confederación de Trabajadores Autónomos de Catalunya (CTAC) y Avalot - Jóvenes de UGT de Catalunya. También impulsó la presencia del sindicato en internet, en las redes sociales. Creó el Canal UGT (UGT Catalunya) y fue el primer dirigente sindical con su propio blog.

El 42 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores, celebrado en Madrid, le eligió Secretario General en marzo de 2016 con la transparencia, la ética, el empleo y la recuperación de derechos de los trabajadores y trabajadoras como ejes de su mandato. Pepe Álvarez ha hecho una apuesta clara por la actualización y digitalización del sindicato. Una nueva web y una intensa apuesta por las redes sociales han potenciado el acercamiento a los afiliados y afiliadas por vía telemática, uno de los ejes fundamentales de la comunicación a la sociedad de la organización. El actual secretario general de UGT es uno de los impulsores del debate sobre los efectos de la digitalización y la robotización en el ámbito laboral, así como de los acuerdos para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional a 1.000€ al mes en 2020, y del IV AENC, que sitúa el salario mínimo en convenio en 1.000 euros por 14 pagas.

En 2019, Pepe Álvarez ha sido nombrado vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos.



# RECONSTRUIR UN NUEVO PAÍS

Pepe Álvarez. Secretario general de la UGT.

**E**ste 2020 ha sido un año atípico para todos, pero sobre todo tremendamente difícil y crítico. Lo que presumíamos como un año de cambio, de avance y de recuperación de derechos sociales, se vio truncado con una pandemia mundial que paralizó absolutamente todo el planeta. A nuestro país, por desgracia, le ha tocado vivir una de las peores partes, siendo durante un par de meses un foco principal del COVID-19, y que generó una crisis económica, social y sanitaria sin precedentes en nuestra historia moderna.

Son muchas las pérdidas que sufrimos, empezando por las cientos de miles de personas contagiadas y las miles de fallecidas, y siguiendo por todas las consecuencias económicas, sociales y laborales. La pandemia, ya desde el inicio, puso de manifiesto la mala gestión que nuestro país ha hecho durante años de los servicios públicos tras una década de recortes. Los hospitales se vieron desbordados, demostrando una falta absoluta de recursos tanto humanos como materiales para hacer frente a esta pandemia. Durante semanas, miles de profesionales de la salud pública se expusieron a este maldito virus sin protección suficiente, ayudando a decenas de miles de personas mientras que otros millones de ciudadanos y ciudadanas desde nuestras casas apenas entendíamos qué estaba pasando.

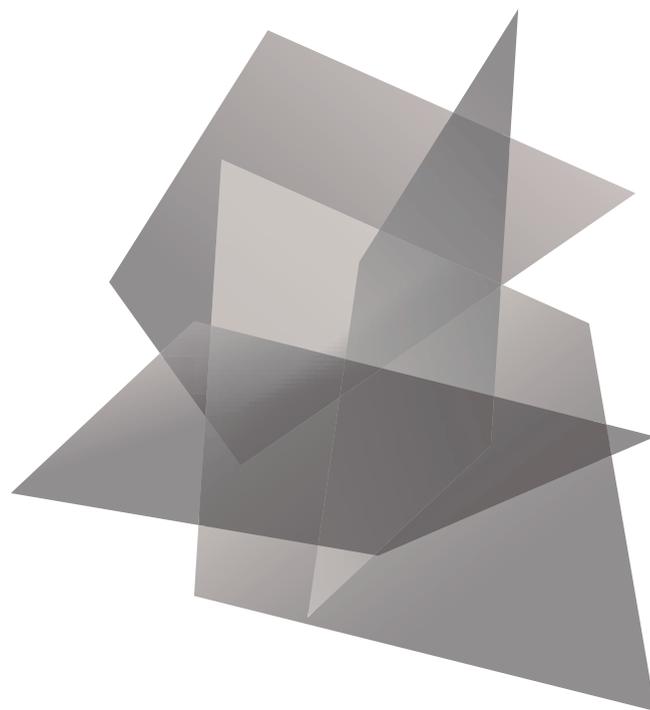
Y el confinamiento nos ayudó también a darnos cuenta de la importancia de todos y cada uno de los trabajos que se realizan en nuestro país. Empleos que, de por sí, tienen sueldos míseros e insuficientes y en condiciones precarias, se convirtieron en una pieza principal para ayudarnos a soportar una situación cada día más complicada. Y también vimos como los cerca de 90.000 delegados y delegadas de UGT, se implicaban en cuerpo y alma para ayudar a sus compañeros y compañeras en las empresas, llegando incluso en algún caso a perder la vida mientras defendían los derechos de los trabajadores.

Así pues, han sido meses no solo de sufrimiento, sino también de aprendizaje, de darnos cuenta que el futuro más cercano necesita medidas y actuaciones inmediatas, y que no dejen a nadie por el camino.

## ¿Qué pasará ahora?

Desde que se inició la pandemia en España, a principios de marzo, esta pregunta ha sobrevolado nuestras cabezas. Sin querer, nos encontramos con una crisis sin precedentes, tanto por su globalidad, su rapidez de expansión, la incapacidad de dar una respuesta uniforme más allá de los límites tradicionales o la desigualdad social en su afectación, rasgos que nos muestran con claridad que el modelo actual tiene unas importantes debilidades que pueden llevarnos a todos a consecuencias dramáticas.

Y ahora, es momento de afrontar el cambio. Desde UGT llevamos meses defendiendo la necesidad de actuar sin miedo, tomando medidas que de verdad nos lleven a una rápida y efectiva recupe-



La pandemia, ya desde el inicio, puso de manifiesto la mala gestión que nuestro país ha hecho durante años de los servicios públicos tras una década de recortes



ración. La pandemia, nos ha enseñado demasiadas cosas como para dejarlas caer en saco roto, y es indispensable alejarse de aquellas recetas que nos pretendan situar de nuevo en aquel mundo «ideal» anterior a la epidemia.

Creemos, y así se lo hemos hecho saber al Gobierno, que su papel es fundamental para que esta situación, si se repite, sea de una forma mucho menor. España ha asistido a la «subasta» en la compra de productos sanitarios, geles hidroalcohólicos, mascarillas, etc, porque no se fabricaban en nuestro país. Es por eso, que hemos pedido la intervención del Estado en sectores estratégicos de la industria, suministros esenciales o servicios bancarios, por ejemplo, permitiendo asegurar una respuesta adecuada a esta crisis, pero también para modificar el erróneo camino que seguíamos antes de que llegara todo esto. El cambio que necesita nuestro país, pasa por llevar a cabo medidas de calado, centrando los esfuerzos en una serie de ámbitos clave.

### **Sanidad pública, elemento indispensable**

Es una evidencia que nuestro sistema de salud pública no estaba en su mejor momento. Durante la última década, algunas Comunidades Autónomas prefirieron aumentar los recursos para la sanidad

privada en detrimento de la pública, y las diferencias en el gasto per cápita entre unas y otras, en materia de sanidad, se han demostrado muy importantes.

De la misma forma, nuestra red de asistencia y apoyo a las personas mayores ha demostrado sus carencias, y hemos asistido a un verdadero drama en las residencias de ancianos, con miles de muertes sin ningún tipo de asistencia médica.

Es por esto que, ahora, es el momento de analizar la situación de nuestro sistema de salud y de atención a las personas mayores con el objetivo de determinar cuáles eran esos problemas y resolverlos. Desde UGT, hemos pedido reiteradamente al Gobierno la necesidad de llevar a cabo auditorias que pongan de manifiesto qué ha pasado, en qué se ha fallado y qué se debe mejorar.

España necesita llevar a cabo cambios urgentes y de calado en materia sanitaria, para no volver a vivir una situación como la actual. Es necesario un compromiso firme, mejorando la financiación del sistema público de salud hasta alcanzar, por lo menos, el 27% del PIB; paralizar las privatizaciones de la red sanitaria pública; reforzar la atención primaria, que debería percibir el 25% del presupuesto total para conseguir acercar a la población los servicios sanitarios; actualizar, cambiar y mejorar la tecnología sanitaria;

incrementar en la dotación de recursos humanos y dignificación de sus condiciones laborales, estabilizando las plantillas y consolidando el empleo, aspirando a equiparar los ratios de personal sanitario a la media europea, equiparar las competencias profesionales sanitarias a un nuevo modelo de clasificación profesional, reordenando funciones y adecuándolo al marco europeo; recuperar el proyecto de agencia de salud pública como elemento participado de coordinación de las administraciones y sectores; recuperar el nivel de inversión en salud pública; e impulsar la investigación pública para el desarrollo de nuevos fármacos, vacunas, estudios científicos de patologías, etc.

Se trata de medidas necesarias para que nuestro país vuelva a situarse al frente de la salud pública en Europa, demostrando que tenemos capacidad suficiente para liderar proyectos, y llevar a cabo investigaciones claves en el futuro.

### Por un cambio de modelo productivo

La pandemia ha dejado claro que nuestro país necesita urgentemente un cambio de modelo productivo, que consolide el empleo y no dependa de sectores tan volátiles como el turismo. Nuestro sector industrial está en crisis, no alcanza ni el 16% del PIB, cuando debería situarse en el 20% según los compromisos europeos.

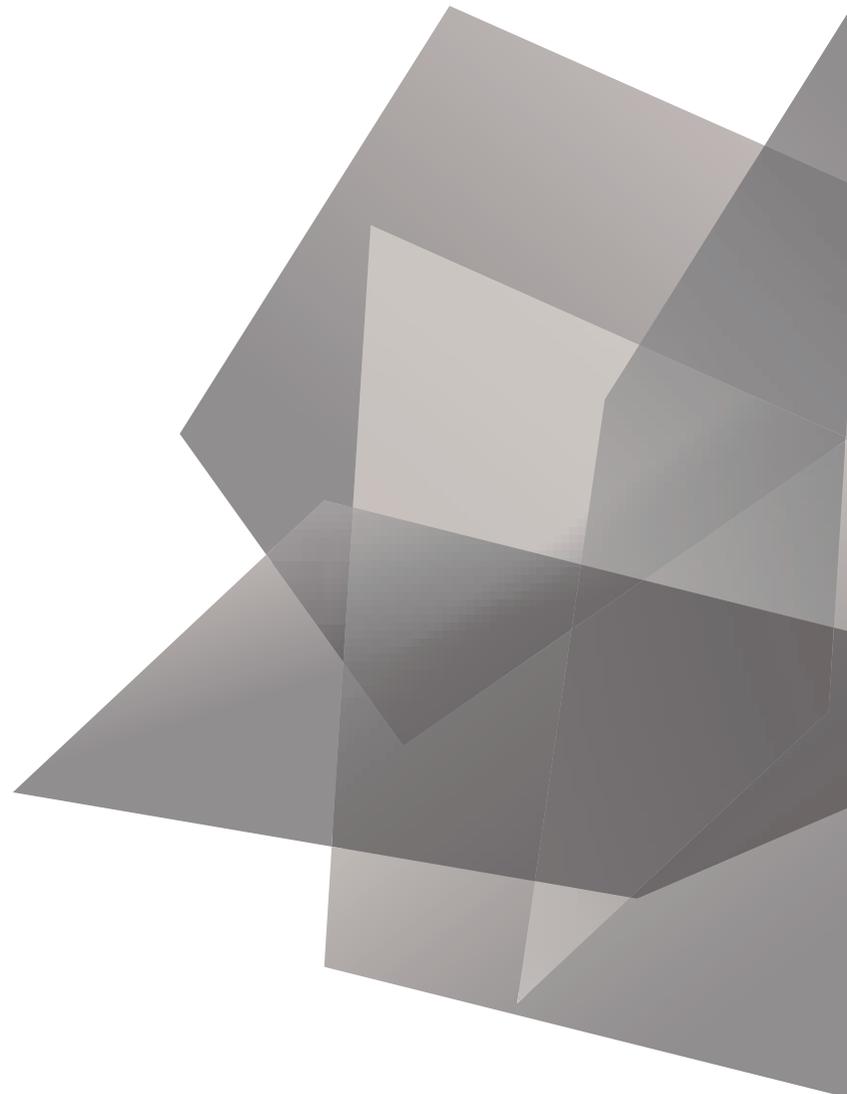
Por eso, y con más fuerza que nunca, desde la Unión General de Trabajadores requerimos un Pacto por la Industria que se culmine en un plan estratégico sobre criterios de economía verde, transición justa e innovación. Es importante llevar a cabo un desarrollo de nuestras capacidades industriales para el impulso de una «España Industrial», adaptada al reto de la inaplazable transición ecológica y transformación digital. Todo ello debe hacerse mediante la coordinación de la política industrial con todas aquellas políticas que tienen incidencia en el sector (transporte, energía, formación, innovación, etc.). Necesitamos que se promocióne un ecosistema de espacios de colaboración entre empresas, universidades, centros de investigación, tecnológicos, la administración pública y cualquier otro agente o institución que se considere con el objetivo de ganar competitividad y afrontar los retos estratégicos de manera conjunta y con el apoyo de los poderes públicos. Pedimos urgentemente la inversión en sectores estratégicos (energías renovables, eficiencia energética, electrificación de la movilidad, transporte público, rehabilitación energética...). Y sobre todo, aplicar un modelo energético fiable ajustado a las necesidades de nuestra competitividad y basado en las energías renovables.

Y ligado a la industria, debemos hablar de investigación. En España, el sector público y privado invierte un 1,24% del PIB en I+D, muy lejos de la media europea, que se sitúa en el 2%, y a una gran distancia del 3%, horizonte marcado por la Unión Europea. El impulso de un ecosistema innovador requiere de un consenso político y social a medio y largo plazo. Es decir, un Pacto estatal en favor de la ciencia, la investigación y la innovación, que favorezca la cooperación investigadora, elimine las trabas burocráticas y modifique los sistemas de financiación, así como aumentando la inversión en I+D hasta alcanzar el 3% del PIB.

### Formación, necesidad para cambiar de modelo

Desde el año 2009, se han dejado de invertir en nuestro país entre 6.000 y 9.000 millones de euros en enseñanza de niveles no

Nuestra red de asistencia y apoyo a las personas mayores ha demostrado sus carencias, y hemos asistido a un verdadero drama en las residencias de ancianos



Es necesario que se lleve a cabo un pacto político y social para fortalecer y dar estabilidad a la enseñanza reglada y a los sistemas de formación permanente en el ámbito laboral

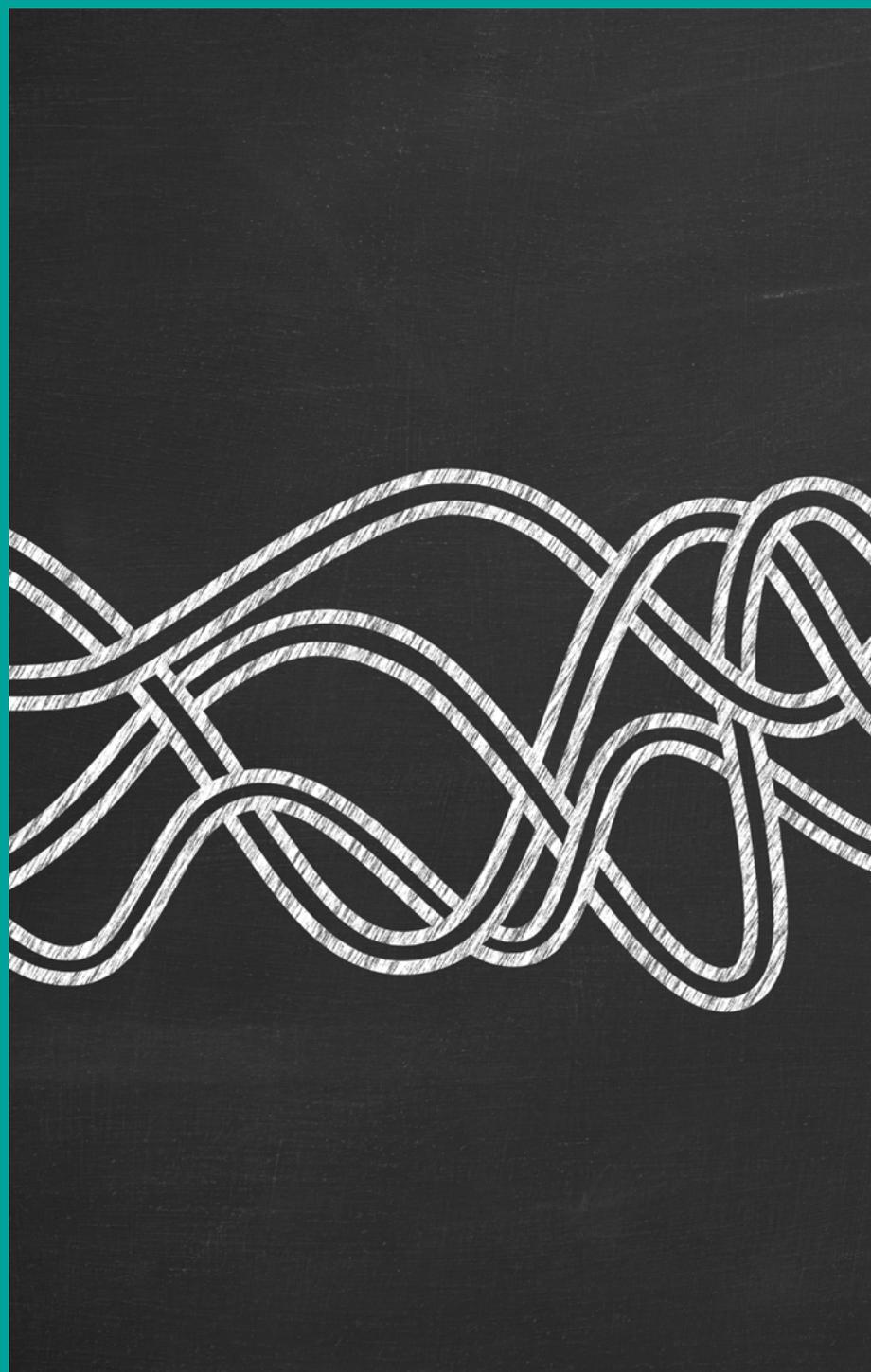
universitarios, incluida la Formación Profesional, así como la financiación de nuestras universidades públicas. Una inversión que ha lastrado la formación en nuestro país, y que dificulta con el paso de los años la transformación del modelo productivo que exigimos para nuestro país.

Ahora, es el momento ideal para tomar decisiones importantes en una materia que nos permitiría diferenciarnos de otros países europeos, evolucionar y crecer como sociedad. Es necesario que se lleve a cabo un pacto político y social para fortalecer y dar estabilidad a la enseñanza reglada y a los sistemas de formación permanente en el ámbito laboral; fortalecer la formación profesional, en todos sus niveles, apostando por un involucramiento del tejido empresarial y de los interlocutores sociales en su diseño e implementación (desarrollar un plan estratégico para la FP); impulsar un sistema de becas que permita reducir los insoportables niveles de abandono escolar temprano; implementar programas de políticas activas vinculadas a las estrategias públicas de transición justa, que contribuyan a una inserción real de las personas en situación de desempleo; reconocer y validar la experiencia laboral previa para el acceso a los programas de formación para la adaptación a nuevos requerimientos; o llevar a cabo un plan de reconstrucción de formación para el empleo para los próximos 3 años.

### El empleo, otra prioridad

Pero si hay una gran prioridad a día de hoy, es el empleo. Durante la pandemia, hemos visto como diversos elementos como los ERTE, se han convertido en la clave para evitar una masiva destrucción del empleo. Millones de personas han mantenido su empleo gracias a ello, y ahora es el momento de actuar. Ha llegado la hora de trazar las sendas de la recuperación del empleo, porque no podemos dejar que nuestras empresas y empleos permanezcan hibernados para siempre. Desde UGT seguimos defendiendo (y con más fuerza ante la posición de la patronal) la necesidad de derogar la reforma laboral, atacando las cuestiones más importantes, como la prevalencia de los convenios colectivos sectoriales frente a los de empresa, la recuperación de la ultraactividad o rediseñar los sistemas de ajuste colectivo. Pero también sabemos que debemos asumir las nuevas realidades que ha impulsado el cambio social y la pandemia, como regular el teletrabajo o vigilar las plataformas digitales y los falsos autónomos.

El esfuerzo en este ámbito es mayúsculo, y si no lo hacemos será difícil salir del puerto. Una economía depauperada no estaría en las



condiciones adecuadas para afrontar nuevas crisis sanitarias que pudiesen venir en el futuro

Por desgracia, no tenemos recursos, y nuestra economía requiere un rápido relanzamiento. Hablo de dinero, como es evidente, y esencialmente europeo. Un dinero que llegue sin condiciones ni hombres de negro, que no hipoteque a nuestro país y que, a la larga, sea peor el remedio que la enfermedad.

### Por una fiscalidad justa

Y es necesario también reflexionar, profundamente, sobre la política fiscal de nuestro país, haciéndolo con realismo y con sinceridad. España no puede permitirse bajar los impuestos. Sin impuestos, no hay servicios públicos, no hay sanidad y no hay una red de protec-



ción para los trabajadores y trabajadoras, las personas autónomas y las empresas. La crisis sanitaria nos ha permitido verle las orejas al lobo, y es ahora el momento para crear un sistema fiscal progresivo que acabe con el fraude y que recaude los recursos necesarios para que nuestro país pueda afrontar el futuro con garantías.

### **Un esfuerzo conjunto**

Lo que hemos vivido durante lo que llevamos de año 2020, ha sido una sorpresa para todos. Nadie se imaginaba que la primera mitad del año estaría marcada por una pandemia de semejante magnitud. Nuestras cabezas, no se habían ni planteado que tras cerca de 12 años luchando para salir de una crisis que destruyó millones de empleos y que aumentó la pobreza en nuestro país a niveles insostenibles, llegaría un virus que no solo haría tambalear los cimien-

tos de nuestra sociedad una vez más, sino que nos haría replantear de forma drástica nuestra forma de vivir.

Hemos vivido meses muy duros, hemos perdido a muchas personas, y hemos sufrido las consecuencias de los recortes y la pobreza. Pero ahora, después de todo esto, es el momento de actuar y de evitar, entre todos, que vuelva a suceder lo mismo. Todos los partidos políticos, así como los interlocutores sociales, tenemos la obligación de hablar, negociar, y llegar a acuerdos que beneficien al conjunto de trabajadores y trabajadoras y a la sociedad en general.

No podemos permitir que, una vez más, sean los trabajadores y las trabajadoras las que paguen los platos rotos, los que se queden por el camino, y los que sufran las consecuencias de una crisis cruel e inesperada. •

J A I M E M U Ñ O Z  
D A N I E L G A R C Í A

Movimiento ATD Cuarto Mundo España

Somos un Movimiento de personas de diferentes medios sociales comprometidas en la lucha por la dignidad, la participación y el reconocimiento efectivo de los derechos de todos y todas, teniendo como horizonte la erradicación de la extrema pobreza.

Nuestras acciones favorecen la participación libre y el compromiso de las personas y familias más expuestas a la exclusión y a la violencia de la miseria, junto con otros miembros de la sociedad que aceptan avanzar a su lado y tomarlas como referencia para medir los logros y el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria.

Formamos parte del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, fundado en 1957 por Joseph Wresinski, y que actualmente trabaja en una treintena de países en África, Asia, América y Europa. Está dotada de estatuto consultivo en el Ecosoc, Unesco Unicef, OIT y el Consejo de Europa. Desde 1992 el Movimiento ATD Cuarto Mundo está presente en España y fue declarado de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior en 2014.

En la ciudad de Madrid tenemos especial presencia en los distritos de Vallecas, Carabanchel, y Tetuán, y fuera de ella participamos en acciones en Las Sabinas (Arroyomolinos) y con familias realojadas en Alcalá de Henares (que venían de los barrios del Pozo del Huevo y de Las Barranquillas). Por otro lado, estamos en contacto con aliadas y aliados de diferentes localidades que actúan y se comprometen en sus entornos próximos y contribuyen a difundir este mensaje de lucha contra la pobreza en Sevilla, Zaragoza, Barcelona, Valladolid, Salamanca, Don Benito, etc.



**ATD**  
**CUARTO MUNDO**

# UNA CONTRIBUCIÓN INESPERADA

Jaime Muñoz, Daniel García. Voluntarios ATD Cuarto Mundo.

*«Todo ser humano, todo grupo busca una comprensión de sí mismo y de su situación que le permita alejar las inseguridades y los temores, y controlar su destino en vez de sufrirlo y temerlo.»*

Joseph Wresinski

**E**n este tiempo de pandemia y de encierro obligatorio hemos visto como se ha puesto de manifiesto en los medios de comunicación y en los gestos del vecindario el reconocimiento creciente de ciertas profesiones, ocupaciones y empleos en cuanto a su contribución al bien común. Así, hemos visto como junto a profesionales del mundo sanitario se ha visibilizado y aplaudido también la entrega y utilidad de otros trabajos, en principio poco reconocidos, como los del personal de limpieza, transporte, comercio de alimentación y servicios básicos. La situación actual, al obligarnos a revisar las tareas fundamentales para el cuidado y sostén de la vida nos ha llevado a desvelar su utilidad para resolver necesidades básicas en el ámbito individual y colectivo.

En una esfera más personal, estos meses de inmovilidad y aislamiento físico han permitido a quienes han tenido tiempo y respiro poder revisar e interiorizar sus empleos, tareas y ocupaciones bajo la luz del supuesto bien público: mi profesión, mi empleo, ¿sirve al bien público? ¿de qué manera? Un buen momento para preguntarnos: ¿qué se espera de mí?, ¿de mi profesión?, ¿de mi medio social? ¿Sirvo para algo?

Eso ha llevado a algunos analistas y opinadores a resaltar que este tiempo de introspección puede haber servido para renovar la dirección y el sentido de nuestro avance social. Pero al mismo tiempo también ha quedado patente como, al tiempo que se hacen llamadas a la unión y a no dejar a nadie atrás, las desigualdades se disparan, agrandándose las brechas que nos separan, tanto las digitales como las de las relaciones humanas. Por eso es urgente encontrar vías para frenar esta hemorragia de separación que nos deshumaniza.

También en este campo, como en tantos otros a lo largo de estos meses, vemos como toman la palabra multitud de expertos enunciando sus verdades y recetas, impermeables muchas veces a los elementos de la propia realidad que contradicen sus diagnósticos. Entre estos expertos suman muchos títulos académicos y currículos de intervención social, pero cuesta encontrar a quienes cuentan con un conocimiento de primera mano de lo que supone vivir en pobreza. Tanto antes como después de esta pandemia se reafirma una experiencia social, y tal vez universal, básica: de las personas más pobres no se espera nada.

Cuando dos meses después de iniciar el confinamiento una animadora Tapori se puso en contacto con un profesor para intentar entender por qué a una niña no le han llegado las notificaciones de tareas, recibió por toda respuesta: *«De todas maneras no las va a*

Un buen momento para preguntarnos: ¿qué se espera de mí?, ¿de mi profesión?, ¿de mi medio social? ¿Sirvo para algo?

*hacer. Además, promociona, porque ya ha repetido dos años y pasará de curso haga lo que haga».*

No compartimos este ejemplo para cuestionar el esfuerzo de muchos docentes para que cada alumna y alumno aprendan, sino para tomar conciencia de que, de manera general, la sociedad y las personas que la integramos no esperamos nada de las personas empobrecidas. Una sociedad como la nuestra está dispuesta a realizar grandes esfuerzos colectivos para organizar la ayuda, para paliar el sufrimiento, para cubrir la necesidad, pero, al mismo tiempo, no espera ninguna contribución de los colectivos y personas en situación de mayor precariedad. Las da por perdidas, como si no pudieran ser nada más que meras receptoras, víctimas impotentes de su situación.

Esta dinámica profundiza las dinámicas de exclusión y cultiva la desesperanza, ya que el motor más importante para aprender y participar es la motivación personal y colectiva de saberse esperado, de saber que tienes algo imprescindible que ofrecer, que aportar, que dar. Sentirse útil es la base para poder ponerse en marcha junto a otras personas en la construcción de algo común.

Pero a quienes viven en pobreza no se les espera, ni tampoco se va a su encuentro. Tan cerca y tan lejos del resto de la sociedad. Eso nos manifestaron unas familias que siguen viviendo en chabolas cuando pudimos volver a ir a verlas tras el confinamiento. Se encuentran alejadas de la vida social por un inmenso y corto abismo de trescientos metros, un camino olvidado y polvoriento si no fuera porque conduce a una antigua escombrera. Los primeros cruces de palabras, después de los saludos de rigor y un tanto excéntricos que nos ha dejado la covid19 fueron:

— *«¿Qué tal?, ¿habéis recibido muchas visitas? Ya sabéis tenéis que tener cuidado con los contagios».*

— *«Pero qué dices, ¿si aquí nunca nadie viene a vernos!».*

Al invisibilizar y negar su posible contribución, perdemos todos y todas, pierde la sociedad en su conjunto. Dialogar con la experiencia de pobreza nos permitiría poner encima de la mesa y profundizar algunos aspectos clave de cara a revertir la desigualdad social y la injusticia: la precariedad compuesta de escasez e incertidumbre, las causas y efectos de la exclusión y la soledad, las relaciones que enferman a través de la dependencia y la humillación, la creatividad cotidiana para improvisar la vida como fuente de inspiración para buscar nuevas maneras de hacer. No son temas fáciles de abordar, y eso hace que muchas veces se ponga el foco en aspectos más abstractos y globales. Por eso la experiencia e inteligencia de las personas en situación más grave de pobreza sigue siendo una contribución inesperada, quizás incluso indeseada, ya que contar con ella nos obliga a poner en cuestión ciertas certezas y seguridades.

Uno de los principales gestos de reafirmación de la valía e identidad del ser humano es su capacidad para dar, para ofrecer, para contribuir. Por ello uno de los principales hechos que en sociedad generan y mantienen la exclusión es la negación de la capacidad de una persona —o una comunidad o colectivo— para ofrecer, para dar de sí. Este hecho ayudaría a explicar de un modo muy diferente las razones de la pobreza y desvelaría que, en primer lugar, las personas son pobres no porque no tengan nada que ofrecer, sino porque se les impide contribuir al beneficio común, al bien social.





## Su conocimiento, por poco elaborado que sea, gira en torno a todo lo que representa estar condenado de por vida al desprecio y la exclusión

Como señalaba Joseph Wresinski, fundador de ATD Cuarto Mundo:

*«Los que piensan que las personas totalmente empobrecidas son apáticas y que, por consiguiente, no reflexionan, que se instalan en la dependencia o en el mero esfuerzo por sobrevivir cada día, se equivocan gravemente. Ignoran el desesperado esfuerzo de reflexión y de explicación de esa persona que no deja de preguntarse «¿pero quién soy yo?», que no para de decir «¿por qué me tratan así, como si yo fuera un trapo, un perro, un sinvergüenza? ¿Es que soy un sinvergüenza?». A costa de un doloroso esfuerzo de pensamiento, no deja de levantarse de entre esas falsas acusaciones que son otras tantas falsas identidades que se le atribuyen, y se repite «No, no soy un perro, no soy ese imbécil en el que me han convertido. Yo también sé cosas, cosas que ellos no comprenderán nunca».*

*«En esta afirmación que siempre resurge una vez más después de todas las dudas, esta persona embrutecida, extenuada de cuerpo y alma, tiene razón, absolutamente. Sabe cosas que otros tal vez no comprendan jamás, que ni siquiera lleguen a imaginar. Su conocimiento, por poco elaborado que sea, gira en torno a todo lo que representa estar condenado de por vida al desprecio y la exclusión. Engloba todo lo que eso representa en cuanto a acontecimientos, en cuanto a sufrimientos, pero también en cuanto a esperanza y resistencia frente a esos acontecimientos. Conlleva un saber del mundo que le rodea, el saber de un mundo en el que solo conoce los comportamientos para con los pobres como ella. El mejor investigador del mundo es incapaz de imaginar esas cosas y, por consiguiente, de formular las hipótesis y plantear las cuestiones que interesan».*

### Mucho por aprender

El reconocimiento del saber que pueden aportar quienes viven en pobreza no puede quedarse en una mera declaración de intenciones, sino que debe construirse identificando las aportaciones concretas que pueden ofrecer. Hace unas semanas una militante cuarto mundo (persona en situación de pobreza comprometida con ATD Cuarto Mundo para luchar no solo por sus derechos, sino por los de quienes están en una situación aún más difícil) nos comentaba al hilo de la situación actual y las colas del hambre y la vergüenza surgidas en tantos barrios y pueblos:

*«Quienes hemos vivido siempre en pobreza ya sabemos cómo sobrevivir en tiempos como estos, pero hay mucha gente que se ve en estas por primera vez».*

Necesitamos este saber, construido a partir de toda una experiencia de vida. Sin una apertura hacia un diálogo real con el conocimiento único que tienen las personas más pobres no es posible entender de manera global qué es la pobreza, ni las alternativas

para enfrentarla puestas en marcha por parte de quienes la sufren, ni cómo apoyar estos esfuerzos para avanzar hacia la erradicación de la pobreza de una manera definitiva.

Un primer aspecto en el que necesitamos profundizar es sobre qué es la pobreza. Más allá de la falta de recursos (alimentación, ingresos, vivienda, etc.), quienes la conocen en primera persona la identificaron con la oscuridad, en un taller que realizamos el año pasado:

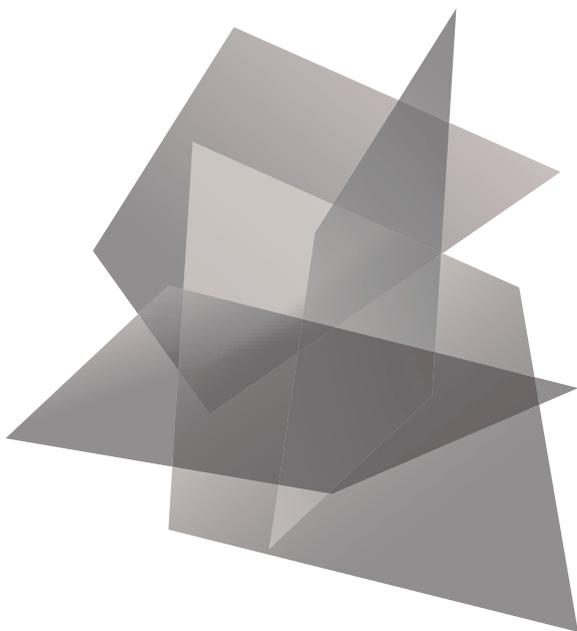
*«Nos vemos desvalidos, sin ideas, sin saber lo que hacer, sin saber cómo solucionar... desamparados en una oscuridad en la que no se ve una salida. Es como un laberinto de soledad».*

Al mismo tiempo, la búsqueda de soluciones respecto de esas necesidades no se limita únicamente a pedir ayuda y esperar a que desde fuera se resuelva el problema. Son muchos los intentos, muchos los esfuerzos puestos en marcha, pero las múltiples barreras que encuentran obligan también a pedir ayuda a quienes tienen más recursos y puertas abiertas. En todo este proceso por superar la necesidad se movilizan elementos situados a un nivel muy profundo y que las personas afectadas asocian con la sensación de abrir constantemente una herida profunda.

*«Si la necesidad básica no me es cubierta, no tengo la herida curada. No salgo de la angustia que tengo. Tenemos una herida que curar, que hay que cuidar pero no remover, para no dejamos encerradas en ella. Queremos avanzar, soltar lastre del pasado, no repetir».*

Las necesidades a resolver se identifican de esta manera con heridas que necesitan cuidado, y que en muchos casos conectan con historias previas difíciles y que no son fáciles de compartir. Tener que pedir ayuda por no poder resolver una necesidad básica puede generar vergüenza, y tener que hacerlo de manera recurrente a lo largo de la vida aumenta esta sensación y termina marcando en profundidad a la persona.

*«La burocracia, los papeles, el cómo me miran, el «¿realmente lo necesitará o no lo necesitará?», el que te cuestionen, te juzguen y te dirijan constantemente, eso no te ayuda nada. Te pueden pagar la luz, pero te pasas tres noches sin dormir porque te sientes mal. Y eso no te va a ayudar. Si te dan un abrazo lo mismo estás a oscuras,*



*pero no tienes ese malestar... Desgraciadamente, lo he vivido, y tengo que hablar con la trabajadora social y he estado muy mal, he llorado en muchos sitios. Me dice mi hija cuando le digo «tenemos que ir a tal sitio» «¿pero vas a llorar, mamá?»».*

Otro aspecto clave que entender mejor escuchando a quienes viven en pobreza son sus causas y consecuencias, que podrían resumirse en cuatro: injusticia, discriminación, desempoderamiento y miedo.

Muchas veces se habla de la pobreza como si fuera algo natural, caído del cielo, o en todo caso consecuencia de las malas decisiones de quienes la sufren. Eso mismo volvemos a ver ahora, frente a la nueva oleada de empobrecimiento actual, de la que se habla como consecuencia exclusiva de la pandemia, olvidando su existencia previa y las estructuras que ya generaban y continúan generando injusticia y desigualdad en nuestra sociedad.

También vemos como socialmente se construye una imagen de la pobreza que la divide en diferentes cajones, como si fueran realidades que no tuvieran nada en común, con la excusa de poder ofrecer una atención más adaptada a las diferentes realidades: persona sin hogar, enfermedad mental, toxicomanía, familia en riesgo, víctima de violencia machista, inmigrante, pueblo gitano, etc. Entrar en una categoría u otra conlleva su carga correspondiente de prejuicios, además de determinar muchas veces la vía de acceso a recursos que deberían ser derechos para todas las personas, y termina fomentando el enfrentamiento entre diferentes grupos sociales pese a que comparten el vivir en situación muy precaria.

Quienes viven en pobreza ofrecen una visión mucho más compleja y completa de cómo se llega a esta situación, señalando los mecanismos y protocolos que les desempoderan, que no reconocen y niegan sus capacidades, promoviendo la desesperanza y el inmovilismo. Aunque de un tiempo a esta parte se habla mucho de participación y de empoderamiento como clave de la transformación social, en relación a las poblaciones excluidas vemos como no se identifican claramente ni se revierten las múltiples barreras estructurales que encuentran, lo que vacía de contenido estas palabras.

Desde los márgenes de la sociedad la demanda fundamental que se lanza es clara: liberación. Liberación de las estructuras que oprimen, de expertos que marcan el camino y la conducta a seguir. Liberación para el ejercicio de las propias capacidades y a través del reconocimiento de derechos fundamentales. Liberación para poder decidir sobre la propia vida, asumiendo responsabilidades tanto a nivel individual como colectivo. No vale con facilitar el acceso a los recursos si este se da en condiciones que afectan a la propia dignidad y autoestima, encerrando aún más a la persona o al colectivo en el círculo de la pobreza y en la dependencia y agudizando su exclusión del reconocimiento como un igual frente a los otros miembros integrantes de la sociedad.

Un último elemento que juega un papel clave en este contexto es el miedo. Cuando se vive en la precariedad, todo lo que afecte a las mínimas seguridades que se hayan conseguido suponen una gran desestabilización. Es lo que está pasando, por ejemplo, con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital que, aunque presenta algunas mejoras respecto al sistema de Rentas Mínimas que lleva años funcionando en muchas autonomías, abre un nuevo contexto en el que falta información y confianza para frenar la inseguridad que este cambio provoca:

No vale con facilitar el acceso a los recursos si este se da en condiciones que afectan a la propia dignidad y autoestima



*«Pero, ¿esto del Ingreso Mínimo Vital cómo me va a afectar? ¿Me van a quitar los puntos de la Seguridad Social por mis hijos? Contaba con ese dinero que me viene cada seis meses para pagar las deudas ¿Y la Renta Mínima que tengo desde hace años? ¿Me la van a seguir dando o me la quitarán? Además, esto se ha aprobado solo hasta diciembre, ¿no? ¿Y después qué?».*

Los procedimientos establecidos para el acceso a recursos y derechos son muchas veces difíciles de entender. Afectan profundamente a sus vidas, pero falta información adecuada y pertinente, además de situarse en un nivel en el que no es posible tener control sobre los mismos, quedando a merced de cumplir las instrucciones dadas sin salirse del camino marcado, aun cuando la realidad vital esté marcada por situaciones excepcionales que no permiten entrar fácilmente en él. Así pasa, por ejemplo, con quienes no tienen acceso a una vivienda digna en la que poder empadronarse, o con quienes aceptan empadronar a otras personas para permitirles acceder a derechos básicos. Unos y otros se verán afectados por esta realidad cuando necesiten justificar su situación, sin derecho a réplica ni explicación.

También en este campo el conocimiento de quienes han vivido siempre en pobreza es clave para saber cómo poder manejarse con todas estas contradicciones. La experiencia les permite entender los procesos y controlar mínimamente el funcionamiento de estos procesos y trámites para que sirvan a las ambiciones, intereses y necesidades de las personas. Pero cuando vuelven a cambiar las reglas del juego, cuando aparecen nuevos elementos que ponen en cuestión todo lo aprendido anteriormente (como está ocurriendo ahora mismo con el Ingreso Mínimo Vital), se ven expuestos y obligados a cambios radicales. La información y seguridades básicas que se tenían hasta el momento ya no sirven, y toca saltar de nuevo a un vacío que, por experiencia, tiene consecuencias nefastas en la vida de la persona: una herida profunda que se reabre, humillaciones, culpabilización, pérdida de control sobre la propia vida.

Además, cada nueva evaluación que se recibe sobre la precariedad que se sufre suele reforzar la culpabilización de la persona como única responsable de su situación, potenciando que aparezcan fantasmas que amenazan con empeorarla aún más, especialmente en las dimensiones más delicadas, como es el cuidado de menores o la concesión o retiradas de ayudas básicas.

*«Pides ayuda, pero no sabes cómo hacerlo, el miedo siempre está ahí. No sabes lo que va a pasar. La trabajadora social va a ir a tu casa a ver cómo estás y a ver cómo está la situación. Si le cuentas de más no sabes cómo va a reaccionar, con menores... te da miedo. Ayer tuve que salir estresada del trabajo, sin comer, e ir a recoger a mis nietos del colegio, porque su madre no llegaba y si no sacas a los niños llaman a la policía rápido. Se meten los Servicios Sociales y entonces ya tienes muchísimo miedo, agobiada, con diarrea, con dolores de estómago, con los nervios de que no llegaba...».*

En estos tiempos de pandemia hemos visto como se potenciaba el miedo colectivo a la pérdida de control sobre la propia vida, a la dependencia de otros en cuestiones básicas de salud, de comuni-

cación interpersonal o de movimientos. Sin embargo, pese a empatizar con estas situaciones humanas que generan miedo, sigue quedando fuera de foco y de empatía la experiencia recurrente e impuesta a las personas en situación de extrema pobreza de falta de control, dependencia, desconocimiento e incertidumbre, y el pánico y desconcierto que genera en millones de personas el vivir en condiciones de extrema pobreza y exclusión social. La sociedad no reconoce que el miedo interiorizado por estas personas proviene de una extrema y gran violencia ejercida contra ellas.

### Un camino de liberación

Si hacemos posibles las condiciones para una auténtica participación de las personas en mayor pobreza, esta no puede hacer otra cosa que cuestionar la manera en la que funcionan nuestras sociedades. No puede más que cuestionar profundamente la visión del mundo de todas aquellas personas que no saben lo que es la pobreza. Una contribución verdadera de quienes habitualmente son excluidas provoca cambios en la actitud y compromisos de toda la ciudadanía, en el ejercicio de profesionales e instituciones, en las políticas, etc.

Cuando las personas en situación de mayor dificultad están alrededor de la mesa y son escuchadas, no podemos decir que una tasa de paro de un 5 a un 6% sería aceptable, ni podemos hablar de las familias muy pobres como de familias sin proyectos, ni considerar como aceptable un mundo basado en una competencia que aplasta a los más débiles... Tomar en serio su experiencia, su palabra y su pensamiento nos obliga a cuestionarnos sobre el destino de cada niño y de cada niña, de cada joven, de cada ser humano. Es decir, buscar juntos los medios para conseguir un acceso efectivo y sin excepción a los derechos fundamentales para todos.

No obstante, sería muy limitado creer que las personas en situación de pobreza no deben ser consultadas más que para los aspectos que les conciernen directamente, y en particular sobre las políticas de lucha contra la pobreza. Es algo indispensable, desde luego, pero no suficiente. Las personas en situación de pobreza aspiran a ser consideradas como todos los demás. Quieren participar en todos los aspectos de la vida sin excepción y poder aportar su contribución a partir de sus experiencias y pensamientos.

Además, les necesitamos. Porque su anhelo de ver reconocidas sus capacidades y poder aportar a lo común es un llamamiento a descubrir a cada ser humano desde sus riquezas y activos. Porque su grito demandando que los derechos sean efectivos no es una reclamación parcial, sino que muestra la indivisibilidad de estos derechos, interconectados como los diferentes aspectos de la experiencia humana. Porque la liberación a la que nos llaman no es a una liberación que solo les afecte a ellas, sino a todas las personas, a toda la sociedad, sin excepciones.

Su contribución inesperada no es aportar un conocimiento que ayude a superar la extrema pobreza, que también, sino que su experiencia ayudará a humanizar radicalmente el mundo. •



Las personas en situación de pobreza aspiran a ser consideradas como todos los demás. Quieren participar en todos los aspectos de la vida sin excepción

# J O S É B O G A S G Á L V E Z

Nacido en Madrid, en el año 1955, el actual consejero delegado de Endesa ha desarrollado casi toda su extensa carrera profesional en esta compañía en la que entró, en 1982, como 'meritorio' por un período de seis meses. Haber pasado por todos los escalafones de la empresa es un rasgo que, además de poco habitual en las compañías del IBEX, marca tanto la visión como experto que se tiene de él en todo el sector energético, como la estrecha vinculación que mantiene con sus empleados. Ingeniero Industrial del ICAI, ha desempeñado en Endesa, entre otros, los cargos de Director General de España y Portugal, D.G. del Negocio Eléctrico, D.G. de Generación, Director de Control y Gestión de Energía (1988-1997), Jefe Departamento de Relaciones Comerciales y Jefe Sección de Estudios de Mercado en el Departamento de Planificación. Fue Asesor Técnico-Económico de la D.G. de Energía en el MIE, y trabajó como analista e ingeniero de sistemas en EIRA y DIMETRONIC. José Bogas está casado, tiene dos hijas y tres nietos, y reconoce el apoyo de los suyos para afrontar retos laborales tan disruptivos como la descarbonización total de Endesa y de la economía española. Sin dejar a nadie atrás.



# LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA NO NECESITA AVISTAR CISNES NEGROS

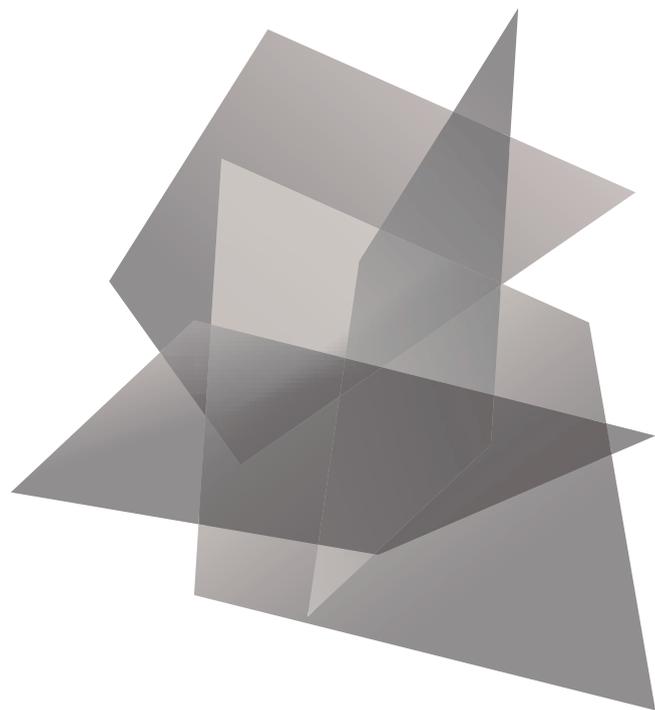
José Bogas. Consejero delegado de Endesa.

«**Q**ue todo esto no nos haga peores». Una frase y un deseo que el escritor Fernando Aramburu nos «hizo» leer a millones de españoles desde que se publicó 'Patria', allá por 2017. «Que todo esto nos haga mejores», en positivo, es lo que me gusta creer que podemos decir de la reciente y brutal crisis sanitaria, económica y social que nos ha tocado vivir, resistir y, ahora, nos exige reconstruir lo devastado.

Ha sido lo peor de la crisis lo que nos ha enseñado qué es lo mejor de la vida. Esos días de desolación e incertidumbre por el Covid-19, en los meses iniciales, nos han dejado lecciones que, no por sabidas, son siempre puestas en práctica. Que de lo malo se sale trabajando juntos. Que nuestro país ha dado y dará siempre muestras de un carácter luchador y solidario que nos hace superar, las veces que haga falta, las dificultades que se nos plantean. Que somos vulnerables. Que quienes tomamos decisiones en las empresas no debemos sucumbir a la tentación de gestionar las decisiones con automatismos, con lo que «siempre ha funcionado». Porque la vida, más tozuda que nosotros, se empeña en mostrarnos por qué tenemos sobradas razones para ser humildes. Y que las empresas, ese tejido que funciona precisamente como una red que protege e impulsa, son, han sido y serán, el motor de la recuperación.

La crisis provocada por la pandemia puso de manifiesto que la colaboración público-privada es necesaria, funciona y es más importante que cualquier comité de sabios. Esa colaboración tiene que ser facilitadora de acciones concretas y un seguro de acción. Fuimos muchas las compañías que, en esas primeras semanas de crisis, desarrollamos planes de responsabilidad para poner nuestros recursos a disposición del país para ayudar donde se nos necesitara. Pasado ese primer estadio, centramos nuestros esfuerzos en la recuperación económica que, como siempre, pasa por la generación de empleo. Y de nuestras empresas depende la creación de puestos de trabajo y su mantenimiento. Y son ellas las que pueden y deben liberar todo su potencial inversor para impulsar el crecimiento. No es la primera vez que España, a través de todos sus ciudadanos, muestra una capacidad asombrosa de resiliencia, de adaptación al cambio, de capacidad de sacrificio y, en el caso de sus empresarios, la voluntad de liderar esa transformación invirtiendo capital y talento en los momentos más críticos. Por eso necesitamos una hoja de ruta clara, integradora, en la que todos podamos contribuir, en la medida de lo que somos y tenemos, para salir reforzados de esta crisis global.

La crisis del Covid-19 no ha tenido precedentes en la historia reciente por su alcance global y sus impactos humanos y económicos, pero existen paralelismos importantes con el cambio climático: ambos son problemas globales con efectos económicos y sociales devastadores. Ahora que la opinión pública, o mejor dicho la opinión publicada, sigue debatiendo sobre si esta pandemia se trata de un cisne negro -la denominación con la que el investigador Nassim Taleb bautizó los fenómenos impredecibles, con consecuencias



Fuimos muchas las compañías que, en esas primeras semanas de crisis, desarrollamos planes de responsabilidad para poner nuestros recursos a disposición del país para ayudar donde se nos necesitara

Las empresas que no pongan en su centro la sostenibilidad no tendrán futuro. Y hablo de una sostenibilidad integrada que combine las cuestiones climáticas, inclusivas, de igualdad, de equidad, veracidad y transparencia

gravísimas y a los que luego se les busca una explicación que los convierte en previsibles- podemos decir que lo importante es, siempre, lo que viene después, lo que hacemos después. Es un debate interesante, qué duda cabe, pero lo podemos resolver con una expresión castiza y que todos entendemos bien: «A toro pasado...». Lo que sí es relevante es no caer en una trampa de la lógica que insinúa que no es momento de apostar por estas cuestiones medioambientales cuando las necesidades importantes están en otro lado. No es cierto. La sostenibilidad integrada, que combina cuestiones climáticas, inclusivas, de igualdad, de equidad, veracidad y transparencia no puede ser aplazada para «un momento mejor». Y para los que gustamos de metáforas económicas que recurren a la fauna: la sostenibilidad ya nunca más será el elefante en medio de la habitación que todos evitan mencionar por esquivar las consecuencias. Todo lo contrario, lo que ahora se impone es acelerar estos procesos porque van de la mano: economía y medioambiente son un binomio indivisible. No estamos obligados a elegir. Es más, no habrá desarrollo económico si este no es sostenible. Las empresas que no pongan en su centro la sostenibilidad no tendrán futuro. Y hablo de una sostenibilidad integrada que combine las cuestiones climáticas, inclusivas, de igualdad, de equidad, veracidad y transparencia.

Desde Endesa, ahora que parece que este cisne, al menos, ha ido alejándose, nos toca insistir más que nunca en dos ideas clave: debemos continuar las inversiones en transición energética para favorecer tanto la progresiva descarbonización y el fomento de las energías renovables como la eficiencia energética. Además, no podemos dejar de incentivar la digitalización que, como hemos visto en esta crisis, ha sido un factor esencial para no detener las actividades fundamentales de todo un país. Y cuanto mayor digitalización, mayor éxito en esa tarea de todos.

El Ejecutivo, cómo no, tiene un papel vital. Además de comprometer, como hizo, un enorme volumen de recursos para amortiguar los efectos sanitarios de la crisis, resultó evidente que era crítico y esencial incentivar la movilización de más recursos procedentes del sector privado y promover medidas para el crecimiento sostenible. Por eso debemos tener muy en cuenta, en nuestras decisiones como país, la conveniencia de nuestras políticas fiscales: ponderar que no subir impuestos -por su efecto negativo en ese tejido empresarial que nos sostiene- y la apuesta por no revertir las reformas estructurales acometidas durante la anterior crisis y que funcionaron son fórmulas que sabemos que nos van a situar en una posición más fuerte para lo que ahora debemos hacer entre todos.





Nuestro sector, el energético, que resulta clave en este proceso, no parte de cero ni recorre en solitario el camino. Contamos con instrumentos como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Ley de Cambio Climático. El PNIEC ofrece un marco completo de previsiones, objetivos y medidas para concretar la transición energética y debe ser uno de los motores económicos más importantes de la década que acabamos de comenzar. Veámoslo con sus cifras: el PNIEC plantea inversiones por 241.000 millones de euros en el periodo 2021-30. Este plan implicaría un incremento anual de PIB de 17.000 M€ (+1,3%) y una creación de más de 250.000 empleos anuales en los primeros años del plan (2021-22). Una aceleración del 30% en la ejecución del PNIEC, en 2021 y 2022, supondría un incremento anual de PIB de más de 5.000 M€ adicionales y una creación de cerca de 67.000 empleos anuales extra. La respuesta a la crisis, la llave para esa recuperación económica en nuestro sector, pasa por esta aceleración.

Endesa conoce, como hemos dicho, qué podemos hacer y cómo. Necesitamos que las condiciones regulatorias y fiscales del entorno nos permitan materializar el cuándo y eliminar distorsiones e incertidumbres. Para todos se hace imprescindible reducir el coste de la electricidad y hacerla más competitiva -abandonar esa quinta posición europea entre los países con un recibo de la luz más caro por los impuestos y cargas asociados- para beneficio de todos. Para descarbonizar la economía es necesaria una normativa de acceso y conexión que defina bien los criterios de acceso a la red para resolver la especulación y facilitar la hibridación de tecnologías. También es preciso proporcionar señales eficientes a la repotenciación y modernización de la generación renovable. Es urgente disponer de un esquema de mercado para la incorporación de renovables que proporcione una cobertura de riesgos adecuada y minimice las distorsiones del mercado y facilitar la agilización de los trámites administrativos.

Para poder llevar a cabo los planes de transición justa que tenemos previstos en las zonas afectadas por los cierres de centrales de carbón, es imprescindible la rápida adjudicación de los accesos. Endesa tiene con los territorios donde nació una vinculación extraordinaria. Y cuando me refiero a que España volverá a mostrar su espíritu de esfuerzo y resiliencia estoy conscientemente homenajeando a esos miles de trabajadores y familias que cuando el reto era vertebrar y desarrollar energéticamente el país para permitir el desarrollo económico y social que sustentaba supieron poner todo su esfuerzo y talento en la empresa. Ahora, que toca renovar, nunca mejor dicho, nuestras fuentes de energía sin emisiones, vamos a estar ahí. Tenemos la flexibilidad y la fortaleza financiera para incrementar un 30% nuestras inversiones previstas. Y necesitamos un marco inequívoco de acción.

De igual modo, Endesa tiene en sus planes que los territorios no peninsulares españoles (Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) lideren la transición ecológica e implanten un sistema energético completamente descarbonizado en 2040, una década por delante de los objetivos de reducción de emisiones fijados por la Unión Europea para 2050. Esta es una de las principales conclusiones de un estudio realizado por Monitor Deloitte, con nuestra colaboración, y presentado este mismo verano de 2020, en el que demostramos que esta solución no solo es viable sino muy rentable. Económicamente estamos hablando de 30.000 M€ de inversión, la reducción de un 72% de gasto energético en los hoga-

res y la creación de 90.000 puestos de trabajo. Insisto: tenemos un porqué, encontramos el cómo y queremos que los agentes implicados compartan nuestra visión de futuro.

Endesa quiere y debe ser parte imprescindible de la recuperación del país y de la oportunidad que tenemos de situarnos a la cabeza, en Europa, de la nueva economía. Y ponemos al servicio de la movilidad eléctrica, vector de crecimiento para varios sectores empresariales y un garante de la eliminación de emisiones del transporte, nuestro «crédito» en Europa. El Banco Europeo de Inversiones, que ya concedió en 2018 a Endesa su primer préstamo considerado verde para la construcción de instalaciones eólicas y fotovoltaicas, vuelve a ser nuestro socio. El proyecto, que se completará en tres años, permitirá desplegar en total 8.500 puntos de recarga en emplazamientos públicos que darán servicio a vehículos híbridos o eléctricos por todo el país. El proyecto de Endesa permitirá crear cerca de 600 puestos de trabajo durante la fase de implementación y otros 40 de carácter fijo. La financiación facilitada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 35 M€, contribuirá a acelerar la transición hacia una movilidad eléctrica en Europa y a cumplir con el objetivo de disponer de 1 millón de puntos de recarga en la UE para el año 2025, tal y como lo recoge el Pacto Verde Europeo elaborado por la Comisión.

Necesitamos iniciativas pioneras que despierten el interés de todos los agentes políticos, sociales y económicos de todo el mundo. El proyecto eCity para la Isla de La Cartuja (Sevilla), ideado por Rafael Sánchez Durán, director territorial de Endesa en Andalucía, es un buen ejemplo. La Isla de la Cartuja podrá disfrutar en 2025 de un suministro energético 100% renovable, a través de un parque de generación fotovoltaica y el desarrollo de grandes plantas de almacenamiento. El proyecto prevé que el espacio pueda contar con una edificación eficiente, tras llevar a cabo un proceso de rehabilitación energética de los edificios. Se tratará del emplazamiento idóneo para desplegar puntos de recarga para el fomento de la movilidad sostenible eléctrica y un sistema conectado y autónomo que funcionará gracias a una red eléctrica inteligente.

La Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y el Parque Tecnológico Cartuja (500 empresas y 18.000 puestos de trabajo) ya trabajan junto con Endesa para hacer realidad este prototipo palpable y real de una ciudad del futuro que, como arrancábamos este artículo, sólo la colaboración público-privada puede hacer realidad.

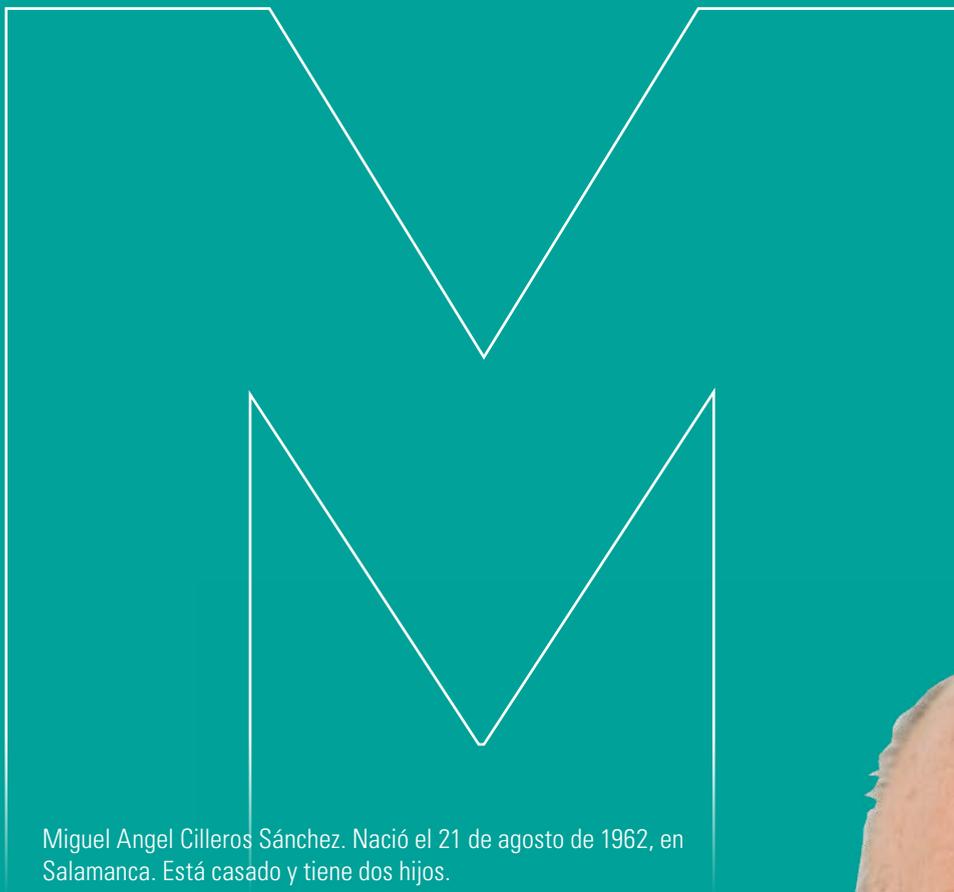
El compromiso de Endesa con España es inquebrantable. Y estos son algunos ejemplos de lo que podemos hacer en el contexto regulatorio propicio. Tenemos capacidad para invertir más de 7.000 millones M€ hasta 2022, generamos empleo directo e indirecto y nuestra contribución fiscal supera los 4.100 M€ al año. Con el plan de aceleración de inversiones citado, Endesa llegaría a generar más de 12.000 empleos directos e indirectos y de cerca de 27.000 empleos inducidos en España durante cada uno de los años 2021 y 2022.

Hablábamos al inicio de libros... Me gustaría acabar con otra de las lecturas de éxito durante la pandemia, dicen las listas de ventas: 'La España en la que creo', de Alfonso Guerra. Un buen título, sin duda, que tomo prestado como cierre a esta reflexión sobre la que, desde mi humilde punto de vista, puede ser esa España empresarial en la que creo. •

Endesa quiere y debe ser parte imprescindible de la recuperación del país y de la oportunidad que tenemos de situarnos a la cabeza, en Europa, de la nueva economía



# M I G U E L   Á N G E L C I L L E R O S



Miguel Angel Cilleros Sánchez. Nació el 21 de agosto de 1962, en Salamanca. Está casado y tiene dos hijos.

De categoría profesional de *oficial de oficio* de RENFE Operadora, lleva muchos años desarrollando su labor como representante de los trabajadores en la organización sindical UGT, en cargos de responsabilidad. En 1993 fue secretario general de la Sección Sindical de los Talleres Centrales de Reparación (TCR) de Villaverde en Madrid. Posteriormente y siendo miembro de la Comisión Permanente del Sector Ferroviario y Servicios Turísticos, fue el responsable del área interna (administración y organización). En el VIII Congreso celebrado en Cáceres en 2002, entró a formar parte de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal de Transportes Comunicaciones y Mar, donde ostentaba la Secretaría de Administración, hasta que en el IX Congreso que tuvo lugar en Gijón en octubre de 2005, fue elegido secretario general, máximo representante de la Federación Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar.

En la actualidad, tras la fusión de las federaciones de Transportes, Comunicaciones y Mar de UGT (TCM-UGT) y Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT (CHTJ-UGT), en el año 2014, como paso previo a la fusión definitiva con la Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT), es el secretario general de la nueva federación surgida: Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT).



# UN MODELO PRODUCTIVO TRANSVERSAL, MULTISECTORIAL Y LIDERADO POR LA INVERSIÓN PÚBLICA

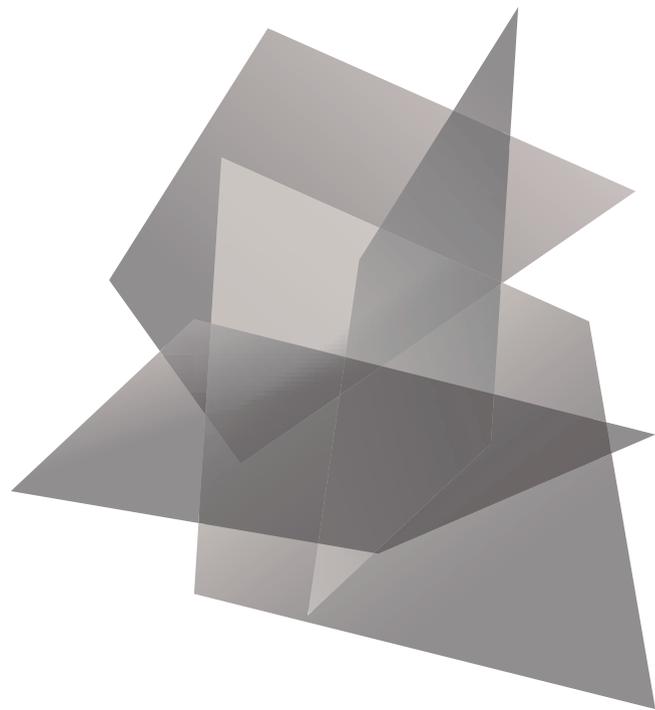
Miguel Ángel Cilleros. Secretario general de FeSMC-UGT.

**D**esde hace tiempo parece que en nuestro país exista una dicotomía entre la importancia del sector industrial en detrimento del sector servicios, y viceversa. Como si el modelo económico de este país tuviera que elegir entre uno u otro sector para desarrollar su actividad productiva.

Es inevitable -por otra parte, necesario- contextualizar cualquier análisis sobre casi cualquier materia en los hechos que hemos padecido desde el mes de marzo de este año en nuestro país y en el resto del mundo: me estoy refiriendo, como se puede intuir, a la pandemia por Covid-19, el ya tristemente célebre coronavirus.

Nada de lo que pueda analizarse se verá desde una perspectiva estrictamente objetiva o podrá ser expuesto con cierto grado de seguridad en sus conclusiones pues, entre las lecciones aprendidas de esta situación, podemos extraer una muy evidente: nada es seguro, todo cambia a cada instante, lo que hoy es válido o damos por asentado, mañana puede cambiar. Por eso mismo, debemos ser cautos y humildes en nuestras exposiciones, especialmente aquellos analistas que en los últimos años, y antes de la Gran Recesión (2008-2016) parecían tener una bola de cristal que sumada a su condición de gurús económicos y sociales, pontificaban sus teorías y marcaban el camino a seguir. Luego se vio, con el crack económico, que muchos de ellos habían sido los primeros en alimentar a la bestia, las temidas burbujas (financiera, inmobiliaria, hipotecaria...) y los primeros, también, en difuminarse entre el caos. Por ello, seamos sensatos y no pequemos ni de hipercatastrofismo ni de lo contrario en esta nueva situación que ha provocado el coronavirus y su impacto sobre la economía, la actividad productiva y el mercado de trabajo.

Dicho lo anterior, y siguiendo con el argumento de las lecciones aprendidas, hay otra que parece también evidente: un país como el nuestro no debe ni puede renunciar a su industria ni a sus servicios. Esto es tanto como afirmar que ambos sectores (el industrial y el de servicios) deben conciliarse y revelarse como un binomio necesario para la salud y seguridad económica de un Estado. La pandemia, sobrevenida de manera más o menos sorpresiva en aquellos duros días de marzo, puso de manifiesto que nuestra industria no era capaz de dar respuesta a necesidades específicas para la salud pública en aquel momento, al tiempo que se produjo una parada de actividad productiva en sectores esenciales para la generación de riqueza en una economía como la nuestra, dependiente de los servicios (en este caso con especial relevancia en el caso del turismo y todas las actividades vinculadas a la oferta complementaria).



Nada es seguro, todo cambia a cada instante, lo que hoy es válido o damos por asentado, mañana puede cambiar

A esto cabría añadir un aspecto fundamental que supone una paradoja inasumible en el sector servicios: la precarización del trabajo y la baja consideración profesional de muchos de sus profesionales. Con esta crisis (sanitaria, económica y social) se ha visto que los representantes de las élites del libre mercado no han servido para mucho y que los trabajadores y trabajadoras de aquellos empleos que el Sistema despreciaba se han revelado estratégicos para la supervivencia de la sociedad en un momento de extrema dureza. Que esto sirva como punto de partida para cambiar algunas cosas.

### Servicios: sector estratégico

El macrosector servicios representa un 73% del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país y aglutina el 75,5% del empleo en el mercado laboral español. Sin embargo, la importancia capital de este sector en la economía española no se corresponde con las condiciones laborales de muchos de sus trabajadores y trabajadoras.

Una vez más, volvemos a señalar la estrechez de miras desde ciertos ámbitos para entender que el sector servicios asume, en determinadas actividades, un grado de precariedad histórica que estamos reduciendo con una acción sindical de largo recorrido, con objetivos en el medio y largo plazo que se ven dificultados, en gran medida, por la cerrazón de unas asociaciones empresariales caducas en sus planteamientos y en su manera de entender las relaciones laborales, algo que no sucede en otros sectores de actividad (menos aún en el sector público) donde la visión empresarial es, por lo menos, más adaptable a los tiempos que vivimos.

### Agravio comparativo entre sectores

La federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT va a seguir en su empeño de dignificar laboralmente a los profesionales del sector servicios. En este sentido, seguimos reclamando la necesi-

dad de universalizar el contrato relevo a todos los sectores de actividad productiva, entre ellos los servicios.

FeSMC-UGT fue muy crítica, en su momento, ante las medidas adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para potenciar el sector industrial, entre las que se encontraba el contrato de relevo. Ya entonces denunciábamos que resultaba sorprendente la racanería del Ejecutivo para extender el contrato relevo a todos los sectores de actividad económica de nuestro país.

En lo que respecta a nuestros sectores —transportes, financiero, seguros, oficinas, hostelería, turismo, limpieza, seguridad privada, medios de comunicación, telecomunicaciones, cultura y comercio— no tenemos dudas sobre la necesaria renovación generacional de plantillas en muchos de ellos, sobre la posibilidad de contribuir a reducir la resistencia al cambio en algunos perfiles profesionales que asumen un impacto directo en el proceso de digitalización y tecnificación de procesos; sobre la penosidad de algunas de las tareas profesionales que generan un desgaste físico y psicológico en actividades vinculadas a nuestros sectores; sobre la consolidación de empleo en ámbitos con un alto índice de rotación y baja calidad en la contratación, y un largo etcétera.

En definitiva deben articularse medidas transversales para la mejora de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de múltiples sectores, incrementando la calidad del empleo, favoreciendo la competitividad y contribuyendo a modernizar sectores que están inmersos —o lo estarán— en profundos cambios de carácter tecnológico y digital.

La cuestión, una vez más, es el empeño por establecer dicotomías entre estos dos sectores de actividad: ¿por qué se hace depender nuestra economía de un único sector?, ¿por qué hay que poner todos los huevos en una única cesta? Por otra parte, ¿por qué adoptar medidas para estimular, potenciar, reestructurar o renovar determinado sector, cuando se pueden atender las necesidades de ambos?



## Sectores complementarios

Es fundamental entender, de una vez por todas, que industria y servicios son elementos complementarios de nuestro modelo económico y que ambos pueden retroalimentarse, desarrollar sinergias en muchas de sus actividades, además de proveer, también, de recursos al sector público, uno de los pilares esenciales de un mermado Estado de bienestar que ha sufrido las consecuencias de las políticas neoliberales y de la propia crisis económica.

En una economía global, el comercio impone unos criterios de compra que se sostienen, casi exclusivamente, en el factor precio. Muchos países, entre ellos España, han asumido como estrategia que el abastecimiento de todo tipo de productos que demanda nuestra actividad productiva se realice a través de la importación de los mismos, tanto en la industria de base (para el desarrollo de otras industrias), como para la industria de bienes de equipo y la industria de consumo. Y, como tantos otros países Europeos, este suministro proviene, principalmente, de países asiáticos. Otros países optan por desarrollar su propia ingeniería de producto y fabricarlos en ese tipo de economías que, como es sabido, compiten en precio con una mano de obra cuasi esclava, países donde los derechos de los trabajadores son, prácticamente, inexistentes. Estamos, sin duda, ante un modelo perverso en el que las propias empresas justifican sus estrategias en base a un ahorro de costes en mano de obra que compensa, sobradamente, los costes logísticos necesarios para garantizar la cadena de suministro.

## ¿Por qué España lleva años renunciando a un sector industrial?

De manera general, podemos entender el *macrosector* industrial en la integración de actividades o sectores como la siderurgia, metalurgia, cemento, química, petroquímica, automoción, naviera, ferrocarriles, armamento, textiles, papel, aeronáutica, minería, alimentos, textil, energético... ¿Realmente España no podría desarrollar sus propios recursos en varios de estos nichos? Algunos de los condicionantes que han esgrimido desde distintos ámbitos, tanto el empresarial como el institucional, para el desarrollo de una industria autóctona en alguno, o varios, de estos sectores no se sostienen como argumentos transversales para justificar la falta de inversión en los mismos. Hay razones objetivas que pueden servir para renunciar a determinadas actividades, algunas muy obvias, y otras que rezuman un desinterés evidente o que, directamente, buscan justificación en razones de tipo político o geopolítico que escapan a la lógica económica. Un Estado tiene todo el derecho a desarrollar su actividad productiva en aquellos ámbitos donde cree que puede obtener un beneficio: para sus empresas, trabajadores y sociedad en general. Y luego existe, también, una especie de complejo a no pasarnos de la raya en la consideración de nuestra propia actividad productiva como un bien para el propio autoconsumo de servicios o industrias nacionales, no vaya a ser que nos tachen de proteccionistas. Se pueden definir pequeñas industrias que no necesitan tener una vocación exportadora para vender sus productos, industrias que tendrían una demanda interna tanto en la provisión de suministros a otras industrias como para satisfacer la demanda de consumo de la propia ciudadanía.

Pero la pobre realidad de la industria española hoy responde a un proceso progresivo de desindustrialización que se inició con la entrada de España en la UE (con la firma del Acta de Adhesión de

Un Estado tiene todo el derecho a desarrollar su actividad productiva en aquellos ámbitos donde cree que puede obtener un beneficio: para sus empresas, trabajadores y sociedad en general

España a las Comunidades Europeas, el 12 de junio de 1985) y que, junto a otros factores como la falta de competitividad con otras industrias más especializadas de países europeos, la ausencia de políticas industriales por parte de los distintos Gobiernos, la inversión en sectores no sometidos a la competencia externa y el desarrollo del sector servicios de manera exponencial a otros sectores de actividad nos ha llevado a la situación que tenemos hoy.

No obstante, parece que la Agenda 2020 incorpora como una de sus líneas estratégicas "Una política industrial para la mundialización" en la que se contemplan distintas líneas de acción para hacer de Europa un referente industrial, especialmente en alguno de los sectores emergentes y tecnológicos, más equilibrado territorialmente y capaz de competir en un mercado global.

Sobre esto último, los aspectos tecnológicos, cabe reconocer que la I+D+i está mucho más asociado al sector industrial, lógicamente, pero debemos entender que conceptos como innovación, investigación y desarrollo son claramente transversales y, por tanto, pueden y deben aplicarse a algunos sectores vinculados a los servicios. Es verdad que la innovación en los servicios no ha sido, históricamente, de carácter tecnológico, pero en la era de la digitalización puede ser determinante en la mejora del servicio y en la relación con los clientes, además de optimizar aspectos organizativos como de estrategia corporativa, marketing y comunicación. Por otra parte, políticas de innovación aplicadas a los transportes tienen una clara repercusión en la mejora de la logística en el transporte de mercancías o en la calidad del servicio en el caso de transporte de viajeros. Donde sí podemos comprobar el factor tecnológico vinculado a la innovación es en las telecomunicaciones, donde los servicios que se prestan están altamente condicionados por la inversión en innovación, investigación y desarrollo. Una vez más, conviene recordar que un país que pretenda avanzar en su modelo económico y social no puede vivir de espaldas a la ciencia y a la investigación: la inversión pública en este terreno es, ahora más que nunca, estratégica.

## Competir a costa de precarizar empleo y salarios

Desde la federación de Servicios, Movilidad y Consumo consideramos urgente trasladar al Gobierno la importancia de intervenir en el sector Servicios desde una perspectiva estrictamente laboral, ante la necesidad evidente de mejorar la calidad del empleo y, sobre todo, de los salarios.

## La apuesta debe ser por una actividad productiva equilibrada, complementaria y con empleos de calidad, salarios dignos y profesionales cualificados y con vocación de permanencia

No es asumible que un país como el nuestro, cuya actividad productiva tiene en los Servicios un agente protagónico, con una aportación de peso a la riqueza del país, en el que actividades como hostelería, turismo, comercio, servicios auxiliares o *telemarketing* (*contact center*), entre otros, se revelan como instrumentos necesarios para el crecimiento económico, muestren un desequilibrio evidente entre los beneficios de las empresas y los salarios de sus trabajadores y trabajadoras.

Pero no es sólo una cuestión de salarios: es que en determinadas actividades del macrosector Servicios sus profesionales son víctimas de un evidente déficit en cuestiones como formación, conciliación de la vida profesional y familiar, salud y seguridad en el trabajo o desigualdad.

Parece que en el inconsciente colectivo esté calando la idea de que determinados sectores vinculados a los Servicios son ámbitos laborales “de paso”, con una alta rotación y en los que se fomenta la idea de “todo vale” o “cualquiera vale”. Y resulta que no, que en estos sectores tenemos a profesionales que quieren ser reconocidos precisamente por eso: por su profesionalidad en el servicio que prestan: sea una dependienta de un comercio, un vigilante de seguridad, un profesional de la limpieza, un camarero o una camarera de piso de una cadena hotelera.

Ha llegado el momento de que un Gobierno que, como dijo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la última edición de FITUR, “tiene un profundo sesgo social”, atienda las necesidades de este sector de sectores y de sus profesionales, sin renunciar por ello a atender las necesidades de otros sectores.

Es verdad que cuando hablamos de sector servicios no todo es precariedad y bajos salarios. En ámbitos como las telecomunicaciones, los transportes, los servicios financieros, las ingenierías y la consultoría, por citar algunos, la situación no es la equiparable. Sin embargo, sí es cierto que existen ámbitos de mejora y, en algunos casos, se hace necesario atender las necesidades de conciliación laboral y familiar, además de otros beneficios sociales que trascienden lo estrictamente salarial.

### Más allá de “apuestas” concretas

Es obvio que nuestro país necesita una apuesta decidida por un sector industrial fuerte y especializado y, también, por un sector servicios más profesionalizado en algunas de sus actividades y alejado de la precarización actual. Pero creo que hay que ir más allá: la apuesta debe ser por una actividad productiva equilibrada, complementaria y con empleos de calidad, salarios dignos y profesionales cualificados y con vocación de permanencia en cada uno de sus sectores (recordemos que hay actividades de los servicios, muchas vinculadas a la industria turística, consideradas sector “de paso”, con alta rotación y salarios muy bajos).

Por tanto, hablamos de una apuesta de carácter transversal que saque lo mejor de cada sector, el industrial, el de servicios y el sector público, y que se configura un “trípode” productivo que sostenga un modelo económico alejado de lo especulativo y centrado en el factor trabajo y el reparto equitativo de la riqueza generada.

Esta crisis del Covid ha sido un generador de incertidumbre colosal, lo que debe llevarnos a diversificar riesgos en el ámbito económico. Debemos preparar nuestra economía, nuestro sistema productivo, para reaccionar ante distintos escenarios y eso se consigue, en parte, con el reconocimiento de todas nuestras potencialidades como una sociedad que hace del trabajo su mayor y mejor capital, que puede hacer de nuestro país un referente en determinados nichos de actividad tanto del industrial como de los servicios, y que debe tener en el sector público (la inversión) un dinamizador de nuestra actividad económica que redunde, también, en el fortalecimiento del Estado de bienestar. Si el Estado no invierte, no habrá cambio de modelo productivo. •



# M A R Í A C H I V I T E N A V A S C U É S



Nació en Cintruénigo (Navarra) en 1978. Tiene pareja, una hija y un hijo.

Es licenciada en Sociología por la Universidad Pública de Navarra (2001) y máster de Organización y Gestión de RRHH en Foro Europeo (2002).

Comenzó su etapa laboral como técnica de empleo en los servicios de base de Cadreita. Seguidamente, desempeñó labores de consultoría en la ETT Manpower y continuó trabajando en proyectos europeos de empleo (la iniciativa Adapna, con Finlandia e Italia, fue el más destacado) desde el Gabinete de Sociología de UGT Navarra.

En el plano político, se afilió a las Juventudes Socialistas en 1998. Su primera responsabilidad como cargo público fue en 2003 como concejal en el Ayuntamiento de Cintruénigo y en 2007 fue elegida como parlamentaria foral, ostentando durante esa legislatura (2007 – 2011) la portavocía de la Comisión de Salud. En 2011 tomó posesión de su cargo como senadora, siendo designada durante la primera etapa en la Cámara Alta como portavoz de Salud y desde septiembre de 2014 como portavoz del Grupo Socialista del Senado, obteniendo ese año el premio «senadora revelación».

En la legislatura 2015 – 2019 regresó al Parlamento de Navarra encabezando la lista del PSN – PSOE y liderando, en la oposición, la labor del Grupo Parlamentario Socialista. Ha recibido el premio de los y las periodistas parlamentarios por su buena relación con la prensa y ha sido distinguida también con el premio «Sanitaria» en su categoría de «Política», que concede el grupo editorial Sanitaria 2000.

Desde agosto de 2019, es Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra.



# CONSTRUIR, RECONSTRUIR, PROSPERAR EN IGUALDAD

María Chivite. Presidenta de Navarra.

**E**s evidente que la pandemia del COVID19 ha supuesto un desafío, un reto de enorme magnitud a todos los niveles. Que lo que comenzó como un problema sanitario, ha supuesto adoptar medidas que tienen un impacto social y económico muy relevante. En este contexto, los gobiernos, las instituciones, las administraciones, hemos de trabajar de la mano de la sociedad civil para la tarea de construir, de reconstruir, de diseñar la salida a esta crisis desde una perspectiva de igualdad de oportunidades y equidad. Tenemos reciente la experiencia de la crisis de 2008, que, si bien tiene un origen distinto, es un referente respecto a las consecuencias que tienen las medidas que se toman y, por tanto, debe ser un aprendizaje para hacer mejor las cosas. La salida de esta crisis no debemos plantearla en términos de asumir que tiene que haber ganadores y perdedores. De asumir más desigualdad, más brechas sociales, laborales, y de asumir una persistencia en la falta de audacia para llevar a cabo las transformaciones que nuestro país necesita. La innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la igualdad deben ser los ejes del modelo económico y social que impulsemos los gobiernos y que, además de situarnos en una posición de mayor certidumbre y solvencia, nos alinea con la estrategia europea, por lo que seremos más competitivos y tendremos mayor capacidad de liderazgo.

En el Gobierno de Navarra ya planteamos un proyecto de legislatura sustentado en esos ejes. Pero en estos momentos, agosto de 2019, cuando llegamos al gobierno, es un escenario que vemos ya como lejano, dada la intensidad de lo vivido estos últimos meses, pero siempre es bueno recordar aquella base programática que sigue vigente. En todo caso, nuestra propuesta para Navarra, y creemos que es perfectamente extrapolable al resto de España, es un plan de reactivación social y económica que supone reafirmar la convicción en torno a esos ejes y a un modelo de desarrollo que gire en torno a la innovación.

La innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la igualdad deben ser los ejes del modelo económico y social que impulsemos los gobiernos

Esta crisis generada como consecuencia de la pandemia del COVID19 ha acelerado procesos e iniciativas transformadoras que ya estaban en marcha o que eran incipientes, y nos ha obligado de repensar prioridades y, yo diría, a resituar valores, que no es una cuestión menor. La solidaridad, la importancia de tener un sistema sanitario fuerte, la responsabilidad individual como aportación al bien común, la equidad y la igualdad, además de una democracia con actores que sean útiles, constructivos y, por tanto relevantes, son algunos de esos valores.

Es pues, nuestra responsabilidad como gobierno responder a lo sanitario, lo social y lo económico. E impulsar ese plan de reactivación que hemos abierto a la aportación de la sociedad para hacerlo mejor y con más consenso. Cuando está en juego nuestro futuro, no podemos pensar en otros términos que en un trabajo hecho con la sociedad, las instituciones y con todas las administraciones porque cada cual, desde su ámbito competencial, tiene que ser parte de este trabajo conjunto. Solo desde la inteligencia colectiva, el compromiso común y la aportación de la sociedad podremos salir de esta crisis con más herramientas, más solidez y más oportunidades.

Es, además, la ocasión de repensar un modelo de gobernanza público, caminar hacia nuevos liderazgos con otros valores y maneras de hacer las cosas. Fomentar la calidad democrática y la participación ciudadana. Y esto será fundamental para contrarrestar a los populismos y tentaciones autoritarias que estamos viendo en algunos ámbitos y que nos preocupan. Porque, hemos de tenerlo claro, sin convivencia no hay prosperidad, y en democracia solo cabe avanzar en derechos de ciudadanía y en consolidar un modelo donde los acuerdos sean lo cotidiano, no la excepción, y donde hacer oposición no sea entendido como confrontación sino como aportación constructiva al país, a la comunidad, a la localidad.

Tenemos por delante la labor de elaborar e implementar un plan de reactivación cuyo objetivo es impulsar y coordinar todas las herramientas públicas y privadas para salir de crisis con nuevas bases de crecimiento, innovación, progreso, y cohesión social y territorial. Partiendo de un diagnóstico profundo y detallado tanto cualitativo como cuantitativo porque los cambios que estamos viviendo afectan a todos los ámbitos de nuestra vida: las relaciones sociales, las relaciones con la comunidad, con el medio ambiente, el posible cambio de paradigma entre lo rural y lo urbano, el uso de los espacios públicos, los modelos y tipologías residenciales, las tecnologías, los distintos modelos de consumos, las relaciones transfronterizas, la visión de las redes de abastecimiento en las cadenas de valor, vamos a identificar nuestros productos de primera necesidad, la conciencia de la importancia del autoabastecimiento de productos estratégicos, la necesidad de diversificar la actividad económi-

En democracia solo cabe avanzar en derechos de ciudadanía y en consolidar un modelo donde los acuerdos sean lo cotidiano, no la excepción

ca, y el diferente impacto de la crisis según variables como el género, la edad o la situación social.

Como decía, la innovación, entendida como todo cambio de procesos, tecnología u otro tipo, que está basado en el conocimiento y que genera valor, no solo económico sino también social, es el elemento diferencial de Navarra y el pilar de este plan.

Además, tenemos la oportunidad de posicionarnos mejor en el mapa de la competitividad europea con base en un modelo de desarrollo territorial sostenible e integrador. Si bien somos conscientes de que tenemos que mejorar en algunos indicadores de competitividad regional de la Unión Europea, como la sofisticación empresarial y la inversión en intangibles e infraestructuras. Tenemos en Navarra un modelo, el de la Estrategia de Especialización Inteligente o S3, que es válido y será un elemento complementario a este plan.

Desde un análisis DAFO de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, proponemos las principales áreas de actuación en las que hemos de poner el foco.

En materia de protección social:

- Asegurar políticas redistributivas de rentas.
- Proyección de las personas mayores o con necesidades especiales.
- Atender a otros colectivos vulnerables y con derechos para todas las personas.
- Revisar los modelos residenciales de las personas mayores.
- Y un reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda.

En cuanto a los servicios públicos:

- Entendemos que el sector público debe ser palanca de reconstrucción y reactivación.
- Y que es preciso adaptar y coordinar los más de 30 planes que tiene el Gobierno de Navarra.

Respecto al marco de convivencia:

- Desarrollar el programa de actuaciones para la convivencia cívica.
- Coordinar redes colaborativas de voluntariado y solidaridad.
- Innovar en las formas de relación social, hábitos de consumo o uso de espacios públicos.

En lo que atañe a la reactivación económica:

- Apoyo al tejido empresarial y reconversión productiva de determinadas industrias.
- Ayudas a pymes, autónomos, economía social o comercio de proximidad.
- Compromiso público con las industrias estratégicas.
- Desarrollo de una economía de los cuidados personales.
- Inversión en infraestructuras de futuro, digitales y terrestres.

Abordamos también la transición energética:

- Con el compromiso para la descarbonización de la economía, las ciudades y alineamiento con la Green Deal europea.
- Con un plan de integral de adaptación al cambio climático.





- Fomentando el plan de vivienda de alquiler y la edificación sostenible.
- Y con iniciativas de economía circular.

En el marco del desarrollo sostenible, planeamos también:

- Revisar la estrategia Territorial de Navarra.
- Revitalizar la actividad en el medio rural y las ayudas al sector primario.
- Potenciar la cadena agroalimentaria propia, las estrategias de kilómetro cero y la promoción del producto local.
- Revisar las estrategias de promoción del turismo sostenible, emprendimiento verde, la conexión de comercio y medio rural, etcétera.

Y finalmente, en cuanto a la acción exterior.

- Creemos importante monitorizar los programas y ayudas europeas.
- Alinearnos con los planes de impulso y estrategias de la unión europea.
- Y apoyar la internacionalización de las empresas navarras.

Como objetivos estratégicos proponemos:

- Una salida a la crisis liderando un nuevo modelo.
- Reactivar la economía.
- Impulsar la innovación técnica y social y la diversificación empresarial.
- Potenciar la economía social y cooperativa y desarrollar el tercer sector y la economía colaborativa.
- Impulsar la cooperación.
- Abrirnos a nuevos mercados internacionales y nuevas demandas.
- Impulsar inversiones pendientes.
- Profundizar en alianzas sociales y empresariales.
- Impulsar el talento.
- Potenciar la interrelación y colaboración interadministrativa.
- Reforzar el ecosistema sanitario y de cuidados a mayores.
- Profundizar en los sistemas de cobertura social.
- Conectividad para la cohesión digital y territorial.
- Valorizar el ámbito rural para mayor equilibrio territorial.
- Promover la cultura como elemento de cohesión.

## Nos toca afrontar esta situación con propuestas, repensando prioridades, valores y modelos, aprendiendo cada día. Y como toda crisis, hemos de enfocarla en términos de oportunidad

Como vengo señalando, nuestra voluntad es implicar en este plan a toda la sociedad civil e instituciones de Navarra. El gobierno tiene que co-crear con representantes políticos e institucionales para obtener un mejor input y para avanzar en un modelo de responsabilidad compartida. Tenemos que trabajar no solo con los agentes ya identificados y estructurados sino con aquellos a los que tenemos que identificar, además de con líderes emergentes de carácter disruptivo.

Navarra, como el resto de España, como tantos países de Europa y del mundo, se enfrenta a un enorme desafío, a una situación inédita en décadas, a una situación de magnitud aún por conocer, pero en todo caso, que sabemos será de profundas consecuencias sociales y económicas.

En ese contexto, nos toca afrontar esta situación con propuestas, repensando prioridades, valores y modelos, aprendiendo cada día. Y como toda crisis, hemos de enfocarla en términos de oportunidad. Teníamos asignaturas pendientes respecto a nuestro modelo productivo, a determinados retos y modelos sociales, y este es el momento de hacer esas transformaciones necesarias, de esas inversiones pendientes para que salgamos reforzados.

Además, en Navarra los partidos, los agentes económicos y sociales, colectivos, sociedad civil en su conjunto, estamos demostrando que podemos trabajar en común. Colaborar, aportar. Porque estamos entendiendo que nos jugamos mucho, que el futuro nos interpela a todas y a todos, y que trabajando desde la fuerza de lo común vamos a conseguir más, mejor y con más solidez y fortaleza.

En este punto, quiero también poner en valor la utilidad y necesidad del Diálogo Social. Un ejemplo de cómo se puede avanzar cuando hay voluntad de acuerdo, y de cómo se pueden encontrar bases sobre las que dibujar medidas concretas que beneficien a empresas y trabajadoras y trabajadores. En Navarra, en ese marco estamos planteando un Plan de Empleo y acabamos de acordar medidas para, por ejemplo, favorecer la conciliación de la vida personal y laboral. Una cuestión que sigue siendo una asignatura pendiente y que, consecuencia del confinamiento y la llamada nueva normalidad, se está visibilizando como un problema para miles, millones de familias. Por eso, desde el gobierno, hemos impulsado, y seguiremos haciéndolo, medidas para favorecer la compatibilidad de todas las facetas de la vida, sin tener que renunciar a ninguna de ellas.

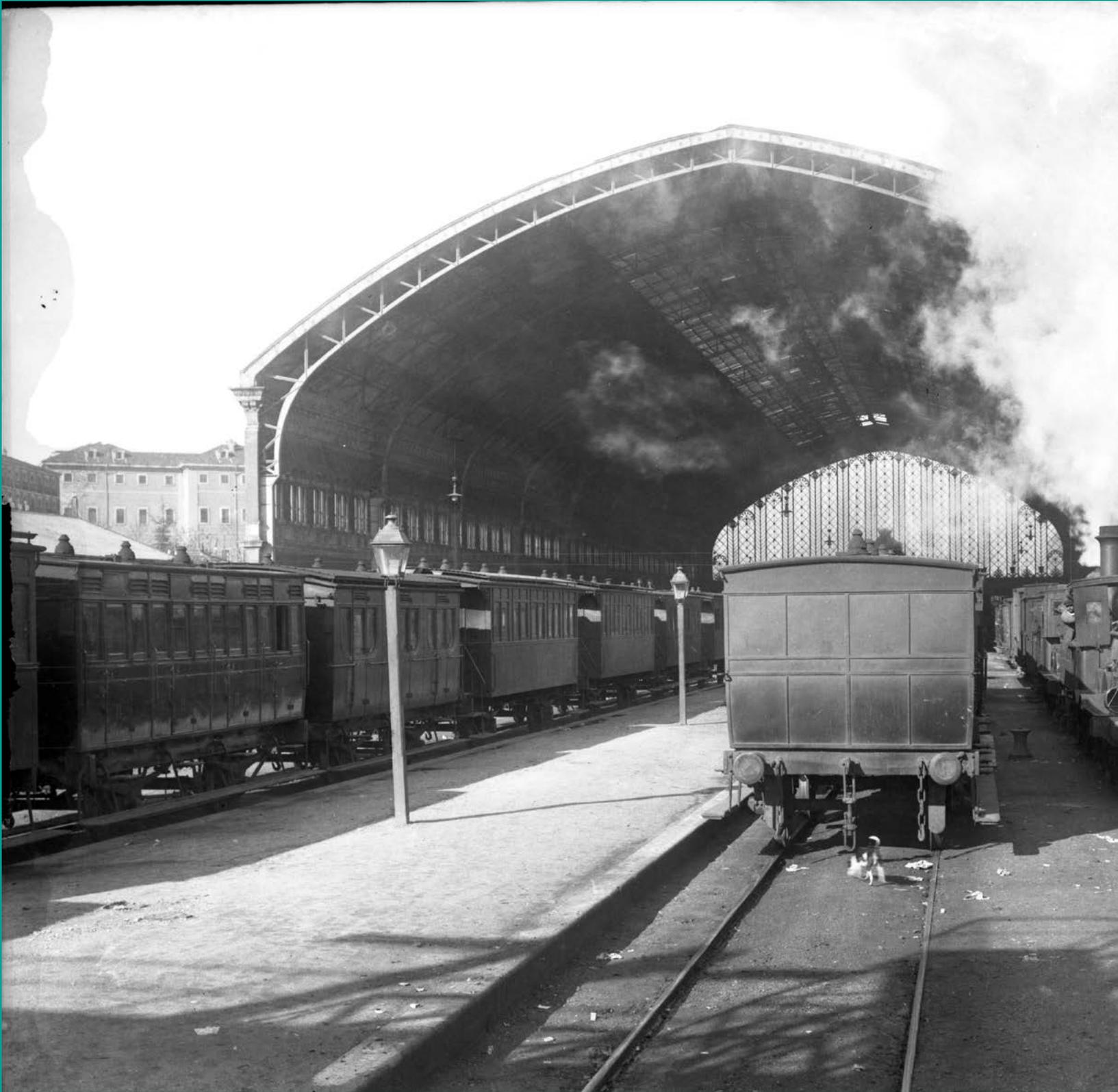
Agentes económicos y sociales e instituciones, sociedad civil, centros tecnológicos y formativos, en definitiva, el talento, la inteligencia colectiva, la investigación, la experiencia puesta a disposición del bien común forman parte del escenario de corresponsabilidad en el que avanzar desde la colaboración público privada.

Aunque nos quedan meses difíciles social y económicamente, contamos con herramientas que tenemos que aprovechar al máximo para lograr esos dos objetivos: la transformación y modernización

del tejido productivo y el fortalecimiento de los servicios públicos, en ambos casos poniendo la innovación como eje. Entre esas herramientas, la adecuación del presupuesto y reorientación de algunas partidas, como ya estamos haciendo, el endeudamiento para afrontar el aumento del gasto y la importante pérdida de recaudación, el acceso a las ayudas tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea y la atracción de la inversión privada.

En Navarra contamos con un sector industrial potente que representa más del 30 por ciento del PIB, sector que ya ha iniciado el tránsito hacia la industria 4.0 y que abarca desde la automoción a la biomedicina pasando por la agroalimentaria. También disponemos de conocimiento y experiencia en torno a las energías renovables, y estamos potenciando un turismo de calidad y sostenible, además de contar con centros tecnológicos de referencia, con centros de investigación que están trabajando a un alto nivel. También en proyectos relacionados con el COVID19, a los que el Gobierno de Navarra ha destinado fondos, entendiéndolo que, de todos los aprendizajes que hemos de sacar de esta crisis, la apuesta decidida por la ciencia y la investigación debe ser uno de ellos. Nuestro compromiso con la I+D+i se refuerza y las consecuencias de esta pandemia nos ratifican en el camino emprendido.

Nuestra disposición, como siempre, a colaborar con las instituciones españolas y europeas, porque todas las administraciones debemos empujar hacia esta construcción, reconstrucción, social y económica, con el objetivo de una prosperidad que redunde en igualdad de oportunidades y en aminorar las brechas sociales. •





Interior de la nave central de la estación de ferrocarril Atocha o del Mediodía en Madrid, con varios trenes estacionados o maniobrando (1905-1910).

# JOSÉ VICENTE DE LOS MOZOS



Presidente de ANFAC. Director de fabricación y logística del Grupo Renault.  
Presidente del Consejo de Administración de Renault España.  
Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo Renault.

José Vicente de los Mozos nació el 15 de octubre de 1962 y creció en Valladolid. Es titulado en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con un Máster en Técnicas de Producción, por el CESEM de Madrid y con un Executive Program, por la Universidad de Stanford (SEP). En 1978 entra en Renault España como aprendiz y tras obtener su titulación de ingeniería, pasa a formar parte del equipo de ingenieros de la Factoría de Carrocería Montaje de Valladolid. En 1993 se traslada a París para desempeñar diferentes tareas de responsabilidad en la Dirección de Ingeniería de Renault para posteriormente regresar a España como jefe del Departamento de Embutición de la Factoría de Carrocería Montaje de Valladolid y más tarde responsabilizarse de los Departamentos de Chapa y Embutición de la planta de Palencia. En 2003 pasa a Nissan Motor Ibérica, y en septiembre de 2008, entra en la empresa FICOSA (proveedor de la automoción) como Director General de Automoción. En octubre de 2009 regresa a Renault como Director de Fabricación de vehículos del Grupo y tras varios cargos de responsabilidad, el 1 de abril de 2018, José Vicente de los Mozos es nombrado EVP Manufacturing & Supply Chain de la región 1 de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, y director general de Fabricación y Logística del Grupo Renault. Es miembro del comité ejecutivo del Grupo Renault.



# LA CLAVE ES LA COMPETITIVIDAD

José Vicente de los Mozos. Presidente de ANFAC.

**H**ablar de la industria en España es hacer referencia al 16% del PIB de nuestro país. Esta cifra se me antoja pequeña si tenemos en cuenta el peso de este sector en las economías de los países más avanzados. Aunque lo que me resulta más impactante, es que el sector automotriz significa un 60% de la industria española. Esto demuestra la importancia del automóvil en nuestra economía, importancia que viene avalada por dos datos contundentes: 10% del PIB y 9% de la población activa.

La producción de vehículos trae por lo general empleo de calidad y lo hace, además, asentando población en lugares que hoy podrían estar despoblados a través no sólo de sus centros de fabricación, sino también de muchísimas pymes que están integradas en la cadena de valor de esta industria estratégica en nuestro entorno. Hablo de los componentes, de los distribuidores, de los reparadores, etc. El conjunto de todos ellos suma unos 100.000 millones de facturación cada año.

El coche hoy es sinónimo de innovación. Cuando decimos que su futuro pasa por la electrificación, la conectividad o el vehículo autónomo, eso quiere decir que hay mucho trabajo en I+D. Pero no sólo en lo referido al producto. Los procesos para la fabricación son procesos muy innovadores y en eso, España está a la vanguardia. No en vano en el conjunto del sector en España, el 2% de la facturación está dedicado al I+D+i.

En los últimos cinco años se han invertido en las plantas españolas 13.000 millones de euros y se van a construir 20 nuevos modelos electrificados en connivencia con el compromiso por la descarbonización que tenemos.

La industria que represento y a la que he dedicado mi carrera profesional ha llegado hasta aquí gracias a la competitividad alcanzada en la que hemos estado trabajando, especialmente durante los últimos años. Es una carrera de fondo que no tiene meta y que cada día nos enfrenta a nuevos retos. Podemos afirmar que la constancia y el saber hacer de nuestros profesionales es lo que define donde estamos hoy y donde queremos estar mañana.

Y tenemos la responsabilidad de mantener e impulsar este legado. Las ventajas competitivas actuales siguen siendo necesarias y pueden no ser suficientes para enfrentar los retos del nuevo sector que se presenta ante nuestros ojos. Somos los responsables de crear las habilidades y fortalezas competitivas si queremos que nuestras fábricas, que son lo realmente diferencial de nuestro sector, sigan prosperando.

En los últimos años, la industria de la automoción es testigo de un cambio en las tendencias de movilidad sin precedentes, tanto tecnológicamente como desde el punto de vista de los servicios, y se enfrentará a un cambio tecnológico que exige nuevas habilidades. Nos encontramos ante la mayor de sus transformaciones a nivel mundial y en España, no podemos quedarnos de brazos cruzados. En el escenario aparecen nuevos requisitos, como la

Podemos afirmar que la constancia y el saber hacer de nuestros profesionales es lo que define donde estamos hoy y donde queremos estar mañana



## Tenemos que definir más pronto que tarde qué modelo de movilidad queremos para España. Debemos construir un discurso común como sociedad, como país y como reguladores

descarbonización, y nuevas oportunidades, como la digitalización: todo ello va a cambiar la producción y el concepto del vehículo.

Resulta alentador saber que el sector es plenamente consciente de esta necesidad de cambio, y para hacer frente a estos retos presentamos el pasado mes de marzo nuestro plan estratégico Automoción 2020-2040, un plan que tiene por objetivo llevar a la industria y al sector con éxito al nuevo horizonte 2040. Se trata de una herramienta de análisis y de reflexión estratégica que pretende fortalecer la posición competitiva global de la industria de automoción española, encarando una transformación del modelo de negocio que haga frente y convierta en oportunidad los grandes retos de la movilidad del futuro: la electrificación, la conectividad, la conducción autónoma y los nuevos modelos de acceso y uso de los vehículos. Una movilidad que pone al ciudadano en el centro. El plan diseña además una transición justa, sostenible y positiva para todos hacia esta nueva movilidad.

Pero para que este plan nos lleve al puerto correcto, tenemos que definir más pronto que tarde qué modelo de movilidad queremos para España. Debemos construir un discurso común como sociedad, como país y como reguladores, que den una imagen unida. Además, y partiendo de lo anterior, crear un marco normativo inteligente y potenciar las inversiones tecnológicas para impulsar y fortalecer la competitividad y eliminar la incertidumbre. La Hoja de Ruta ha de atender a las demandas sociales, medioambientales y económicas y, por ello, necesita el compromiso de la sociedad, la Administración, la industria y los demás agentes del sector. Es un proyecto para hacer de la transformación del sector un éxito para todo el país, para toda la sociedad y que nos beneficiará a todos.

A partir de aquí, y trabajando desde ya y con horizonte 2025, 2030 y 2040 nuestro plan 2020.-2040 marca diferentes acciones para seguir atrayendo inversiones y nuevos modelos que respondan a las necesidades de la nueva movilidad. Entre otras acciones, será preciso potenciar una base de talento de alto contenido tecnológico, reducir los costes de fabricación y regular, para que sea fácil desplegar, los nuevos servicios del ecosistema español de la movilidad.

Para ello, el Gobierno debe acompañar a la industria para hacer posible este camino, generando un entorno favorable en seis ámbitos de actuación que favorezcan el ecosistema de la industria de la movilidad, con el objetivo de un marco regulatorio inteligente y sostenible: sobre la industria y las empresas, con las personas en el centro y actuando sobre el empleo, sobre el medio ambiente y la energía, sobre la atracción de los nuevos negocios relacionados con la movilidad, sobre la fiscalidad del automóvil y generando un marco de colaboración público-privada ágil.

Conseguir este cambio nos va a costar, sin duda, pero hay un compromiso claro por parte de la industria. Las inversiones necesarias para la transformación del ecosistema de la movilidad ascenderán a 54.000 millones de euros en 10 años, el 0,5% del PIB. De esto, la

industria tiene una parte de responsabilidad, un 25% de esta inversión será en nuestras fábricas, pero no menos importante es la correspondiente a las infraestructuras eléctricas, otro 25% o a las tecnológicas, un 18%.

Es un reto muy importante y costoso. Pero el coste de no hacer nada es aún mayor. Si no transformamos el ecosistema de la movilidad, si no reaccionamos y nos ponemos manos a la obra, se producirán pérdidas estructurales del 2% del PIB anual y cerca de 200.000 puestos de trabajo. Un impacto similar a la crisis de 2011 con una diferencia importante: son impactos sin posibilidad de recuperación, y muy contundentes especialmente en las Comunidades Autónomas con factorías, que perderían de media el 20% de su PIB.

En este nuevo contexto que debemos construir, la industria de la movilidad incrementará su valor en un 50%, desde los 200.000 millones actuales hasta los 310.000 millones en 2040. El nuevo sector crecerá más que el sector tradicional, y ahí surge una enorme oportunidad de negocio si sabemos posicionarnos y no perdemos la oportunidad. Es cierto que el mayor crecimiento corresponde a sectores ajenos a la movilidad tradicional que entran de lleno en ella como son el software o la gestión de datos, entre otros, pero el mayor peso en facturación le sigue correspondiendo a la fabricación de vehículos. A España le corresponde el reto, en esta transformación, de estar fabricando 700.000 vehículos electrificados en 2040 para no perder su cuota de mercado como fabricante en Europa y adaptarse rápidamente a las tendencias de mercado que suponen la descarbonización del parque y la digitalización. Y es aquí donde tenemos que apostar por incrementar la productividad de las fábricas, la formación y la digitalización de la industria 4.0, palancas de transformación para nuestras fábricas y para todo el ecosistema.

El futuro sólo se construye desde la competitividad y en ella estamos implicados todos. Sabemos que la clave del éxito de nuestras fábricas son la competitividad y el diálogo social, desarrollado durante todo este tiempo. En Renault llevamos a nuestras espaldas tres planes industriales que han llenado de trabajo las líneas de nuestras factorías, y todos somos conscientes que esos proyectos han llegado porque hemos demostrado ser los más competitivos y para ello es importante hacer un análisis 360 grados y saber dar su importancia a los factores que tenemos que cuidar para seguir siendo atractivos y competitivos, hablamos de las cuatro «M»: los Materiales, o el producto, las Máquinas, los Métodos o procesos, y la Mano de Obra, las personas. Cuando fabricamos productos de alto valor añadido consigues un posicionamiento que aumenta tus posibilidades de éxito frente a la producción de productos residuales. En este ámbito buscamos productos electrificados, no productos residuales con tecnologías residuales. Si tienes un útil industrial automatizado y moderno, también tienes más posibilidades que con útiles más anticuados. En el ámbito del proceso, la empresa que ha apostado por la digitalización y la industria 4.0 tiene más ventajas que la empresa que funciona con métodos más antiguos, hablamos de la necesidad de avanzar en la digitalización, en línea con la incentivación del I+D proceso que ha sido muy bien recibida. Y si hablamos

de las personas, en este país tenemos la suerte de contar con trabajadores bien formados, y eso es muy importante. Necesitamos personal cualificado, clave para que las multinacionales sigan invirtiendo en nuestro país.

Gracias al trabajo hecho entorno a estos cuatro aspectos fundamentales, las marcas confían en el vehículo hecho en España, por su calidad, por la formación y especialización de nuestros trabajadores y por la alta capacidad de adaptación que poseen nuestras factorías. En los últimos 10 años, hemos logrado recuperar la producción previa a la crisis de 2008, con vehículos de mayor valor añadido, con mejores márgenes. Nuestras fábricas son muy competitivas de Europa y el importante diálogo social logrado en estos años es un altísimo valor añadido también. Tenemos unos agentes sociales flexibles, que entienden la forma de funcionar de la industria del automóvil y sus aspectos. Además, contamos con unas Administraciones que son receptivas y escuchan las demandas. En el entorno actual, más que nunca, su papel es ofrecer un marco homogéneo en el contexto de la Unión europea a la que pertenecemos, asegurando tranquilidad y seguridad jurídica en nuestras Sedes. Las multinacionales están comprometidas con este país, pero hay que hacerles la vida fácil para que entiendan que España ofrece una oportunidad de fabricación de coches, de exportación y venta.

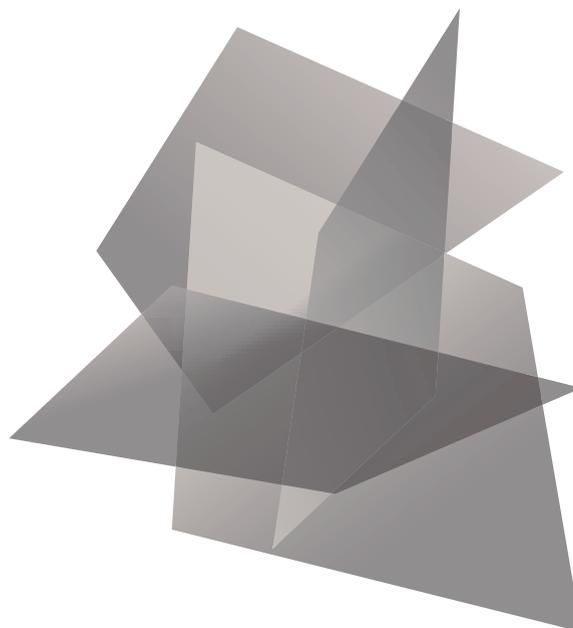
La conjugación de todo esto es positiva, pero debemos seguir siendo competitivos, flexibles y mantener el diálogo social, más que nunca en un entorno de sobrecapacidad industrial en el que todos los centros de decisión están fuera y tenemos que demostrar que es más competitivo hacer un coche en España que en otro país. Todos los factores entran en la balanza, y por poner algunos ejemplos: partimos de una base en el que el coste de la energía en España es un 30% más cara que en una fábrica francesa, y además nos encontramos en el extremo de Europa, y los costes logísticos son más importantes que en países como Francia o Alemania que se encuentran en el centro del consumo. Hay que buscar el equilibrio para que cuando llegue el momento de asignar nuevos modelos se pueda presentar una propuesta que sea la más atractiva.

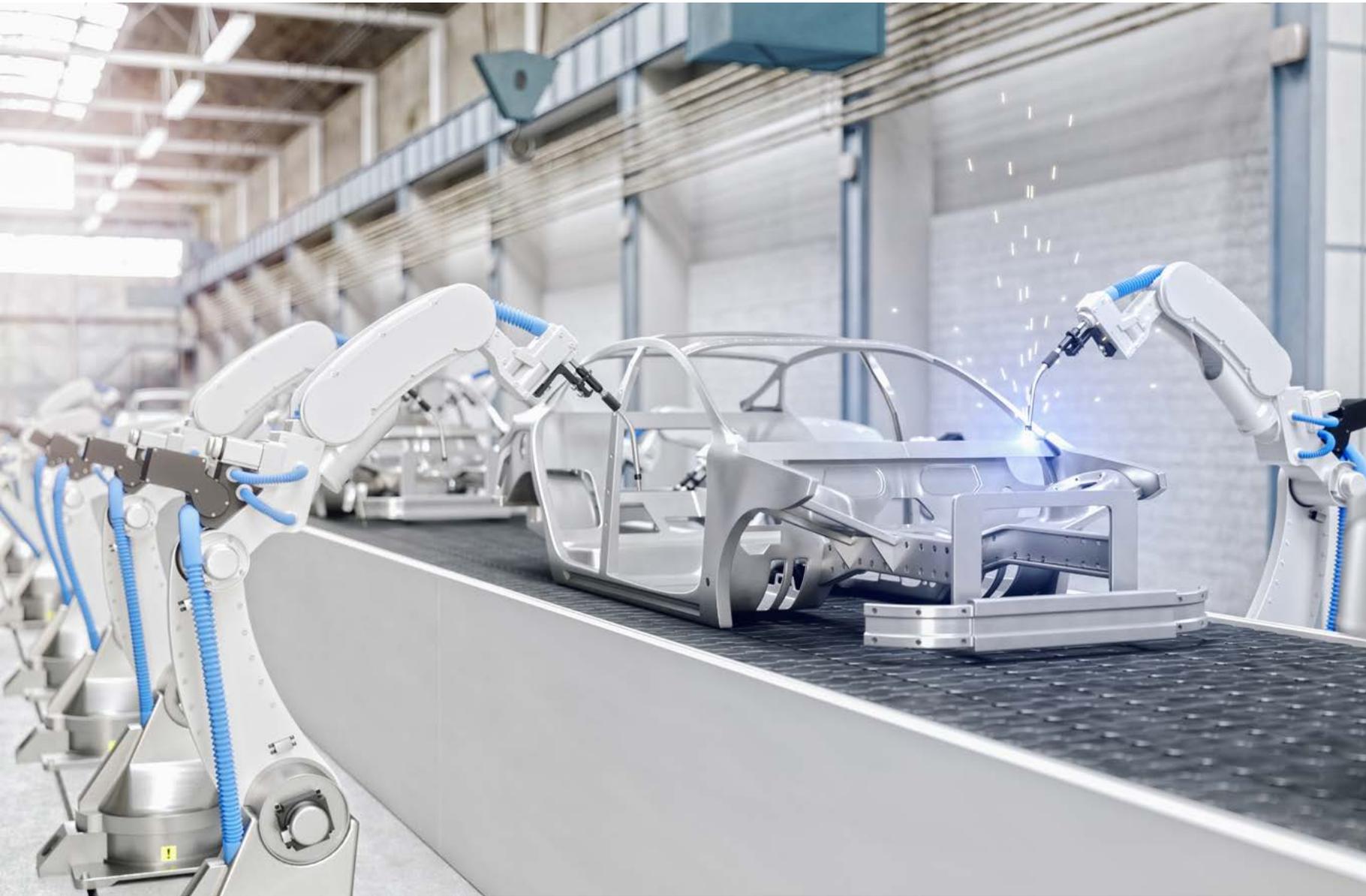
Hoy en día tenemos una buena posición, pero somos vulnerables, como ha puesto de manifiesto la crisis derivada de la pandemia del CoVid19. Aunque seamos realistas, el sector ya venía de un proce-

so de desaceleración en toda Europa en el que están afectando las nuevas normativas sobre descarbonización, con las que Renault está comprometido y cumplirá objetivos, aunque no estamos de acuerdo en la penalización de un proceso en el que se están realizando grandes inversiones con el objetivo de hacer todo lo posible por cumplir unos objetivos que se vuelven cada vez más estrictos y se renuevan casi constantemente en los últimos años. Pero en este declive, llega algo que nadie había vivido, algo que no ocurría desde hacía 100 años, algo que nos ha obligado a tomar decisiones sin precedentes y que ha paralizado el mundo. Hemos pasado una crisis sanitaria muy profunda y estamos a las puertas de una gran crisis económica y social. Según las previsiones parece que la economía caerá por encima del 10%, pero todo dependerá de cómo se comporte el virus en el segundo semestre y el sector de la automoción ha sido uno de los sectores industriales que se ha visto más afectado por el parón provocado por la pandemia. Desde el inicio del estado de alarma hasta finales de abril, nuestras fábricas paralizaron su actividad para garantizar la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Para ello se aplicaron ERTes que nos garantizasen la viabilidad del sector una vez se retomase la actividad. Más que nunca se hace necesario el diálogo con todos los actores necesarios para salir de la crisis. Ahora más que nunca ante la incertidumbre de cómo van a ser los mercados en los que se van a introducir los diferentes productos, se hace necesario incrementar la flexibilidad de los aparatos productivos porque toda la industria produce porque ya hay un cliente detrás que demanda un producto, no producimos por placer para llevar lo que hacemos a un stock. Durante el parón hemos sufrido importantes caídas de producción que conllevarán que este año se dejen de fabricar entorno a los 700.000 vehículos.

Los ERTE han dado un mensaje positivo. España se ha adaptado muy bien a la necesidad de flexibilidad en una situación complicada, y la decisión de prorrogarlos es una muy buena noticia. Los ERTE ayudan, pero hay que usarlos bien, no abusar de ellos. La experiencia de la crisis pasada demuestra que el sector necesita flexibilidad laboral, pero también que se hace un buen uso de ella, de modo responsable. Como ocurre en muchos otros ámbitos de la vida, lo que nos debe preocupar con la flexibilidad laboral no es el uso, sino el abuso. La industria de la automoción cuenta con una historia de relaciones laborales que demuestra la capacidad de

Nuestras fábricas son muy competitivas en Europa y el importante diálogo social logrado en estos años es un altísimo valor añadido también





llegar a acuerdos de lo que todas las partes sacan beneficios. La colaboración con los sindicatos y el diálogo social elevado está siendo una herramienta importante también ahora en esta crisis y hay que reconocer su papel. En nuestro sector el 84% de los ocupados tienen contratos indefinidos y el sector goza de una elevada cualificación profesional. El uso de los ERTES, por otro lado, ha demostrado nuestra voluntad de proteger el empleo adaptándonos a las circunstancias.

Por este uso responsable del que he hablado, cuando ha llegado el momento hemos tenido claro que se debía actuar de forma decidida para impulsar de nuevo el ritmo de producción y recuperar los empleos. De manera progresiva se está retomando la actividad con la reincorporación de los empleados que encuentran al volver una empresa «algo» diferente a la que dejaron. Se ha diseñado un exhaustivo protocolo de seguridad laboral en el que se ha estudiado puesto por puesto, se han implementado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros trabajadores y se han impartido formaciones a todos y cada uno de los empleados en el momento de su reincorporación para asegurar el cumplimiento de todas las medidas llevadas a cabo.

Por otro lado, la crisis del Covid-19 ha afectado gravemente al mercado y a la producción por lo que es necesario emprender lo

antes posible las medidas necesarias para su recuperación. España cuenta con un aparato productivo del automóvil muy potente, con numerosas marcas y proveedores fabricando dentro de nuestras fronteras. Pero además España cuenta con una red de distribución que tiene más de 160.000 trabajadores directos. Por eso hay que lograr un acuerdo con los diferentes gobiernos, no sólo España, pues los países que no tienen producción asociada, sí que tienen una distribución igual de potente para poder reactivar el sector del automóvil. Si este sector se reactiva es seguro que los demás también lo harán por el efecto tractor que tiene.

El plan de impulso a la cadena de valor de la industria del automóvil es una prueba de que se ha escuchado al sector y favorece la credibilidad de la industria española de automoción, si bien es necesaria una mayor agilidad en la puesta en marcha de todo lo acordado.

Es momento de seguir trabajando todos juntos, bajo un compromiso-país que posicione a España como un referente industrial y un polo de atracción de inversión y proyectos, gracias a su competitividad, su diálogo social y su buena relación con las Administraciones. Para conseguirlo hay que actuar con rapidez y acelerar para no quedarnos descolgados. •

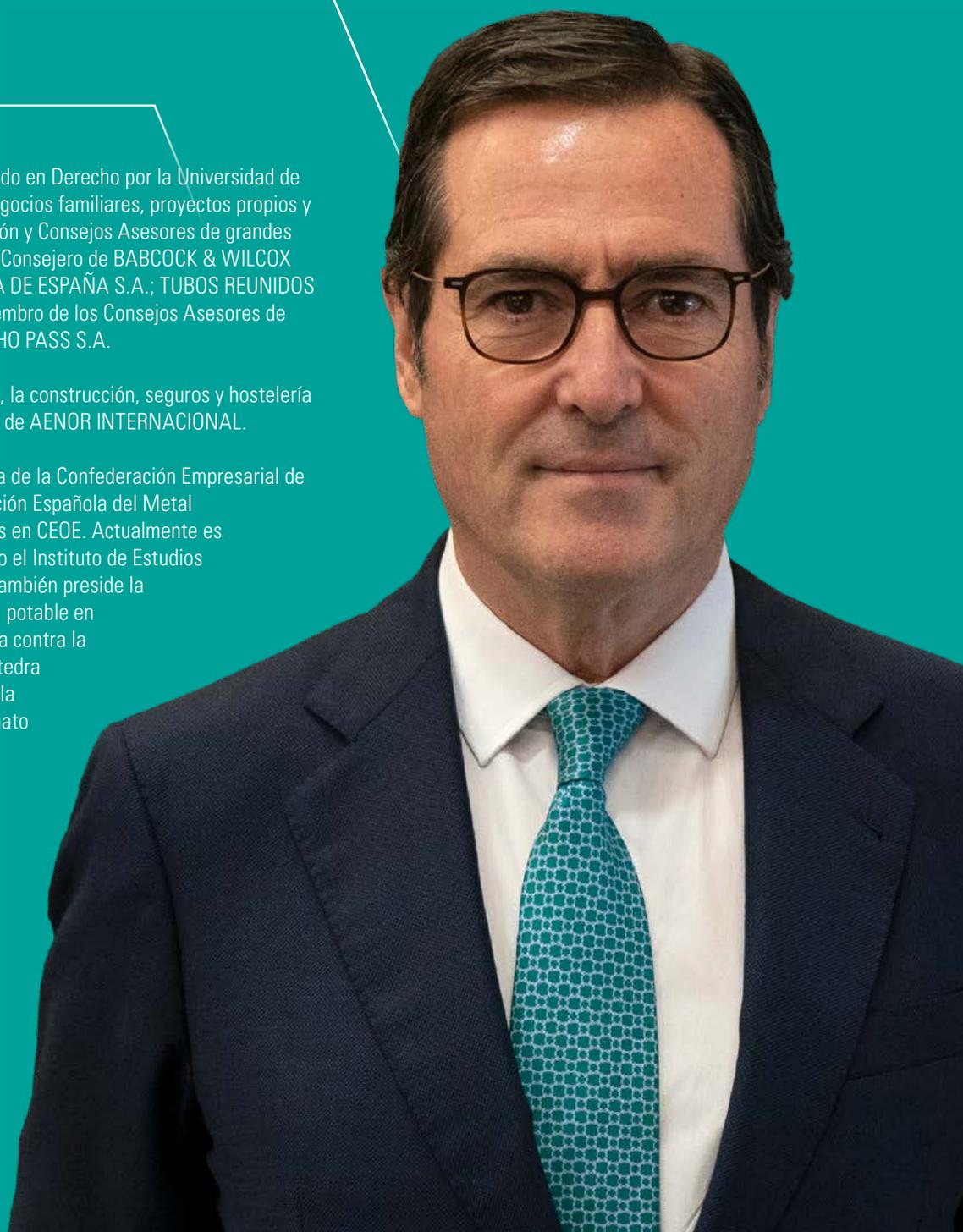
# A N T O N I O G A R A M E N D I L E C A N D A



Empresario nacido en Getxo, en 1958. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Desde muy joven ha participado en negocios familiares, proyectos propios y ha formado parte de Consejos de Administración y Consejos Asesores de grandes empresas. Entre muchos otros cargos, ha sido Consejero de BABCOCK & WILCOX ESPAÑOLA S.A.; ALBURA S.A.; RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.; TUBOS REUNIDOS S.A.; vicepresidente de ENTEL IBAI S.A.; y miembro de los Consejos Asesores de ALTA GESTIÓN S.A., SODEXHO S.A. y SODEXHO PASS S.A.

Su actividad empresarial se centra en el metal, la construcción, seguros y hostelería y es Consejero independiente y vicepresidente de AENOR INTERNACIONAL.

Además, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial de Vizcaya (CEBEK) y presidente de la Confederación Española del Metal (CONFEMETAL), así como de varias comisiones en CEOE. Actualmente es presidente de CEOE; vocal en organismos como el Instituto de Estudios Económicos (IEE) o la Fundación FORMETAL. También preside la Fundación AYUDARE, para abrir pozos de agua potable en Etiopía, y es miembro de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD); del Consejo Asesor de Cátedra Internacional de Mujer, Empresa y Deporte de la Universidad UCAM; y ha pertenecido al Patronato del Museo Guggenheim.



# CONFIANZA, DIÁLOGO Y MÁS EUROPA PARA AFRONTAR LA RECUPERACIÓN

Antonio Garamendi. Presidente de CEOE.

**M**uchas cosas han cambiado desde que un virus que hoy nos hemos acostumbrado a denominar COVID-19 irrumpiera en nuestra vida; la doméstica, la laboral y la económica, fundamentalmente. Su impacto ya se puede medir en términos macroeconómicos, no así el esfuerzo intangible que nos ha exigido como sociedad desde el punto de vista de la limitación de nuestros movimientos, la solidaridad y la adecuación a nuevos hábitos. Ya no nos saludamos como antes y han cambiado hasta las distancias que debemos respetar en los centros de trabajo, por poner solo unos ejemplos.

Nadie podía pensar hace un año tan solo que nos encontraríamos en esta situación y mucho menos que nuestros planteamientos y planificaciones económicas —los presupuestos familiares o los del Estado— tendrían que ponerse al servicio de algo como la defensa frente a una enfermedad que se ha extendido por todo el planeta. Está siendo un esfuerzo colectivo ante un enemigo común.

Sin embargo, ahora que hemos tenido, lamentablemente, el tiempo necesario para poder contemplar las posibles soluciones, las formas de controlar los daños y, como no, también las oportunidades para salir de esta crisis fortalecidos; ahora también nos damos cuenta de que lo que no han cambiado son los pilares sobre los que debemos construir esta nueva etapa de reconstrucción o reactivación.

Si algo quedó claro durante la Cumbre Empresarial que celebró entre los días 15 y 26 del pasado mes de junio en la CEOE, bajo el título 'Empresas españolas liderando el futuro', es que no podremos salir de esta crisis sin el motor económico que suponen las empresas, sin cuidar nuestro tejido productivo, ni tampoco de forma aislada como país.

También quedó patente que nada de esto será posible sin el concurso de tres elementos fundamentales: la confianza, el diálogo y más Europa. Como ha sido hasta ahora.

En primer lugar, las empresas, por su naturaleza, además de necesitar tener garantizada la liquidez que requiere su actividad en el día a día —para lo que el Gobierno ha dispuesto en circulación avales públicos por un importe sin precedentes—, también necesitan desenvolverse en un clima de confianza y predictibilidad.

Lo que no han cambiado son los pilares sobre los que debemos construir esta nueva etapa de reconstrucción o reactivación

Cuando hablamos de confianza, no solo lo hacemos, es necesario reiterar, desde el punto de vista del optimismo. Hay que confiar en que de esta crisis también se saldrá —los empresarios pensamos en positivo por naturaleza y así lo creemos—, pero sobre todo, para ello hay que tener la tranquilidad de que, en el ámbito de lo que depende de cada uno de nosotros, no habrá sobresaltos.

Por eso, en este caso, confianza y predictibilidad van de la mano. Es difícil que una empresa emprenda nuevas inversiones, que son la base fundamental del despegue de la actividad económica, si desconfía de cuál será el escenario económico o político futuro, dentro y fuera del país en el que opera.

Cuando hablamos de inversiones hacemos referencia también a la apuesta por el empleo y por la ampliación de las plantillas o la mejora de las condiciones de sus trabajadores. Porque siendo el empleo, por lo general, el grueso de los gastos de un negocio, desde el mundo de la empresa se insiste en que más que de gasto ha de hablarse de inversión y por ello, se hace tanto hincapié en el impulso de la formación profesional para el empleo o la formación continua.

Por tanto, sin un clima de confianza difícilmente se podrá hablar de un entorno propicio para la reactivación económica y el empleo; si no hay predictibilidad y garantías de que la política económica del país remarará a favor de la actividad de las empresas, será complejo conjurar las actuales previsiones macroeconómicas, que hablan de caídas del PIB superiores a los dos dígitos en 2020 y una vuelta a los niveles de renta previos a la crisis solo una vez superado 2021.

A la pregunta de qué es necesario para que se produzca ese clima de confianza, las respuestas son varias. De una parte, contar con una visión de medio y largo plazo para depositar los esfuerzos presupuestarios —una vez se haya salvado la situación en el corto plazo— en aquellas inversiones necesarias para hacer de España un país competitivo, resiliente y sostenible.

Sin embargo, quizás la muestra más clara de lo que debería ser la confianza para los inversores y las empresas sea la seguridad jurídica. Se trata de un concepto clave para generar credibilidad y atraer y retener esas inversiones de las que hablamos.



Es difícil que una empresa emprenda nuevas inversiones, que son la base fundamental del despegue de la actividad económica, si desconfía de cuál será el escenario económico o político futuro

Garantizar una estabilidad normativa, evitando virajes bruscos en la legislación o la vuelta atrás en las reformas estructurales que han demostrado ser útiles y que han dado buenos resultados en los últimos años, hasta la llegada de esta crisis del COVID-19, es otra expresión de lo que consideramos seguridad jurídica.

Esto nos lleva directamente a hablar de la necesidad de garantizar que las iniciativas legislativas que se adoptan para enfocar la reconstrucción, y en general en el marco de la política económica, cuenten con el necesario consenso y el diálogo social.

No hay o no debería haber otro camino que llegar a acuerdos que nos ayuden a salir de la crisis. Quizás en estos días estemos infravalorando la importancia de los acuerdos o de los pactos, y puede que los estemos viendo más como concesiones en términos de ganadores y perdedores, que como logros colectivos.

Lo cierto es que el diálogo social ha demostrado ser la mejor infraestructura de este país. Ha garantizado una paz social fundamental en los tiempos de crisis, y nos ha permitido adoptar reformas vitales para la economía española. Es por ello que sería un error dejar de lado este ámbito de debate y menospreciar los acuerdos que se puedan alcanzar.

¿Pero diálogo para qué? Es otra de las grandes preguntas que cabe hacerse. Para concretar aún más, el diálogo va a ser más necesario que nunca no solo para que, como decíamos, los cambios legislativos se realicen de cara y no para sorpresa de las empresas y los trabajadores en aras de la confianza.

En CEOE consideramos que ese diálogo debe propiciar, desde un enfoque más proactivo y no tanto defensivo, un clima favorable a la empresa, a la generación de actividad y empleo. De nuevo, esto no es otra cosa que, además de fomentar un entorno predecible para poder planificar las actividades empresariales sin miedo, contar con un entramado legal y administrativo que facilite dicha planificación.

Quiero hacer un alto en este camino para recordar que la medida más importante a la hora de afrontar la crisis económica sobrevenida por el COVID-19 ha sido la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), que ha sido una forma de hibernar el empleo en lugar de destruirlo.

Desde el inicio de la crisis del COVID-19, los interlocutores sociales y el Gobierno estuvimos de acuerdo en que esta fórmula era la mejor para ganar tiempo y lograr que, de vuelta a la normalidad (no a la nueva normalidad), todos los empleos posibles volvieran al punto inicial, y que las cifras de desempleo no se dispararan. Es decir, conseguir que la crisis se convirtiera en un mero coste de oportunidad.

En resumen, todos los agentes implicados hemos convenido que la clave para evitar un mayor perjuicio por la economía y para la sociedad en general, ha sido la aplicación de medidas de flexibilidad laboral.

En tanto que los ERTEs han servido para salvaguardar empleo, en último término también han logrado salvar gran parte del tejido productivo, pese a que no se ha podido evitar el cierre de cientos de miles de empresas. Esto quiere decir que, salvando el enfoque puramente financiero y de gastos e ingresos de las empresas, esta medida ha sido un facilitador para la planificación de las empresas.



## La situación económica actual demanda abrir un gran marco de colaboración público privada para mejorar la eficiencia y calidad en la prestación de servicios públicos



Los ERTes, a través del diálogo, han generado confianza en las empresas.

Sin embargo, no podemos caer en el error de pensar en el diálogo social solo como foro en el que dilucidar lo que debe hacerse en el corto plazo. Es cierto que ha sido fundamental, haciendo repaso a lo dicho hasta ahora, el desarrollo de un intenso proceso de diálogo social en materia de ERTes para lograr extenderlos hasta el 30 de septiembre, a la espera de ver cómo evoluciona la situación.

Pero, como se comentaba anteriormente, es vital aprovechar esta crisis para sentar las bases de un modelo de crecimiento más competitivo, sostenible e inclusivo. Esto quiere decir que a través del diálogo es necesario pensar qué economía queremos tener en el medio y largo plazo.

Por ello, también procede poner en valor este diálogo como herramienta para, a partir de un diagnóstico común, dar los pasos adecuados para ganar el futuro.

A juicio de los empresarios, la dirección es clara. En primer lugar, la situación económica actual demanda abrir un gran marco de colaboración público privada para mejorar la eficiencia y calidad en la prestación de servicios públicos tanto en el ámbito de la educación y la sanidad como en el de las infraestructuras.

Si hay una lección que podemos sacar de esta crisis del COVID-19 es que tenemos que trabajar juntos, codo con codo, porque todos unidos, lo público y lo privado, somos más. Parece una obviedad, pero no lo es si se piensa que, más allá de las dramáticas cifras de contagios y fallecimientos por el virus, alrededor del 20% de los pacientes tratados en hospitales por esta causa fueron atendidos en centros privados.

No solo eso. La labor de las empresas en el aprovisionamiento de material sanitario, en muchos casos desde su versión más solidaria, ha sido crucial para evitar mayores desabastecimientos. Como muestra, la Fundación CEOE puso en marcha un proyecto al inicio de la pandemia denominado 'Empresas que Ayudan' para canalizar la ayuda de empresas hasta sus beneficiarios en colaboración con el tercer sector.

Por tanto, debemos interiorizar que sector público y privado no son rivales, sino que deben ser aliados.

Otra de las palancas fundamentales para lograr encauzar la economía española en esta reconstrucción hacia una senda más sostenida y sostenible es la industria. Actualmente, el peso de este sector apenas supera el 14% del PIB, lejos del 20% que deberíamos tener en el frontispicio de nuestros objetivos económicos como país.

Su impulso va a ser imprescindible para generar actividad con mayor valor añadido y, en esta línea, un empleo de calidad y en mejores condiciones. No es una mera declaración de intenciones. En España, aquellos territorios que superan este porcentaje son los que también presentan menores niveles de desempleo y no solo eso. Una economía con un sector industrial más potente es también una economía que cuenta con empresas más grandes, más competitivas, con mayor vocación internacional y más innovadoras. Por tanto, todo ello redundará no solo en más empleo, sino también en puestos de trabajo de mayor calidad.

Unida a la industria, otro importante vector económico por el que debemos apostar es por la innovación y la digitalización. Nadie pone en duda que el confinamiento y la necesidad de sostener la actividad en las empresas y administraciones por la vía telemática, ha supuesto un acelerador en la implantación de nuevas tecnologías de la comunicación, entre otras.

Es el momento de hacer de esa necesidad una virtud y dar continuidad a este proceso. De esa manera, lograremos dar el salto de productividad que no se ha producido en los últimos años, para ganar competitividad, para incrementar los niveles de bienestar.

Por otro lado, y para cerrar el capítulo de cuestiones que deberían estar, a juicio de los empresarios, en la agenda del diálogo social de Gobierno e interlocutores sociales para los próximos meses, trimestres o años, cabe tener en cuenta la necesaria igualdad de oportunidades y la aspiración de lograr un crecimiento inclusivo a través de la formación y la educación.

La prioridad son las personas y el empleo, la mejor fórmula de inclusión social. Esa es la forma más eficiente y la más adecuada desde el punto de vista social para no dejar a nadie atrás en la recuperación y en las transformaciones energéticas y digitales.

No obstante, cabe puntualizar que para que los esfuerzos que se dediquen en materia de educación y formación lleguen a buen puerto, es necesario que estas actividades estén vinculadas en la medida de lo posible a la realidad empresarial. Son las empresas las que mejor conocen los perfiles y las cualificaciones que se requieren en cada momento.

Por último, como se señalaba al principio, es necesario entender que la salida de la crisis solo será posible desde la unión de fuerzas en el seno de la UE. No nos podemos engañar. Ningún país europeo podrá salir de esta crisis de forma individual y, de la misma forma que la pertenencia de España a la UE nos ha permitido alcanzar las mayores cotas de bienestar, estabilidad y progreso en las últimas décadas, será una condición necesaria en la recuperación.

Hasta el momento, la respuesta europea a la pandemia ha sido rápida y contundente. Ahora solo hace falta que los 140.000 millones de euros que aún estamos pendientes de recibir de los fondos de ayuda europeos se canalicen con eficacia y se trasladen al ámbito económico con los mayores criterios de eficiencia.

Con todo, nada de esto será posible si España no ofrece una correspondencia en forma de responsabilidad. Desde CEOE venimos insistiendo desde el inicio de la crisis en este concepto. Creemos de verdad que cada uno, desde su ámbito de actuación, debe cumplir con su responsabilidad consciente de su papel dentro del bien común.

En el caso de las empresas, ya lo hemos dicho, hemos asumido (ya lo teníamos asumido desde hace mucho tiempo, y tal vez ahora esto se ha hecho más evidente) nuestro rol como motor económico y generador de actividad y empleo. Los empresarios, en este sentido, acogen con responsabilidad su obligación como locomotora de la economía en estos tiempos de crisis.

Del mismo modo, España como Estado y como una de las principales economías europeas no puede fallar en su responsabilidad de mantener en la medida de lo posible la estabilidad presupuestaria.

Como ya se ha planteado, la Comisión Europea es plenamente consciente de que la situación, en el corto plazo, requiere de un esfuerzo presupuestario, desde el punto de vista del gasto público sin precedentes, para sostener a las empresas y a las plantillas y, también a aquellos que se encuentran sin empleo. De ahí no solo los fondos europeos destinados, sino también que se haya respaldado la respuesta presupuestaria canalizada a través de los mencionados ERTes o los avales públicos.

Sin embargo, una vez realizado ese esfuerzo inicial, hay que ser plenamente conscientes de que será necesario volver a la senda de consolidación fiscal. Para ello, de un lado no solo habría que vigilar que el gasto público siga criterios de eficiencia, lo que incluiría tratar de que, más allá de los necesarios sustentos a rentas empresariales y familiares, todo gasto tenga en la medida de lo posible una naturaleza productiva; también haría falta una revisión general de la eficiencia del gasto público estructural en todos los niveles de la Administración.

Por el lado de los ingresos, es inevitable que la necesidad de reajustar las cuentas públicas nos conduzca de nuevo al debate sobre la necesidad o no de subir impuestos. La respuesta más contundente y adecuada es que subirlos sería un error, porque esto no haría sino lastrar aún más la actividad de las empresas.

Como alternativa, la forma de aumentar los ingresos hay que buscarla en la raíz de la propia economía, en la actividad económica. Enfocar las energías legislativas y los esfuerzos presupuestarios en promover el crecimiento económico, como vehículo de una ulterior mayor recaudación por impuestos o consumo (además de menores gastos en otras partidas, como el desempleo), es la mejor forma de evitar subidas impositivas en momentos de crisis económica.

Otros países europeos están aplicando rebajas de impuestos para salir de la crisis y ese es el ejemplo a seguir.

Para concluir, no podemos perder la oportunidad de utilizar esta crisis sanitaria, económica y social para volver a construir alianzas, a impulsar una nueva unidad de acción y admitir que, en cualquier coyuntura, pero mucho más en un momento tan complicado como este, los planteamientos ideológicos son uno obstáculo en la consecución de nuestros objetivos.

Pensemos en qué economía y qué país queremos construir, para poder mirar atrás algún día y ver con satisfacción que, lo que realmente cambió fue nuestra forma de producir, crear actividad y generar empleo en favor de un salto cualitativo en nuestros niveles de bienestar. Y todo ello desde la confianza, el diálogo y más Europa. •

# JOSÉ MIGUEL GUERRERO SEDANO

José Miguel Guerrero Sedano nació en León en 1956 y es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, PDG por el IESE y Mediador Mercantil. Empresario del Sector del Metal desde hace 34 años, es Presidente de CONFEMETAL y vicepresidente de CEPYME, también ha sido presidente de AECIM y vicepresidente de CEIM.



# LA INDUSTRIA, FACTOR DE PROGRESO Y VETEBRACIÓN SOCIAL

José Miguel Guerrero Sedano. Presidente de CONFEMETAL.

**P**or diferentes que sean los criterios de análisis que se utilicen para hacer la lista, no es difícil coincidir en que algunos de los países de nuestro entorno europeo que podrían ponerse como ejemplo de un más amplio bienestar y nivel de progreso humano son Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y Suiza.

En la lista podrían incluirse otros, pero nadie excluiría a ninguno de los citados atendiendo a lo reducido de sus brechas de desigualdad, la amplitud de sus sistemas de protección social y la extensión de su estado del bienestar.

Todos ellos comparten también un elevado nivel científico e innovador, altos estándares de calidad en sus productos, asociados a una potente y global marca país gran capacidad tecnológica y un capital humano altamente cualificado.

En todos ellos la tasa de desempleo se sitúa por debajo de la mitad de la que registramos en España. El 3,5 por ciento en Alemania, 4,8 en Austria, 4,6 en Dinamarca, 6,6 en Finlandia, 3,6 en Noruega, 7,9 en Suecia y el 4,1 por ciento en Suiza.

En paralelo, los siete países ofrecen, según los datos del Banco Mundial de 2018, elevados porcentajes de valor añadido bruto industrial sobre el PIB. El 27,5 en Alemania, el 25,7 en Austria, el 21,2 en Dinamarca, el 24,5 en Finlandia, el 32 en Noruega, el 22,6 en Suecia y el 25 por ciento en Suiza.

Ante esos datos, no parece arriesgado colegir que la existencia de una actividad industrial fuerte y consolidada tenga alguna responsabilidad en las bajas tasas de paro y el elevado nivel de vida y bienestar de esos países.

Pero alguien que conozca realmente la esencia de la actividad industrial puede y debe permitirse ir más allá para afirmar que es la Industria la principal responsable de la envidiable situación en esos países.

La Industria ha sido el embrión de la actual potencia económica europea y debe seguir siéndolo en futuro. Sin ella no pueden entenderse la historia, la cultura, la economía y el desarrollo social del continente. En España, a escala de su desarrollo y su particular proceso de industrialización, ocurre lo mismo.

Los países emergentes lo son desde que entendieron que la Industria es el sector de actividad imprescindible para impulsar el desarrollo económico y social, y actuaron en consecuencia, favoreciendo y fomentando la actividad industrial.

Esos países se han incorporado a la competencia en los mercados globales cuando han asumido que el mayor grado de desarrollo

No parece arriesgado colegir la existencia de una actividad industrial fuerte y consolidada tenga alguna responsabilidad en las bajas tasas de paro y el elevado nivel de vida y bienestar

humano se da en los países más innovadores, los que cuentan con trabajadores y técnicos mejor formados y los más competitivos tecnológicamente, y se han propuesto conseguirlo.

La matriz productiva de un país es la clave de su progreso y de su bienestar y cuando se sitúa en el sector manufacturero, las posibilidades de éxito son mucho mayores. Una Industria potente asegura una sociedad pujante, actúa como tractora del resto de sectores económicos y permite aumentar la sostenibilidad medioambiental.

Probablemente, no haya mejor forma de reforzar una economía, ampliar los derechos sociales, responder a los retos globales de sostenibilidad y asegurar el estado del bienestar que favoreciendo la actividad industrial.

De la industria manufacturera dependen para su suministro, sectores como energético, las industrias del sector primario, el transporte —el automóvil, el aeronáutico y el ferroviario— las redes de telecomunicaciones, la agricultura, la ganadería, los bienes de consumo duraderos, la minería y todos los sectores de proceso incluyendo químico, petroquímico y del plástico.

La industria proporciona equipamiento y la tecnología para los sectores sanitarios, sociales y del ocio, los sectores del agua, las aguas residuales y el tratamiento del aire, el sector turístico o el comercio.

La Industria es una parte sustancial del tejido económico eje del resto de actividades y, probablemente, la más sólida frente a crisis, y ciclos. Pero también es un sector muy sensible a las condiciones macro de su entorno, alejado de los movimientos especulativos y muy intensivo en inversión.

Con esas premisas, todo lo que se haga a favor de mejorar las condiciones en las que se desarrolla la actividad de la Industria tendrá su correlato en un futuro más sostenible y en un mayor nivel de bienestar.

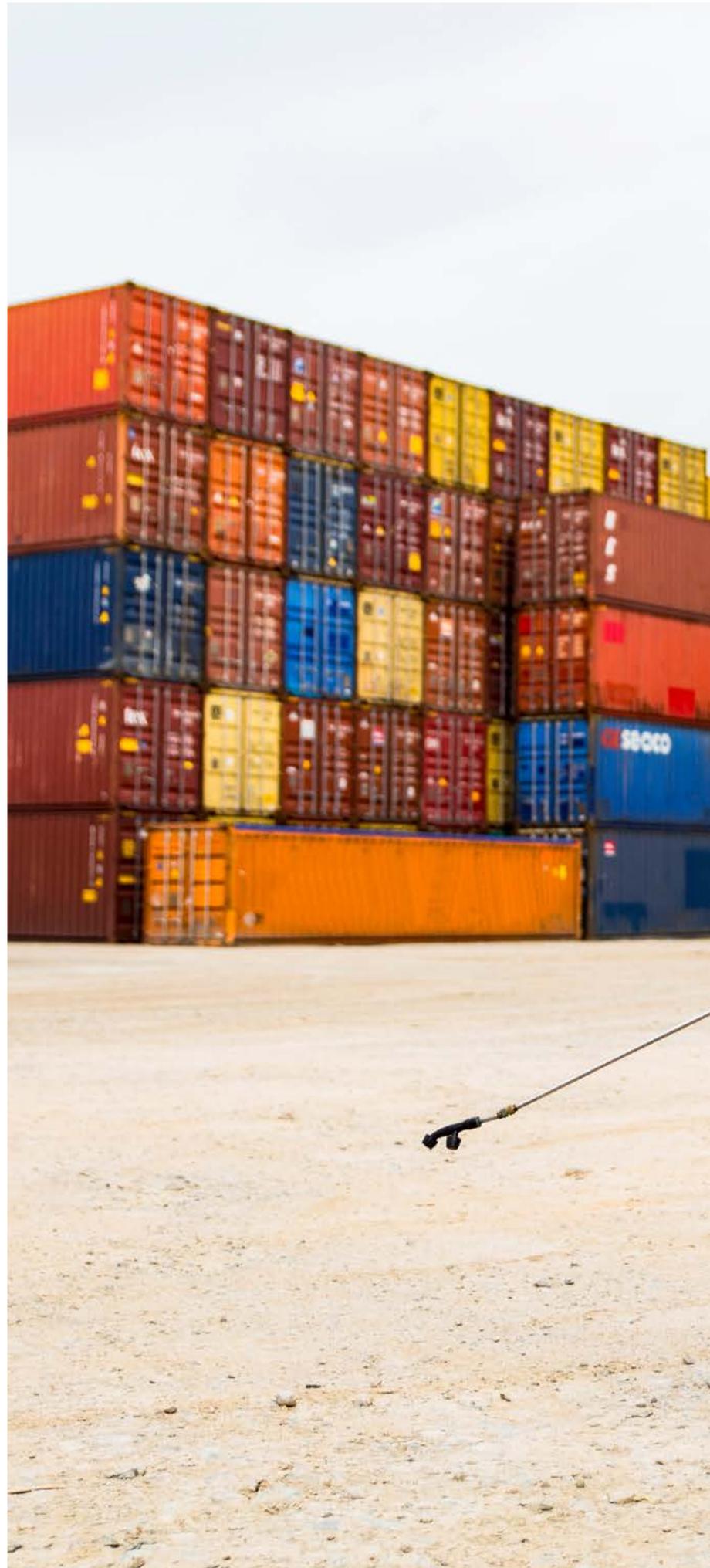
### El contexto actual

El actual contexto económico está marcado por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus y por sus consecuencias económicas que según las previsiones oscilarán entre la calificación de graves y la de muy graves.

Al análisis de ese escenario post-Covid o, en el peor de los casos al del que resultará de la convivencia con el virus y sus efectos durante un largo periodo de tiempo, no dejan de sumarse opiniones y previsiones negativas.

Pero, para abordar el diagnóstico industrial de esta situación, es necesario subrayar que la pandemia no es el problema fundamental que sufre la Industria en España, por más que los dramáticos acontecimientos de los últimos meses hayan puesto de relieve algunas de sus debilidades, como la falta de una reserva industrial estratégica, consecuencia de las deslocalizaciones de décadas pasadas.

La pandemia es un problema añadido que ha agravado algunos de los síntomas que la Industria venía sufriendo. El mayor problema de la Industria está en el propio modelo de crecimiento del país, basado en sectores que incorporan en su producción menos tecno-





## La pandemia no es el problema fundamental que sufre la Industria en España, por más que los dramáticos acontecimientos de los últimos meses hayan puesto de relieve algunas de sus debilidades

logía y menos formación, y un mayor componente especulativo. Es decir, lo contrario de lo que caracteriza la actividad industrial.

Es cierto que la crisis sanitaria ha puesto a otros sectores en situaciones todavía más graves de deterioro, pero por ello y por el efecto tractor que puede tener para superar esas consecuencias es imprescindible prestar atención a la Industria.

En el momento actual, se ha de situar el centro del debate económico en conceptos como la tecnología, la innovación, la formación, la estabilidad en el empleo, la productividad y la competitividad.

Y todos ellos, en conjunto, conducen inevitablemente a la Industria, que no tiene capacidad de ofrecer grandes retornos a la inversión a corto plazo como otras actividades, pero a cambio es más sólida, más segura y, sobre todo, tiene mayor capacidad de generar en su entorno un tejido económico y social, un ecosistema productivo, sobre el que se desarrollan mejor el resto de los sectores.

En la medida en la que el Sector Industrial crezca e incremente su participación en el PIB, generará demanda y actividad en el resto de sectores. Un incremento en el valor de la producción de un euro en la demanda final del sector manufacturero conlleva un incremento de valor en el conjunto de la economía de 3,11 euros.

Pero esa función de catalizador de la Industria no se queda en lo estrictamente económico y tiene su correlato en la calidad del empleo, la vertebración social y la distribución de la riqueza.

### Recuperar la industria

Nadie puede dudar de que cambiar la actual tendencia declinante de nuestra economía va a exigir un esfuerzo histórico, en formación, en I+D+i, en materia fiscal y de financiación, en cuestiones laborales, medioambientales, energéticas, de coordinación y desregulación administrativa, entre otras.

Pero el mayor desafío al que nos enfrentamos está en crear un clima favorable a la Industria que permita romper el círculo vicioso al que se viene viendo abocada, de menor peso en la economía, mala imagen y menor interés social y político.

La industria va a ser, más que nunca, la clave del futuro crecimiento de la economía y el bienestar de la sociedad, que van a depender muy particularmente de las medidas que se tomen y de los esfuerzos que se hagan para mejorar su competitividad.

Pero las mejoras de ese decisivo indicador de la competitividad -capacidad de competir con productos y servicios en mercados abiertos y globales- no serán nunca producto de discursos vacuos, sino de medidas efectivas que permitan que nuestro país sea un lugar atractivo para la inversión industrial.

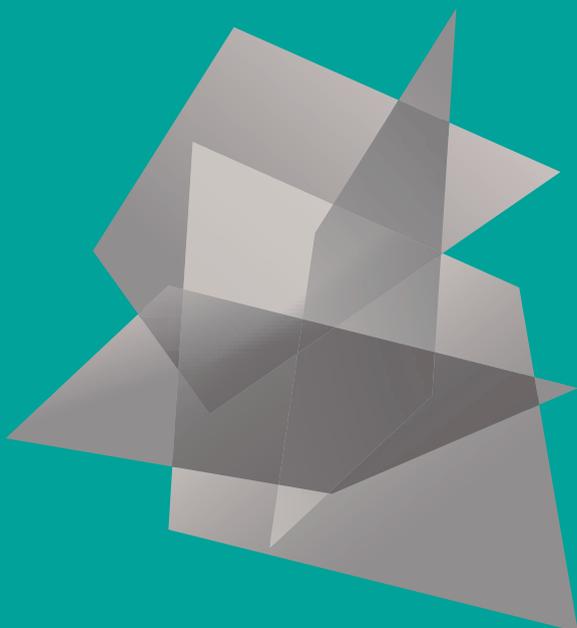
En este escenario, coyuntural y estructural, la política industrial ha de ser un instrumento decisivo para apoyar la innovación y el conocimiento, impulsar la inversión en infraestructuras y asegurar un desarrollo medioambientalmente sostenible y un suministro de energía fiable y a precios competitivos.

En paralelo, otras políticas transversales, no directamente industriales pero sí determinantes para su desarrollo, como la laboral, la educativa, la fiscal, o la de competencia, entre otras, habrán de considerar prioritarias las necesidades de la Industria si se atiende a su capacidad de generar actividad, desarrollo y bienestar en el conjunto de la economía.

Sin caer en medidas intervencionistas selectivas que, a medio y largo plazo, entorpecen y limitan la actividad de la Industria y el funcionamiento de los mercados, cuestiones como las normas de competencia, la regulación de las inversiones y los derechos de propiedad intelectual son también aspectos clave para incentivar o no la atracción de capitales.

En este sentido, es de capital importancia defender la unidad de mercado para el adecuado funcionamiento de las actividades empresariales.

La Industria cuyos grandes proyectos y planes de inversión tienen un efecto multiplicador en el tejido económico y requieren de un largo periodo de maduración y ejecución, necesita una legislación estable en todos los ámbitos y muy especialmente en lo que afecta a las cuestiones medioambientales cuya normativa ha crecido exponencialmente en los últimos años provocando solapamientos e incluso contradicciones entre lo legislado por las distintas administraciones desde la europea a la local.



### Actuaciones imprescindibles

Definido este marco general, es necesario decir que no hay recetas milagrosas para reforzar el peso de la Industria, pero sí hay áreas fundamentales en las que las mejoras son esenciales y en las que se juega el futuro de la Industria en particular y de la economía española en general.

La de la investigación y la innovación, es probablemente la primera de ellas en una economía global, en la que los ciclos de vida de los productos se acortan cada día exigiendo otros más innovadores que los sustituyan y se adapten a las nuevas exigencias de los mercados.

Para ello no basta con la investigación y el desarrollo, sino que es necesario garantizar que la investigación se transforme en innovación, en productos y servicios innovadores que, en última instancia, a su vez se traduzcan en mayor grado de competitividad.

Es necesario acortar la distancia entre la comunidad investigadora y el mercado. Los programas de I+D no se deben guiar solo o principalmente por motivaciones científicas con una perspectiva a largo plazo, como se ha venido haciendo tradicionalmente, sino que se debe también reservar una cierta financiación para la investigación aplicada, la cual lleva a productos y servicios innovadores capaces de ofrecer un retorno de rentabilidad aplicable nuevo en I+D+i.

Se debe hacer más para explotar los resultados de la investigación y para facilitar su incorporación, muy especialmente por parte de las pequeñas y medianas empresas, muy habitualmente alejadas de la innovación, e incluso en muchos casos aisladas.

El impulso a los parques científicos y tecnológicos, sobre todo en zonas donde las industrias especializadas del sector se concentran y donde hay una base de recursos humanos cualificados, serviría para facilitar la aplicación de los resultados de la investigación y el desarrollo de redes dinámicas que fomenten la creación de empresas y estimulen la innovación.

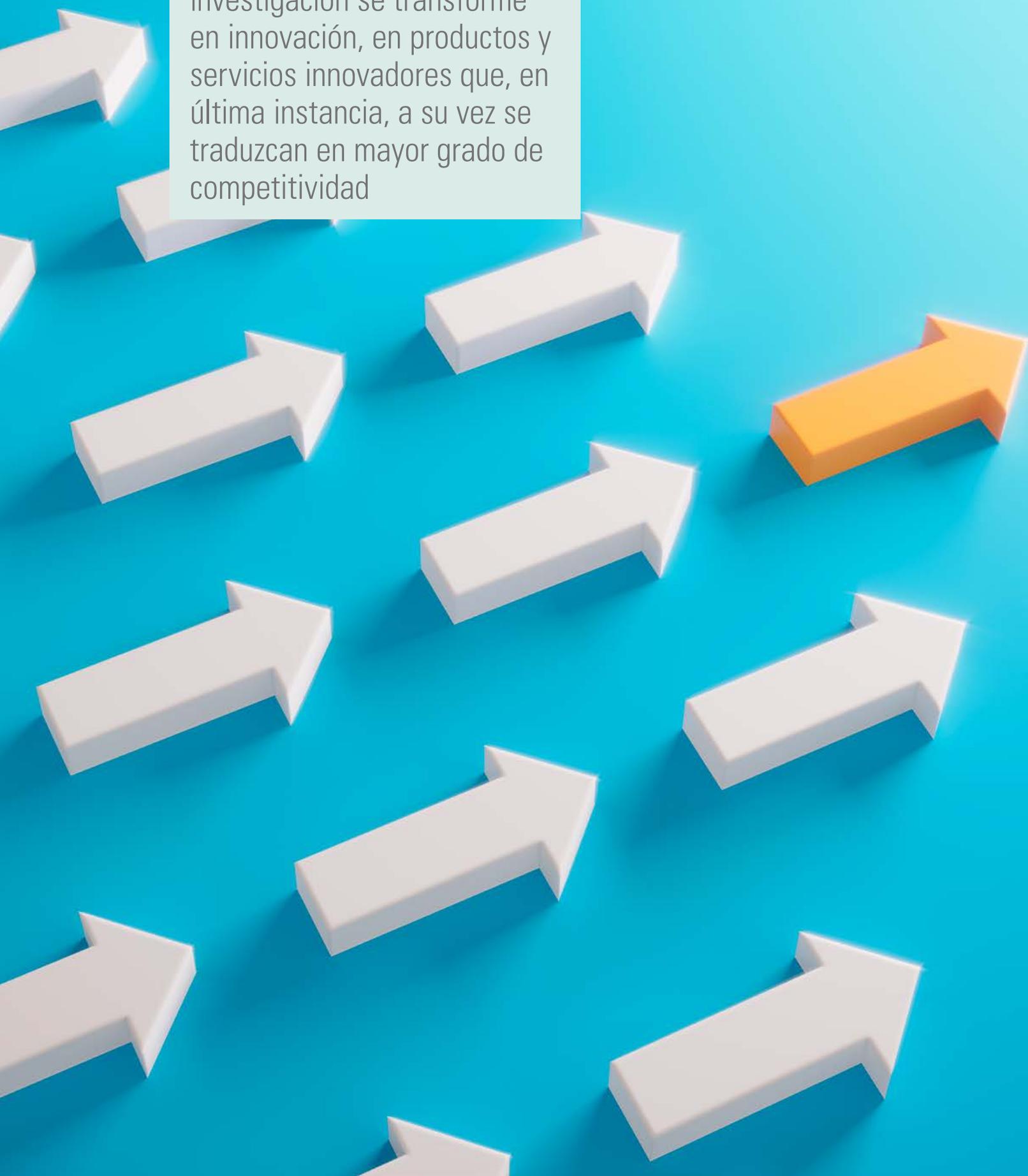
Es realmente necesario que los proyectos públicos, a gran escala, fomenten la investigación y la innovación a lo largo de toda la cadena industrial. Pero no es menos importante lograr el equilibrio adecuado entre la financiación de esos grandes proyectos y las necesidades directas y concretas de las pequeñas y medianas empresas, algunas de ellas, como en el sector del Metal, importantes inversoras en i+D+i, a pesar de lo cual se benefician muy poco de la investigación financiada con fondos españoles y de la Unión Europea y se encuentran alejadas de los grandes núcleos de decisión de la investigación.

En este terreno de la financiación, ya sea pública o privada, es necesario salvar la distancia existente entre la financiación a la investigación básica, y por otro, la del capital riesgo y los préstamos comerciales al desarrollo del producto.

En cualquier caso, es evidente que las empresas deben invertir y que invertirán en la investigación y la innovación, porque en ello les va su futuro, pero es necesario que las condiciones marco mejoren para hacer atractivo y rentable que esa inversión imprescindible se haga en España.

Fomentar la innovación no depende tanto de aumentar las subvenciones y el gasto público como de garantizar la existencia de mercados líderes de consumo, capaces de fomentar las más

Es necesario garantizar que la investigación se transforme en innovación, en productos y servicios innovadores que, en última instancia, a su vez se traduzcan en mayor grado de competitividad



innovadoras y mejores tecnologías, sistemas, productos o servicios que permitan satisfacer las necesidades de los consumidores.

Ello requiere una masa crítica que procesos de ruptura de la unidad de mercado pueden hacer inalcanzable. Sobre esa masa crítica, podrán buscarse objetivos sociales y políticos como la eficiencia energética, el uso sostenible de los recursos, el desarrollo de nuevos materiales que respondan a las necesidades actuales de una vida más saludable, de mayor seguridad y movilidad y a las de información y comunicación.

La de la energía, su seguridad de suministro y su coste, es otra de las áreas a en la que se juega gran parte del futuro de la Industria.

A pesar de que los sectores industriales están implicados, desde hace décadas, en un continuo proceso de mejora de su eficiencia energética, para racionalizar el consumo, asegurar el suministro, incorporar fuentes energéticas más limpias y seguras y reducir el impacto de su coste en el precio final del producto, los resultados no son del todo satisfactorios porque la regulación administrativa y fiscal no acompañan en ese proceso.

El precio final de la energía que debería ser una de las bases principales de la competitividad de nuestra Industria, es hoy una desventaja competitiva por los costes de redes de transporte y distribución, los impuestos y las cargas incorporadas a las tarifas eléctricas finales.

La Industria necesita un suministro energético eficiente y que favorezca tanto la sostenibilidad como la actividad económica. Ello implica que cualquier regulación del sector energético no se aplique contra y a costa del desarrollo industrial.

Es necesario evaluar previamente el impacto de cada nueva iniciativa y de su efecto acumulado sobre el de las normativas en vigor para evitar que el pretendido beneficio se convierta en un obstáculo que ponga en peligro la propia actividad.

En la búsqueda de la eficiencia energética se debe tender al equilibrio entre la seguridad en el suministro a costes razonables y el apoyo a las oportunidades de negocio de tecnologías de menor impacto medioambiental que, además de contribuir a la sostenibilidad, pueden generar un liderazgo internacional.

Quizá sea el momento de hacer una pausa en la actividad normativa y darse un respiro para revisar el acervo legislativo que afecta a las empresas

## Marco regulador

La Industria se mueve hoy con un marco regulador muy complejo y cambiante en el que, si bien puede justificar individual y aisladamente cada normativa, forma un conjunto legislativo y regulador demasiado complicado y gravoso, que hace que las empresas se sientan cada vez más inseguras e incómodas con una legislación de la Unión Europea a la que las autoridades nacionales, regionales e incluso locales añaden requisitos adicionales.

Quizá sea el momento de hacer una pausa en la actividad normativa y darse un respiro para revisar el acervo legislativo que afecta a las empresas y, sobre todo, antes de introducir más legislación, asegurarse de que realmente es necesaria y que es manejable por las empresas que se supone deben aplicarla y por las autoridades reguladoras del mercado que han de vigilar su aplicación.

Es evidente que la industria, intensiva en inversión, se desarrolla mejor en un clima que la favorezca. En el análisis de la carga fiscal a las empresas se pueden encontrar probablemente claves de los estímulos potencialmente más importantes para impulsar la inversión y el crecimiento. Con la garantía de que cualquier estímulo se recupera con creces una vez iniciada la actividad industrial.

En este ámbito es de importancia capital lo que se refiere a los costes de la Seguridad Social que deben huir de convertirse en un verdadero impuesto sobre el empleo, desincentivador a la hora de tomar decisiones de contratación, muy especialmente en una coyuntura como la actual.

Asimismo, una gran parte de la industria sufre altibajos cíclicos que las empresas podrían atemperar con la posibilidad de contabilizar las pérdidas fiscales en ejercicios anteriores o futuros sin límite de tiempo. Ello permitiría eliminar muchas distorsiones y sería de gran ayuda a las empresas de nueva creación, las microempresas y los negocios de alto riesgo.

## Recursos humanos

Una última cuestión, aunque probablemente una de las más importantes es la de los recursos humanos. La industria, es especialmente la del Metal, a menudo se enfrenta a la escasez de mano de obra cualificada a todos los niveles, desde trabajadores en proceso de formación a trabajadores cualificados, pasando por técnicos, ingenieros e investigadores.

Para que las empresas mantengan y acrecienten su competitividad, desarrollo tecnológico y potencial innovador es esencial que la fuerza laboral esté altamente cualificada y que pueda formarse y actualizar sus conocimientos a lo largo de toda su vida laboral.

Los empleos industriales que exigen esa mayor cualificación ofrecen, a cambio, más seguridad, mejores niveles salariales y de protección social y carreras profesionales más sólidas y de mayor proyección personal.

El reto para mantener ese estatus del empleo industrial es adoptar las medidas que permitan mejorar la productividad a la vez que se garantiza la sostenibilidad del modelo social.



No es deseable, ni posible, competir con las economías emergentes simplemente a través de la competencia salarial, de modo que los agentes sociales en la Industria tendrán que trabajar para mejorar la competitividad de los sectores en los que se opera favoreciendo la mejora de la productividad.

Ello sólo será posible formando a los trabajadores actuales y futuros con las habilidades necesarias para competir en el mercado global, incorporando innovación y garantizando y promoviendo la adaptabilidad en el mercado laboral.

Para el adecuado desarrollo de la actividad industrial es esencial una movilidad laboral rápida y eficaz que asegure la adaptación de los trabajadores a nuevas tareas sin comprometer los puestos de trabajo, y que permita que las empresas puedan responder de forma eficaz a las crecientes presiones de la competencia global.

Las políticas laborales son una parte esencial del marco en el que operan las empresas industriales y, en el ámbito de la política sociolaboral, una mayor adaptabilidad contribuirá a un aumento de la competitividad que permitirá reforzar nuestro futuro bienestar.

El desarrollo de la Industria necesita de una formación universitaria, profesional, ocupacional, y continua de alta calidad y de un consenso en torno a la idea de que pasar con éxito por la educación básica y secundaria, y la formación profesional o el sistema universita-

rio no supone haber adquirido los conocimientos y habilidades necesarias para toda la vida laboral.

Paralelamente, como la declaración del Estado de Alarma y el subsiguiente confinamiento han hecho más patente, es necesario replantearse los modelos presenciales y de teletrabajo, el reparto y la duración de las jornadas laborales, los sistemas de prejubilación y los plazos de jubilación. Y todo ello teniendo como meta la imprescindible mejora de la productividad y de la competitividad.

Junto a ello, todos los implicados en la actividad industrial, deben hacer un esfuerzo real para, con el apoyo del conjunto de la sociedad, atraer a los jóvenes hacia la formación industrial y los estudios técnicos y científicos porque hay una preocupante carencia de jóvenes que lleguen al mercado laboral con las habilidades suficientes para cubrir las necesidades de personal cualificado que tiene la Industria en todos sus escalones.

Cubrir todo ese conjunto de necesidades permitiría acercarse a conseguir un único objetivo, nada más y nada menos, que la Industria siga siendo atractiva para trabajar e invertir.

Porque solo sobre una base industrial fuerte y competitiva, una sociedad puede ofrecer mejores condiciones de vida y un nivel de desarrollo humano más alto a un mayor número de ciudadanos. No hay modo mejor de asegurar el progreso y el bienestar. •

# SALVADOR ILLA ROCA



Salvador Illa nació el 5 de mayo de 1966 en La Roca del Vallés, provincia de Barcelona. Realizó sus estudios superiores en la Universidad de Barcelona, donde se licenció en Filosofía en 1989. Estudió máster en Economía y Dirección de Empresas en el IESE - Universidad de Navarra.

Ministro de Sanidad (Desde enero de 2020). Gerente de Empresa, Cultura e Innovación del Ayuntamiento de Barcelona (2016). Director de Gestión Económica del Ayuntamiento de Barcelona (2010-2011). Director general de Gestión de Infraestructuras del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña (2005-2009). Alcalde de La Roca del Vallés (1995-2005). Profesor asociado de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna. En noviembre de 2016, fue elegido como Secretario de Organización del PSC.



Ante los riesgos de nuevas pandemias en un mundo hipercomunicado.

## EL RETO DE UNA SANIDAD MÁS POTENTE Y MÁS RESILIENTE

Salvador Illa Roca. Ministro de Sanidad.

**E**ste 2020 será recordado como el año en que hicimos frente a la emergencia sanitaria más seria de los últimos cien años. Sin duda alguna, será un antes y un después en muchísimas cosas. Esta pandemia nos ha traído cambios en la forma de relacionarnos entre nosotros y también con otros países. Nos ha enseñado que somos más vulnerables de lo que creíamos y que hay peligros que solo se pueden afrontar con grandes alianzas, porque los peligros globales requieren respuestas globales.

Es también el año en el que la COVID – 19 puso a prueba a los españoles y a nuestro sistema sanitario. Y descubrimos que somos un gran país, con una sanidad pública muy poderosa y llena de fortalezas. Pero también con algunas debilidades que se han vislumbrado en los momentos de mayor tensión. Es, por tanto, una oportunidad que no debemos desaprovechar para repensar el modelo: es necesario robustecer el Sistema Nacional de Salud e introducir reformas que lo hagan también más moderno, más flexible y más resiliente ante futuras amenazas.

España y el mundo han vivido una experiencia dura, muy dura, en este año 2020. En los peores momentos de la crisis sanitaria, fue absolutamente imprescindible adoptar decisiones drásticas para frenar al virus, y doblarlo después, con la intención de mantenerlo bajo control.

Fue necesario adoptar una medida tan excepcional como es el confinamiento domiciliario de todo un país, cerca de cincuenta millones de habitantes. Fue una decisión difícil, pero absolutamente necesaria, porque el objetivo fundamental era el de salvar vidas. Y el confinamiento tuvo la virtud de salvar miles de vidas. Aun así, el coronavirus nos ha dejado un elevadísimo número de fallecidos a los que llevamos en nuestra memoria.

Efectivamente, este virus nos ha golpeado de forma muy severa y, a la vez, nos ha dejado algunas enseñanzas. Nos ha permitido ir acumulando conocimiento, que debemos tener muy presente para nuestra acción estratégica de cara al futuro.

La primera de estas enseñanzas ha sido una cura de humildad. Nadie conocía la inusitada rapidez de transmisión y la gravedad de sus efectos. Todos los países han llegado tarde: China, España, Europa. El mundo llegó tarde. Así lo demuestra el hecho de que, pese a lo que vamos conociendo del virus, ha continuado extendiéndose a los cinco continentes y se ha comportado con un impacto especialmente severo en América.

Es necesario robustecer el Sistema Nacional de Salud e introducir reformas que lo hagan también más moderno, más flexible y más resiliente

La segunda enseñanza, que hemos podido contemplar con orgullo, es que España ha demostrado un carácter muy firme como país; con una gran resistencia y una gran capacidad de lucha para sobreponerse a una amenaza como esta. Todo este país, cuarenta y siete millones de personas, actuaron con una responsabilidad y entereza encomiables. Ellos conformaron, junto a los cientos de miles de profesionales sanitarios, un sólido dique de contención contra el que ha chocado el virus y se ha ido debilitando. No obstante, sabemos que el riesgo de nuevos brotes o, incluso, de nuevas oleadas seguirá ahí porque el virus no ha desaparecido.

La tercera lección nos habla del comportamiento ejemplar del Sistema Nacional de Salud, que no deja de tener una configuración nítidamente descentralizada, como espejo del modelo territorial del que se dotó España en el 78. Nuestro marco institucional ha sido una de las fortalezas en la lucha contra la pandemia. Durante el periodo del Estado de Alarma, se celebraron 15 Conferencias de Presidentes Autonómicos, un claro ejemplo de cogobernanza. La misión ha sido y sigue siendo que los ciudadanos puedan contar con la respuesta sanitaria adecuada, con igualdad y cohesión, sea cual sea su lugar de residencia.

La Covid – 19 nos ha traído, también, un cambio sustancial en la forma de relacionarnos entre nosotros, nuevos usos y costumbres que mantendremos en el tiempo; al menos, hasta comprobar si las vacunas o un tratamiento efectivo permiten erradicar el virus.

Y también ha supuesto un antes y un después en las relaciones internacionales entre gobiernos y países. Este virus y su impacto ha contribuido a tejer alianzas y acuerdos que se configuran como un cambio de cultura de cara al futuro en el ámbito de la Unión Europea, especialmente en lo que se refiere a iniciativas para superar, de forma conjunta, los efectos económicos y sanitarios de la pandemia.

Igualmente, nos ha abierto los ojos respecto a una falsa creencia de seguridad de los países más desarrollados ante el riesgo de episodios epidémicos que, históricamente, se han detectado y se han limitado a zonas del planeta con menos recursos.

Solos, todos los países somos más vulnerables. Las amenazas que surgen a miles de kilómetros están, en realidad, muy cerca. Debemos estar preparados para hacer frente a nuevos virus que aparecen en otras partes del mundo, que tienen una enorme capacidad de transmisión y de los que desconocemos muchas cosas.

Esta pandemia nos conduce a un nuevo paradigma de la sanidad en el mundo, en el que las estrategias de vigilancia y de respuesta

Este virus y su impacto ha contribuido a tejer alianzas y acuerdos que se configuran como un cambio de cultura de cara al futuro en el ámbito de la Unión Europea





tendrán, cada vez más, un componente de dimensión global. Frente a aquellos que han cuestionado la eficacia de los organismos sanitarios internacionales, este virus nos ha confirmado todo lo contrario.

Será necesario fortalecer los organismos sanitarios internacionales, tanto la OMS como los de la Unión Europea, para mejorar los sistemas de detección y articular mecanismos de respuesta temprana y eficaz ante nuevos peligros.

### Fortalecer y modernizar el SNS

El Sistema Nacional de Salud ha demostrado durante esta crisis sanitaria, la más grave de los últimos cien años, que es un edificio construido con una gran fortaleza y con capacidad para resistir ante una pandemia de grandes dimensiones. Pero resulta urgente e imprescindible hacer más robustos sus cimientos y dar una mayor solidez a su estructura. De esta manera, la gestión de este tipo de emergencias se podrá llevar a cabo sin soportar las grandes tensiones que ha vivido la estructura asistencial y, especialmente, la asistencia hospitalaria.

**Coordinación y Cooperación.** La pandemia ocasionada por la Covid -19 ha puesto a prueba al sistema sanitario español, someténdole a una enorme tensión hasta límites no conocidos hasta ahora. Ello no obsta para reconocer que esta emergencia sanitaria se ha convertido en una oportunidad de comprobar que el modelo político y administrativo español, altamente descentralizado, no ha sido un hándicap a la hora de afrontar la situación. Por el contrario, el Sistema Nacional de Salud, diseñado como corresponde a un estado compuesto, ha realizado una gestión notable de cogobernanza que ha contado con la aportación de cada una de las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas y el gobierno central.

Esta cogobernanza, basada en los principios de lealtad institucional, cooperación y corresponsabilidad, debe ser también el camino por el que transitemos hacia el modelo sanitario del futuro. La coordinación y el trabajo compartido serán fundamentales en este proceso.

**Estrategia de dos velocidades.** El virus no conoce fronteras. La pandemia que ha provocado, se ha extendido por el mundo sin diferenciar entre países con más o con menos recursos, sin tener en cuenta sistemas políticos ni ideologías, sin distinguir entre zonas con climas más húmedos o secos, con temperaturas más altas o bajas.

Durante el larguísimo periodo de lucha contra la pandemia, hemos acumulado conocimiento y evidencias científicas, pero también somos conscientes que quedan aún muchas dudas por despejar. La más importante se refiere al comportamiento del sistema inmune y los tratamientos con las vacunas que comenzarán a estar disponibles en los próximos meses.

Tenemos por delante un tiempo en el que, además de los datos seguros que la evidencia científica nos va proporcionando, nos van a acompañar también algunas incertidumbres. Y el virus sigue siendo una amenaza que nos demuestra que mantiene intacto su nivel de peligrosidad: hemos dejado atrás las fases más duras de contención reforzada y de mitigación, pero, en esta fase de control que vive nuestro país, aún sigue siendo muy alto el riesgo de nuevos contagios que requieren respuestas rápidas y contundentes.

La estrategia de actuación se basa en dos ejes con objetivos y tempos claramente diferenciados. De un lado, y como prioridad urgente, España debe seguir con sus capacidades de respuesta temprana desplegadas ante el riesgo de que sigan proliferando los nuevos brotes. De otro, este país tiene, a medio y largo plazo, el desafío de inyectar una mayor fortaleza al sistema sanitario público, con mayores dosis de financiación y dotación de recursos humanos y materiales, para que esté suficientemente capacitado para cuidar de la salud de la población con vocación claramente universal.

Robustecer el sistema será un primer y muy importante capítulo, el primero de un largo proceso de transformaciones para adaptarlo y tenerlo listo ante nuevas pandemias u otras amenazas. Queremos un Sistema Nacional de Salud más potente, pero también más versátil: con una mayor flexibilidad para adaptarse con facilidad a las nuevas circunstancias que puedan sobrevenir; y con una mayor resiliencia, que le permita asumir tensiones y situaciones límite con capacidad para sobreponerse a ellas.

**Preparados ante segundas oleadas.** La estructura sanitaria fue capaz de resistir y soportar los momentos más duros de la pandemia, pero en un escenario de estrés que sería insostenible en un tiempo muy prolongado.

Nada más superar el pico de la pandemia y comenzar a doblegar la curva, era ya el momento de que todos los actores concernidos comenzáramos a trabajar para reconstruir, reforzar y reformar el Sistema Nacional de Salud.

En una primera fase –también la más urgente--, el objetivo era el de estar listos y con la guardia alta ante los nuevos brotes o nuevas oleadas. Esta puesta a punto de las capacidades de respuesta, ha requerido de una acción amplia y coordinada en diferentes y múltiples niveles. El resultado de estas acciones conjuntas y coordinadas, es un plan que está sustentado en diferentes prioridades estratégicas.

La primera, y una de las más importantes, ha sido la de afianzar la disponibilidad de los productos sanitarios esenciales ante una eventual situación de nueva tensión asistencial. Contar con una reserva estratégica de equipos de protección para los profesionales sani-

Este país tiene, a medio y largo plazo, el desafío de inyectar una mayor fortaleza al sistema sanitario público, con mayores dosis de financiación y dotación de recursos humanos y materiales

tarios y los pacientes, de pruebas diagnósticas, de capacidades de atención sanitarias, de equipos de respiración asistida y de medicamentos.

Las comunidades autónomas llevan tiempo desarrollando sus propias reservas estratégicas, como parte de sus competencias en la gestión. A su vez, el Gobierno de España ha conformado también una reserva estratégica para reforzar los suministros de los territorios

La experiencia de adquirir los productos sanitarios en un mercado internacional enormemente convulso por una altísima demanda, que era muy superior a la oferta, resultó tremendamente complicado, como todas las administraciones y todos los países pudieron comprobar. En España, se han implementado una serie de iniciativas para impulsar la fabricación de productos de uso sanitario con el objetivo de ser autosuficientes en la medida de lo posible.

Estas acciones han contado con una respuesta entusiasta por parte de empresas especializadas del sector e, incluso, por parte de compañías de otros ámbitos productivos, que han reconfigurado algunas de sus líneas industriales para aportar su colaboración y generar elementos de uso sanitario.



## Intensificar la vigilancia implica redimensionar y complementar de forma adecuada los equipos de profesionales en todos los niveles, en el nivel sanitario y también en el ámbito administrativo

En este contexto, es un orgullo haber encontrado una gran disponibilidad en numerosos fabricantes nacionales, que aseguran en conjunto la fabricación de varias decenas de millones de mascarillas cada mes. Justo es también poner en valor la sinergia emprendida por varias empresas, que han unido sus capacidades para garantizar una mayor autosuficiencia de cara al futuro de equipos tan esenciales, en situaciones críticas, como son los respiradores.

La segunda prioridad es contar con el conocimiento y la inteligencia adecuados para actuar antes de que una amenaza se propague. Durante la crisis sanitaria, se han producido grandes avances en el funcionamiento de los mecanismos de vigilancia epidemiológica, pero es imprescindible seguir reforzándolos para que estén aún más integrados. Intensificar la vigilancia implica redimensionar y complementar de forma adecuada los equipos de profesionales en todos los niveles, en el nivel sanitario y también en el ámbito administrativo.

Una tercera prioridad se concreta en ampliar y aumentar la rapidez y la adaptabilidad de respuesta del sistema. Para ello, será necesario mantener actualizados los procedimientos de respuesta rápida y coordinada, en todos los niveles de gobierno. Es decir, los servicios de salud deben estar preparados para, en caso de ser necesario, poner en marcha los Planes de Contingencia y reactivar de forma inminente todas sus capacidades replegadas.

El objetivo del sistema debe ser conseguir, que todas y cada una de las personas que forman parte de los servicios de salud, sepan cómo y dónde actuar desde el mismo momento en que se activa la alerta.

La cuarta prioridad se apoya en el valioso protagonismo que juega la atención primaria, un rol fundamental. Así se ha demostrado en la gestión de la pandemia, con su rápida adaptación acelerada a la atención telefónica a los pacientes y al seguimiento domiciliario de los casos menos graves. Esta alternativa ha contribuido a descongestionar los centros hospitalarios y que los afectados se hayan recuperado con un menor índice de riesgo en su hogar.

La atención primaria ha actuado como ejemplo de las bondades de la telemedicina, una línea en la que debemos profundizar.

También a la atención primaria hay que inyectarle recursos humanos suficientes, más médicos y enfermeras. También más medios tecnológicos. Es urgente completar un proceso de transformación digital en los servicios de salud y en la implantación de nuevas tecnologías para la telemedicina centrada en el paciente. Esta





pandemia debería ser un punto de inflexión en la concepción de los servicios de atención primaria. Este proceso aportará más rendimiento al trabajo de los profesionales sanitarios, más satisfacción a los pacientes y menor presión a la asistencia especializada.

La quinta prioridad, que debe afrontar el nuevo modelo sanitario, es la de extraer y procesar las enseñanzas de los efectos que la pandemia ha tenido en las residencias y centros socio-sanitarios. Como país y como sociedad, debemos profundizar en nuevos modelos de atención para cuidar a los mayores, atender a la dependencia y a la soledad no deseada.

Probablemente, las alternativas más respetuosas con la voluntad de estos colectivos enlazan con propuestas que contemplen priorizar la estancia en el hogar, con un envejecimiento autónomo y socialmente activo. La Atención Primaria puede ser, igualmente aquí, una receta muy adecuada.

La sexta prioridad, de cara a consolidar un sistema más consistente y, a la vez más flexible, bebe directamente de la ciencia y la innovación, combinadas con el intercambio continuo del conocimiento con todas las agencias internacionales de investigación.

En este sentido, España cuenta con un centro de referencia internacional para aportar innovación que ayude en ese proceso de transformación y modernización del sistema sanitario, como es el Instituto de Salud Carlos III.

El Instituto de Salud Carlos III se configura como un referente a nivel internacional de investigación e innovación sanitaria. Este centro ha coordinado la encuesta nacional de sero-epidemiología, uno de los estudios de estas características a nivel mundial con mayor representación muestral de toda la población, y que está siendo reconocido por su importancia y rigor científico a nivel internacional.

Tenemos que seguir potenciando la misión del Instituto de Salud Carlos III, para que crezca y siga atrayendo proyectos empresariales a nivel biomédico y biotecnológico. Solo lograremos superar esta pandemia y otras que puedan venir de la mano de la Ciencia. Por eso es imprescindible apostar por la investigación científica y el desarrollo de terapias y tratamientos, así como disponer de capacidad de producción nacional de estas terapias.

Es necesario subrayar también la labor de la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario (AEMPS). A nivel europeo y mundial, existe un intercambio continuo de información sobre ensayos clínicos. La AEMPS está monitorizando de manera continua con los expertos de otras agencias europeas, la EMA y otras agencias fuera de la UE, los datos relativos al uso de medicamentos para el tratamiento o la profilaxis de la infección respiratoria por SARS-CoV-2.

La Coalición Internacional de Agencias Reguladoras de Medicamentos (ICMRA), que reúne a autoridades reguladoras de todo el mundo con participación de la Comisión Europea, la Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud, ha mantenido reuniones semanales donde la AEMPS ha participado para intercambiar información en cuanto al diseño de estos ensayos, tanto en tratamientos como en vacunas, así como en resultados preliminares o actividades de fármaco-vigilancia.

La AEMPS cuenta con un fuerte protagonismo en el reto de vencer a la COVID-19, que es conseguir vacunas seguras y eficaces para



## Es imprescindible reforzar la sanidad pública volviendo a políticas presupuestarias que entiendan la sanidad como una inversión para aumentar el bienestar de la sociedad y no como un simple gasto

toda la población. Se han implementado y reconocido 29 candidatos en ensayos clínicos, y 189 en pre-clínica, alguno de grupos de investigadores españoles. Los técnicos de la AEMPS participan como expertos en asesorías científicas de la Agencia Europea de Medicamentos y se les ha asignado el papel de ponentes de la evaluación de una de las vacunas de las grandes compañías del sector

El escenario de la vacunación masiva contra la COVID-19 es un asunto de salud pública global y, sin un enfoque global y solidario, será imposible abordarlo. España se ha sumado a la compra que realizará la Comisión Europea a través del instrumento financiero ESI (Emergency Support Instrument), que pretende facilitar el desarrollo y acceso a las dosis necesarias de vacunas eficaces en el menor tiempo posible.

A través de la AEMPS, España tiene presencia en el comité directivo que adoptará las decisiones acerca de cada proceso de compra anticipada, y que monitoriza el desarrollo de las vacunas, y garantiza la transparencia y buena gobernanza del proceso de adquisición y distribución.

El Comité de Dirección seleccionó un equipo negociador, que está formado por representantes de siete países: España, Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Polonia e Italia. Este equipo es el interlocutor único ante las diferentes empresas.

Estas interacciones con organismos internacionales se suman al objetivo central de la AEMPS, que no es otro que el de asegurar los suministros de medicamentos, sobre todos de aquellos productos críticos para la atención a los afectados por la pandemia. Gracias al esfuerzo de coordinación de todo el equipo que trabaja en la Agencia, junto a los laboratorios y las comunidades autónomas, el suministro de medicamentos estuvo siempre garantizado, incluso en los momentos de mayor tensión.

**Refuerzo del SNS.** Naturalmente, el proceso de reformas a llevar a cabo requiere de una decisión previa *sine qua non*. Es imprescindible reforzar la sanidad pública volviendo a políticas presupuestarias que entiendan la sanidad como una inversión para aumentar el bienestar de la sociedad y no como un simple gasto.

La inyección económica de 16.000 millones de euros, trasferidos a las Comunidades Autónomas para contrarrestar el impacto sanitario y económico causado por la pandemia, es un primer paso en esta dirección. El objetivo debe ser la recuperación de los niveles de inversión previos a la crisis de 2008, para llegar en los próximos

ejercicios hasta el 7% del PIB y asegurar inversiones sostenidas y planificadas en el tiempo.

Sin un aumento de las inversiones, la situación podría derivar en una asistencia sanitaria deficiente a ciertos colectivos y a los habitantes de las zonas menos pobladas del país, lo que supondría tener una sociedad más fragmentada. Al menos hasta 2006, justo antes de la crisis económica y de las políticas de austeridad, el Sistema Nacional de Salud era un claro factor de reducción de las desigualdades. De acuerdo con datos de la OCDE, el SNS incrementa hasta en un 35% la renta de los hogares del 20% de la población con menos recursos, pero también incrementa en un 7,2% la renta disponible de los hogares del 20% de la población con más recursos. Dicho de otra manera, invertir en sanidad pública beneficia a toda la sociedad.

Igualmente, el aumento de la robustez del Sistema Nacional de Salud no se entendería sin la potenciación del colectivo de los profesionales sanitarios. Se han comportado con una entrega y una profesionalidad encomiables. Necesitamos trabajar, conjuntamente con las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas, para mejorar sus condiciones profesionales y para aumentar el número de efectivos.

Debemos, por tanto, de manera ineludible, dotar a la salud pública de las estructuras y recursos que requiere. No solo con la misión de incrementar la vigilancia ante episodios epidémicos, sino para promover la salud y la educación para la salud, para impulsar estilos de vida saludables.

Esta nueva cultura de la salud tiene su esencia en situar a las personas en el centro de las políticas. También en las políticas sanitarias. La sanidad debe estar cerca, con la mirada puesta en la dimensión humana de la salud y de la enfermedad. La sanidad debe formar parte de la educación. Debe estar inmersa en los centros de trabajo. En el deporte. En la familia. El sistema será más nuestro, más de cada uno de nosotros, en la medida en que sea percibido como más cercano.

La aprobación de Ley General de Sanidad, hace casi 35 años, que sentó las bases de la universalización de la sanidad, y la creación del actual Sistema Nacional de Salud, es una de las decisiones que más han mejorado la vida de los españoles. A Ernest LLuch le debemos este legado, y en su honor, debemos seguir cuidándolo y mejorándolo para que siga cuidando de la salud de los ciudadanos. •

# JULIO LACUERDA CASTELLÓ



Julio Lacuerda Castelló nace en Valencia el seis de diciembre de 1954. Tras finalizar sus estudios y realizar diversos trabajos, en 1985 ingresa en la Diputación de Valencia en el Departamento de Servicios Sociales.

Desde 1972 ha tomado parte activa en el movimiento sindical obrero del País Valenciano. Durante estos años ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en la Unión General de Trabajadores.

Desde que en 1996 es elegido secretario general de la Federación de Servicios Públicos fue revalidando su liderazgo al frente de la misma hasta 2016, siendo éste el período de mayor estabilidad de la Federación. En 2016, es elegido secretario general de la nueva Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos, que surge de la fusión de la Federación de Servicios Públicos y la Federación de Trabajadores de la Enseñanza.



# SERVICIOS PÚBLICOS: ¿CREPÚSCULO O NUEVO AMANECER?

Julio Lacuerda Castelló. Secretario general de FeSP-UGT.

La conclusión más evidente que podemos sacar de estos últimos meses es la defensa de los Servicios Públicos como principal herramienta para garantizar y cubrir las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Por ello, deben ponerse en valor en el denominado «pacto por la reconstrucción social y económica» y la distribución de los fondos europeos, bajo el prisma de la reforma, potenciación y desarrollo.

Dice Antonio Machado, que *«es de necios confundir valor y precio»*. Una máxima que define a la perfección la consideración y tratamiento que los Servicios Públicos deberían tener en el presente y futuro más inmediato, pues cuando hablamos de Servicios públicos (sanidad, educación, justicia, servicios sociales, servicios a la comunidad, correos, sector público empresarial, etc.) debemos trascender de los meros números y cifras.

Porque, si sólo atendemos a la cantidad y ponemos precio a nuestro estado social de bienestar, construiremos una sociedad en la que dará miedo vivir (algún ejemplo hemos tenido durante la pandemia que aún hoy colea). Ya hemos pasado por ello en el periodo 2010-2018 y hemos padecido las consecuencias desde entonces (¡de aquellos polvos estos lodos!). Por eso ha llegado la hora de cambiar la orientación, para evitar la mercantilización de los Servicios Públicos.

Efectivamente, las múltiples vicisitudes de los últimos meses nos han hecho ver de forma contundente que vivimos en un periodo de violenta transformación política, económica y social que ponen de manifiesto nuestra vulnerabilidad. En consecuencia, reivindicamos el papel del Estado y los Servicios Públicos, frente al poder absoluto del mercado.

Sin Estado y Servicios Públicos no hay redistribución de renta, no hay igualdad de oportunidades, ni un crecimiento armónico y un desarrollo sostenible. Sin Estado no hay investigación básica ni enseñanza de calidad, ni sanidad, ni pensiones, ni justicia, ni igualdad de género, ni redistribución de la riqueza, ni protección de las situaciones de riesgo. Sin Estado, en suma, la primacía de los más fuertes impondría una sociedad que es radicalmente contraria a la que aspiramos.

Y es que, si reconocemos que la ciudadanía tiene derecho a determinados servicios públicos con carácter universal, quiere decir que estamos señalando a unos responsables que deben satisfacer tales derechos. Y no son otros que los poderes públicos representativos, pues no hay otra forma de interpretar un derecho de estas características, salvo que sea una burla.

El estado social establecido en la Constitución constituye la base para evaluar las políticas a desarrollar, si bien, son necesarias más acciones estructurales a fin de fortalecer los derechos sociales y la

La conclusión más evidente que podemos sacar de estos últimos meses es la defensa de los Servicios Públicos



Es preciso que los Servicios Públicos no sólo sean protagonistas en catástrofes como la que aún estamos superando

situación de los empleados y empleadas públicos, mediante un reajuste y modificación de la dimensión económica y social, los presupuestos, la financiación autonómica y local, y el marco normativo que regula todas estas cuestiones, continuando la senda iniciada, muy acertadamente, con el Ingreso Mínimo Vital.

Y en todas estas cuestiones el papel del sindicato es clave, pues tenemos la responsabilidad, no solo de proteger los servicios públicos, sino también de luchar para mejorar su calidad, extensión, cobertura y accesibilidad, a través del diálogo social, la concertación y la participación institucional.

Por ello, debemos cooperar ofensivamente exigiendo el protagonismo que nos otorga la Constitución, como contrapeso en el programa de reconstrucción del país, con opinión e influencia política, trasladando la noción de que la estabilidad del conjunto de la economía pasa por el blindaje constitucional de los Servicios Públicos, y que para lograrlo, se requieren actuaciones, tanto en los ingresos para conseguir un flujo estable de financiación; como en los gastos, priorizando presupuestariamente sus partidas para equipararnos a los niveles medios de la UE.

Así es, pues conforme a los últimos datos de Eurostat y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) el gasto público en porcentaje sobre el PIB en nuestro país (41,0%) es inferior (un -6,2%) al de la media de la zona euro (47,2%). Y si nos centramos en Servicios Públicos esenciales, ese retraso también resulta evidente: Sanidad (-1,1%,) y Educación (-0.5%).

Y ¿cuáles deberían ser nuestras propuestas al respecto? Pues sin ánimo de ser exhaustivos, pero sí contundentes, considero deben articularse sobre las siguientes premisas:

- Incorporar los derechos sociales al ordenamiento jurídico para poder exigir su cumplimiento, garantizando que no dependan de las coyunturas políticas o económicas.
- Destacar los beneficios de la prestación pública para que los servicios públicos vuelvan al control y titularidad públicos, cuando concurren circunstancias que así lo aconsejen.
- Fijar un suelo mínimo de gasto social en cada servicio público a partir de un año base de cálculo, determinando su incremento anual en función de parámetros objetivos, pero con una programación interanual.

- Abordar una reforma del sistema de financiación autonómica que asegure el equilibrio, la cohesión y solidaridad territorial, asegurando una distribución justa de la riqueza.
- Incrementar específicamente las partidas destinadas a la Administración Local que garanticen la suficiencia de recursos para las Entidades Locales y sus servicios de proximidad.
- Controlar democráticamente todos los Servicios Públicos financiados mediante gasto público, con independencia de su titularidad o forma de gestión.
- Aprovechar la transformación digital de los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía.
- Potenciar un sector público empresarial, innovador con mayor proyección e incidencia en la economía social.
- Crear empleo público neto de calidad, que garantice la prestación del servicio en términos de calidad, profesionalidad y objetividad, evitando huidas como las recientemente producidas en el SEPE y la Seguridad Social, con externalizaciones más caras que la generación de ofertas públicas de empleo.
- Revisar los estatutos/normas de constitución de los organismos reguladores (Tribunal de Cuentas, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc.), incidiendo en sus competencias, configuración, independencia real; así como reforzando su profesionalidad y rigor, puestos seriamente en duda cuando de manera sistemática aconsejan la reducción de los Servicios Públicos.

En definitiva, es preciso que los Servicios Públicos no sólo sean protagonistas en catástrofes como la que aún estamos superando, debiendo contar con unas bases estructurales estables y permanentes en todo momento. Para ello, resulta imprescindible recuperar el discurso de «*lo público*» como esencia democrática, concebido como un método, un modo de acción, un camino para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, un camino a seguir sólidamente para conseguir una sociedad más democrática, más igualitaria y más libre, basada en la justicia distributiva y la universalidad. •

# FRANCISCO JAVIER LAMBÁN

Francisco Javier Lambán, es presidente del Gobierno de Aragón desde 2015. Nació en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y es licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza.

Ha sido alcalde de Ejea de los Caballeros entre 2007 y 2014, estando vinculado al Ayuntamiento con diferentes cargos electos desde las elecciones de 1983; presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (1999-2011), diputado de las Cortes de Aragón y secretario general del PSOE de Zaragoza (2001-2012) y secretario general del PSOE de Aragón desde 2012. Es afiliado a la Unión General de Trabajadores de Aragón.

Javier Lambán ha destacado por las políticas progresistas llevadas a cabo desde el Gobierno de Aragón para la recuperación de los derechos en materia de educación y sanidad pública, así como por la defensa activa de la recuperación y conservación del patrimonio histórico y cultural de Aragón.



# ARAGÓN, UN EJEMPLO PARA ESPAÑA

Francisco Javier Lambán. Presidente del Gobierno de Aragón.

**H**an pasado más de cuatro meses desde que el coronavirus empezó a golpear nuestras vidas y se decretó el estado de alarma. De un día para otro, Aragón y el mundo se pararon. Gestos rutinarios como un apretón de manos, llevar a nuestros hijos al colegio o visitar a un familiar en una residencia se convirtieron en actos prohibidos a la vez que anhelados. Supimos de repente de la importancia y el valor de nuestro modo de vida. Como sociedad, hemos tenido que adaptarnos y como Gobierno enfrentarnos a un desafío sin precedentes. Un desafío que, en su cara más dolorosa, se ha llevado la vida de 923 personas, con nombres y apellidos y con familiares y amigos a los que el pasado 27 de junio rendimos un homenaje en todos los municipios de Aragón y volveremos enviar nuestro abrazo fraterno el próximo 16 de julio en el homenaje a todas las víctimas de España, así como nuestro reconocimiento a los profesionales.

En medio de una situación de extraordinaria gravedad jamás imaginada, angustiados por la falta inicial de material de protección para nuestros profesionales y enfermos, mi gobierno entendió que debíamos trabajar con celeridad y unidad para tratar de ofrecer seguridad a los ciudadanos, hacerles entender que estaban protegidos. Por ello, trabajamos en gabinete de crisis desde el primer momento y todos los departamentos impulsaron medidas de manera coordinada y siempre enfocada al fin primordial de salvar vida y proteger a los aragoneses, además de reorientar todo el presupuesto de la Comunidad con este objetivo. La solidez de los equipos de los diferentes departamentos permitieron adoptar soluciones muchas veces pioneras, como la creación de centros Covid para salvaguardar a nuestros mayores, el refuerzo del personal sanitario, la construcción de hospitales de campaña a los que no ha hecho falta recurrir, la creación de un almacén específico para albergar el material sanitario y evitar desabastecimientos en un futuro, gracias a la colaboración público-privada, la creación de recursos respiratorio para sanitarios, facilitar la educación telemática con la distribución de tablets y otros equipos, o favorecer iniciativas ciudadanas como las generadas por la experiencia «Frena la Curva».

Durante esta pandemia se ha demostrado que tenemos un sistema de sanidad público fuerte y preparado y que vamos a seguir fortaleciendo. Y unos profesionales sanitarios y de servicios sociales a los que nunca acabaremos de agradecer su dedicación, sacrificio y esfuerzo, al igual que a todos los trabajadores del sector primario y logístico, profesores, Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, personal de limpieza, y tantos otros, que han permitido que esta Comunidad haya seguido funcionando. Ha sido un éxito de la sociedad aragonesa, de su esfuerzo y responsabilidad, la vuelta gradual a la normalidad, completando cada una de las fases de forma ordenada.

Como sociedad, hemos tenido que adaptarnos y como Gobierno enfrentarnos a un desafío sin precedentes

Aragón ha sido un ejemplo de superación de esta crisis sanitaria, pero también de unidad para afrontar el futuro. Y muestra de ello es la pionera Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social que firmamos el pasado 1 de junio con todas las fuerzas políticas aragonesas –salvo Vox–, los cuatro agentes sociales y los ayuntamientos, tras seis semanas de intenso trabajo. A todos ellos les agradezco de corazón su altura de miras, su capacidad para haber entendido que solo juntos podíamos salir adelante porque una misión como esta es imposible afrontarla por un gobierno en solitario. Frente al clima de crispación de otros territorios y de la política nacional, Aragón despliega consenso, estabilidad, moderación, unidad y solvencia. Ahora, nos toca al Gobierno de Aragón ejecutar esa Estrategia que contempla 273 medidas y para ello, hemos aprobado el Decreto-Ley 4/2020, de 24 de junio, para movilizar 510 millones del presupuesto para impulsar las medidas contenidas en esa estrategia, en buena parte dirigidas a los autónomos, el comercio o el turismo, que han sido muy castigados por la crisis de la Covid-19. Ello ha requerido reenfocar todos nuestros recursos para reactivar la economía, pero también para combatir la desigualdad y, sobre todo, para garantizar que nadie se queda atrás.

Nuestra voluntad es, además de aportar nuestros recursos propios, promover una alianza público-privada para movilizar el mayor número de inversiones en un momento tan crucial, para lo cual pelearemos por un reparto de las ayudas del fondo de la Unión de Europea que ayuden al reinicio de la actividad económica y consolidar el crecimiento que esta comunidad estaba experimentando antes de la crisis sanitaria.

Igualmente, tenemos el compromiso de ser más eficientes para facilitar futuras inversiones o reactivar el tejido económico actual, por lo que estamos inmersos en la elaboración de un proyecto de ley de Simplificación y Normalización Administrativa en el marco de la guerra contra la burocracia y dentro de la Estrategia por la Recuperación Económica y Social de Aragón. Hemos creado un grupo de trabajo para la revisión o derogación de normas, y avanzar en la Administración electrónica, y nuevas propuestas de procedimientos de regulación genérica, incluyendo la eliminación de duplicidades.

Aragón tiene claro que seguirá impulsando los sectores estratégicos de la economía que nos convertían, antes del estallido de la crisis, en una de las comunidades más pujantes, como es el turismo, las energías renovables, la agroalimentación o la logística.

Además, se duplicarán las ayudas a la internacionalización empresarial y en automoción y ya se están negociando nuevas líneas de colaboración para apoyar a las industrias auxiliares.

En logística, se urbanizará más superficie de la plataforma logística de Plaza, en Zaragoza y se desdoblará la carretera de la Base Aérea de Zaragoza, a lo que se suma un proyecto muy importante para construir una autovía ferroviaria entre Zaragoza y el puerto de Algeciras. También se destinarán inversiones a las plataformas de Teruel (Platea) y retomamos, junto con el Ministerio de Transporte, el impulso del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Mi gobierno, como ya he dicho antes, trabajará para captar recursos del Fondo Europeo de Recuperación, que suma 175.000 millones de euros para todos los países de la UE, dirigidos a la economía verde y digital, ámbitos en los que Aragón ya trabaja, como es la implantación de Amazon Web Services y el proyecto de convertir





a la provincia de Teruel en una referencia española de la bioeconomía y la economía circular. Además, se ha puesto de manifiesto la importancia de relocalizar industrias desaparecidas en Europa, lo que ha estado en la base de los problemas de suministros durante la pandemia.

Un esfuerzo de colaboración público-privada permitirá que por cada euro que llegue de la UE, las empresas aporten dos o tres y es fundamental tener una cartera de proyectos suficiente para captar la mayor financiación posible, motivo por el cual en Aragón ya hemos lanzado las manifestaciones de interés para el sector farmacéutico, la economía circular y la automoción.

Los planes del Gobierno de Aragón para los próximos meses pasan también por hacer fuerte el «lobby» de Aragón con Castilla y León y Castilla-La Mancha para impulsar el desarrollo económico en las zonas despobladas. Es indispensable mejorar el reparto de los Fondos de Cohesión de la UE y de la PAC, también que la cofinanciación de proyectos comunitarios se module más favorablemente a Aragón.

Como Presidente de Aragón seguiré reclamando al Gobierno central los fondos que nos corresponden y que se atiendan nuestras especificidades como territorio, incidiendo en una agenda aragonesa con los diferentes ministerios, conscientes de que no podemos perder ni un minuto y que el crecimiento que experimentábamos, debe seguir su curso. A mi juicio, es la mejor manera de no dejar a nadie atrás.

Pero la pandemia no ha terminado. Y se nos abren nuevos retos. La vuelta al cole en septiembre, la posibilidad de más rebrotes, la recuperación del empleo... No podemos bajar la guardia y debemos seguir cumpliendo las medidas sanitarias para no dar pasos atrás. El esfuerzo colectivo de los aragoneses en la lucha contra esta grave crisis sanitaria ha aportado lo mejor de nosotros mismos para seguir adelante, trabajando por el bien común. Por eso debemos seguir siendo muy diligentes y conscientes de que solo juntos saldremos adelante. •

Un esfuerzo de colaboración público-privada permitirá que por cada euro que llegue de la UE, las empresas aporten dos o tres y es fundamental tener una cartera de proyectos suficiente para captar la mayor financiación posible





Andén de la estación de ferrocarril de Villena con un gran número de personas posando en el mismo y en las vías (1905-1925).

# JUAN FRANCISCO LAZCANO ACEDO

Juan Francisco Lazcano Acedo (Madrid, 1945) ha dedicado la práctica totalidad de su vida profesional a las infraestructuras viarias. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ostenta en la actualidad la Presidencia de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC). Es, además, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Entre 1996 y 2000 fue director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, puesto al que llegó tras su paso por la Subdirección General de Construcción, Conservación y Explotación del Ministerio, cuya titularidad ostentó durante once años.



# EL COVID-19 Y EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Juan Francisco Lazcano Acedo. Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

**E**l impacto sobre la economía del COVID-19 ha consistido en un doble choque de oferta y demanda que ha traído consigo lo que podemos denominar como «crisis de actividad», contra la que, por tanto, no podemos actuar por la vía de los ingresos, sino del gasto y para ello afortunadamente hay liquidez en el mundo financiero y amplio margen de actuación para los Bancos Centrales en el ámbito del endeudamiento.

La incógnita está en cómo gastar, hacia donde dirigir la liquidez disponible ya sea propia o europea.

Ya se han producido para paliar la crisis de actividad dos medidas de carácter general, una que afecta a la oferta (ayudar a las empresas con medidas fiscales y financiación avalada por el ICO) y otra del lado de la demanda (proteger el empleo con los ERTE's). Seguramente ambas insuficientes pero en la buena dirección.

La medida que conjuga sin duda el impulso a la actividad económica y el empleo es la inversión y especialmente la inversión en construcción e infraestructuras como así lo acredita la superación de otras crisis en el pasado, y autoridades como el FMI, la Comisión Europea o muy recientemente ERIN MASHIN (Premio Nobel de Economía y Catedrático en Harvard) al afirmar que «sólo saldremos de esta con una inversión masiva en infraestructuras».

La Comisión Europea, por su parte, en la recomendación al Consejo publicada el mes pasado concluye que:

- La prioridad ahora es combatir la pandemia con medidas de liquidez y de protección del empleo, no es por tanto momento de ajustes.
- Debemos anticipar proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica.

¿Y por qué la inversión en construcción e infraestructuras? porque por su variada estructura empresarial (grandes, medianas empresas y alta proporción de PYME's y autónomos) generan la segunda mayor creación de empleo de nuestra economía, con 10 puestos directos y 5 indirectos por cada millón de euros invertido, generan la mayor actividad económica inducida, equivalente a 1,92 € por euro invertido, generan el mayor impulso a nuestra industria nacional al precisar de la menor cuota de importaciones de todos los sectores productivos, del 9%, y todo ello con un retorno fiscal del 49% por cada euro invertido.

Y también porque se trata de un sector muy estructurado en el ámbito laboral entorno a un Convenio Colectivo Nacional, una Ley de Subcontratación propia y una Fundación Laboral con 48 centros de formación preventiva y de oficios, capaz de incorporar rápidamente al sector personas trabajadoras de otros ámbitos.

La incógnita está en cómo gastar, hacia donde dirigir la liquidez disponible ya sea propia o europea

Y porque esta crisis es también una oportunidad, con diez años por delante para modernizar nuestros equipamientos e infraestructuras y nuestro bienestar social conciliando estas necesidades con el ineludible compromiso de garantizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

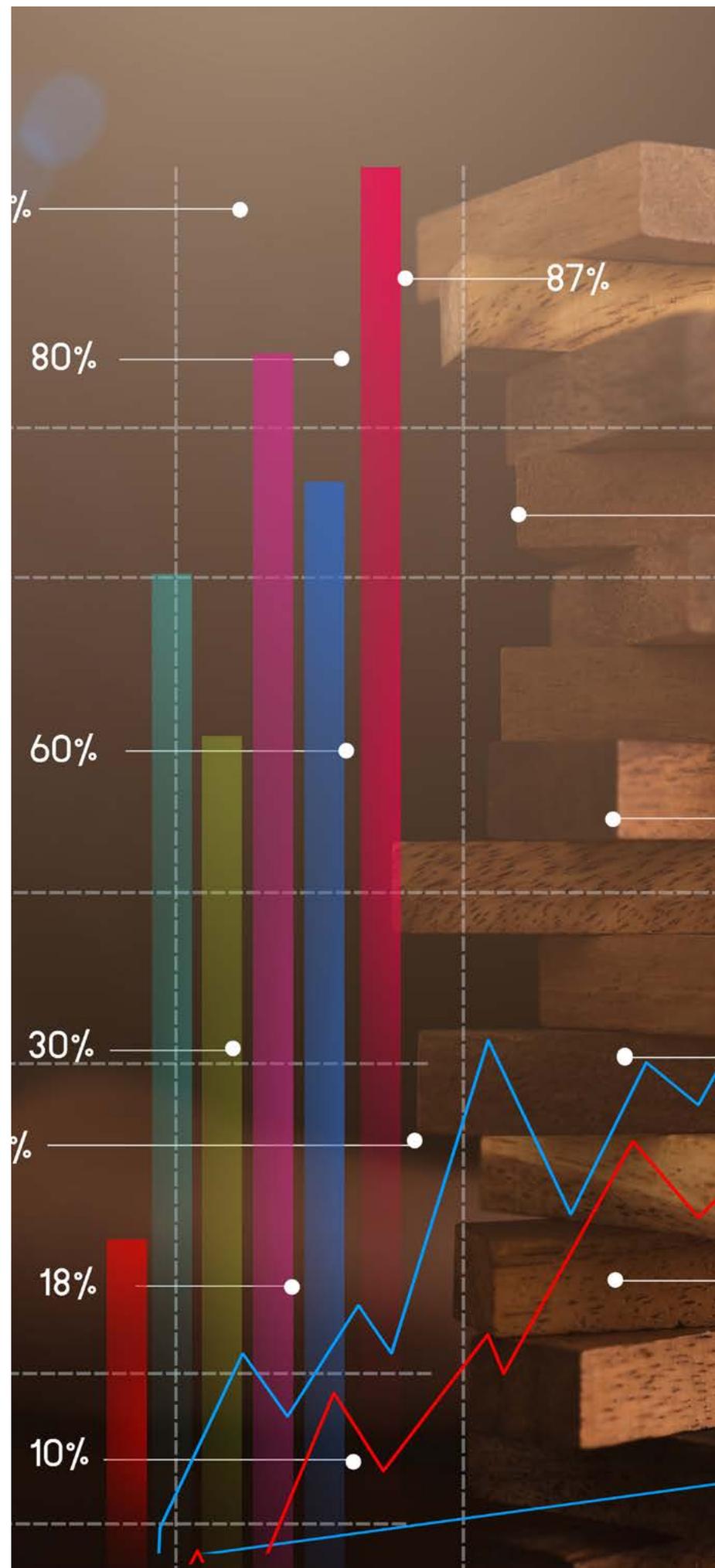
También en este sentido se ha pronunciado la Comisión Europea que aconseja y propone: con el fin de superar la crisis económica derivada del COVID-19, llevar a cabo una fusión de los planes previos a la pandemia –Pacto Verde o Green Deal y Agenda Digital– cuya consecuencia sea un Plan de Recuperación cuyo principal objetivo sea concretar la inversión en sectores y actividades de proyección futura en cuanto al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y señala como actividades favorecidas para este afán, la construcción, la digitalización de servicios y una «ola de renovación inmobiliaria», en consideración a que los edificios son los mayores consumidores de energía de la Unión Europea.

¿Y qué proponemos a estos efectos las organizaciones empresariales concernidas, en base a los estudios que venimos realizando para identificar las necesidades y los proyectos en sus diferentes estados de desarrollo para satisfacerlas?

Seopan acaba de presentar un programa de inversiones para la reconstrucción económica y social de España con un alcance económico de 157.000 millones de euros para el decenio 2021/2030 que, además, los pone en relación con los objetivos de desarrollo sostenible.

- En salud y bienestar para reducir a la mitad las muertes por accidentes de tráfico en 2030 y para garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de salud.
- En agua limpia y saneamiento porque sólo el 32% de nuestros municipios de más de 10.000 habitantes disponen de sistemas de depuración terciarios.
- En energía asequible y no contaminante con medidas de eficiencia energética en el sector residencial y terciario.
- En industria, innovación e infraestructuras para la sostenibilidad, resiliencia y calidad de nuestras redes de saneamiento, distribución y suministro de agua, de carreteras, promoción del transporte ferroviario de mercancías, conexiones ferro-portuarias e infraestructura logística.

Seopan acaba de presentar un programa de inversiones para la reconstrucción económica y social de España con un alcance económico de 157.000 millones de euros para el decenio 2021/2030





## Para que todas estas necesidades puedan materializarse sería conveniente que Gobierno y Oposición consensuen un Plan de Recuperación sin olvidar a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales

- En ciudades y comunidades sostenibles para mejorar la movilidad viaria urbana e interurbana; para tratar y valorizar los 12 millones de toneladas de residuos que depositamos cada año en vertedero, y dotar de alcantarillado y depuración a las viviendas en municipios de menos de 50.000 habitantes que no disponen de estos servicios.
- En vida y ecosistemas terrestres para luchar contra la desertificación y la sequía y para prevenir las inundaciones y avenidas, que provocan efectos devastadores.

Por su parte la Asociación Española de la Carretera que me honro en presidir acaba de presentar un «Plan de Carreteras Seguras, Verdes y Conectadas» que con una inversión de 32.000 millones de euros (1.000.000 de empleos) contempla:

- Construir carreteras 2+1 en 114 km de red convencional.
- Repavimentar 90.000 km para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Adaptar 50.000 km a la movilidad conectada y eléctrica (con la instalación de 14.900 puntos de recarga en vías interurbanas).
- Crear itinerarios preferentes para la movilidad de mercancías en el entorno rural de 889 municipios.

- Desarrollar una red de movilidad turística en la España vacía, que afectaría a 6.827 municipios.
- Construir 3.300 km de carriles bici y 6.930 km de vías prioritarias exclusivas para el transporte colectivo en ciudades.

CNC, por su parte, demanda una Estrategia de Rehabilitación, Renovación y Regeneración Urbana en base a que en España, de los 10 millones de edificios existentes con 26 millones de viviendas (18 millones principales) sólo un 5% están construidas con el Código Técnico de la Edificación, un 40% están construidas con la normativa básica de 1979 y un 55% sin ninguna normativa. El 80% de esos edificios seguirá en pie en 2050 cuando la Unión Europea se propone alcanzar la neutralidad de emisiones.

Si entre el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, el Plan de Vivienda, y los Fondos Europeos se destinaran 2.000 millones de euros al año (que supone pasar de las 30.000 viviendas rehabilitadas actualmente a 120.000) en cuatro años se habría generado una actividad económica equivalente a 52.000 millones de euros, se habrían creado 832.000 puestos de trabajo equivalentes a 208.000 empleos a tiempo completo, se habrían reducido los costes de desempleo en 7.600 millones de euros y se habría generado un retorno fiscal de 15.200 millones de euros.

Para que todas estas necesidades puedan en alguna medida materializarse sería conveniente que Gobierno y Oposición consensuen un Plan de Recuperación sin olvidar a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, que tenga en cuenta cuantas aportaciones estamos haciendo desde las Organizaciones Empresariales/e incluso Colegios Profesionales.

Este Plan deberá incluir un modelo de financiación basado en la colaboración público-privada que aborde además la problemática de como sufragar los gastos necesarios para la conservación de las infraestructuras, teniendo en cuenta el importante y creciente gasto social que nuestro país tiene que atender.

Mi más profundo deseo es que esta vez Sí, el sector de la construcción en su conjunto tenga un papel preponderante en la necesaria reactivación de la economía y el empleo modernizando nuestros equipamientos e infraestructuras. •



M A N U E L  
M A R C H E N A G Ó M E Z

Presidente Institucional de AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana) y Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla. Además, ha desempeñado con anterioridad, numerosos cargos de responsabilidad en el ámbito del ciclo urbano del agua, siendo Presidente de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA Andalucía) y Consejero Delegado de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, S.A. (EMASESA).



# SECTOR DEL AGUA URBANA: VECTOR DE RECUPERACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS

Manuel J. Marchena Gómez. Presidente Institucional de AGA.

**E**spaña, al igual que el resto de países del mundo, se ha visto afectada de lleno por la pandemia derivada del Covid-19. Con la mirada puesta en la vigilancia permanente por un posible rebrote importante que haga volver al estado de confinamiento de los meses anteriores, es prioritario aplicar las medidas económicas necesarias para la recuperación del país.

Europa marca la senda de esta recuperación alrededor de un eje principal: el medio ambiente. Todos los países de la Unión, entre ellos el nuestro, aplauden esta iniciativa -que hace de la necesidad virtud- y por supuesto la secundan.

En el caso particular español, ya estaba en marcha desde hace meses un fuerte impulso alrededor de todo lo que supone el cambio climático. Así, están ahora mismo en distintas fases de tramitación: Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, etc.

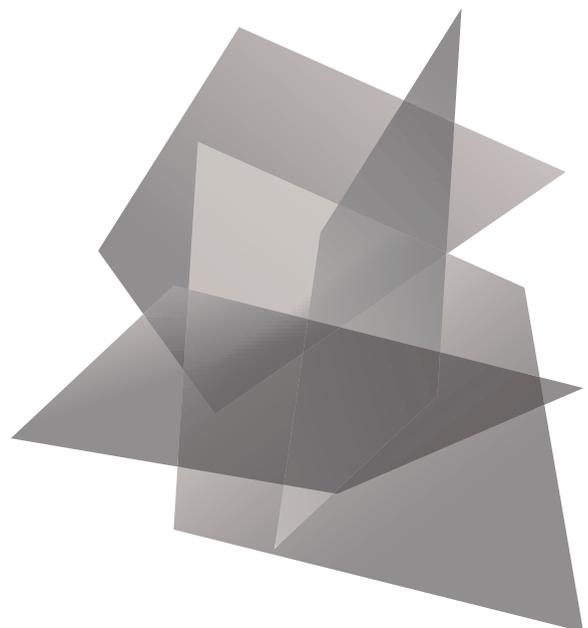
Además, como no podía ser de otra forma, está en boga el concepto de «finanzas sostenibles» que, en definitiva, busca favorecer una economía más verde y respetuosa con el medio ambiente.

En este contexto socio-económico, el sector del agua urbana sigue siendo, como lo ha sido anteriormente, un valor seguro en cuanto a servicio de excelencia, respeto ambiental y empleo de calidad. Esto es así debido al trabajo que vienen haciendo las empresas del sector desde hace décadas, al hecho incontestable de que el agua es esencial para la vida y por tanto un servicio que hay que prestar 24 horas al día, y que es un sector que nace y acaba en la naturaleza.

Desde meses antes de iniciarse la pandemia, las voces más destacadas del sector venimos pidiendo un esfuerzo inversor importante necesario para la renovación de infraestructuras existentes y la construcción de las nuevas necesarias (centrando los esfuerzos especialmente en depuración y reutilización). Así quedó claro especialmente en el estudio presentado en noviembre de 2019 en el Congreso de los Diputados y en el que AGA fue factor principal. Este documento titulado «Hacia una financiación más eficiente de las infraestructuras del ciclo de agua urbana en España» es totalmente público y de acceso general.

El futuro inmediato del sector, pasa por una fuerte inversión en infraestructura verde y esto, sin duda, supondrá la creación de un gran número de puestos de trabajo. La característica que mejor define el empleo del sector es la estabilidad del mismo que redundará en una gran seguridad laboral para el conjunto de nuestras

El sector del agua urbana sigue siendo, un valor seguro en cuanto a servicio de excelencia, respeto ambiental y empleo de calidad.



Es fundamental el fomento de un crecimiento sostenible que favorezca la mejora del medioambiente, además de contribuir a la recuperación económica generando empleo de calidad y apoyando a los colectivos en situación de vulnerabilidad

plantillas y esto queda claramente reflejado en el hecho de que la inmensa mayoría de empleados y empleadas del sector estén contratados de forma indefinida. En definitiva, el empleo del sector del agua urbana es un empleo de calidad.

En este sentido, las empresas están especialmente preparadas para esta nueva etapa que se presenta por delante, pues está vigente para el periodo 2018-2022 el *VI Convenio Colectivo Estatal del Ciclo Integral del Agua* –del que participa la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (FICA-UGT)– y que supone mejoras respecto al anterior que se ven reflejadas entre otros puntos en la regulación de la jubilación obligatoria como medida de mantenimiento del empleo en el sector; la apuesta por el mantenimiento del empleo y la continuidad en la prestación de los servicios, reflejada en el capítulo que regula la subrogación; las profundas novedades en materia de formación y promoción profesional; el compromiso con aspectos como la igualdad de género, conciliación, corresponsabilidad y protección a las víctimas de la violencia de género.

Durante la crisis del Covid-19, se ha logrado mantener la excelencia en el servicio que caracteriza al sector adaptándose a las condiciones surgidas por el estado de alarma, prestándose con garantías de seguridad y continuidad, tal y como corresponde a unos servicios públicos esenciales. Esto no es sino una muestra más del compromiso del sector con la ciudadanía. Esta pandemia, ha servido también para el conjunto de la sociedad valore la importancia de los servicios urbanos y entre ellos, por supuesto, está el abastecimien-

to y el saneamiento. Es ahora cuando el sector adquiere una mayor relevancia, pues se ha demostrado como agente fundamental para garantizar la salud e higiene del conjunto de la sociedad.

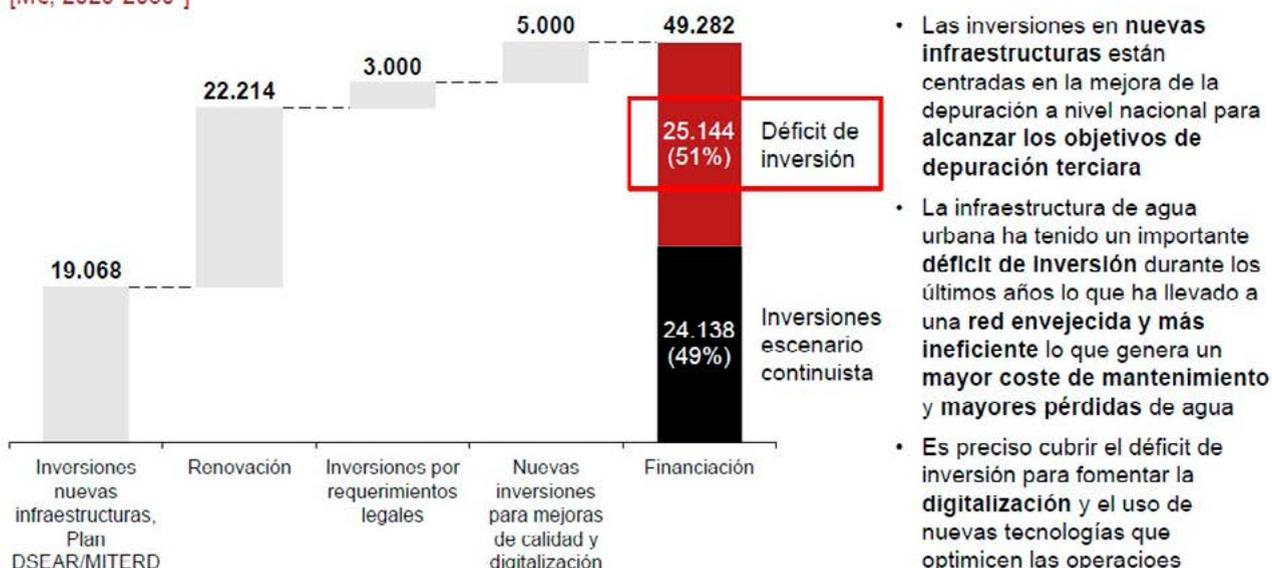
Para superar la crisis económica y que esta no se convierta en social, es fundamental el fomento de un crecimiento sostenible que favorezca la mejora del medioambiente, además de contribuir a la recuperación económica generando empleo de calidad y apoyando a los colectivos en situación de vulnerabilidad. En esto el agua urbana está en posición de actuar como palanca y convertirse en clave de recuperación. Pero, para todo ellos es necesario invertir y para invertir, es prioritario buscar una financiación adecuada.

### Necesidades de inversión

Desde hace años, el sector del agua urbana viene reclamando la urgencia de realizar un esfuerzo inversor sostenido en infraestructuras del ciclo urbano del agua, ya que, actualmente la media anual de inversión real no alcanza en 50% de lo necesario. En ese sentido, el agua urbana necesita una inversión anual de 2.500 M€ adicionales, hasta alcanzar los 4.900 M€ anuales, para garantizar la calidad, la sostenibilidad de los servicios y afrontar los retos futuros como el cambio climático o los más exigentes requerimientos regulatorios en materia de depuración, potabilización y calidad del agua.

Se requiere aprovechar las oportunidades de inversión pública que puedan generarse, pero también impulsar la movilización de fondos

### Inversiones necesarias y déficit de inversión en infraestructura de agua en España [M€, 2020-2030<sup>1</sup>]



Fuente: AEAS-AGA, Planes de Cuenca, MITERD.



Se requieren unas reglas que garanticen una seguridad jurídica, la sostenibilidad económica, social y ambiental, y una coordinación con las entidades locales, autonómicas y centrales

privados y estimular las acciones económicas y financieras útiles y eficientes.

El sector del agua urbana puede movilizar con celeridad las inversiones que le sean asignadas. Muchas de las empresas públicas, mixtas o privadas tienen capacidad y pueden demostrar la solvencia oportuna para afrontar proyectos de corto, medio y largo plazo, incluyendo aquellos que requieren de sofisticados y solventes modelos de colaboración público-publica.

Pero también se requieren unas reglas que garanticen una seguridad jurídica, la sostenibilidad económica, social y ambiental, y una coordinación con las entidades locales, autonómicas y centrales, que tengan por objetivo los principios de la Directiva Marco del Agua tales como la «recuperación de costes», la «contribución adecuada de los usuarios» y «el que contamina paga». También una orientación de las acciones dirigidas a la lucha contra el cambio climático, el progreso hacia una economía circular, la transición ecológica, el reto demográfico, los ejes del Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

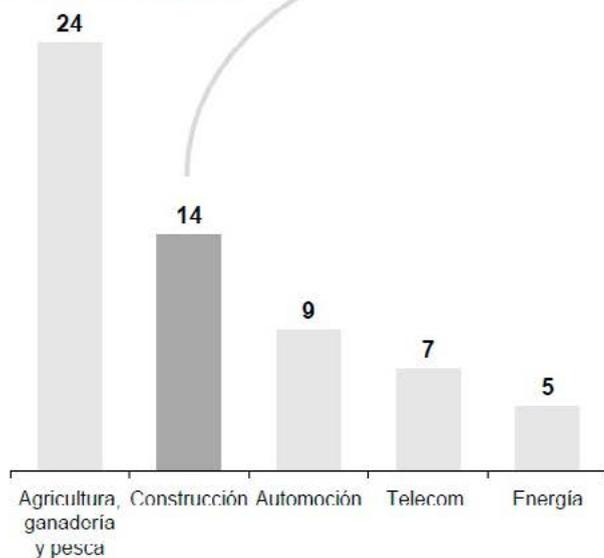
### Generación de empleo de calidad

Como decía anteriormente, en el contexto actual, el impulso del sector del agua urbana tendría como resultado lograr una recuperación económica del país más justa y sostenible generando actividades de alto valor añadido, a la vez que se contribuiría a crear empleo de calidad. Se estima que estas inversiones contribuirían a la generación de más de 43.000 empleos esenciales y permanentes a tiempo completo, y que el sector podría movilizar con celeridad.

Para ello, se requiere aprovechar las oportunidades de inversión pública que pueden generarse, pero también impulsar la movilización de fondos privados y estimular las acciones económicas y fi-

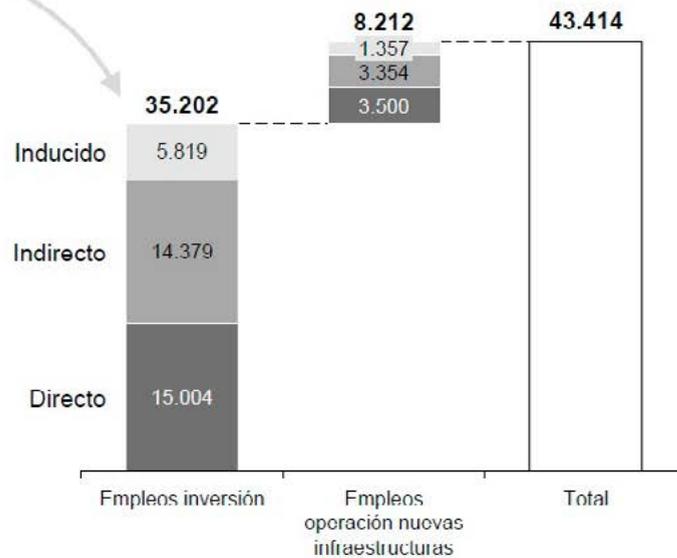
### Empleos generados por millón de euros invertidos por industria

[# de empleos por M€]



### Impacto en el empleo

[# de empleos]



Fuente: SEOPAN, AEAS, PwC.



nancieras eficientes. La recuperación pasa por fomentar mecanismos de colaboración entre las Administraciones Públicas y los agentes económicos, que contribuyan a lograr una salida equitativa y sostenible de la crisis.

El sector del agua ha demostrado su capacidad y eficiencia, su agilidad en la adaptación a los escenarios cambiantes y su cualificación en la gestión de los riesgos. Las instituciones y empresas que lo componen tienen prestigio internacional y algunos son líderes en tecnología y en servicios (desalación, reutilización o servicios integrales en el ámbito urbano). Sus objetivos y estrategias de gestión productiva o empresarial están perfectamente coordinadas con los ejes europeos y mundiales que, como hemos señalado anteriormente, se pueden resumir en el progreso en el cumplimiento de los ODS, la lucha contra el cambio climático, la adaptación a la economía circular, la transición ecológica o el desarrollo rural.

### **Agua Urbana como palanca de recuperación e impulsor del Pacto Verde Europeo**

Ante esta situación sin precedentes, el sector urbano del agua puede ser una pieza clave dentro de la estrategia europea de salida de la crisis del Covid-19. Esta estrategia europea se basa en fomentar la economía circular y la transición ecológica, en lo que se ha venido a denominar el Pacto Verde Europeo.

La Comisión Europea ha formulado su presupuesto para el periodo 2021-27 en torno a este gran pacto por el medio ambiente. Si al presupuesto europeo le añadimos el fondo de reconstrucción europea, el resultado es una movilización de recursos que podría sumar 1,85 billones de euros.

Por su lado, el Gobierno de España ya anunció en enero un plan de renovación y rehabilitación de infraestructuras por 80.000 M€ y, tras el Covid-19, espera reforzar dicho plan captando hasta 140.000 M€ complementándolo con los fondos de recuperación europeos.

En resumen, en este contexto el ciclo del agua urbana presenta una serie de factores que le hacen idóneo para ser una palanca en la recuperación y un impulsor del Pacto Verde Europeo:

- Cuenta con la capacidad para generar empleo de calidad y equitativo.
- Fomenta la sostenibilidad medioambiental: España es el segundo país con mayor reutilización de agua a nivel global. Además, la huella de carbono del sector es inferior a la media de la industria española (produce el 28% de la energía consumida vs. el 6% de la industria) e impulsa el consumo responsable de agua mediante la progresividad de las tarifas y las campañas de concienciación. Adicionalmente, el sector invierte activamente en mantener los ecosistemas y reduce la contaminación a través del saneamiento del agua.
- Es una industria socialmente responsable que apoya a los colectivos en situación de vulnerabilidad: cuenta con bonificaciones y fondos de solidaridad para apoyar a las rentas bajas, jubilados y familias numerosas, de los que se benefician un 4,7% de los usuarios.
- Cuenta con la capacidad para canalizar inversiones en el corto plazo reactivando la economía. Existe una completa planificación y proyectos de ejecución. De hecho, existe consenso en que el sector urbano de agua es uno de los que cuentan con un mayor déficit estructural. Antes de la crisis del COVID-19 estas necesidades de inversión adicional se cifraron en 2.500 M€ anuales para los próximos 10 años.

Por tanto, es necesario que el sector del agua urbana se convierta en uno de los servicios o de las actividades prioritarias sobre las que articular la recuperación, ya que conllevaría múltiples beneficios para el conjunto de la sociedad española:

- Cubrir el déficit de inversiones en el ciclo urbano del agua se estima que generaría el equivalente a más de 43.000 empleos anuales a tiempo completo en España. La inversión en infraestructuras de agua es una de las actividades más intensivas en empleo local.



- Adicionalmente tendría un efecto positivo en el crecimiento económico, equivalente a cerca del 0,15% de aumento anual del PIB.
- Finalmente, se obtendrían importantes beneficios medioambientales que permitirían que España convergiera con las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de agua:
  - Reducción de las pérdidas en la red de distribución, pasando del 22% actual al 14%.
  - Cumplimiento total de la directiva de depuración.
  - Mayor desarrollo de la reutilización, posicionando a España como un «hub» tecnológico en este tipo de tecnología que impulse la economía circular.
  - Cumplimiento de los objetivos de descarbonización, profundizando en la relación agua-energía.

En definitiva, los beneficiarios de esta propuesta sectorial son y serán la sociedad española presente y futura, la justicia social, la recuperación económica general y el empleo de calidad.

### **Vertebración, empleo y medio ambiente**

En añadidura a lo ya mencionado, es importante recordar que no sólo todo lo expuesto es importante para los grandes núcleos de población, sino para todos los municipios de España. Es especialmente importante hacer mención a los pueblos de todos los tamaños que, si bien están muy presentes tanto para las federaciones regionales, autonómicas y nacionales de municipios, a veces son

los grandes olvidados por otras administraciones. En dichas localidades, el mantenimiento de los servicios de calidad es tan importante como en los municipios de mayor tamaño.

De cara al mantenimiento de la vida de estos pueblos es fundamental fomentar el empleo, que se conseguiría también con mayor desarrollo de los sistemas de agua urbana. No hay que olvidar que, en dichos municipios, se concentra un importante número de incumplimientos en depuración -ya sea por obsolescencia de las instalaciones o por inexistencia de las mismas- que, aunque no supongan un gran volumen de agua, sí suponen una importante cantidad de incumplimientos puntuales.

Las empresas y sectores que nos dedicamos al medio ambiente, somos especialmente sensibles con dicha realidad. Esto ha quedado reflejado en el renombrado como Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), asumiendo no sólo el reto medioambiental sino el de la escasa densidad de población en más de la mitad del territorio español y aunándolos, además, bajo una misma cartera ministerial.

El medio ambiente ha de cuidarse tanto en las grandes ciudades como en los pequeños núcleos de población, siendo además estos últimos los que están en contacto más directo con una naturaleza menos afectada por la actividad diaria de la ciudadanía y, por tanto, que hay que cuidar con esmero.

El propio Ministerio publicaba recientemente la reforma de su estructura, haciendo referencia específicamente a la necesidad del impulso de la colaboración público-privada en la lucha contra la despoblación; justo uno de los puntos más relevantes que pedimos desde el sector, para poder sacar adelante todos los retos que tenemos para el futuro inmediato y ser garantía así de excelencia del servicio, respeto medioambiental y empleo de calidad.

## Conclusiones

El sector se esfuerza por mantener un servicio de excelencia y ser además palanca para la recuperación económica que necesita España. Hemos mantenido el servicio durante el tiempo de pandemia, pensando especialmente en las personas más vulnerables como veníamos haciendo anteriormente y como seguiremos haciendo.

Hemos hecho los deberes en todos los sentidos, partiendo de un convenio mejorado y un compromiso claro con el medio ambiente y por supuesto, con la estabilidad del empleo de nuestras plantillas.

Pero para que se cumpla todo esto y permitir el despegue de las inversiones que son necesarias, hay que hacer reformas legislativas y también cambiar algunas ideas con el objetivo de caminar en la dirección que facilite: economía 100 % circular, aprovechamiento energético máximo de las depuradoras (de EDAR a biofactoría), colaboración público-privada, tratamiento específico de los problemas de la depuración en España, fomento de la reutilización, solucionar la antigüedad de sistemas de redes (tuberías) y la obsolescencia de algunas instalaciones, facilitar la economía de escala especialmente en las zonas rurales para que la baja densidad de población no suponga una merma en la calidad de los servicios prestados, etc.

Seguiremos apostando por el medio ambiente, el empleo de calidad, la formación continua, la prevención del bienestar y la salud laboral y la excelencia empresarial

Todo ello redundará no sólo en el mantenimiento del empleo actual si no en la creación estimada de hasta 43.000 nuevos puestos de trabajo. Lo más importante de esto es, como ya se ha dicho, que el empleo del sector del agua urbana es un empleo de calidad.

Desde el sector seguiremos apostando por el medio ambiente, el empleo de calidad, la formación continua, la prevención del bienestar y la salud laboral y la excelencia empresarial, haciendo uso siempre de la innovación y tecnología más avanzada del momento y alineándonos con la Agenda 2030, sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con el Pacto Verde Europeo. •

### Principales características sociales y económicas del ciclo urbano del agua

 <b>Empleo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fomenta el <b>empleo estable</b> ya que la proporción de empleo fijo del 86% es significativamente superior que la media española del 74%</li> <li>Fomenta un <b>empleo de calidad</b> con mayor presencia de personal con formación superior</li> <li>Fomenta el <b>empleo equitativo</b> ya que la brecha salarial de género es un 38% inferior a la media española (13% vs. 21%)</li> </ul>
 <b>Sostenibilidad medioambiental</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El agua juega un papel fundamental en la <b>economía circular</b> y <b>España es el segundo país del mundo con mayor reutilización</b> de agua.</li> <li>Es un <b>sector más sostenible</b> que la media de la industria en términos de emisiones, con una <b>huella de carbono inferior</b> y una mayor <b>producción y uso de energías renovables</b></li> <li>Establece sistemas tarifarios progresivos, <b>fomentando consumos sostenibles</b></li> </ul>
 <b>Protección colectivos vulnerables</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuenta con <b>mecanismos de acción social para colectivos vulnerables</b>. El apoyo se dirige a personas con una situación de renta delicada, parados, jubilados o familias numerosas, beneficiando al 4,7% de los clientes</li> <li>Adicionalmente, el porcentaje de la renta destinada al consumo del agua es de las más bajas de Europa, garantizándose una <b>tarifas asequibles</b> para la población</li> </ul>
 <b>Reto demográfico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El ciclo urbano del agua <b>invierte en los municipios menos poblados</b>, contribuyendo a desarrollar su economía y frenar la despoblación</li> <li>De hecho, la inversión en identificada por habitante es un 36% superior en municipios con menos de 20 mil habitantes respecto a los de mayor dimensión</li> </ul>
 <b>Capacidad de inversión</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se trata de un sector con importantes <b>necesidades de inversión</b> con el fin de conseguir un servicio de <b>mayor calidad</b>, hacerlo más sostenible y <b>reducir la contaminación</b></li> <li>Es un sector que lastra un déficit de inversión de los últimos años. Las <b>necesidades identificadas ascienden a 2.500M€ anuales</b> durante los próximos 10 años</li> </ul>

AEAS-AGA

Junio 2020

Fuente: AEAS-AGA, Strategy&.

# CARLES NAVARRO VIGO



Ingeniero Químico por el Instituto Químico de Sarriá (IOS) y máster en Dirección de Marketing por la Escuela Superior de Administración de Empresas (ESADE), Carles Navarro es presidente electo de la Federación Empresarial de la Industria Química Española y Director General de BASF Española y responsable de las actividades del Grupo BASF en la Península Ibérica desde 2016.

Navarro se incorporó al Grupo BASF en 1989 ocupando diferentes cargos de responsabilidad en el ámbito técnico y comercial de BASF Española. En 2004 asume la Dirección General de poliuretanos en Turquía. En 2009 vuelve a España como Director comercial hasta que es nombrado en 2013 Presidente de BASF Canadá, volviendo a España nuevamente en 2016 ya como Director General de BASF Española.

Paralelamente, desde diciembre de 2018 es presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de CEOE, y desde el pasado año, asume también la presidencia del Salón Internacional Expoquimia, de Fira de Barcelona, el principal evento del sector químico en el Sur de Europa.



# REINDUSTRIALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN: RESILIENCIA Y DESAFÍOS DEL SECTOR QUÍMICO ESPAÑOL

Carles Navarro Vigo. Presidente de FEIQUE.

La situación que estamos viviendo, y que pocos fueron capaces de anticipar en su adecuada dimensión, está teniendo un impacto profundo y potencialmente duradero en nuestro sistema socio-económico e incluso político, para el que no hay precedentes en la etapa posterior a la II Guerra Mundial. Este excepcional contexto ha puesto de relieve importantes vulnerabilidades, pero también oportunidades y aprendizajes.

Lo que en un primer momento se miró desde la lejanía de Occidente y se malinterpretó, con no poca arrogancia, como un problema aislado y localizado, se transformó en tiempo récord en una pesadilla de alcance planetario. Una de las numerosas lecciones que nos ha dejado es que las pandemias pueden ser globales y, por tanto, no conocen fronteras, y afectan a todos los estratos sociales, sin distinción de nivel cultural, renta, o lugar de residencia.

Más allá de las preocupaciones más inmediatas como evitar millones de muertes, prevenir la propagación, garantizar las cadenas de suministro de bienes esenciales o apelar a la ciencia -tantas veces enviada al rincón del olvido presupuestario- para la búsqueda de soluciones, nos queda el desafío colosal de afrontar el día de después y de reconstruir sobre la base de no pocas incertidumbres y de cambios que probablemente hayan venido para quedarse en el ámbito social, pero también en el económico, productivo y laboral.

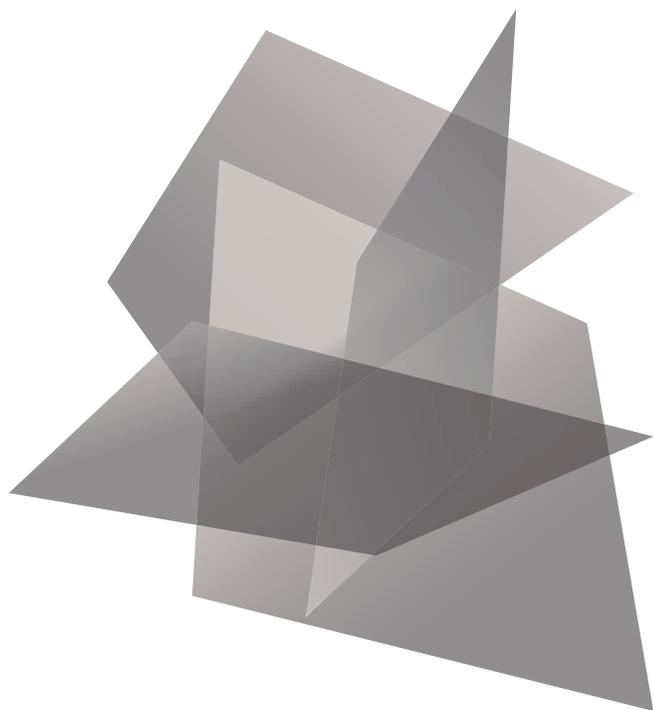
Hoy más que nunca hemos comprobado que la economía global en la que estamos sumergidos es compleja e interdependiente, y que la resiliencia o capacidad de adaptación de las empresas y sus operaciones productivas es y debe continuar siendo una prioridad.

El sector químico español (CNAES 20 y 21), una de las mayores industrias de este país, ha desarrollado un papel clave y, creo que ejemplar, en esta crisis al ser estratégico para la fabricación y suministro de productos y materiales esenciales para la salud y la alimentación.

Desde el inicio, el sector se ha volcado en aportar soluciones, re doblando volúmenes, priorizando la salud de las personas y readaptando incluso sus plantas de producción a la fabricación de productos y equipos necesarios para combatir la COVID-19. Productos cuya demanda se incrementó de manera exponencial, como en el caso del oxígeno medicinal para hacer frente a las insuficiencias respiratorias causadas por el virus.

Productos que van desde los gases industriales, los productos farmacéuticos, antisépticos o productos biocidas para la potabili-

El sector químico español, una de las mayores industrias de este país, ha desarrollado un papel clave y, creo que ejemplar, en esta crisis



zación del agua como el cloro o para la desinfección y limpieza como lejía o los hidrogeles, a las materias primas plásticas para fabricar jeringuillas, bolsas de suero, respiradores o productos hospitalarios o para envasar y embalar alimentos, y fibras sintéticas para la fabricación de EPIs, entre otros.

De esta forma, aunque el sector se ha visto afectado claramente por el desplome de dos de sus principales sectores demandantes como son la automoción y la construcción, ha logrado mantener entre el 85 y el 90% de su capacidad productiva activa incluso en el periodo de mayor endurecimiento de las condiciones para el desarrollo de la actividad económica general del país.

Por otra parte, esta crisis, de la que estamos extrayendo numerosos aprendizajes, si algo ha puesto de manifiesto es que la industria en su conjunto es y será un activo fundamental, no solo para la lucha en primera línea de ésta u otras posibles pandemias, sino también para la recuperación económica.

En el caso del sector químico, su peso específico como motor económico de España se traduce en la generación del 5,8% del PIB y del 3,5% del empleo de España, si sumamos los efectos indirectos. Con una cifra de negocios que asciende a 67.000 millones de euros de los cuales casi el 60% se realizan en mercados exteriores, el sector químico es el 2º mayor exportador de la economía española, justo detrás del automóvil.

Es un sector volcado en la innovación. De hecho, el año pasado dedicamos más de 2.800 millones de euros a I+D+i, lo que supone una cuarta parte del total de la inversión privada. La industria química es, además, un buen ejemplo de actividad industrial generadora de empleo de calidad puesto que proporciona empleo directo a 210.000 personas que llegan hasta casi a 700.000, si contamos los empleos directos e inducidos y el sueldo medio por trabajador asciende a 37.500 euros con un 93% de contratos indefinidos.

Se trata de un sector enormemente transversal que interviene prácticamente en todas las cadenas de valor de las industrias manufactureras. De hecho, el 90% de todo lo que se fabrica mediante un proceso industrial requiere de química, ya sea en el campo de la salud, del gran consumo, la movilidad, la construcción, la alimentación o la energía, por lo que nuestra demanda siempre es derivada.

Ha sido precisamente el shock en el que todos nos hemos visto sumergidos, con un comercio y sistemas de abastecimiento internacionales que se han visto colapsados y quebrados, el que ha llevado a poner, inesperadamente, el foco social y político sobre la industria en dos direcciones relacionadas entre sí: como proveedora, en el ámbito nacional, de materias primas estratégicas con las que responder con celeridad a la demanda de productos de primera necesidad ante una emergencia; y por otra parte, como mecanismo eficaz y solvente que conduce a la recuperación económica.

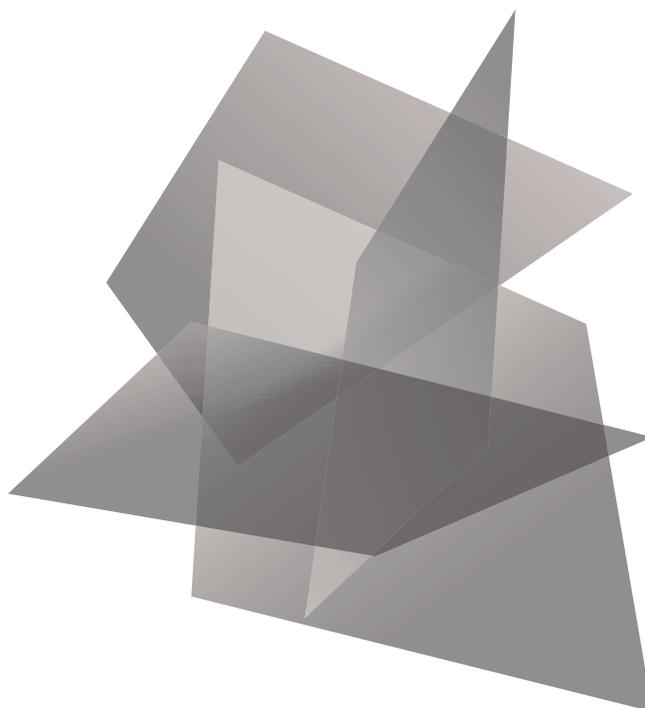
Por ello, en nuestra opinión, ahora más que nunca es necesario impulsar una política industrial eficaz que nos permita alcanzar el objetivo marcado por la Unión Europea del 20% en el peso del PIB, que proteja e impulse su competitividad para contribuir con todo su músculo a la reconstrucción social y económica, teniendo en cuenta su peso relevante en la creación de riqueza y empleo de alta calidad salarial, formativa y de estabilidad.

Con una cifra de negocios que asciende a 67.000 millones de euros de los cuales casi el 60% se realizan en mercados exteriores, el sector químico es el 2º mayor exportador de la economía española

Fijémonos en las tres comunidades autónomas españolas, Navarra Euskadi y La Rioja, que superan este listón. Su tasa de paro no llega al 10%, lo que, evidentemente, no es una coincidencia.

Esta política industrial debería construirse en torno a tres ejes estratégicos.

En primer lugar, dotar de capacidad de gobernanza al Ministerio de Industria ya que existen factores fundamentales para el desarrollo de la industria como son la energía, las infraestructuras logísticas del transporte, la innovación, la formación, que están diseminados por diferentes ministerios. Por eso sería muy eficaz que el Ministerio de Industria incorporara competencias esenciales en estos ámbitos, así como las partidas presupuestarias correspondientes, o bien en su defecto que existiera un órgano de coordinación liderado por este ministerio.





## Tenemos que aprovechar nuestro talento científico, que cuenta con el reconocimiento internacional de muchos de nuestros centros tecnológicos y equipos de investigación

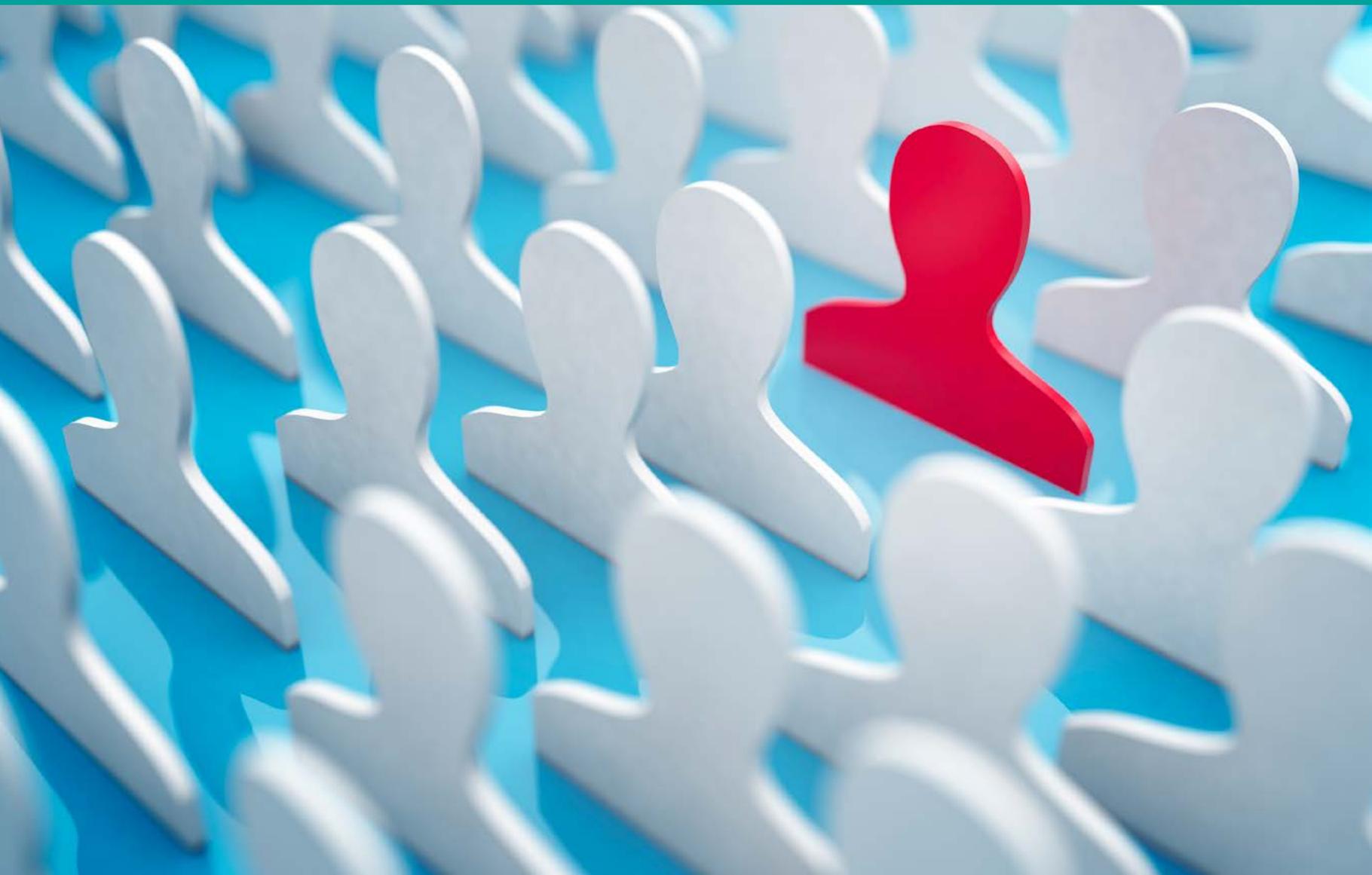
En segundo lugar, hay que mejorar urgentemente los factores de competitividad en los que sacamos peor nota que nuestros países competidores vecinos, como Francia, Bélgica o Alemania. El primero de ellos no es una sorpresa: la energía y sus costes no regulados, un hándicap que no hemos sabido resolver durante la última década a pesar de que España es una isla energética por falta de interconexión.

La realidad es que nuestras empresas electrointensivas, que en su mayoría producen materias primas estratégicas, compiten con precios finales entre 14 y 20 euros por megavatio hora superiores

a los de Francia o Alemania. Por ello es tan importante el Estatuto de Consumidores Electrointensivos que está previsto que vea la luz antes de final de año. Se trata de un instrumento que en Francia o Alemania permite hasta el 85% de reducción de los peajes.

El borrador actual del ministerio nos permite estimar un ahorro de solo medio euro por megavatio hora para grandes consumidores y algo más para consumidores medianos, lo que resulta insuficiente, aunque confiamos en que, una vez restablecida la herramienta, esta pueda mejorarse en un futuro próximo. También es indispensable el reglamento pendiente para la formalización de las redes cerradas de distribución eléctrica, que, sin aportar grandes ahorros para las redes ya existentes, sí servirá para desbloquear y facilitar la inversión en nuevas plantas.

Finalmente, el tercer caballo de batalla es el transporte. Por un lado, hay que celebrar que el Plan de Impulso del Automóvil anunciado por el Gobierno incluya el incremento de la masa máxima autorizada de 40 a 44 toneladas para transporte de mercancías por carretera ya que, con ello, eliminamos la desventaja frente a otros operadores europeos y podremos ahorrar hasta 300.000 toneladas anuales de CO<sub>2</sub>. Por otro lado, seguimos retrasados en la adopción del transporte de mercancías por ferrocarril, que hoy supone apenas el 4% del total frente al 24% de Alemania o el 18% de media en la Unión Europea.



Parte del problema es que no hemos sabido resolver la dificultad de concluir las infraestructuras esenciales como el Corredor Mediterráneo, que debía estar listo en 2015. A día de hoy, el compromiso es que por fin en 2022 los polígonos químicos de Tarragona, los más importantes del Mediterráneo, y de donde sale el 25% de la producción química del país, queden conectados por ancho internacional a Europa, y recordemos que transportar productos químicos por ferrocarril es más eficiente en coste, es más seguro y mucho más sostenible en términos de emisiones.

Y, por último, debemos creernos de verdad que la innovación y la transferencia tecnológica son auténticas palancas del desarrollo competitivo. Tenemos que aprovechar nuestro talento científico, que cuenta con el reconocimiento internacional de muchos de nuestros centros tecnológicos y equipos de investigación. Asimismo, es vital que una parte importante de este talento se ponga al servicio de los retos de la industria, de forma que universidad e industria produzcan conjuntamente soluciones útiles para la sociedad, además de publicaciones y patentes.

Los tres campos de innovación de la década que empezamos giran en torno a la sostenibilidad, economía circular y digitalización, y es que el futuro será sostenible o no será. Para que el planeta sobreviva, es necesario descarbonizar nuestras actividades, un reto para el que la industria química vislumbra hoy ya soluciones que lo van a cambiarlo todo. Por ejemplo, el almacenamiento de energía mediante baterías de alta eficiencia con mayor densidad de carga, alta velocidad de recarga y duración mucho mayor que las actuales baterías de litio. O el incremento de eficiencia de las energías renovables, especialmente de la fotovoltaica, y la movilidad basada en hidrógeno verde, sin olvidar los materiales para la fabricación aditiva, también conocida como impresión 3D, que van a revolucionar la gestión de stocks mediante la producción distribuida y a demanda.

En este caso, consideramos esencial que se legisle bajo el principio de neutralidad tecnológica sin posicionamientos a favor o en contra de nuevas tecnologías para así darle la oportunidad al mercado de decidir lo que al final es más eficiente.

En el campo de la economía circular y dados los límites del reciclado mecánico, debemos impulsar de forma decidida el reciclado químico, que permite obtener de nuevo materias primas a partir de residuos plásticos sucios o mezclados. El potencial es aprovechar hasta 2,5 millones de toneladas de residuos plásticos que en España terminan cada año en la incineradora, en el vertedero, o en el peor de los casos, en nuestros ríos y mares. En este sentido, es fundamental que la Administración dé los pasos necesarios para que el reciclado químico sea considerado reciclaje a todos los efectos legales.

Por lo que respecta a la digitalización, hay que trabajar intensamente en el desarrollo de modelos industriales 4.0. En la industria química, donde nuestras inversiones se planean con ciclos de maduración muy largos y horizontes de hasta 30 años de vida útil, necesitamos sensorizar cuanto antes nuestras plantas para poder generar datos que mediante tecnología de inteligencia artificial nos permita ser más seguros, más eficientes y más productivos. La premisa fundamental de este caso son las redes 5G, que están en fase de despliegue, un despliegue que la Administración debe acompañar y favorecer.

## Es fundamental que la Administración dé los pasos necesarios para que el reciclado químico sea considerado reciclaje a todos los efectos legales

Es evidente que la industria química es clave para la recuperación económica, por lo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que lo que es bueno para la industria en general es bueno también para la industria química, y a su vez, lo que favorece a la industria química acaba siendo beneficioso para la industria en su conjunto.

Pero necesitamos que los factores de competitividad exógenos, aquellos que no dependen de las decisiones empresariales, se configuren de manera coordinada y sitúen a este sector, y a la industria en su conjunto, como foco preferente en atracción de inversiones.

La industria química española fue ya un poderoso agente de recuperación económica durante la crisis del 2009. Supimos reinventarnos a través de la flexibilidad, la innovación y la exportación. Con el apoyo adecuado, nuestro sector está preparado para seguir siendo motor de la economía de este país. A cambio, tendremos empleo estable y de calidad, un país con una economía sólida y toda la calidad de vida que la industria química es capaz de producir para el bienestar de la sociedad presente y futura. •

# N Ú Ñ E Z F E I J Ó O A L B E R T O

Nació en Ourense en septiembre de 1961. Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, posee el diploma de directivos de la Xunta de Galicia y es funcionario de la Administración autonómica, donde ingresó en 1985 como miembro del Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta.

En julio de 1991 fue nombrado secretario general técnico de la Consellería de Agricultura, Gandería e Montes y accedió, tres meses más tarde, a la Consellería de Sanidade e Servizos Sociais, para desempeñar hasta 1996 el cargo de secretario general. Desde 1992 a 1996 ejerció el cargo de vicepresidente y secretario general del Servizo Galego de Saúde.

Posteriormente, en el año 1996 y hasta el año 2000, ocupó los cargos de secretario general de Asistencia Sanitaria en el Ministerio de Sanidad y Consumo y fue presidente del Insalud.

Entre mayo del 2000 y junio del 2001 ejerció de consejero-director general de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos y, desde junio del 2001 hasta enero de 2003, fue presidente de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A.

Accedió al cargo de consejero de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda el 18 de enero de 2003, y fue nombrado vicepresidente primero de la Xunta de Galicia el 10 de septiembre de 2004. En octubre de 2003 fue distinguido con la Gran Cruz de Isabel la Católica. Desde el 18 de abril de 2009 es presidente de la Xunta de Galicia.



# POR UNA POLÍTICA A LA ALTURA DE LA RESPONSABILIDAD DE LA CIUDADANÍA

Alberto Núñez Feijóo. Presidente de la Xunta de Galicia.

Una sociedad no es cien por cien consciente de su fortaleza hasta que se tiene que enfrentar a situaciones límite, en las que los pequeños compromisos individuales se convierten en una gran fuerza colectiva. Probablemente sería preferible no tener que ser conscientes de esa gran fortaleza, pues querría decir que las sociedades y, por lo tanto, las personas que las conformamos, no tendríamos que encarar situaciones límite, desafíos que sin duda nos hacen reflexionar y, sobre todo, nos hacen darnos cuenta de nuestras verdaderas prioridades. Esto lo hemos vivido y lo seguimos viviendo con la crisis de la covid-19.

Resulta imprescindible en un momento como este poner de relevancia la capacidad de nuestra sociedad para hacer frente a un virus que se adentró en nuestra vida, en nuestro entorno social y en nuestra economía. Y por eso mismo es necesario reconocer el trabajo conjunto desarrollado en los últimos meses y el esfuerzo de toda la ciudadanía. Personas que viven solas, parejas y familias separadas, familias afectadas directamente por la entrada de este virus que lo paró todo, y familias que, lamentablemente, no han podido despedirse de sus seres queridos. Ha sido una situación muy dura, todos somos conscientes del impacto que ha tenido esta pandemia en cada persona de forma individual y en cada familia, sobre todo en las más vulnerables.

Esta fuerza colectiva que ha demostrado la sociedad española, y que yo he vivido y sentido en la sociedad gallega, se ha construido

Resulta imprescindible en un momento como este poner de relevancia la capacidad de nuestra sociedad para hacer frente a un virus que se adentró en nuestra vida, en nuestro entorno social y en nuestra economía

sobre los cimientos de los miles de trabajadores que han puesto todo su esfuerzo, compromiso y empeño en su trabajo. Primero, para salvar a miles de personas y, a continuación, para cuidar y proteger a toda una ciudadanía desde la primera línea de la pandemia. Todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, en todas las categorías, que dieron y siguen dando la mejor respuesta. El personal de las residencias de mayores y personas con discapacidad, que protegieron y cuidaron a estos colectivos tan vulnerables a esta crisis. En el momento de mayor presión y estrés asistencial de nuestra historia, y permítanme que hable de forma particular refiriéndome al caso de Galicia, demostraron la fortaleza de nuestra Sanidad Pública y de nuestros servicios sociales, ejercieron con profesionalidad, pero también con corazón.

En esos cimientos también ha sido imprescindible la labor de los profesionales que vigilaron que nos protegiésemos cumpliendo las restricciones impuestas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad el Estado y el Ejército. Y cada uno de los trabajadores de los servicios y las industrias esenciales que han sostenido el país y los hogares, posibilitando que en cada uno de ellos pudiesen entrar alimentos o medicamentos, y que siguiésemos teniendo otros bienes básicos como agua o luz.

Si algo ha demostrado esta crisis sanitaria es la fuerte responsabilidad de la ciudadanía española. Los españoles nos hemos convertido en ejemplo responsabilidad y solidaridad. La gran mayoría de los ciudadanos fueron conscientes de cómo las medidas extraordinarias aprobadas de urgencia por los gobiernos autonómicos y Gobierno central no tendrían ningún efecto sin su respaldo real. Hemos estado, sin ninguna duda, ante la mayor muestra de una ciudadanía responsable. Más de 47 millones de personas hemos sido conscientes de que todos y cada uno jugábamos un papel indispensable para conseguir salir de esta crisis, y así lo hemos hecho.

Esta pandemia ha puesto de relevancia que gobierno y partidos políticos podemos y debemos trabajar con amplitud de miras. Tenemos esta obligación, pues los españoles, y en mi caso los gallegos, nos han elegido para representarlos, para tomar decisiones y para poner en marcha más que nunca políticas de Estado. Por eso, en un momento crucial como el que estamos viviendo, no podemos fallar: está en juego el futuro de millones de personas. Nos encontramos saliendo de una pandemia sanitaria y debemos de poner todos los medios para evitar entrar en una pandemia económica y social, un hecho que solo será posible con la puesta en marcha de políticas focalizadas, centradas en la recuperación y la creación del empleo y, de forma especial en la creación de programas para la inyección de liquidez a pequeñas y medianas empresas y autónomos. En definitiva, los gobiernos tenemos que contar con el conocimiento y la experiencia de los mejores profesionales, con los que crear la hoja de ruta para reactivar la vida laboral y familiar de todos los españoles.

Esto lo hemos tenido claro en Galicia desde el minuto uno. Manteniendo un diálogo constante con todos los partidos políticos gallegos; constituyendo un Comité Clínico de Expertos Sanitarios para establecer cada uno de los protocolos de actuación; y poniendo en marcha el Comité de Expertos Económicos de Galicia, formado por profesionales de referencia. Este comité trabajó de forma independiente y desinteresada en la elaboración de una diagnosis detallada de la situación de Galicia tras la crisis de la covid-19 para, posteriormente, plasmar sus propuestas en cuatro ámbitos: la liquidez, las relaciones laborales, la solvencia para las empresas y las actividades económicas. En definitiva, cuatro documentos que fueron puestos a disposición del diálogo social y del Gobierno central

Si algo ha demostrado esta crisis sanitaria es la fuerte responsabilidad de la ciudadanía española



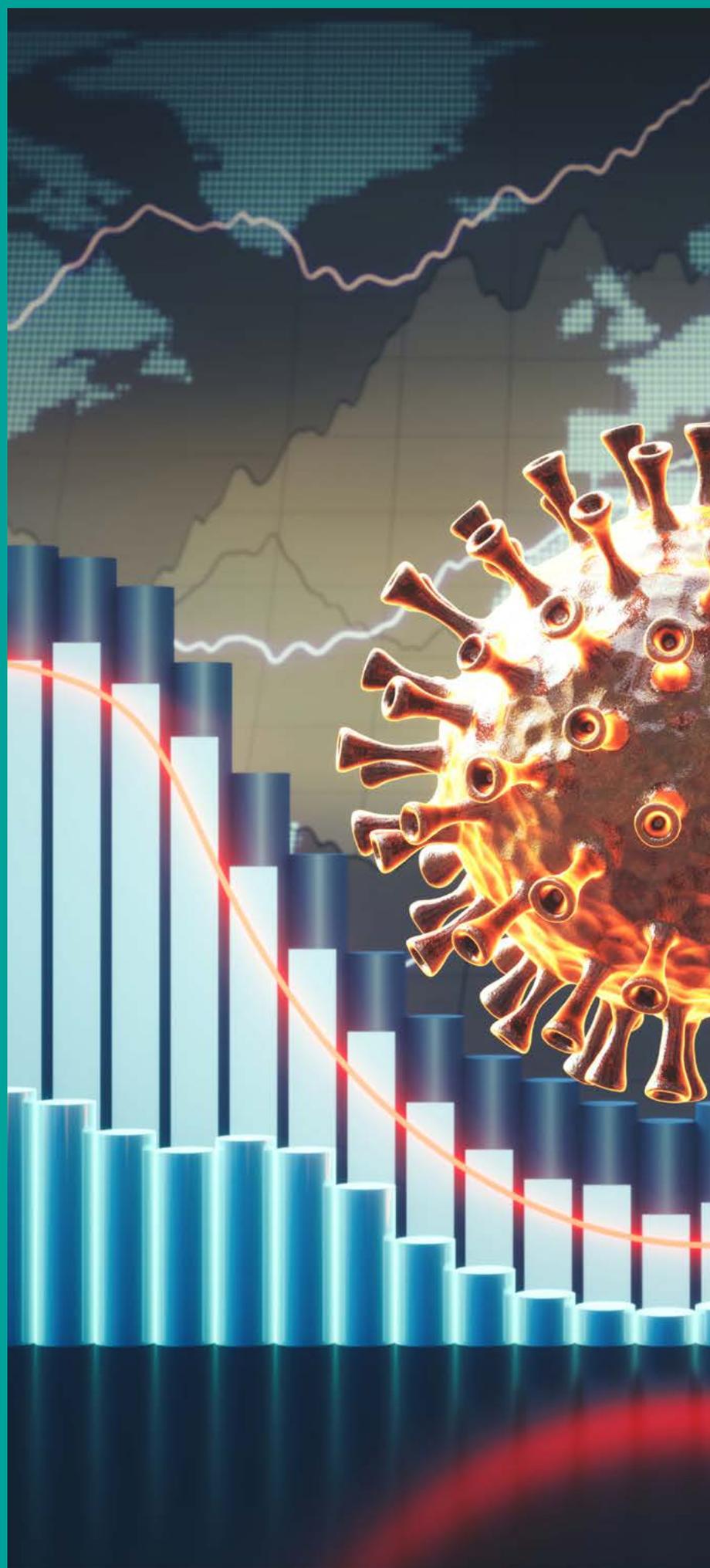
desde el primer momento, y que se han convertido en la base para la construcción de la estrategia de reactivación económica y social de Galicia.

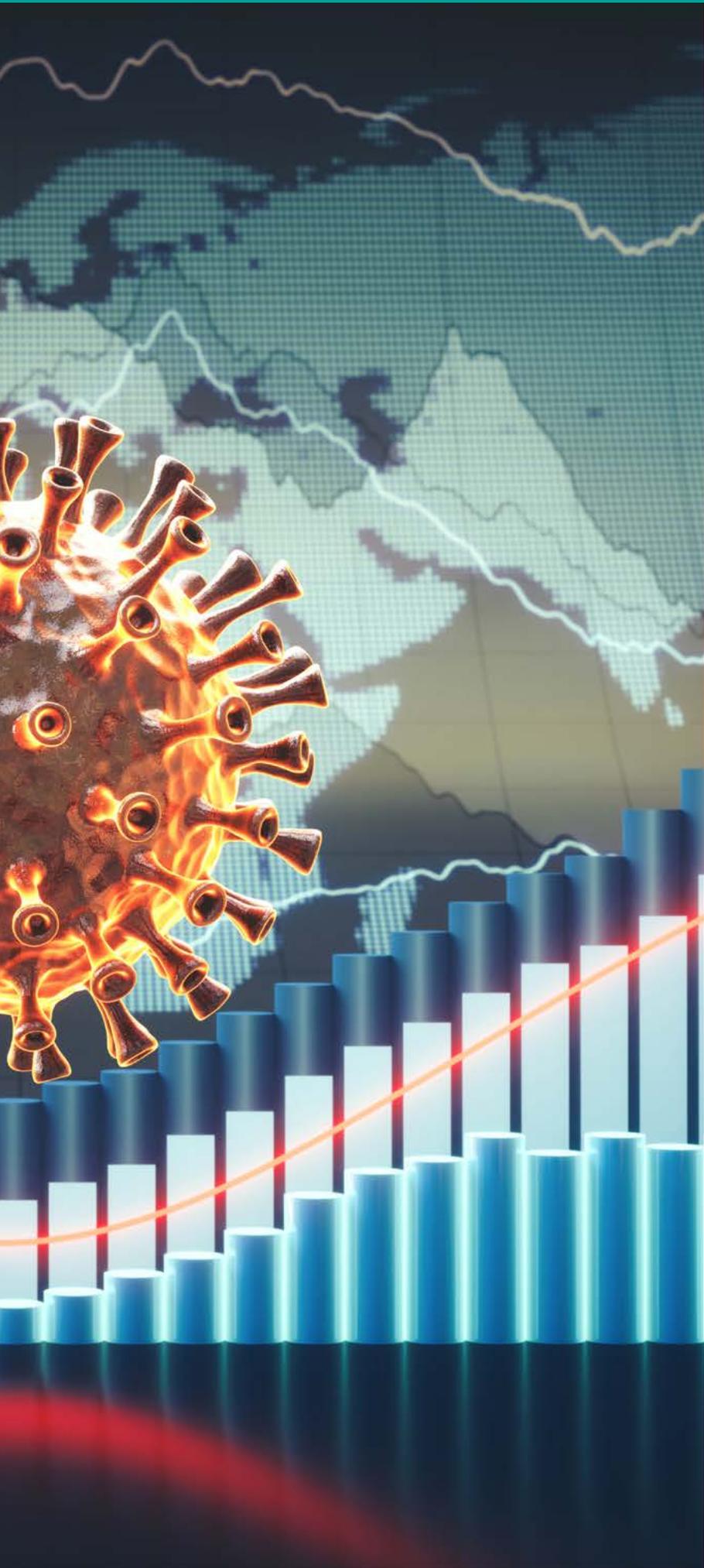
Y es que, ante este nuevo paradigma, los gobiernos no podemos tener otra prioridad que la puesta en marcha de políticas que tengan como fin reactivar la vida social, el empleo y todos los sectores de nuestra economía. Unas políticas que no se pueden desarrollar bajo otro prisma que no sea el de la responsabilidad. Responsabilidad con todas y cada una de las familias que han sufrido por las decisiones urgentes que se han tenido que tomar para la contención de la pandemia. Responsabilidad con las empresas, pymes y autónomos, que han tenido que paralizar por completo su actividad y, por lo tanto, sus ingresos. No tenemos otra opción que devolverle a esa ciudadanía responsable políticas responsables con las que paliar y activar la sociedad y, sobre todo y más importante, con políticas que no dejen atrás a ninguna persona ni a ninguno de los sectores de nuestra economía.

Debemos poner en marcha políticas que unan, y que no dividan; políticas que creen oportunidades, y no incertezas. Decisiones y medidas en tiempo y forma, y con las que seamos capaces de salir lo antes posible de esta crisis. Para ello solo es posible practicar una política eficaz y comprometida con el empleo y con los retos a los que nos enfrentamos: la reactivación social, laboral y económica de las familias y empresas.

Por todo esto, durante la crisis sanitaria desde el Gobierno gallego hemos trabajado en una doble vía: salvaguardar la seguridad y la salud de las personas y minimizar el impacto de la crisis en el conjunto del tejido empresarial para encaminar así la recuperación. En este sentido, en Galicia estamos convencidos de que la anticipación es imprescindible en un momento como el que hemos vivido y como el que viviremos los próximos meses e incluso años. Nos anticipamos con muchas medidas sanitarias, de provisión y de compra de material, pero también con medidas en el ámbito de la economía. Así, en las primeras semanas del estado de alarma, pusimos a disposición de pymes y autónomos gallegos 250 millones de euros, una línea destinada a garantizar la liquidez del tejido productivo. Además, fuimos una de las dos primeras comunidades en poner a disposición de los trabajadores gallegos acogidos a los ERTE que no hubiesen cobrado las prestaciones por desempleo del Gobierno central, dos anticipos de nómina de 750 euros cada mes, ambos libres de intereses. Al mismo tiempo, pusimos en marcha ayudas complementarias por valor de 8 millones de euros para las prestaciones de menor cuantía de trabajadores afectado por ERTE y para mayores de 55 años que hayan perdido su empleo. Además, en todas estas medidas la Xunta de Galicia se hace cargo de los intereses de las operaciones, convirtiéndonos en la única comunidad que no cobra interés en los préstamos que avala al 100% con cuatro años y un año de carencia. Fuimos también la primera comunidad en inyectar con una línea de tesorería 1.800 millones de euros a la Hacienda Pública Autonómica para que siguiese pagando las facturas durante la crisis de la covid-19 en 15 días de media, y también la primera en reactivar los contratos de obra pública, los de servicios y suministros, las transferencias corrientes y las subvenciones en el ámbito del presupuesto autonómico.

Otra de las primeras decisiones tomadas al inicio de la crisis de la covid-19 fue el aplazamiento de los impuestos autonómicos, un aplazamiento que hemos ampliado hasta el 1 de noviembre. Este es un hecho que cobra especial relevancia, pues beneficiará de forma directa a más de 32.000 familias gallegas y con lo que la





## Desde el Gobierno gallego hemos trabajado en una doble vía: salvaguardar la seguridad y la salud de las personas y minimizar el impacto de la crisis en el conjunto del tejido empresarial

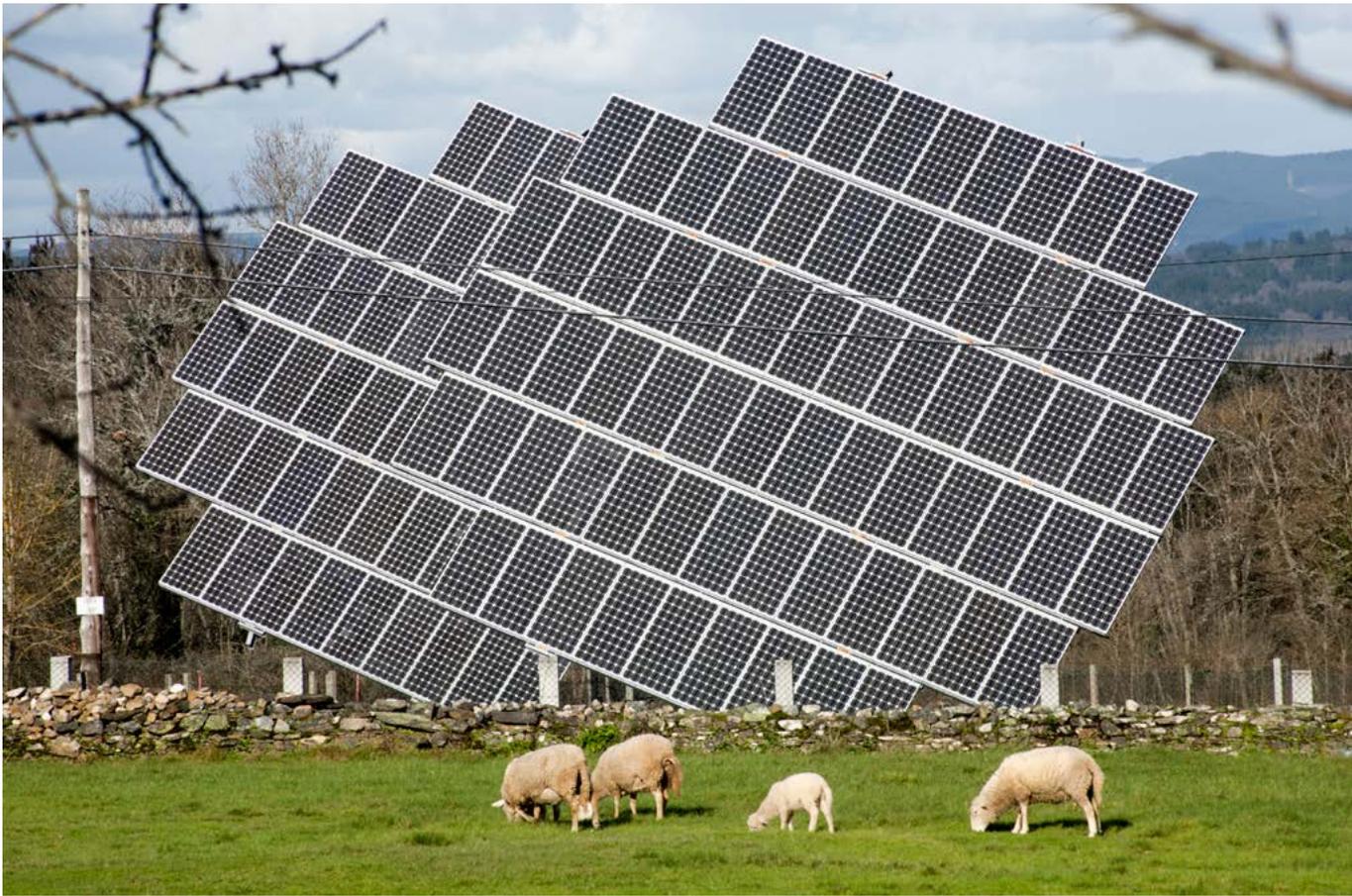
Hacienda gallega deja de ingresar 35 millones de euros cada mes a través del Impuesto Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y los tributos del juego.

Galicia es consciente de las dificultades que está atravesando el tejido industrial, y por eso mismo es imprescindible que contemos con un proceso de reactivación de la actividad económica seguro, gradual y conocido en el tiempo, que proteja a las familias y a los trabajadores, que dé un horizonte a los diferentes sectores económicos y que cuente con la colaboración del resto de las administraciones y agentes económicos y sociales. De esta forma, desde las administraciones públicas debemos hacer un especial esfuerzo en garantizar la liquidez de las empresas a corto plazo y garantizar su viabilidad a medio y largo plazo. Para esto último hemos puesto en marcha el Plan de digitalización con lo que prevemos la movilización de 40 millones para abrir nuevas oportunidades comerciales, autónomos y pymes a través de las nuevas tecnologías.

En definitiva, para alcanzar este objetivo es preciso que todos caminemos en la misma dirección evitando incertezas e inseguridades. Y, sobre todo, aportando mayores garantías al tejido empresarial, como una mayor flexibilidad en lo que se refiere a los ERTE para los sectores productivos más afectados.

Y es que el compromiso con el empleo y compromiso con una reactivación de la economía gradual y segura no es compatible con darle la espalda a industrias claves para la economía gallega. Galicia lo está padeciendo de forma abrupta con la industria electrointensiva, con el caso concreto de Alcoa: el futuro de miles de familias gallegas de A Mariña lucense y de comarcas limítrofes está en peligro. Hablamos de 5.000 empleos directos que penden de un hilo por falta de una política energética por parte del Gobierno de España. Galicia necesita que el Gobierno diga si quiere que España continúe produciendo aluminio o, por el contrario, prefiere dejar caer una industria clave para nuestra economía y convertirnos en un importador más de este material. Los diferentes acontecimientos que se han ido transcurriendo desde el año 2018 ponen de manifiesto que el Gobierno central no ha querido asumir su responsabilidad de fijar un precio eléctrico estable. Un precio clave para que empresas como Alcoa puedan competir en igualdad con el resto de Europa, para permitir la continuidad de la producción de aluminio primario y para garantizar el mantenimiento de los empleos.

Galicia y España siguen sin conocer el borrador del Estatuto para los consumidores electrointensivos que el Gobierno lleva prometiendo desde hace más de un año y medio; tampoco concretó si



aceptará las alegaciones realizadas por Galicia, Asturias y Cantabria a un documento que no da respuestas a las necesidades reales de esta industria. No ha aclarado tampoco si convocará la puja de interrumpibilidad para el resto del año, después de que la del primer semestre de 2020 haya sido la más escasa de la historia; y tampoco ha aclarado si establecerá el presupuesto máximo que permite la Unión Europea para las compensaciones por emisión de CO<sub>2</sub>, alrededor de 275 millones de euros, después de que solo hubiese habilitado una partida insuficiente de 6 millones de euros.

La falta de política industrial también tiene efecto directo en la industria energética. Galicia, como no podría ser de otra forma, defiende una transición energética, la apuesta por las renovables y las tecnologías más limpias. En este sentido, Galicia es hoy un referente europeo en sostenibilidad económica y ambiental, a la vez que somos la Comunidad Autónoma de España más avanzada en la puesta en marcha de herramientas para luchar contra el cambio climático, garantizar la correcta gestión de los residuos y desarrollar un mejor aprovechamiento de nuestros recursos. Para nuestra Comunidad el año 2019 fue clave para definir y dar un impulso definitivo a la hoja de ruta desarrollada para garantizar el crecimiento sostenible y respetuoso con el entorno y el medio ambiente. Para ello aprobamos y pusimos en marcha la Estrategia gallega de cambio climático y energía 2050, la Estrategia gallega de economía circular 2020-2030 y desarrollamos el anteproyecto de la Ley de residuos y suelos contaminados, pendiente de su aprobación en el Parlamento gallego. Todo esto pone de relevancia el compromiso indiscutible de la Xunta de Galicia ante los retos globales en materia de sostenibilidad para trabajar en una España y por una Galicia más verde.

Y es que industria y medio ambiente son compatibles, y por eso Galicia defiende una transición justa y ordenada, que garantice la

suministración de energía a los hogares y al tejido industrial. Porque el compromiso con el empleo resulta también incompatible con la difusión de mensajes tan trascendentales como el de poner fin a las centrales térmicas, pero sin aclarar cómo. Con este tipo de afirmaciones pasamos de una transición justa a una transición caótica, sin alternativas, generando incertezas sobre el futuro de esta industria y poniendo en peligro miles de empleos. Por eso el Gobierno de España debe rectificar su postura con respecto a las industrias energéticas y volver a la senda del diálogo para defender el empleo y la actividad económica en Galicia.

El caso de la central térmica de Meirama (Cerdeja) es un buen ejemplo. El Gobierno y la empresa deben activar un verdadero

Galicia es hoy un referente europeo en sostenibilidad económica y ambiental, a la vez que somos la Comunidad Autónoma de España más avanzada en la puesta en marcha de herramientas para luchar contra el cambio climático

proyecto industrial para esta comarca, comprometiéndose con Galicia y con esta comarca en particular. De la misma forma que el Gobierno debe rectificar con sus decisiones sobre la térmica de As Pontes, aprendiendo de los errores cometidos en Meirama, y exigiendo a la empresa que asuma sus compromisos. Es necesaria la reactivación inmediata de la planta mientras se buscan alternativas que substituyan el carbón por biocombustibles. En este sentido, la Xunta será un aliado del Gobierno si centra sus esfuerzos en lo que más importa: pensar en los vecinos de las comarcas afectadas con medidas como la aprobación de mecanismos fiscales y la reclamación de más fondos a la Unión Europea, teniendo en cuenta que España solo recibirá el 4% del total, 307 millones de euros.

Otro de los sectores estratégicos de la economía gallega es la automoción. Galicia es un referente internacional de la industria de la automoción gracias a la capacidad de la planta de PSA en Vigo y de las empresas auxiliares para hacer de la innovación su señal de identidad. El objetivo del Gobierno gallego es consolidar esta fábrica como la más competitiva del grupo, colaborando en iniciativas como la electrificación del Proyecto K9, con 5 millones de euros, con la finalidad de que esta planta siga teniendo una importante carga de trabajo y, por tanto, manteniendo y creando más empleos. Debemos seguir mirando al futuro para que Galicia vuelva a ser un referente en futuros proyectos de la compañía, y por esto mismo si el Gobierno central está comprometido con el empleo, debe generar estabilidad y confianza al tejido empresarial y a los consumidores. Es imprescindible que concrete cuál es su plan para atender a las necesidades que reclama el sector y frenar la caída de ventas, estimulando la demanda y favoreciendo la renovación del parque móvil a través de incentivos para la venta de vehículos.

En esta línea, al igual que Vigo es referente para la industria de la automoción, también lo es, junto a Ferrol, para el naval. La construcción de un buque de aprovisionamiento en Ferrol permitiría garantizar a corto y medio plazo el futuro de los trabajadores de Navantia y de la empresa auxiliar. El Gobierno central no puede romper los compromisos adquiridos con Galicia, porque Galicia no puede aceptar que la comarca de Ferrol se quede sin carga de trabajo durante, al menos, dos años hasta que dé comienzo la construcción de las fragatas F-110, y sin la inversión necesaria para la transformación de Navantia en un Astillero 4.0. A la vez que prometió carga de trabajo en Ferrol para cubrir el vacío industrial que supone tener paralizados los astilleros los próximos dos años, el Gobierno prometió también que las fragatas empezarán a construirse lo antes posible. La realidad es que tuvimos que esperar diez meses para que desbloqueasen un contrato y que, por el momento, su construcción sigue siendo incierta.

En definitiva, en Galicia hemos vivido estos último once años en primera persona cómo la estabilidad en la política implica una mayor seguridad para todo el tejido económico. De hecho, Galicia es la segunda comunidad en dónde más creció la riqueza por habitante durante los últimos diez años, alcanzando su mayor nivel de convergencia con España, el 90,1%, al tiempo que la segunda comunidad con mejor evolución en términos de convergencia con Europa en el mismo período. Estos dos datos ponen de manifiesto

que nuestra Comunidad apostaba por la estabilidad política y económica antes de la crisis de la covid-19 y, en este sentido, y teniendo en cuenta este nuevo contexto, seguirá buscándola.

Hoy, ante un momento crucial para la sociedad española, es imprescindible que todos los gobiernos y sectores económicos caminemos en la misma dirección. Debemos evitar crear incertezas e inseguridades, porque la ciudadanía no necesita hacerse más preguntas, necesita respuestas. Y una de las respuestas que ha dado nuestra Comunidad es la aprobación del Plan de reactivación y dinamización de Galicia dotado con 3.041 millones de euros para reactivar los sectores más afectados por la pandemia y fortalecer la sanidad, los servicios sociales y el sistema educativo. Un plan que responde a las propuestas realizadas por el Comité de Expertos Económicos de Galicia, y con el que desde la Xunta de Galicia marcamos nuestra prioridades, tendencias y políticas. Queremos que nuestra Comunidad entre lo antes posible en la fase de recuperación económica, porque es la única forma que tenemos en nuestro alcance para contener el impacto en trabajadores, familias y empresas.

En ese sentido, siguiendo el objetivo de la reactivación económica tras la pandemia, Galicia ha presentado ya los tres primeros proyectos tructores que se basarán en la tecnología, la biodiversidad y la economía circular y verde. El primero de ellos se trata de la generación de hidrógeno verde a partir de fuentes renovables, una iniciativa que convertirá a Galicia en un referente en el ámbito de la transición ecológica y aprovechar el incremento de generación de renovables en el horizonte 2030. El segundo supondrá la puesta en marcha de un centro para el impulso de la economía circular para asegurar este principio en la gestión de residuos para su transformación y valorización. Y el tercero, la creación de un centro de fabricación de fibras textiles a partir de madera para impulsar una gestión sostenible de los bosques y la biodiversidad forestal, cerrando así el círculo del aprovechamiento de la madera. En definitiva, tres iniciativas claves en un momento como este para movilizar la inversión, la innovación y el empleo por ser proyectos viables, con demanda y que además entran dentro del Pacto verde europeo. Europa necesita proyectos maduros, competitivos y planificados, y nuestra Comunidad los tiene ya en marcha.

Galicia encara esta nueva etapa con un presupuesto en vigor, con el déficit público controlado, con una ratio de endeudamiento inferior al promedio autonómico y habiendo cerrado el primer trimestre de 2020 siendo la comunidad con el menor período medio de pago a los proveedores, tal como indican los datos oficiales del Ministerio de Hacienda.

Y es que debemos ofrecer garantías a todo el tejido empresarial, pues es el mismo que ha sabido estar a la altura durante esta pandemia, reconvirtiendo su producción, apostando por la innovación y aportando recursos. Debemos ofrecer apoyo a las familias, con medidas de conciliación y con recursos económicos. Galicia seguirá estando a la altura, y por eso mismo el Plan de Reactivación y Dinamización de Galicia no dejará a nadie atrás, porque debemos poner en marcha políticas responsables para una ciudadanía que ha demostrado ser responsable. Y Galicia, sin duda, así lo ha hecho y así lo hará. •

# C À N D I D P E N A L B A P E I R Ó

Càndid Penalba Peiró, es presidente del Consejo Intertextil Español (CIE), una organización empresarial de coordinación y representación formada por las principales asociaciones y federaciones empresariales del sector téxtil español. Es presidente también de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL).

Nació en Albaida (Valencia) y es licenciado en Economía y Administración y Dirección de empresas por la Universidad de Valencia. Realizó el MBA Master Business Administration en la Universidad de Dallas (EEUU).

Ha desarrollado su carrera profesional en distintas empresas como Banco Santander, NCR Corporation, Penalba Soler S.A y en su propia empresa Cotoblau S.A que fundó en 2002 y que dirige hasta la actualidad. Ha compaginado su actividad empresarial con otros cargos y responsabilidades: En 2018 entra en el Pleno de Cámara Valencia como representante del Subgrupo del Textil, dentro del Grupo de Industria Manufacturera y es elegido presidente de ATEVAL (Comunidad Valenciana) y Vicepresidente del Consejo Intertextil Español. Es miembro del Comité Ejecutivo de CONFEINDUSTRIA, miembro de la Junta General de la CEOE y actualmente es el Representante Español en la Patronal Textil Europea (EURATEX).



# CLAVES ACTUALES Y DE FUTURO PARA EL TEXTIL ESPAÑOL

Cándid Penalba Peiró. Presidente del Consejo Intertextil Español.

## La hora de la formación

La crisis generada por el COVID19 ha determinado que muchas de las empresas textiles de nuestro país hayan tenido que cerrar, que otras muchas hayan puesto en marcha ERTes hasta ver de qué manera se desarrollan las cosas y que, solo unas pocas, hayan reconvertido su producción dirigiéndola hacia el sector sanitario que ha demostrado ser, en estos momentos, un sector clave para el mantenimiento de la producción industrial textil.

El sector ya ha pasado por crisis profundas en otros momentos de la historia reciente que desencadenaron la descentralización de la producción industrial en el continente asiático con el consiguiente desmantelamiento, de manera casi absoluta, del tejido productivo del sector textil. Pero parece que la crisis actual es más profunda y, sobre todo, más incierta porque no acabamos de saber ni cuánto durará ni de qué forma nos afectará en el futuro. Lo único que sabemos es que, si somos capaces de convertir la amenaza que supone la crisis en oportunidad, podremos salir airosos en esta nueva normalidad. «Es en las crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias». Albert Einstein.

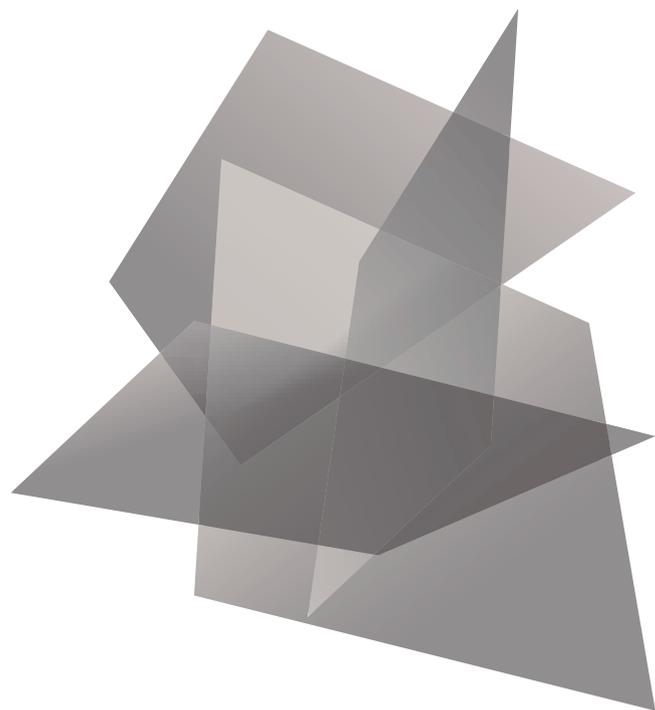
A mi modo de ver, la amenaza actual reside en la paralización de la demanda y, en este paréntesis de bajada productiva, la oportunidad está en la formación. Debemos ser conscientes, más que nunca, de que sin formación no habrá futuro. Es la hora de la formación.

Son muchos los retos que tiene la **industria administración** en estos momentos: la automatización, la digitalización, la economía circular, la internacionalización, la innovación, ... pero independientemente de todo esto y, dado que aún muchos ciudadanos van a percibir la renta mínima vital, la administración debe procurar que estas personas inviertan su tiempo en mejorar su cualificación profesional. La administración debe apostar por las personas y por la formación, tanto de desempleados como de ocupados, para posibilitar su cualificación, su actualización y su especialización con el objetivo de que estén preparados para cuando se reinicie la nueva normalidad.

Por desgracia, el desempleo se prevé que pueda llegar a aumentar hasta el 20% en los próximos meses por lo que la administración debe ser capaz de proponer planes de formación y de cualificación profesional absolutamente exigentes en todo el territorio ya que, si no es así, no vamos a ser capaces de ser competitivos en el futuro inmediato. Si un país quiere ser competitivo debe apostar por la formación de las personas.

El confinamiento nos ha demostrado que, en pocas semanas, se ha generado en este país una estructura de telecomunicaciones que ha permitido que los más jóvenes pudieran seguir el curso *on*

Si somos capaces de convertir la amenaza que supone la crisis en oportunidad, podremos salir airosos en esta nueva normalidad



## El sector Textil tiene que hacer frente a nuevos retos y echar mano de todo su potencial para conectar mucho mejor con los consumidores

*line* con sus profesores, que la universidad habilitara campus virtuales para continuar con sus clases, que los centros de formación se reinventaran hacia las aulas virtuales y que las empresas utilizaran, casi por primera vez, aplicaciones informáticas para poder realizar sus reuniones virtuales. Esto nos demuestra que nuestra sociedad puede adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes del entorno y que la administración debe, simplemente, posibilitar el cambio. La sociedad está preparada y los agentes sociales deben ser los vehículos que exijan a la administración la aplicación inmediata y adecuada de las políticas activas de empleo y formación.

### Internacionalización y promoción comercial como motor del sector

El sector Textil representa uno de los motores de la Economía Española. Se trata de un sector fuerte y competitivo que ha sabido posicionarse a nivel nacional e internacional a través de los distintos canales de distribución como son las grandes cadenas, los grandes almacenes, las tiendas multimarca y la venta online. Además de colaborar muy estrechamente con otros *partners* fundamentales como son los distribuidores, agentes comerciales y prescriptores que facilitan la comercialización de prendas confeccionadas como de otros artículos textiles destinados a otras industrias afines.

Y ante los nuevos desafíos que se avecinan, el sector Textil tiene que hacer frente a nuevos retos y echar mano de todo su potencial para conectar mucho mejor con los consumidores, crear un vínculo más estrecho entre las marcas y los clientes, y desarrollar herramientas y planes de marketing con un enfoque comercial para propiciar la reactivación tan necesaria del consumo.

Además, la volatilidad de los mercados, la incertidumbre social y económica que nos rodea en la actualidad, cuyas consecuencias seguramente se alargaran en el tiempo, hace más que necesario que las empresas se preparen para adaptarse y perseverar en su estrategia comercial.

Por eso, más que nunca, se hace imprescindible: dirigir la mirada hacia nuevos mercados emergentes y potenciales.

El sector textil dirige más del 60% de sus exportaciones a los países de la Unión Europea donde los principales clientes son Francia, Italia, Portugal, Alemania y el Reino Unido. Pero tenemos que estar alerta a la evolución y comportamiento de otros países, como China que seguirá generando buenas oportunidades de negocio, sin perder de vista otros mercados potenciales como la India y países del Sudeste asiático, entre los que figuran Indonesia, Vietnam o Filipinas. Asimismo, seguir de cerca a Oriente Medio ya que, a pesar de que su tamaño es menor al de China en términos de población, los consumidores son más propensos a gastar, lo que le sitúa como un mercado potencial y de valor para la industria Textil Española.

Hace tiempo que se habla de la digitalización y se recomienda a las empresas aplicarlo a todos los niveles. Las empresas más profesionalizadas del sector tienen que encontrar fórmulas para maximizar el retorno de la inversión en marketing, eligiendo la plataforma adecuada para cada mercado, y de paso utilizar más eficazmente las plataformas existentes y generar ventas directas. Además, los esfuerzos se tienen que centrar en explorar nuevas plataformas sociales frente a las tradicionales, que permitiría conectar con cientos de millones de usuarios preparados para ser convertidos en consumidores potenciales.

Las plataformas digitales internacionales son una gran oportunidad de negocio y debido al auge del comercio online, muchos fabricantes y diseñadores de países terceros sobre todo de Asia, podrán exportar sus productos con mayor facilidad a Europa. Son marcas que ahora no son reconocidas pero que en los próximos años se posicionarán en los mercados internacionales.

Por todo ello la Industria Textil Española tiene que estar preparada para responder a los nuevos desafíos fortaleciendo su propuesta de valor (calidad, diseño, innovación) y ser lo más competitivas posible en precio.

Las tiendas van a seguir teniendo un papel importante, pero tienen que evolucionar, ya que tendrán que adaptarse a los cambios de comportamiento del consumidor. Por ejemplo, en el sector de la Moda, los clientes desearan palpar experiencias nuevas ligadas al proceso de la compra, por eso los puntos de ventas se tienen que dotar de espejos inteligentes que usen nuevas tecnologías en realidad aumentada y que ayuden a los consumidores a comprar.

Es fundamental, por lo tanto, implantar nuevas tecnologías en los puntos de venta que además permitirá conocer el flujo de visitantes en las tiendas, el comportamiento del consumidor y sus hábitos de compra y de ese modo la Industria podría ofrecer mejores productos y ser más eficiente en las operaciones de las compañías.

Dado que la tecnología resta intermediarios en el negocio de la distribución, los modelos de compra seguirán evolucionando hacia el B2C que tendrán un papel relevante en el negocio nacional e internacional, más allá del B2B.

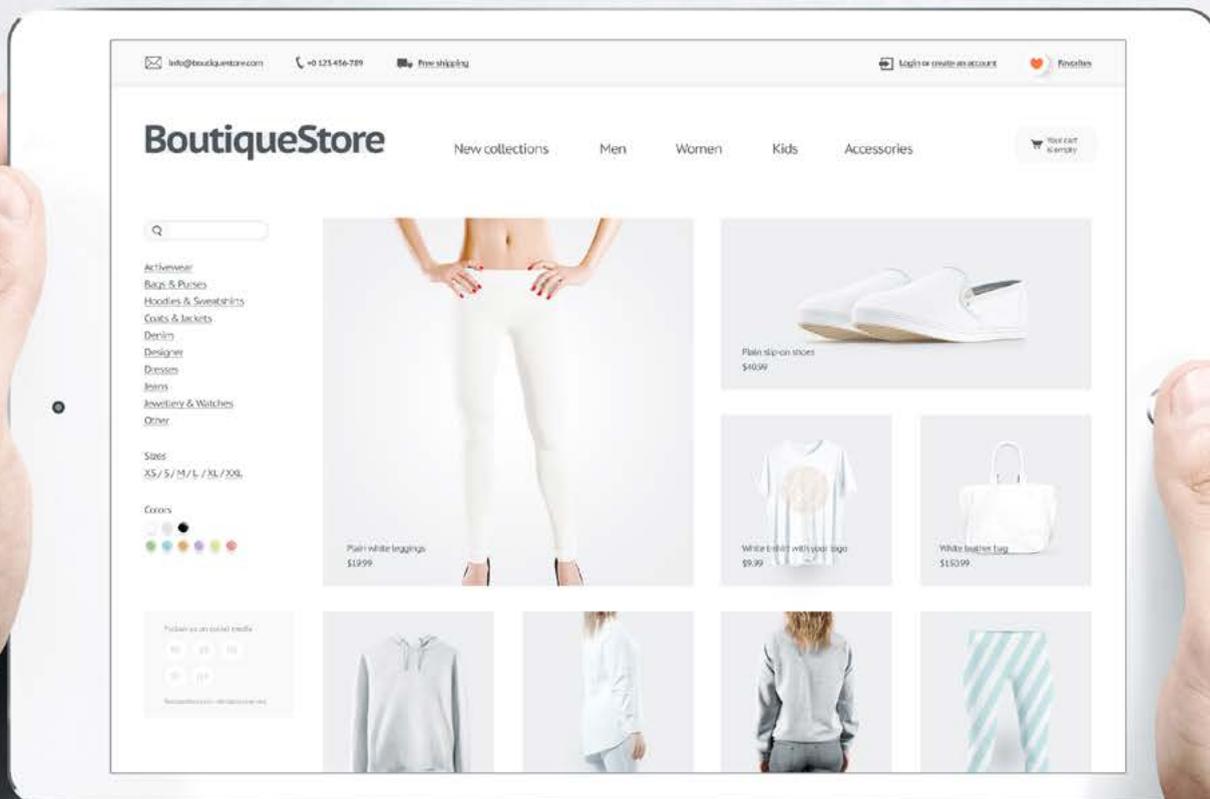
El dinamismo del sector textil, ligado a que las temporadas de presentación de nuevas colecciones que son cada vez más cortas, hace que el negocio incremente su enfoque hacia un modelo más directo de «*open to buy*» que se verá cada vez más extendido.

### Economía Circular, Innovación, Industria 4.0

La transición a una economía circular no sólo equivale a ajustes destinados a reducir los impactos negativos de la economía lineal, más bien representa un cambio sistemático que construye una re-

A close-up photograph of a hand holding a white rectangular tag. The tag has the text "100% ORGANIC" printed in a bold, black, sans-serif font. The tag is attached to a piece of white fabric with a piece of light brown twine. In the background, several white shirts are hanging on wooden hangers, slightly out of focus. The lighting is soft and natural, highlighting the texture of the fabric and the tag.

**100% ORGANIC**



## Tanto las empresas como los fabricantes se beneficiarán de un proceso de toma de decisiones más racionalizado gracias a la visibilidad que la tecnología ha proporcionado

sistencia a largo plazo, genera oportunidades comerciales y económicas, proporcionando beneficios ambientales y sociales.

El modelo distingue entre ciclos técnicos y biológicos. El consumo ocurre sólo en los ciclos biológicos, donde los alimentos y los materiales de base biológica (como el algodón o madera) están diseñados para retroalimentar el sistema a través de procesos como el compostaje y digestión anaeróbica. Estos ciclos regeneran los sistemas vivos, como el suelo, que proporcionan recursos renovables para la economía. Los ciclos técnicos recuperan y restauran los productos, componentes y materiales mediante estrategias como la reutilización, la reparación, la reutilización o el reciclaje.

La industria 4.0 incluye tecnologías para permanecer en el futuro o arriesgarse a quedar obsoletos. Hay cuatro tendencias principales en la transformación digital a las debemos prestar mucha atención. Son la fuerza motriz de todo ello.

- Consumidores conectados, experiencias personalizadas

Los consumidores se conectan a la industria a través de las redes sociales, las interacciones con los clientes y el análisis de datos. Los fabricantes están escuchando lo que los consumidores quieren y adaptan y personalizan el producto en series cortas. Ahora se puede combinar la eficiencia de la producción en masa mientras se entrega un producto verdaderamente único a los consumidores a un nivel casi individual. La fabricación se une a la comercialización.

- Empleados capacitados

Los empleados se empoderan cuando se les da acceso directo a la información que más necesitan. Las nuevas plataformas y herramientas de colaboración facilitan a los empleados el acceso desde cualquier lugar, usando el dispositivo que elijan. Ahora, el trabajo a distancia es más que posible y el uso mundial del talento pronto será normal.

Tanto las empresas como los fabricantes se beneficiarán de un proceso de toma de decisiones más racionalizado gracias a la visibilidad que la tecnología ha proporcionado. Gracias a las mejoras en la planificación de recursos empresariales (ERP), la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y la cartografía de la experiencia del cliente, los empleados podrán ver toda la cadena de suministro, lo que les permitirá tomar decisiones informadas sobre los productos, las estrategias de comercialización y la línea de montaje.

- Producción optimizada

La nueva tecnología ha hecho realidad el cambio rápido en la producción. La producción puede ajustarse dinámicamente. Desde la alineación del ensamblaje, se puede acceder a los datos en tiempo real.

Durante mucho tiempo, los dispositivos de análisis de nubes, como los sensores, sólo estuvieron disponibles para los grandes fabricantes y empresas que tenían el tiempo y el dinero para utilizarlos. Ahora, las empresas, organizaciones y fabricantes de todos los tamaños pueden aprovechar estas herramientas.

¿Dónde podemos acelerar la producción? ¿Dónde estamos perdiendo el producto o el tiempo? ¿Dónde falta nuestro inventario? ¿Qué equipo necesita servicio y mantenimiento? Todo esto puede ser respondido rápidamente. A medida que el aprendizaje de la máquina (inteligencia artificial) se hace más prominente en la fabricación.

- Productos transformados

Se pueden obtener productos nuevos y mejorados gracias a los análisis obtenidos de estas mejoras. Las nuevas tecnologías junto con las capacidades de aprendizaje de las máquinas es la forma de hacer que esto suceda.

Otras tecnologías como la AR y la RV también pueden cambiar la forma en que diseñamos los productos, mediante el uso de demostraciones en vivo y la inmersión total. Los productos pueden ser probados incluso antes de que lleguen a la línea de montaje, ahorrando tiempo y dinero.

La realidad aumentada (AR) agrega elementos digitales a una vista en vivo a menudo usando la cámara de un teléfono inteligente. La realidad virtual (RV) implica una experiencia de inmersión completa que cierra el mundo físico. Los usuarios pueden ser transportados a una serie de entornos reales e imaginarios

Para los fabricantes y otras empresas, la transformación digital es fundamental para el éxito. La Industria 4.0 no es sólo una mentalidad, es la única manera que permitirá asegurar un futuro al sector textil dentro de la industria. •

X I M O  
P U I G

Xímo Puig (Morella, Castellón, 4 de enero de 1959), presidente de la Generalidad Valenciana. Accedió al cargo el 27 de junio de 2015 y fue reelegido el 13 de junio de 2019 tras ganar las elecciones a las Cortes Valencianas de 2019. Es secretario general del PSPV-PSOE, federación valenciana del Partido Socialista Obrero Español.

Elegido diputado por Castellón en las Cortes Valencianas en 1983. Fue diputado de Cultura en la Diputación de Castellón. Entre 1986 y 1995 fue director de Relaciones Institucionales e Informativas de las Cortes Valencianas. En las elecciones municipales de 1995 fue elegido alcalde de Morella, cargo que ha revalidado en las convocatorias de 1999, 2003, 2007 y 2011. En ese mismo año, 1995, se estrenó como portavoz del grupo socialista en la Diputación de Castellón. Además, desde 1999 es diputado en las Cortes Valencianas por Castellón.

Fue candidato a secretario general del PSPV para el Congreso Nacional de la formación política del año de 2012. Desde diciembre de 2011 es diputado en las Cortes Generales por la provincia de Castellón.

El 9 de marzo de 2014 ganó las primarias abiertas convocadas por el PSPV para la candidatura de su partido a la presidencia de la Generalidad Valenciana, el 25 de junio de 2015 fue investido presidente de la Generalidad Valenciana cargo para el que fue reelegido tras el pleno del 13 de junio de 2019.



# EL MUNDO DE AYER NUNCA VUELVE. HACIA UNA NORMALIDAD MEJORADA

Ximo Puig. President de la Generalitat Valenciana.

**H**ará falta perspectiva histórica para poder cuantificar y valorar en su justa medida las secuelas que nos deja la pandemia del Covid-19.

Nos sobrecogen las cifras de fallecidos, enfermos y pacientes recuperados con secuelas. Tras esos recuentos hay miles de historias personales dolorosas. Son la consecuencia más triste de esta situación excepcional y nunca olvidaremos esa triste página de nuestra historia.

Pero junto a esos datos estremecedores hay otros que han causado y siguen produciendo en todos nosotros incertidumbre, miedo o perplejidad. Son los terribles efectos colaterales de una crisis sanitaria que amenazan con dejar en nuestra sociedad una huella muy honda.

Durante meses nos hemos movido en un tiempo extraño, en una situación nueva que nos ha obligado a buscar soluciones distintas. No teníamos a nuestro alcance precedentes ni mucho menos fórmulas probadas que sirvieran para una ocasión como esta. En distintos países y contextos sociales y geográficos se han ensayado con mayor o menor fortuna unas pautas de actuación cuyo acierto todavía no podemos ni siquiera evaluar.

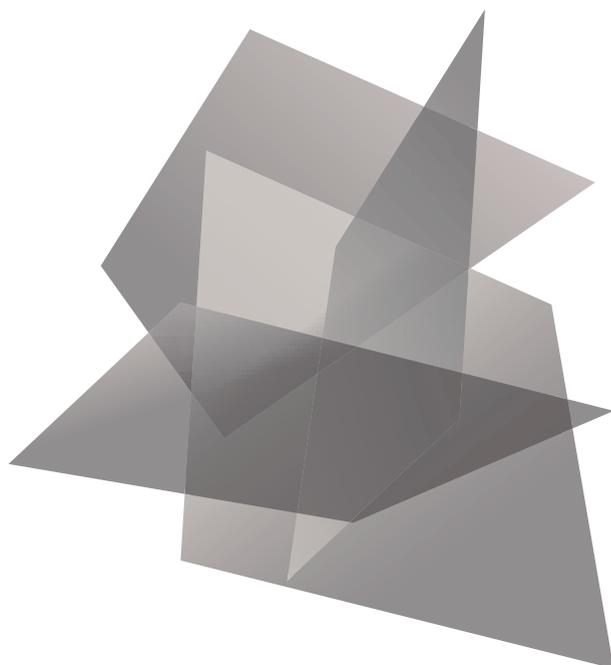
Si algo positivo han tenido estos últimos meses es que nos han enseñado muchas lecciones, a todos los niveles. Hoy somos mucho más conscientes de nuestras limitaciones y sabemos que nuestra sociedad no es invulnerable, que puede verse afectada profundamente por una situación de crisis, que no tiene mecanismos rápidos y eficaces a corto plazo para defenderse y que esas medidas de protección pueden ser duras y difíciles y traer consigo consecuencias relevantes.

Hemos aprendido también muchas otras cosas, como que atrincherarnos tras unas fronteras carece de sentido en un mundo plenamente interconectado. Únicamente las respuestas globales pueden hacer frente a problemas que no entienden de límites administrativos o políticos. Las intervenciones conjuntas o la colaboración y la coordinación entre las diversas acciones sectoriales son elementos fundamentales para maximizar su eficacia.

Hoy, más que nunca, es necesario reforzar los mecanismos de colaboración, las alianzas internacionales o la acción de los organismos internacionales en todos los ámbitos.

Y esto es aún más urgente en nuestro continente. Para nosotros es indispensable conseguir que de una crisis como la que hemos vivido

Nos sobrecogen las cifras de fallecidos, enfermos y pacientes recuperados con secuelas. Tras esos recuentos hay miles de historias personales dolorosas



adoptar medidas rápidas y efectivas y menos sometida a intereses particulares o a visiones cortoplacistas.

Los ciudadanos europeos no queremos que se vean lastradas, por disensiones y recelos que no tienen razón de ser, las medidas que necesitamos ante una situación como la que hemos vivido o como la que se pueda plantear en un futuro.

Por su tamaño, su población y su potencia económica, los estados europeos no pueden llevar a cabo por separado las mismas empresas que podrían acometer conjuntamente.

Tony Judt observaba con perspicacia que una de las cosas que los europeos hemos compartido y que nos ha unido durante mucho tiempo es la percepción de nuestras divisiones, nuestra obsesión por trazar distinciones entre nosotros mismos. Y si esa tendencia era ya estéril en épocas de bonanza económica y estabilidad social y política, en momentos de incertidumbre como los que vivimos está más que nunca fuera de lugar.

Este no es el momento de refugiarse en particularismos o en viejas rivalidades. Lo contrario a más Europa es la irrelevancia en un contexto mundial en el que grandes potencias y corporaciones maniobran para imponer sus criterios.

Europa ha sido durante décadas el gran referente político mundial por su defensa de los valores democráticos, por su esfuerzo para construir un estado del bienestar inclusivo que no dejara a nadie al margen y por su voluntad de cooperar y luchar por la paz en el mundo.

No podemos perder ese liderazgo que fue alcanzado con el esfuerzo de varias generaciones de europeístas en circunstancias mucho más difíciles que las que vivimos en estos momentos. La Europa que surgió de entre las ruinas causadas por la Segunda Guerra Mundial se construyó con un gran esfuerzo compartido, con decisiones valientes y comprometidas, a partir de grandes consensos sociales y políticos. Lo que hoy consideramos conquistas irrenunciables para nuestra sociedad nacieron entonces entre grandes dificultades, como respuesta a los enormes retos a los que se enfrentaban los países del continente. El Estado del Bienestar, basado en unos servicios públicos de carácter universal que proporcionasen a todos los ciudadanos la satisfacción de sus necesidades vitales es uno de esos grandes legados de los que nos enorgullecemos y que estamos obligados a preservar y a ampliar.

Décadas después hemos constatado en este tiempo de crisis que es necesario seguir contando con unos servicios públicos fuertes, especialmente en aquellas áreas que tienen una mayor incidencia en las vidas de las personas. Sanidad, atención social, educación, investigación, seguridad o infraestructuras logísticas y de comunicaciones deben ser contempladas como grandes pilares vertebradores de nuestra sociedad, y no pueden quedar fuera de la esfera pública ni someterse tan sólo a las leyes del mercado.

También sabemos hoy que es inviable gestionar una sociedad compleja y diversa desde el dirigismo y a través de decisiones burocráticas o a golpe de decreto emanado de un lejano centro de poder. Los consensos políticos son siempre deseables, pero deben también extenderse a otros ámbitos sociales y económicos. La esfera pública y la privada no son incompatibles ni deben estar enfrentadas. La colaboración entre entidades públicas, empresas, adminis-

traciones, organizaciones no gubernamentales, universidades, centros de investigación, fundaciones y agentes sociales ha sido constante en estos meses de crisis, y ese trabajo conjunto tan fructífero no puede quedar reducido a un paréntesis temporal: debe proyectarse hacia el futuro, en cualquier nuevo escenario y hacia todos los ámbitos.

Tenemos ante nosotros la tarea ingente de poner en marcha de nuevo nuestra sociedad a todos los niveles, y no podemos caer en los errores del pasado ni repetir fórmulas que se han revelado incapaces de soportar una situación de dificultad.

La globalización, tal y como era entendida por algunos en años pasados, ha demostrado tener los pies de barro. Fenómenos como la deslocalización de las producciones de las empresas o la dependencia absoluta de productos importados en sectores estratégicos han mostrado sus peores consecuencias en estos meses pasados. La crisis del Covid-19 nos ha demostrado la necesidad de contar con economías locales diversificadas, con un equilibrio entre los distintos sectores y una mayor capacidad de adaptación y respuesta a nuevas necesidades y situaciones.

No podemos renunciar a contar con un sector industrial propio potente, diversificado y flexible y en contacto directo con los centros de innovación e investigación. Los avances tecnológicos han abierto las puertas a nuevos modelos industriales basados en la sostenibilidad, el aprovechamiento de los recursos naturales renovables o la aplicación práctica de los nuevos avances científicos en áreas como la biotecnología, la inteligencia artificial, los nuevos materiales, la creación de contenidos audiovisuales o la producción de alimentos. Renunciar a contar con empresas industriales competitivas supondría cerrar las puertas a una gran fuente de empleo y prosperidad.

Debemos también potenciar los sectores agrarios, unas empresas y explotaciones que en este tiempo de crisis han mostrado su gran capacidad de respuesta a los retos que se les plantearon. La competitividad de estos sectores, su proximidad a zonas con una alta demanda y su adaptación a nuevas exigencias de calidad y sostenibilidad pueden ser la clave para su expansión futura. No podemos olvidar su gran peso en zonas interiores y con características que hacen difíciles en ellas el desarrollo de otros sectores, lo que convierte a estos sectores en una gran apuesta estratégica en la lucha contra la despoblación y en la búsqueda de un equilibrio territorial más necesario que nunca.

El sector turístico ha padecido como pocos el embate de esta crisis. Son muchas las empresas que han visto gravemente alterado su funcionamiento por las medidas sanitarias adoptadas. Muchas zonas han visto como peligraba su principal fuente de riqueza y empleo y como la incertidumbre planeaba sobre su futuro. Por esa razón es necesario más que nunca reformular un modelo de éxito que queremos proyectar hacia el futuro con garantías, sin riesgos ni pasos en falso que pongan en peligro su continuidad.

Es necesario reorientar nuestro modelo turístico para impulsar aún más su diversificación, su apuesta por la excelencia y su capacidad para generar riqueza desde la sostenibilidad y el respeto al entorno social y medioambiental.

En materia energética el concepto de proximidad también será clave en un futuro inmediato, y debemos estar preparados para generar nuestros propios recursos a partir de fuentes renovables.

El Estado del Bienestar, basado en unos servicios públicos de carácter universal que proporcionasen a todos los ciudadanos la satisfacción de sus necesidades vitales es uno de esos grandes legados de los que nos enorgullecemos y que estamos obligados a preservar y a ampliar





Los combustibles fósiles son ya el pasado, y ha llegado el momento de apostar sin reservas por la generación de energía a escala local con tecnologías limpias y capaces de satisfacer nuestras demandas.

El «low cost», la búsqueda constante de la maximización de los beneficios a cualquier precio, debe ser cosa del pasado. Es la hora de la excelencia, de la sostenibilidad y de la responsabilidad, del trabajo bien hecho, de los productos que perduran y los servicios de calidad. Debemos generar confianza y seguridad, construyendo una sociedad sin fecha de caducidad preestablecida, con bases firmes y capaz de seguir generando consensos en el futuro.

La potenciación de la proximidad no nos debe llevar a demonizar la globalización o explorar fórmulas autárquicas tan trasnochadas como inviables. Nuestra sociedad es abierta, siempre lo ha sido, y no podemos revertir ese proceso histórico. Tampoco deberíamos hacerlo si fuera posible. De hecho algunas manifestaciones de la globalización se han convertido en herramientas básicas en la gestión de la crisis causada por el Covid-19 y sin duda lo seguirán siendo en el futuro.

Gracias a las redes informáticas hemos podido trabajar conectados y a distancia. Hemos compartido datos e informaciones esenciales. Sectores fundamentales han podido mantener su actividad y universidades, institutos y escuelas han seguido adelante con sus actividades.



## Es la hora de la excelencia, de la sostenibilidad y de la responsabilidad, del trabajo bien hecho, de los productos que perduran y los servicios de calidad

Estamos orgullosos de nuestra sanidad, de nuestro sistema educativo, de los servicios de atención social, de nuestro tejido empresarial y comercial y, en general, de todo ese entramado social en el que nos movemos y en el que nos apoyamos, de esa comunidad de la que formamos parte activa y que nos protege y a la que contribuimos con nuestro esfuerzo.

La crisis originada por el Covid-19 ha demostrado de manera palmaria que la austeridad mal entendida, la política de recortes indiscriminados o la subordinación absoluta a los vaivenes del mercado nos llevaban por el camino equivocado. Somos conscientes ahora, más que nunca, de la necesidad de mantener y potenciar la cohesión social, esos vínculos que nos unen en la diversidad y que hacen de nuestras sociedades unas auténticas comunidades.

La distancia social provocada por el confinamiento paradójicamente nos ha enseñado que sólo unidos podemos salir adelante en una situación de crisis. Por eso es tan necesario gestionar desde la base la respuesta a los grandes retos a los que nos enfrentamos. Es la hora de la corresponsabilidad, de acercar las decisiones a las personas, de adoptar muchas pequeñas decisiones a escala local que pueden en conjunto tener un enorme impacto positivo.

Ciertamente son necesarios grandes acuerdos a nivel mundial y fórmulas de colaboración y coordinación. Pero también lo son las acciones que se deben llevar a cabo en entornos mucho más próximos, adaptadas a las realidades concretas de cada territorio.

Municipios, entidades locales y comunidades autónomas deben ser protagonistas en esta nueva etapa a la que nos asomamos. Las soluciones que necesitamos deben adoptarse con criterios de proximidad, desde un buen conocimiento de la realidad concreta y específica de cada zona. No es el momento para recetas centralizadoras ni para alentar conflictos competenciales. Es la hora del trabajo conjunto y eficaz, de la coordinación y de la unión de esfuerzos. Esa lealtad entre las diversas administraciones que siempre hemos defendido como una premisa básica en la gestión de los asuntos públicos es ahora más necesaria que nunca.

Nos hemos puesto en marcha otra vez, y no podemos hacerlo de cualquier manera, con improvisación o aparentando que no ha sucedido nada. Superar la crisis sanitaria fue importantísimo, pero tenemos por delante otros retos muy difíciles que nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos.

Sectores económicos básicos para nosotros se han visto profundamente afectados por esta situación de crisis. Y las consecuencias están a la vista de todos. La destrucción de empleo, la incertidum-

Equipos de científicos repartidos por diversas partes del mundo han trabajado y trabajan conjuntamente para conseguir respuestas eficaces a la crisis sanitaria planteada. Esa quizá sea la mejor muestra de la dimensión más valiosa de la globalización.

La crisis nos ha enseñado a valorar nuestro entorno más inmediato. Nuestros hogares, nuestras familias, nuestros barrios o pueblos se han convertido en nuestro refugio, y hemos apreciado más que nunca todas sus cualidades. Ahora valoramos más la calidad de vida que hemos alcanzado, ese bienestar que tanto ha costado conseguir.

bre que pesa sobre el futuro de muchas empresas o actividades nos obligan a todos a planificar una gran estrategia de reconstrucción con unos grandes ejes básicos compartidos, como la necesidad de extender a todos los sectores sociales esa acción, sin dejar a nadie al margen, o la priorización de las actuaciones en ámbitos como la sanidad, la educación, la investigación, la innovación, la reindustrialización o la potenciación de las energías renovables.

La estrategia de recuperación debe ser implementada desde todos los ámbitos, no sólo desde las instancias administrativas, y por eso mismo debe ser el resultado de un gran consenso que permita llevar a término iniciativas que vayan más allá del corto plazo o de una legislatura.

Los partidos políticos tienen un gran protagonismo, pero no son los únicos en un contexto tan complejo como éste. También los agentes sociales, sindicatos, empresarios, organizaciones de trabajadores autónomos, entidades sociales, organizaciones no gubernamentales o asociaciones culturales o cívicas deben participar activamente en esa estrategia de impulso que debe llegar a todos los sectores sin excepción.

No podemos dejar caer a nadie, a ninguna persona, a ningún sector económico, a ninguna parte de nuestro territorio, a ningún país o área geográfica del mundo. Estamos juntos en esta empresa. No hay sitio para egoísmos o escapismos. No valen trampas o engaños. La crisis nos ha golpeado muy duramente y no podemos disimular su impacto y engañarnos a nosotros mismos.

Es la hora del trabajo, el momento de redoblar nuestro esfuerzo. Nuestra sociedad tiene a sus espaldas una larga historia formada por páginas muy diversas. Muchas de ellas son tristes y algunas de ellas terribles. Pero los que nos precedieron supieron sobreponerse a las dificultades y escribir nuevas páginas mucho más luminosas y alegres. Pudieron sobreponerse a los problemas y avanzar con fuerza. Abrazaron la idea de progreso y lucharon por dar a sus hijas e hijos un mundo mucho mejor que el que habían heredado. Y lo consiguieron. Nosotros no podemos quedarnos atrás. No podemos

Todos nosotros deberemos responder ante las generaciones futuras por nuestra inacción ante realidades como la emergencia medioambiental, la profundización de las desigualdades sociales, el auge del racismo y la xenofobia o la pervivencia de la violencia de género

dilapidar esa magnífica herencia que recibimos. No podemos tirar la toalla ante las dificultades o desertar de esa tarea que tenemos ante nosotros.

Y el objetivo no es volver al pasado. No puede serlo. Es el momento de corregir errores, de reformular nuestras políticas y cambiar el rumbo de nuestra sociedad. Hemos sido capaces de superar una gravísima crisis sanitaria, pero no hemos dado respuesta a los retos a los que nos enfrentábamos antes y que siguen estando ahí, tan amenazantes como hace unos meses. Volviendo a Tony Judt, «como ciudadanos de una sociedad libre tenemos el deber de mirar críticamente nuestro mundo. Pero si pensamos que sabemos lo que está mal debemos actuar de acuerdo a ese convencimiento».

No hablo de grandes declaraciones teóricas, de discursos altisonantes o de frases ingeniosas. Me refiero a políticas concretas, a acciones que puedan ponerse en práctica de inmediato y generen efectos positivos, a medidas sectoriales adoptadas a escala local que generen consensos amplios y cohesionen nuestras comunidades.

Hay mucho que hacer, en todos los ámbitos. La emergencia climática sigue ahí, y los valencianos lo sabemos bien. Estamos padeciendo las terribles consecuencias de ese proceso y necesitamos acciones urgentes al respecto, medidas de calado que vayan más allá de resolver el expediente con un puñado de ayudas y subvenciones.

Es la hora de la valentía, de asumir que es necesario actuar pese a las críticas de los inmovilistas o de quienes creen que los problemas pueden arreglarse por sí mismos.

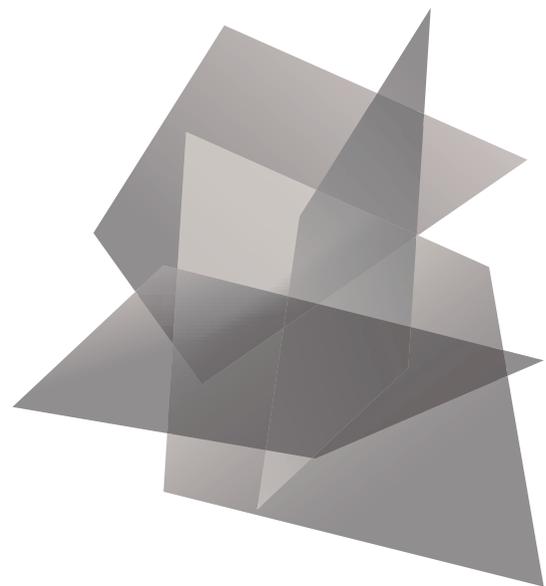
No podemos fingir indiferencia o inventar excusas para justificar nuestra inacción ante las grandes cuestiones que nos interpelan a diario. Steiner señalaba que «los hombres son cómplices de aquello que los deja indiferentes», y todos nosotros deberemos responder ante las generaciones futuras por nuestra inacción ante realidades como la emergencia medioambiental, la profundización de las desigualdades sociales, el auge del racismo y la xenofobia o la pervivencia de la violencia de género.

Con todo, hay razones para la esperanza y no solo en un plano teórico o a largo plazo. La implementación en España de la prestación de Ingreso Mínimo Vital supone en ese sentido un gran paso adelante. Demuestra que es posible generar amplios consensos y dar respuesta rápida a problemas reales, y también nos anima a pensar en la adopción de otras decisiones que se han pospuesto durante años y siguen siendo ineludibles en ámbitos como la reducción del uso de combustibles fósiles, la consecución de la igualdad real de oportunidades para todos en el ámbito educativo, la universalización de la sanidad o la atención social a los más vulnerables.

Hemos vivido en los meses pasados momentos muy difíciles. Pero seguimos juntos y somos conscientes, más que nunca, de la necesidad de afrontar juntos esos grandes problemas. Por eso es más necesario que nunca transmitir un mensaje de confianza y de unidad que llegue a todas las personas, que cohesione y vertebralice nuestras comunidades, que articule una sociedad más fuerte, flexible, diversa, inclusiva y colaborativa, capaz de proporcionar un horizonte de seguridad y estabilidad a todas las personas que la integran.



No buscamos la reconstrucción, que significa volver a construir. Queremos impulsar una nuevas bases que sostengan el progreso de nuestra sociedad. No buscamos ni la Vieja Normalidad ni la Nueva Normalidad. Buscamos una Normalidad Mejorada, que incorpore las lecciones aprendidas y aproveche las oportunidades creadas en este tiempo. Será una realidad más sostenible, más inclusiva y más innovadora que aquella que hemos dejado atrás. El mundo de ayer, como escribió Stefan Zweig, jamás vuelve. Empecemos a trabajar por levantar el mundo de hoy y el de mañana. •







Tren de mercancías a su paso por Alicante bajo la pasarela que cruzaba el ramal del puerto (1905-1925)

# G R E G O R I O R A B A N A L M A R T Í N E Z



De familia minera, nació en León en 1964 y se trasladó a los 11 años a residir a Asturias. Es ingeniero de minas por la Universidad de Oviedo y comenzó su trayectoria profesional como auditor de compañías mineras en Arthur Andersen.

Se incorporó a la plantilla de Hunosa a principios de los años noventa como jefe del departamento de auditoría interna, primero, y de control de gestión, después. En el año 2000 entra a formar parte de la alta dirección de la compañía como director económico-financiero y de control. De 2012 a 2017 ocupó el cargo de director general de Sadim Inversiones, filial de Hunosa dedicada a la promoción empresarial en las comarcas mineras.

En 2018 es nombrado Presidente de Grupo Hunosa y tiene como principal reto liderar la transformación de la compañía desarrollando el Plan de Empresa 2017-2029, aprobado en 2019.

En 2019 recogió el premio Trabajo y Sociedad de la Fundación Anastasio de Gracia en nombre de la Brigada Central de Salvamento Minero.



# LA EMPRESA ANTE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA: TRANSFORMARSE PARA GANAR EL FUTURO

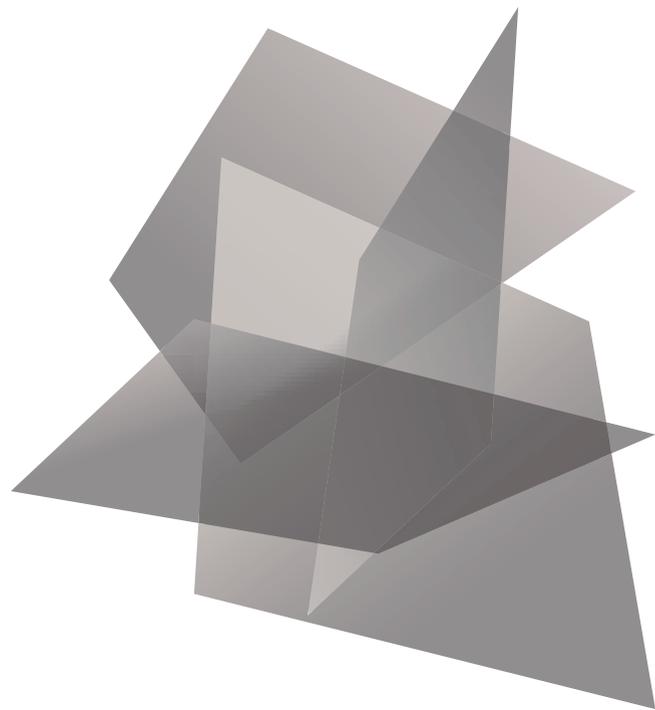
Gregorio Rabanal Martínez. Presidente de Grupo Hunosa.

**E**l proceso de transición energética emprendido por la Unión Europea y la des-carbonización asociada al mismo han impactado de lleno en las regiones mineras, las cuales se han visto obligadas a buscar alternativas a la tradicional actividad extractiva de carbón tras el paulatino cierre de minas. En el caso del Principado de Asturias, una única compañía estatal, Hunosa, llegó a concentrar casi en exclusiva esta actividad en las cuencas del centro de la región. Ahora, en el contexto de esa estrategia global de lucha contra el cambio climático, la compañía apuesta por su transformación, desde una empresa minera hacia otra centrada en la energía y el medio ambiente, y lo hace con vocación de protagonismo en la transición energética, apostando por las energías renovables y la innovación. El aprovechamiento de la biomasa como combustible alternativo para su central de generación eléctrica y sus proyectos actuales de geotermia o la reconversión de su Brigada Central de Salvamento Minero –ganadora en 2019 del Premio Trabajo y Sociedad que concede la Fundación AG Fitel– en un organismo especializado en la formación y la prestación de un servicio de alta calidad en la seguridad en espacios confinados, son ejemplos de esa reinención de Hunosa aprovechando toda su experiencia y conocimientos en el sector minero. Una empresa que mantiene su compromiso territorial pero que evoluciona con las nuevas tendencias energéticas que impone el cambio climático, apostando también por la economía circular.

Determinadas regiones con tradición minera e industrial como el Principado de Asturias y, en particular las comarcas mineras de su área central, presentan unas características socioeconómicas estructurales muy específicas que hacen que sus índices de desarrollo económico y demográfico no sigan las tendencias generales del conjunto de España y se sitúen, generalmente, por debajo de éstas.

Esta particularidad, en el caso de Asturias, es el resultado del gran desarrollo industrial y minero de la región durante la segunda mitad del siglo XX, favorecido por la instalación de grandes empresas, que colocaron al Principado como una de las locomotoras económicas de España. Sin la minería del carbón no se podría entender la historia contemporánea de Asturias. Con la apertura de la mina de carbón de Arnao, a finales del siglo XVI, se inicia una actividad extractiva que llegará a generar en los siguientes cuatro siglos más de 2.000 minas de montaña y unos 70 pozos verticales. Esta industria minera, además, determinó la implantación en la región de la industria siderúrgica y naval.

Sin embargo, tras la segunda guerra mundial, el sector minero comenzó a pasar dificultades, derivadas de la mala calidad de los yacimientos y el bajo nivel de mecanización, que se mantuvieron contenidas hasta que en los años 60 el grueso del sector minero



La compañía apuesta por su transformación, desde una empresa minera hacia otra centrada en la energía y el medio ambiente, y lo hace con vocación de protagonismo en la transición energética, apostando por las energías renovables y la innovación



asturiano entró en una crisis profunda que fue asumida por el estado mediante la creación de la empresa HUNOSA en 1967 mediante la integración en una empresa pública de multitud de minas de carbón de la zona central de Asturias que llegó a emplear a más de 26.000 trabajadores a principios de los años 70 del siglo XX.

El proceso de reconversión de la gran industria siderúrgica y minera, iniciado en la década de los 80, supuso que Asturias se fuera paulatinamente alejando de los centros económicos más dinámicos del país, y que el empleo industrial en Asturias disminuyera considerablemente.

A esta situación hubo que sumar el impacto de la crisis económica que supuso que, en el período 2008-2017, el PIB regional presentara un descenso medio anual superior al 1 % y la extinción del 7,5 % de las empresas, una cifra que en el conjunto de España quedó en el 5,4 %.

El efecto que produce la dependencia de un sector industrial en proceso de transformación es aún mayor en las comarcas mineras. Los índices económicos reflejan una situación más grave en estos lugares que en el resto de Asturias, y por supuesto, que la media

nacional. Todo este impacto económico ha traído consigo una reducción notable de la población en los municipios pertenecientes a las comarcas mineras.

Este marco socioeconómico evidencia la necesidad de que las áreas mineras, y la empresa pública estatal Hunosa en particular, como su principal y exclusivo actor minero en la región, desarrollen la transición hacia un escenario energético futuro más verde que permita mantener el empleo y la actividad económica.

Dentro de este marco la Comisión Europea presentó en diciembre de 2017 la Plataforma de las Regiones Mineras en Transición cuyo propósito es fomentar el desarrollo de proyectos y estrategias a largo plazo en las regiones mineras, con el objetivo último de mantener el crecimiento económico y el empleo en dichas regiones en transición. La nueva plataforma es una de las acciones destacadas que componen el paquete *Clean Energy for All Europeans*.

Por otra parte, la Decisión del Consejo de la Unión Europea 2010/787/UE, de 10 de diciembre, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, señala en su consideración octava que, «con el fin de mitigar el



impacto medioambiental de la producción de carbón por parte de unidades de producción de carbón a las que se concedieron ayudas al cierre, los Estados miembros deben establecer un plan de medidas apropiadas, por ejemplo, en el ámbito de la eficiencia energética, la energía renovable o la captura y el almacenamiento del carbono».

La transición energética para las comarcas mineras de Asturias pasa, entre otros aspectos, por la transformación económica y tecnológica de la empresa pública estatal Hunosa y sus filiales, atendiendo a los principios rectores del programa europeo *Clean Energy*, a las consideraciones de la Decisión del Consejo 2010/787/UE, a los principios de la Especialización Inteligente, a la iniciativa de la Plataforma de las Regiones Mineras en Transición y, todo ello, en el marco de la estrategia europea hacia una Economía Circular.

Adicionalmente, tal y como se señala en el Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo (European Green Deal), el régimen de transición justa en el marco de InvestEU (pilar 2 del Mecanismo para una Transición Justa) proporcionará un sistema para generar inversiones adicionales en beneficio de las regiones de la transición justa, que será complementario del Fondo de Transición Justa (pilar 1 del Mecanismo para una Transición Justa) y del instrumento de préstamo al sector público (pilar 3 del Mecanismo para una Transición Justa). El régimen de transición justa en el marco de InvestEU se verá reforzado como consecuencia del aumento de la garantía de InvestEU.

El Plan de Inversiones para el Pacto Verde Europeo (PIPVE), también conocido como Plan de Inversiones para una Europa Sostenible (PIES), es el pilar de inversión del Pacto Verde. Para alcanzar las metas fijadas en el Pacto Verde Europeo, el Plan movilizará al menos 1 billón de euros en inversiones sostenibles durante la década entrante. El Mecanismo para una Transición Justa, que forma parte del Plan (y que fue propuesto por la Comisión en enero de 2020 para ayudar a las regiones más vulnerables a hacer frente a los efectos socioeconómicos de la transición), se centrará en facilitar una transición ecológica equitativa y justa. Movilizará al menos 100.000 millones de euros en inversiones durante el período 2021-2027 a fin de apoyar a los trabajadores y los ciudadanos en general de las regiones más afectadas por la transición.

El presupuesto de la UE, los Estados miembros y los agentes privados desempeñarán un papel decisivo en la financiación del Pacto Verde Europeo.

En el contexto anteriormente descrito, se debe insertar la transformación de la empresa Hunosa que, en el año 2010 explotaba todavía siete minas subterráneas y tenía aún 2.042 trabajadores. Como consecuencia de la reconversión (ya iniciada en los años 80), las

minas se fueron cerrando y el número de trabajadores directos e indirectos disminuyendo considerablemente. Actualmente Hunosa sólo dispone de una mina subterránea en explotación en la cuenca del Caudal y unos 700 trabajadores en activo.

Hunosa también es titular de una central termoeléctrica (La Pereda, de 50 MWe), la cual ha sido diseñada para la generación de energía eléctrica a partir de una mezcla de carbón y estériles de mina. Además, vinculada a dicha instalación de combustión, se ha desarrollado con éxito, como consecuencia de una intensa labor investigadora, una planta de captura de CO<sub>2</sub> en postcombustión, basada en la tecnología carbonatación-calcinación, única a nivel europeo con esta tecnología y de este tamaño implementada en una central térmica.

Hunosa dispone además de una instalación para el tratamiento de carbón (Lavadero Batán), un centro de formación y un extenso e importante patrimonio industrial y minero, con varias instalaciones catalogadas como Bienes de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Asimismo, Hunosa es líder nacional en materia de recuperación y gestión, con fines culturales, del patrimonio industrial y minero.

En todo caso, las actividades principales de la empresa hoy en día no se alinean con la estrategia de descarbonización de la economía, por lo que habrán de modificarse sustancialmente a medio plazo so pena de desaparecer.

En esa línea, Hunosa ha desarrollado una incesante política de diversificación, apoyada en numerosos proyectos de I+D+i, lo que ha permitido desarrollar con éxito la citada planta de captura de CO<sub>2</sub> instalada en la Central Térmica de la Pereda, desarrollar innovadores proyectos económicamente sostenibles, tales como son el aprovechamiento geotérmico del agua de mina, o proceder a la restauración de terrenos degradados por antiguas actividades mineras a cielo abierto.

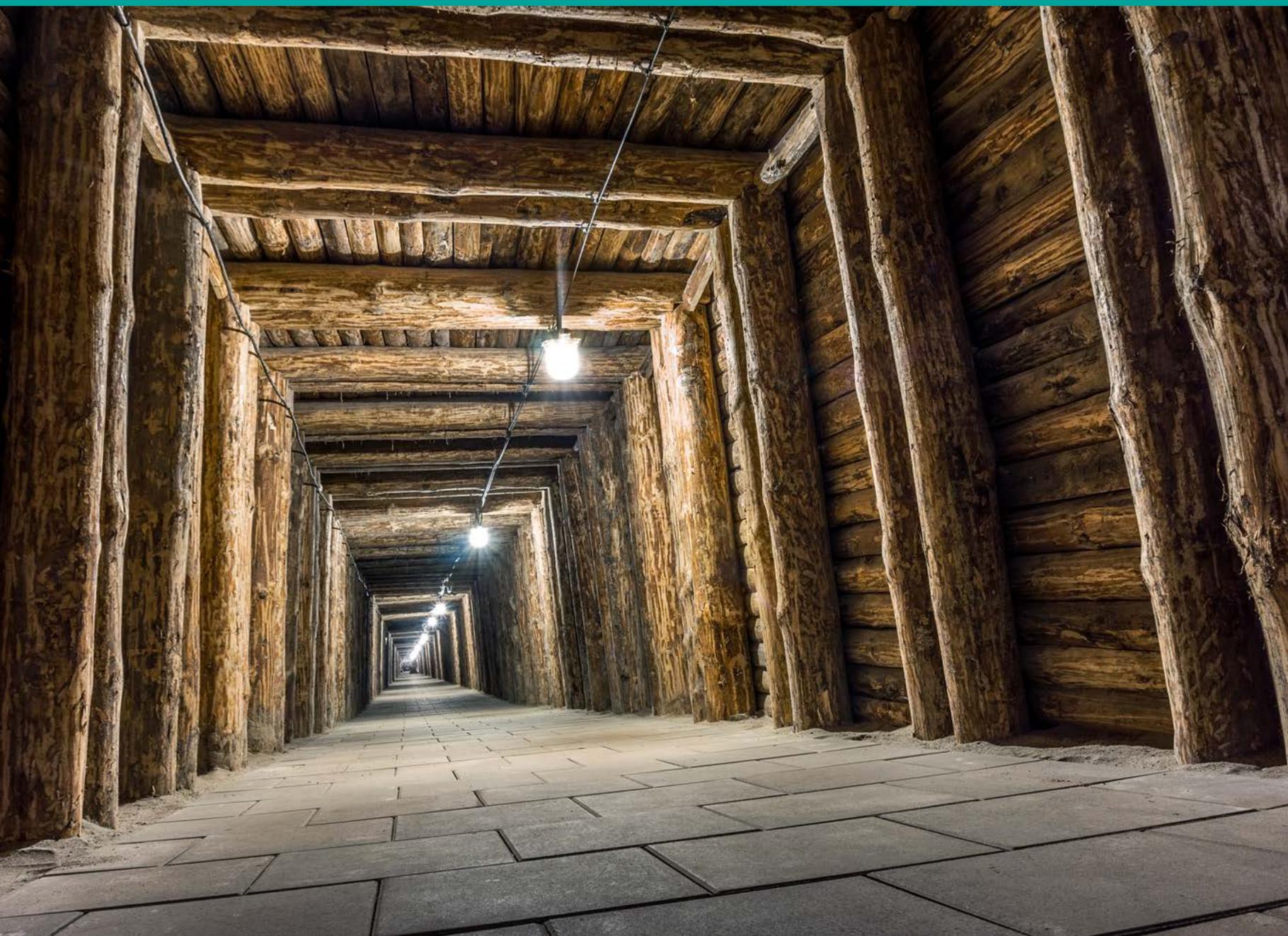
Hunosa se proyecta al futuro, dentro de la Cuenca Carbonífera Central Asturiana, como una empresa que necesariamente deberá ser ambiental y económicamente sostenible, y capaz de contribuir a mantener el empleo y a reactivar económicamente la zona.

Así, en el escenario futuro, la minería de carbón dejará de ser la principal actividad industrial de las comarcas mineras asturianas, pasando dicho protagonismo a los ámbitos de la eficiencia energética, la energía limpia, la recuperación ambiental y la producción de materiales de alto valor añadido, contexto en el que se han definido los objetivos de su Plan de Empresa 2019/2027, así como el desarrollo de los distintos proyectos en materia de diversificación. La Empresa mantiene también su compromiso en la reactivación de las comarcas mineras con su política de promoción industrial.

Los próximos años supondrán para Hunosa un reto exigente en la labor de consolidación de la Empresa en actividades alternativas de diversificación relacionadas principalmente con la producción de energía, el tratamiento de carbones de alta calidad, el fomento de las energías renovables y los servicios energéticos, la restauración medioambiental y la promoción empresarial.

Uno de los principales pilares del Plan de Empresa 2019/2027 consiste en garantizar el funcionamiento estable de la Central Térmica de La Pereda más allá del 31 de diciembre de 2021, fecha en la que finalizaría su régimen retributivo actual.

Hunosa es líder nacional en materia de recuperación y gestión, con fines culturales, del patrimonio industrial y minero



La puesta en valor del potencial del Lavadero de Batán es otra de las prioridades, dando continuidad a su nueva actividad tratando carbones de alta calidad para terceros destinados a sectores de gran desarrollo, como es el caso de la metalurgia secundaria, enfocándose a los mercados nacional e internacional.

El Plan Industrial contempla asimismo la implementación de todas las actividades de pos minería en la clausura de pozos, entre ellas la recuperación de equipos de interior y puesta en valor de los mismos, o la adecuación de las infraestructuras de bombeo para su inundación. Del mismo modo se incluyen los trabajos posteriores, o trabajos de pos clausura, asociados a los pozos cerrados, entre los que se encuentran el bombeo de agua en las unidades extractivas ya inundadas, así como la gestión de los terrenos correspondiente a las antiguas explotaciones.

También es mencionable el caso de la Brigada Central de Salvamento Minero, que el año pasado tuvo el honor de recibir el Premio Trabajo y Sociedad de la Fundación Anastasio de Gracia FITEL. Esta Brigada es un ejemplo de ese propósito de reinención, transforma-

ción y apuesta de futuro que ha iniciado todo el Grupo Hunosa. Se trata de un cuerpo de rescate y socorro en los accidentes en las minas con más de 100 años de historia y que se está redimensionando, ofreciéndose a fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones y empresas, para dar formación y prestar servicios en acciones que requieren experiencia y conocimiento en seguridad en espacios confinados, obras subterráneas y atmósferas explosivas. Si la Brigada se hubiera quedado en mero cuerpo de rescate de las minas, una vez que éstas quedan reducidas a la mínima expresión, este cuerpo tendería a desaparecer. Sin embargo, se reinventa y reorienta, prestando un servicio de alta calidad en la seguridad en espacios confinados.

En el Plan de Empresa 2019-2027 se detalla también que «Hunosa se compromete al aprovechamiento del acervo de la compañía impulsando el desarrollo de proyectos de investigación y promoción de nuevos negocios, de forma que la propia Hunosa sea también un agente protagonista en el objetivo de transformación estructural de las Comarcas Mineras que permitan la transformación de la Empresa hacia un Grupo eminentemente energético, estable y no dependiente de la minería del carbón».



En definitiva, se trata de la transacción hacia un futuro en el que las actividades principales de la empresa se articulen a través de dos grandes ejes: la energía y el medio ambiente, de los que el primero se viene desarrollando ya desde principios de los años 90.

El aprovechamiento geotérmico del agua de mina de pozos inundados constituye una línea ya consolidada en HUNOSA y representa una de las principales vías de diversificación y con más perspectivas de futuro dentro de la compañía. Es un claro ejemplo en la transición de la empresa hacia nuevas actividades y tecnologías.

La utilización de agua de mina supuso un cambio de concepción. Así, el agua bombeada pasa de ser un elemento a desechar a constituir un recurso energético que puede ser aprovechado y con ello, en una fuente de ingresos para HUNOSA que logre paliar ese coste eterno que supone el bombeo, una actividad de obligado cumplimiento para evitar la afección a la población, manteniendo un determinado nivel piezométrico de seguridad.

Hasta la fecha, se han desarrollado instalaciones geotérmicas en dos explotaciones emblemáticas de las comarcas mineras, ya sin actividad: el Pozo Barredo, en Mieres, y el Pozo Fondón, en Langreo.

En relación con el Pozo Barredo, las primeras instalaciones entraron en funcionamiento entre los años 2014 y 2016, suministrando energía a un hospital, un edificio de investigación de la Universidad de Oviedo en el Campus de Mieres y a la sede de la Fundación Asturiana de la Energía. Posteriormente, para extender la potencialidad del recurso geotérmico de forma más rentable y eficiente, se optó por el desarrollo de sistemas centralizados para la climatización o District Heating, donde existe una única estación de intercambio con el agua de mina y una central de generación (bombas de calor) comunes para todos los puntos de consumo. Así nació el District Heating Barredo, que entrará en

## Grupo Hunosa mantiene su compromiso de reactivación, de transformación y desarrollo del tejido económico de su zona de implantación



funcionamiento a lo largo de este año 2020 y que aportará energía al edificio principal de la Universidad de Oviedo en el Campus de Mieres, un instituto de Enseñanza Secundaria y a dos bloques de viviendas en la zona de la Mayacina. Globalmente, toda la instalación de Barredo aporta una energía anual aproximada de 7.532 MW y 2.514 en frío.

En relación al Pozo Fondón, se está construyendo un District Heating siguiendo el mismo esquema que en Barredo, en este caso se suministrará energía a varios clientes de la zona de Nuevo Langreo, en La Felguera, que en una primera fase serán: un Polideportivo, un Centro de Salud y un edificio de viviendas. Anualmente, se aportará una energía de unos 2.885 MWh en calor, no contemplándose el suministro de frío.

Por último, la empresa está elaborando un plan para extender las redes de calor basadas en geotermia por todo el territorio en que sea posible, en la medida en que el nivel de inundación de los pozos inactivos vaya alcanzando las cotas que permitan una explotación racional del recurso.

La biomasa constituye otra apuesta de futuro en la que trabaja HUNOSA. Hasta la fecha ya se han desarrollado instalaciones de biomasa en varios bloques de viviendas para el suministro de calefacción y agua caliente y una industria a la que se suministra vapor. No obstante, el proyecto más relevante será el relacionado con la adaptación de la actual Central Térmica de La Pereda a una planta de producción eléctrica con biomasa, lo que permitirá garantizar el futuro de la Central y servir como medio de reactivación de la economía local por el efecto tractor que el proyecto pueda suponer para el sector de la silvicultura, con gran potencial en la zona central de Asturias pero que fue abandonado como consecuencia del desarrollo industrial del siglo XX.

A todo esto hay que añadir que ya se está trabajando en proyectos para hibridar, utilizando biomasa, los District Heating con geotermia ya mencionados. Esto constituye una medida para poder extender las redes de calor más allá de las posibilidades del recurso geotérmico.

El aprovechamiento de los terrenos forestales también representa un aspecto importante en el ámbito de la biomasa. En este sentido, esta actividad supone la puesta en valor de más de 3.864 hectáreas de bosque propiedad de Hunosa, con un recurso forestal propio superior a 9.000 ton/año y entronca directamente con el segundo pilar del futuro de la empresa, el medio ambiental que pasará por poner en marcha la experiencia acumulada en la empresa a lo largo de su historia en la gestión, tratamiento, recuperación y restauración de espacios afectados por la actividad minera.

Dicha actividad, en la que Hunosa ha sido puntera por las actuaciones realizadas en sus minas. (Modélicas en comparación con la inacción generalizada de las empresas privadas) cobraría especial relevancia en el futuro dado el cierre generalizado de las minas de carbón en los años del 2012 al 2018 y tras la liquidación de las empresas mineras titulares sin que se haya abordado un tratamiento adecuado de las minas abandonadas por aquellas.

En este sentido destaca el paso dado por el Gobierno de España, que el pasado mes de abril dio luz verde a que Grupo Hunosa se convierta en medio propio del sector público para la restauración medioambiental de antiguos espacios mineros, terreno en el que atesora una amplia experiencia con la recuperación de más de 100 hectáreas de explotaciones mineras propias cuya actividad cesó.

Finalmente, Grupo Hunosa mantiene su compromiso de reactivación, de transformación y de desarrollo del tejido económico de su zona de implantación, con el fin de contribuir al cambio de la estructura económica de las Comarcas Mineras. Esto se realiza impulsando actuaciones que complementen el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027, en lo que respecta a la creación de puestos de trabajo alternativos a la minería del carbón, por la vía de la cofinanciación de proyectos empresariales viables de la iniciativa privada que estén dispuestas a establecerse en la cuenca central asturiana; a lo que se suma la puesta a disposición de las mismas del suelo industrial inactivo de la Empresa.

Es, en definitiva, la apuesta de una antigua empresa hullera –muy orgullosa de su pasado y tradición mineros– por convertirse en un grupo centrado en la energía y los servicios energéticos y la restauración medioambiental, y además hacerlo con vocación de protagonismo en la transición energética apostando por las energías renovables y la innovación. •

# L O R E N Z O R A M O S S I L V A

Nació en Badajoz en 1958. Casado, tiene dos hijos.

Cursó estudios de Maestría Industrial. Es agricultor, tiene una explotación agraria en la que produce frutas, flores y plantas naturales de invernadero.

Nombrado secretario general de UPA Badajoz en 1989 y secretario general de UPA Extremadura en abril de 1999. En diciembre de 2001 fue elegido secretario general de UPA-UCE Extremadura, tras el proceso de unificación con la UCE. Fue presidente de la Cámara Agraria Provincial de Badajoz.

Hasta el 4º Congreso Federal de UPA desempeñó las funciones de secretario de Producciones Vegetales en la Comisión Ejecutiva. En el 5º Congreso fue elegido vicesecretario general, puesto de nueva creación en ese congreso. En mayo de 2004, tras la dimisión del anterior secretario general, Fernando Moraleda, fue elegido secretario general en un Comité Federal Extraordinario.

En el 6º Congreso de UPA fue elegido como nuevo secretario general, siendo reelegido en los tres siguientes congresos.

Desde 2009 hasta 2013 fue vicepresidente del Comité de las Organizaciones Profesionales Agrarias europeo (COPA), cargo para el que ha sido reelegido en 2016. Asimismo, Lorenzo Ramos acude como representante de UPA a las reuniones de la Organización Mundial de Agricultores (WFO).



# AGRICULTURA FAMILIAR: UNA PRIORIDAD ESTRATÉGICA PARA LA RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE ESPAÑA

Lorenzo Ramos Silva. Secretario general UPA-UGT.

**L**a situación sin precedentes que afronta el mundo está demostrando el verdadero papel de los agricultores y ganaderos en la sociedad. Solo protegiendo a la agricultura y ganadería familiar garantizaremos un futuro más justo y más sostenible.

En las semanas previas al estallido de la pandemia sanitaria de la COVID-19, y sus gravísimas consecuencias económicas y sociales a nivel global, los agricultores y ganaderos españoles habíamos protagonizado un proceso de movilizaciones sin precedentes, con la participación de cientos de miles de hombres y mujeres de todos los territorios y sectores, que había merecido la atención y apoyo de la sociedad española y provocado un marco de diálogo con el Gobierno de España.

De hecho, las últimas movilizaciones convocadas ya no pudieron celebrarse. Se desconvocaron incluso antes de la declaración del Estado de alarma.

El origen de estas grandes e inéditas movilizaciones no respondía a un único motivo y ni siquiera estaban dirigidas, como suele ser habitual en estos procesos, contra un Gobierno en concreto, con una medida determinada o para atajar una crisis sectorial y coyuntural ante la que reivindicar soluciones urgentes y precisas.

No en vano, las movilizaciones del sector agrario no han sido una excepción española, ya que de manera simultánea procesos similares tenían lugar en un buen número de países europeos, por razones en buena medida coincidentes con las que impulsaron las protestas en España.

La respuesta masiva a la convocatoria de movilizaciones por parte de UPA, Coag y Asaja demostró que los hombres y mejores del sector agrario están al límite en todos los sentidos, y necesitados, más allá de las situaciones particulares de cada sector, cada territorio o cada explotación en función de sus características, dé respuestas a tres grandes demandas, para poder seguir desarrollando su actividad:

- Viabilidad económica de su actividad.
- Reconocimiento y respeto social.
- Reconocimiento político-institucional.

Solo protegiendo a la agricultura y ganadería familiar garantizaremos un futuro más justo y más sostenible

La cuestión de fondo es que el sector agroalimentario en su conjunto, el sector agrario en concreto y, dentro de este, la Agricultura Familiar en particular, no tienen la misma necesidad de reconstrucción que otros sectores de la economía y la sociedad española.

Porque es evidente que los sectores que han visto interrumpida bruscamente su actividad en todos los sentidos, a medida que se vaya superando la crisis y la excepcionalidad, tienen ante sí el reto de «volver a empezar». Pero en nuestro caso, la actividad se ha visto necesariamente muy alterada, pero no interrumpida.

Hemos sufrido, y de qué manera, las consecuencias de esta crisis, y lo hemos hecho aparcando las movilizaciones para prestar a la sociedad española un servicio a la altura del reto impuesto por la Declaración del Estado de Alarma: no hemos parado, de acuerdo con nuestra condición de actividad esencial y hemos seguido produciendo, recolectando, cuidando al ganado, manteniendo los ciclos naturales de cultivos y animales, con la responsabilidad final de aportar lo que la sociedad espera de nosotros: alimentos para consumo directo y materias primas para la industria de transformación.

Alimentos a disposición de los consumidores españoles en una situación de convivencia inédita, pero también para el resto de ciudadanos europeos, en las mismas condiciones de confinamiento que en España, y también del resto del mundo, porque los flujos de exportación no se han visto interrumpidos.

Todo ello, además, en un momento con importantes limitaciones de la movilidad que han condicionado la llegada de trabajadores de otros países, como es habitual en estas fechas, y el desplazamiento de las cuadrillas hasta el lugar de trabajo, con riesgos para la salud de agricultores, ganaderos y sus trabajadores, la implementación de protocolos específicos y medidas para mitigar el riesgo de contagio y la búsqueda y adquisición de equipos de protección de la salud. A todo nos hemos sobrepuesto, no sin dificultades y sí con un incremento de nuestros costes de producción.

En definitiva, después de conseguir la mirada comprensiva de la sociedad hacia la situación límite de los agricultores y ganaderos, como resultado de las movilizaciones de los primeros meses del año, la catarsis del coronavirus ha terminado de abrir los ojos a la verdadera realidad del campo español y su condición de sector básico y estratégico para nuestra sociedad.

Las autoridades españolas están repitiendo una y otra vez, desde que estalló la crisis, que la cadena alimentaria está funcionando sin problemas y garantizando el abastecimiento de la sociedad.

La catarsis del coronavirus ha terminado de abrir los ojos a la verdadera realidad del campo español y su condición de sector básico y estratégico para nuestra sociedad

Y es cierto. Hablan de la producción, la distribución, la industria, la logística, el comercio mayorista y minorista... con el añadido, en este caso sí interrumpido, de la hostelería, cuyo cierre sí que ha afectado a muchas producciones, muy enfocadas al consumo fuera del hogar.

Pero esa larga y compleja cadena alimentaria depende, obviamente, en su inicio, del trabajo de los hombres y mujeres del campo. Porque sin productores no hay productos.

Y ahí es donde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) quiere poner el foco del debate, los retos y propuestas que tenemos ante nosotros en España para reconstruir nuestro país y nuestra sociedad tras la crisis del coronavirus.

### **España necesita una agricultura familiar rentable y fuerte para garantizar el abastecimiento alimentario**

En primer lugar, UPA, la organización que agrupa y representa a la Agricultura Familiar en España, va a apoyar todas las demandas y soluciones que sean necesarias para el sector agrario en su conjunto. Pero necesariamente debemos ir un paso más allá. Porque dentro del concepto genérico de sector agrario conviven muchas realidades y muy distintas.

Y la Agricultura Familiar, mayoritaria en el sector, necesita respuestas a medida, porque no puede sobrevivir con las mismas armas que los modelos productivos que no dudarán en deslocalizar su actividad hacia otros países si les resulta más rentable y que tampoco proporcionan a la sociedad y al territorio los beneficios que aporta la Agricultura Familiar.

Una Agricultura Familiar viable no sólo produce alimentos sanos, seguros y de calidad, garantizando la soberanía alimentaria y dando soporte a nuestras exportaciones e industria agroalimentaria; además asienta población en el territorio dando impulso a otras actividades económicas, garantiza la biodiversidad, genera empleo estable y temporal, sostiene la ganadería extensiva, está apostando por las producciones ecológicas, conforma la base social de las miles de cooperativas que hay en España; es emprendedora con múltiples iniciativas de modernidad en cultivos, productos y presentaciones; y está siendo un elemento determinante para avanzar en la igualdad, con un protagonismo creciente de las mujeres en todos los órdenes de actividad y decisión.

Pero para garantizar estas funciones, estratégicas y decisivas para la sociedad, la Agricultura Familiar necesita ser rentable, recibir precios justos, con una relación equilibrada entre costes de producción y valor de los productos.

### **Estamos ante una ocasión definitiva**

Por todo ello, UPA centra el debate de la reconstrucción en los tres ejes del reconocimiento económico, social y político-institucional.

Estamos seguros de que esta puede ser la ocasión definitiva para iniciar un camino sin retorno hacia el reconocimiento del valor de nuestro trabajo, por ello estamos haciendo llegar nuestras ideas y propuestas, en primera instancia, a los partidos políticos con representación parlamentaria, porque el Congreso de los Diputados es el foro en el que se va a negociar.



Asimismo, estamos trasladando nuestras propuestas al Gobierno, a las Comunidades Autónomas, al resto de administraciones e instituciones, a las organizaciones sociales y a todos aquellos foros que contribuyan a que nuestra realidad sea conocida, asumida y apoyada por el conjunto de la sociedad.

Pero además, en el ámbito comunitario, no podemos dejar pasar la oportunidad de poner en valor la importancia que tiene la Agricultura Familiar en el sector agrario y en el territorio de la U.E. Todas las administraciones españolas, sin excepción, deben tener una postura de apoyo a la Agricultura Familiar en la definición y recursos de la PAC. No podemos permitir que decisiones políticas deslocalicen la producción de alimentos y dependamos de terceros países para abastecer de alimentos a sus ciudadanos.

En torno a la necesidad de dar respuesta al triple desafío «viabilidad económica-respeto social-reconocimiento institucional», las propuestas de UPA se estructuran en los grandes retos a que nos enfrentamos. Según nuestro criterio, son los siguientes:

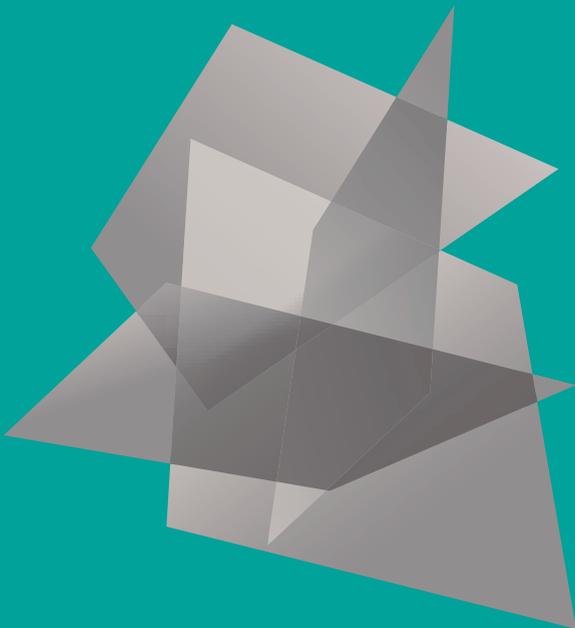
### **El reto de los mercados, los precios justos y la garantía de ingresos**

*Objetivo:* Aprovechar el impulso del proceso de reconstrucción nacional para cerrar definitivamente los cambios legales y culturales que necesita la cadena alimentaria en España para que se reconozca el valor de las producciones agrarias, se paguen precios justos y se respeten las relaciones contractuales, garantizando así la rentabilidad de la Agricultura Familiar.

Asimismo, reforzar presupuestariamente a ENESA y adaptar el Sistema de Seguros Agrarios al nuevo escenario que impone el cambio climático.

### **El reto generacional**

*Objetivo:* Apoyar e incentivar a los jóvenes para que se incorporen a la actividad agraria. Solo así se garantiza la supervivencia del modelo agroalimentario de España.





Hacen falta políticas activas e innovadoras que eviten la huida de jóvenes y mujeres, y favorezcan el repoblamiento con jóvenes y familias procedentes de las ciudades

### El reto de la igualdad entre hombres y mujeres

*Objetivo:* Conseguir en todos los ámbitos la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural y el sector agrario, con medidas legales, económicas y sociales que refuercen el trabajo y la posición social de las mujeres.

### El reto territorial y de la igualdad entre pueblos y ciudades

*Objetivo:* Saltar de las palabras a los hechos. El despoblamiento de muchas zonas rurales todavía es reversible si se aplican medidas adecuadas a la realidad de cada territorio. Hacen falta políticas activas e innovadoras que eviten la huida de jóvenes y mujeres, y favorezcan el repoblamiento con jóvenes y familias procedentes de las ciudades.

### El reto digital

*Objetivo:* Asegurar de manera definitiva el acceso universal y de calidad a internet y todas las herramientas de comunicación en todo el territorio.

### El reto de la sostenibilidad. Compromiso con la Agenda 2030

*Objetivo:* Reconocer y consolidar el compromiso que ya tiene la Agricultura Familiar en España con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todas las iniciativas que se incluyen en la Agenda 2030 de Naciones Unidas se hacen ahora más necesarias que nunca, ante las consecuencias globales del coronavirus para toda la humanidad.

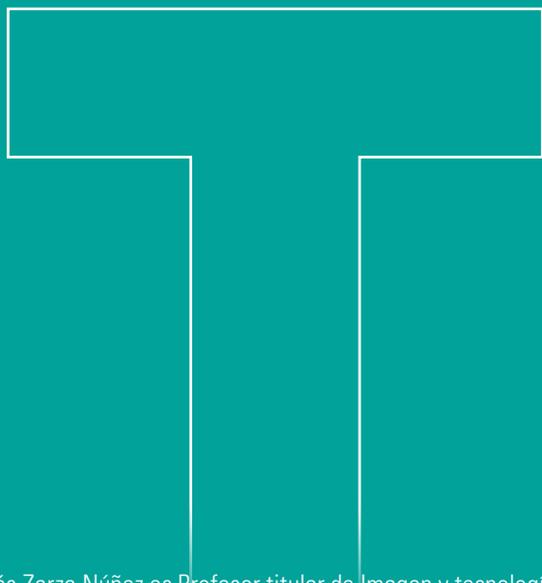
### El reto climático

*Objetivo:* Destacar por su trascendencia, entre el conjunto de ODS, a las consecuencias del cambio climático, apoyando la adaptación de la agricultura y ganadería familiar a las consecuencias de este proceso sobre territorios y producciones y su contribución a la necesaria y urgente mitigación de los gases de efecto invernadero.

### El reto del empleo

*Objetivo:* Garantizar el futuro de la Agricultura Familiar en España, con hombres y mujeres, titulares y cotitulares de explotaciones cuya situación laboral es equivalente a la de los autónomos; que a su vez son empleadores de personas que trabajan de forma permanente o temporal en tareas agrícolas y ganaderas. La continuidad de su actividad en el territorio favorecerá el impulso de nuevas actividades y empleos. •

T O M Á S  
Z A R Z A N Ú Ñ E Z



Tomás Zarza Núñez es Profesor titular de Imagen y tecnología digital Universidad Rey Juan Carlos. Doctorado en Bellas Artes sobre *Álbum Familiar y Relatos en Red*, acumula 20 años de docencia universitaria en la URJC, UCM, Universidad Europea y en diversos másteres de especialización. Ha publicado multitud de ensayos en diferentes libros y revistas especializadas. También es fotógrafo y ha colaborado con diversas instituciones, empresas, editoriales y agencias nacionales e internacionales.

M I G U E L  
S Á N C H E Z - M O Ñ I T A



Miguel Sánchez-Moñita es fotógrafo y profesor de Bellas Artes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha colaborado como fotógrafo con multitud de publicaciones, agencias, empresas e instituciones nacionales e internacionales. También ha desarrollado una labor docente en el ámbito universitario siendo doctor en Bellas Artes y profesor del área de imagen en la Facultad de Bellas del CES Felipe II de la Universidad Complutense entre 2008 y 2014 y en el grado en Bellas Artes de la URJC desde 2014 hasta la actualidad. Dentro de la universidad ha desarrollado diversos proyectos artísticos y docentes con un perfil social.



# LA VERDAD DE LAS IMÁGENES Y SU COMPROMISO CON LA(S) HISTORIA(S)

Miguel Sánchez-Moñita y Tomás Zarza Núñez.  
Profesores de la Universidad Rey Juan Carlos.

**E**n las sociedades contemporáneas la creencia está directamente ligada al deseo, de tal manera que lo que creemos constituye la arquitectura fundamental de las personas. El arte y la fotografía son también un acto de fe, porque conectan con la mecánica del *ver para creer*. Cuando miramos el mundo desde el arte generamos un acontecimiento que, como definió Heidegger, ordena el mundo haciendo perceptibles, mediante imágenes, los márgenes más invisibles de todas aquellas realidades complejas que nos rodean.

Al mirar no solo delineamos la superficie de las cosas, sino que también definimos el acto consciente de conocer y construir un relato del mundo a través de las imágenes, como hablaba Susan Sontag.

El ser contemporáneo se relaciona con el mundo basando su experiencia en unos hechos y evidencias que determinan su conexión más inmediata con lo que le rodea y su comportamiento respecto a los otros. Cuando dicha relación se modifica, a partir de la virtualización de la experiencia, se provoca un distanciamiento con la superficie de las cosas, se modifican las conductas que rigen las relaciones entre individuos y en definitiva se reescribe un nuevo ecosistema social; aunque no parece que seamos conscientes de la profundidad de dichos cambios. James Bridle

Al mirar no solo delineamos la superficie de las cosas, sino que también definimos el acto consciente de conocer y construir un relato del mundo a través de las imágenes

(2020) nos recuerda que «la aceleración tecnológica ha transformado nuestro planeta, nuestras sociedades y a nosotros mismos, pero no ha sido capaz de transformar nuestra forma de entender todas esas cosas».

La pérdida de la épica de los grandes relatos que sostenían nuestra visión del mundo nos ha llevado a refugiarnos en un escenario frágil de opiniones poco fundamentadas, donde se especula y sospecha del conocimiento adquirido mediante la tradición y la herencia —incluida la científica—. Así nos atrevemos a desmontar alegremente la legitimidad de los guardianes de dicho conocimiento, ya sean universidades, comunidades científicas, instituciones culturales o la escuela en general. Esta nueva condición que niega la historia reduce la capacidad del ser contemporáneo de comprender y relacionarse con su entorno porque ese reduccionismo cognitivo afecta incluso al concepto de lo que entendemos como verdadero y a los mecanismos que lo hacen posible. Los anhelos de la sociedad culta e ilustrada que defendía una verdad pericial sostenida en evidencias han quedado erosionados por una pléyade de opiniones en superficie; una verdad a tiempo parcial —rebozada a lo *fastfood*— que basa su autoridad en las audiencias y en los «me gusta»; que rechaza las evidencias y abraza opiniones de primera instancia y que ya no persigue la prueba de nada porque se atrinchera en lo sentimental.

Aceptamos esa verdad «cocinada» porque la construimos a base de imágenes también preparadas. El hecho de que la cultura digital binaria haya dejado al descubierto el ADN de la imagen —ese que nos muestra como se interviene una imagen— nos ha alejado de la creencia de que la imagen es lo real. Esta forma nueva de pensamiento transforma la relación de las personas con su entorno más inmediato. Si el pensamiento del siglo XX se basaba en la épica de los grandes relatos, la experiencia del hoy surfea por la superficie de lo cotidiano, sin demandar pruebas periciales de lo que acontece a nuestro alrededor. La arquitectura del conocimiento basado en las imágenes ha pasado a un estado de sospecha generalizado que precariza la relación con lo real y sus contenidos.

El papel de la Universidad del siglo XXI es el de construir un lugar de resistencia que conteste a esta tendencia contemporánea de claros tintes neoliberales que rechaza el conocimiento general en aras de potenciar una superespecialización que nos aleja de la comprensión general del mundo desde su complejidad y diversidad.

El papel de la Universidad del siglo XXI es el de construir un lugar de resistencia que conteste a esta tendencia contemporánea de claros tintes neoliberales que rechaza el conocimiento general en aras de potenciar una superespecialización

Debemos significarnos como un lugar desde donde construir imaginarios —a modo de reservorios de libertad— que luchen por la idea de un conocimiento diverso y una cultura general vista como un derecho y no como algo prescindible cuando las cosas vienen mal dadas. Porque como nos recuerda la constitución, el acceso al conocimiento y la cultura es un derecho y no un capricho que rellena nuestros momentos de ocio. El saber es el báculo que evita caer en la oscuridad y la caverna. Es la senda que nos mantiene lejos de los prejuicios y las opiniones arbitrarias.

En nuestro caso, desde las facultades de Artes, la responsabilidad es aún mayor puesto que el arte ha sido desde hace siglos el encargado de crear las imágenes y narrar aquello que el poder quería propagar como verdad. De ahí nuestra fe ciega en el arte y su pactada capacidad para relatar las certezas de lo visible e invisible, como apunta José Luís Marzo (2016). Una capacidad que no se discutió durante siglos puesto que fue la herramienta más eficaz para representar la mimesis del mundo. Cuando la fotografía apareció y las imágenes se pudieron reproducir por miles, esta mimesis del mundo se hizo aún mayor, pero también más compleja. Entonces comprendimos la necesidad y la importancia de analizar las imágenes desde los estudios culturales y visuales porque solo desde sus contextos históricos, culturales y sociales podíamos entender su complejidad. Como defendía Bauman, el capitalismo se ha aprovechado de una herramienta muy potente para controlar el acceso a la realidad: la imagen. Un constante y caótico alud de imágenes mediadas construye en las mentes de los individuos una sensación de acceso a los acontecimientos del mundo. El sistema sabe que la realidad no es lo importante sino la percepción que se genera sobre ella y, por lo tanto, necesita de una audiencia que no vea más allá de las representaciones tomadas como ciertas.

Ahora que lo visual se ha convertido en el elemento que universaliza la experiencia con el mundo se pretende eliminar las asignaturas de artes del itinerario curricular de nuestros hijos e hijas, condenándoles a un analfabetismo visual que limitará su participación y su concepción crítica en la sociedad del siglo XXI. La espectacularización del mundo ha provocado una suerte de hipertrofia en las imágenes cuya consecuencia inmediata es el ofuscamiento de lo que entendemos como real. Por eso es importante someternos a un programa dietético de la mirada, que nos adelgace y permita deshacernos del sobrepeso que supone tanto exceso visual y que nos mantiene siempre ocupados, para así podernos reencontrar con lo real. Esta sobre estimulación visual nos mantiene siempre distraídos, aletargados y lejos de cualquier postura crítica que denuncie las injusticias que nos rodean. Por eso necesitamos desarrollar una alfabetización visual que permita a los más jóvenes tener el conocimiento y la capacidad crítica de entender las imágenes y su carga simbólica, para que permanezcan atentos a cualquier intento de engaño y alejados de los trampantojos que proyectan los deshonestos en el día a día.

La sociedad digital ha permitido que el mundo sea más controlable; la digitalización permite un pensamiento numérico que ordena el mundo, pero también lo hace más previsible y reducido, desechando aquellas facetas que se le escapan a lo contable y digital, como señala Byung Chul Han. Es precisamente en ese espacio intermedio, donde las artes tienen la posibilidad de negociar con los problemas contemporáneos. El lenguaje simbólico, participativo, conceptual, performático y colaborativo del arte nos permite negociar con los incontables de nuestra cotidianidad. Porque la creación no está obligada a ofrecer respuestas, que sí demandamos del pensamiento científico, pero esa libertad de movimientos nos permite





La academia debe defender el papel del profesorado en una sociedad digital que será la nueva interfaz entre el conocimiento y la experiencia del mundo

precisamente surfear en las olas de los imprevistos, abrazando todo aquello que surja en el camino. Ofrecemos un recorrido experiencial, en un mundo que también ahora demanda ese hábito como objeto del nuevo consumo. Estamos pisando el acelerador hacia una imparable robotización de la vida gobernada por la inteligencia artificial. Desde hace tiempo, la computación digital ha superado la capacidad de procesamiento de la mente humana. La idea de la red 5G es adjudicar a cada dispositivo, máquina e individuo una dirección IP para que los datos que generan se viertan a internet. Los datos son la materia prima esencial que mantiene los andamiajes del sistema, por lo tanto, en breve, los seres humanos estarán compitiendo contra un automóvil, una lavadora o un frigorífico en un mercado global de venta de datos donde la maravillosa imperfección humana irá perdiendo valor en un entorno dominado por la maximización del rendimiento. En consecuencia, desde la universidad estamos obligados a recuperar aquello que nos hace humanos: los afectos y los cuidados a nuestros semejantes y a nuestro mundo. Para lograr este objetivo el arte es esencial.

En las prácticas artísticas no buscamos ni estamos obligados a definir lo verdadero, pero invertimos todas nuestras fuerzas en entender como funcionan los mecanismos del conocimiento. Nos adentramos en un estado de especulación continua donde los márgenes entre lo verdadero y lo construido son difícilmente perceptibles para visibilizar los elementos que vertebran y sostienen nuestra experiencia y nuestra relación con el mundo. Un mundo de disidencias y contradicciones provocadas por el arte que nos acercan a lo esencial. Así, acercándonos a lo verdadero desde la sospecha, somos capaces de visibilizar y verificar las especulaciones cotidianas a las que se somete la verdad desde las imágenes. Una verdad que, de alguna manera, hemos transformado en un puñado de opiniones, como nos recuerda Robert Blatt.

Por lo tanto, como clama Aurora López Polanco, hay que descolonizar los saberes. Hay que partir de nuevo del vacío, como acto necesario para alcanzar el conocimiento; hay que regresar a la confusión como forma de retomar la consciencia y el espíritu crítico.

La universidad debe transmitir el virus de la curiosidad y de la rebeldía para hacernos levantar cada mañana contaminados con la ambición de no aceptar lo establecido e infectarnos con las ansias de la conquista de lo desconocido. La academia debe defender el papel del profesorado en una sociedad digital que será la nueva interfaz entre el conocimiento y la experiencia del mundo, en especial cuando las circunstancias epidemiológicas, climáticas o de cualquier otra índole especial nos confinan a la geografía de nuestros hogares. Y debe hacerlo desde un diálogo que se nutre con la autoridad de las palabras como forma de construcción social. Palabras compartidas, palabras derramadas que consolidan el ecosistema del conocimiento y que se nutre con las aportaciones de unas y otras.

Las revoluciones modernas nos ayudaron a crear sociedades libres y justas, amparadas en sistemas de educación pública igualitaria e instituciones democráticas. La universidad ha sido la encargada de impartir y salvaguardar todo tipo de saberes técnicos y sociales porque ha entendido que, si unos nos ayudan a mejorar las condiciones materiales de nuestra vida, otros nos permiten comprender las complejidades de las sociedades, así como a sus individuos.

Hay que recordar que cuando surgieron los regímenes totalitarios en la Europa del siglo XX, su primera misión fue atacar a la cultura y perseguir a artistas y pensadores en aras de construir una socie-

dad especializada. Cuando en nuestros días se atacan las humanidades y las artes se vuelve a ese punto de inflexión que creíamos haber superado y que Ortega bautizó como «la barbarie del especialismo».

El mercado neoliberal en el que vivimos también crea en nosotros una servidumbre porque todo lo monetiza, despreciando todos aquellos saberes que no están directamente relacionados con la producción material inmediata.

Por eso no hay que olvidar que el conocimiento no busca el «retorno inmediato», porque no es algo que se pueda cuantificar. Las grandes evoluciones de la especie humana han venido siempre de la mano del pensamiento y no de sus productos. Una sociedad libre que se precie es aquella que defiende sin temor la libertad de pensamiento. Queremos recordar también las palabras del profesor Emilio Lledó cuando dijo que en una sociedad no puede haber libertad de expresión si no hay libertad de pensamiento. Así que salgamos al mundo a cortejarlo, a seducirlo y transformarlo en un lugar mejor, alejándonos de la injusticia, la desigualdad y el pensamiento único. •

# Á N G E L E S S A N T A M A R Í A

Ingeniero Industrial por la Universidad de Comillas (ICAI) y PDG por el IESE Business School.

Desde febrero de 2018 es Consejera Delegada de Iberdrola España, compañía eléctrica líder, que gestiona más del 50% de la capacidad renovable instalada por el grupo en el mundo.

La trayectoria profesional de Santamaría ha estado ligada a Iberdrola durante dos décadas, principalmente relacionada con el desarrollo y la gestión de su estrategia de transición hacia un nuevo modelo energético, basado en renovables.

Entre 2015 y 2018, como Directora de España e Internacional en Iberdrola Renovables, asumió la responsabilidad global -comercial, promoción, construcción y operaciones- de este negocio en Iberia, Europa Continental, Brasil y México.

Con anterioridad, desde enero de 2007, fue Directora de Prospectiva y Tecnología de la actividad de Renovables, englobando las áreas de Regulación, Innovación y Desarrollo.

Previamente, en 2001, como Directora de Gestión de Activos (Explotación) de la división renovables, asumió las responsabilidades de Operación, Mantenimiento y Venta de Energía de los activos de la compañía.

Santamaría inició su carrera profesional en Iberdrola Ingeniería y Construcción, así como en Duro Felguera, en ámbitos de actividad relacionados con el sector eléctrico, que le permitieron adquirir una gran experiencia en la gestión de proyectos complejos.

Asimismo, es miembro del Consejo de diferentes asociaciones y patronatos relacionados con el sector de la energía y el ámbito empresarial.



# DESCARBONIZAR LA ECONOMÍA Y CREAR EMPLEO, ES POSIBLE Y ADEMÁS RENTABLE

Ángeles Santamaría. Consejera Delegada de Iberdrola España.

**U**na combinación adecuada de energías renovables, electrificación y medidas económicas para internalizar los daños ambientales permitirían combatir el cambio climático generando riqueza.

Existe un amplio consenso sobre la gravedad de la amenaza del cambio climático y la necesidad de tomar acciones para limitar el aumento de la temperatura del planeta. Son muy numerosos los informes científicos que cuantifican con precisión el impacto que un ascenso de más de 2°C podría tener sobre los ecosistemas, la salud de las personas y la economía mundial.

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)<sup>1</sup>, es una referencia científica fundamental para los líderes mundiales competentes en las negociaciones sobre clima y medioambiente. En él se muestra cómo los efectos del calentamiento global, en un escenario de altas emisiones, no se limitan a zonas remotas del planeta como pueden ser los polos; por el contrario, se prevé que los glaciares más pequeños que hay, por ejemplo, en Europa, África Oriental, la región tropical de los Andes e Indonesia, perderían más del 80% de su actual masa de hielo de aquí a 2100. Por otra parte, el retroceso de la criosfera en regiones de alta montaña seguirá incidiendo negativamente en las actividades de ocio, el turismo y el patrimonio cultural, además de comprometer el suministro de agua potable de grandes zonas aguas abajo de las cumbres.

Estos mensajes que hace tan sólo unos años podrían calificarse de «catastrofistas» y se atribuían a los sectores ecologistas más extremos, son hoy casi universalmente aceptados, como lo demuestra el interés creciente de la población en general, y muy especialmente de los jóvenes, que demandan a sus gobiernos señales concretas y actuaciones urgentes ante la emergencia climática. La cobertura mediática al máximo nivel durante los más de 15 días que duró la última Cumbre del Clima (COP) (celebrada en noviembre de 2019 en Madrid) fue otra muestra de este cambio de percepción de la so-

<sup>1</sup> Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), (Nota de prensa [https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/09/srocc\\_p51-pressrelease\\_es.pdf](https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/09/srocc_p51-pressrelease_es.pdf)).

Son muy numerosos los informes científicos que cuantifican con precisión el impacto que un ascenso de más de 2°C podría tener sobre los ecosistemas, la salud de las personas y la economía mundial.





ciudad, en la que la preservación del entorno natural escala posiciones entre las principales preocupaciones. Según la segunda edición de la Encuesta del Banco Europeo de Inversiones sobre el Clima<sup>2</sup> - en el que analiza la percepción que tiene la ciudadanía sobre el cambio climático - el 75% de los españoles responde que ha participado o participará en manifestaciones contra el cambio climático.

Atajar el cambio climático y transformar la economía es por tanto una demanda social, y no solo la consecuencia de una revolución tecnológica, y esa es quizá la mejor garantía de que la transformación es inevitable. Pero las sucesivas Cumbres del Clima no logran arrancar a todos los gobiernos compromisos firmes de reducción de sus emisiones nacionales, por temor a que la descarbonización suponga costes inasumibles, obstaculizando el crecimiento económico.

La crisis sanitaria del COVID-19 ha tenido y posiblemente va a seguir teniendo, importantes impactos en nuestra forma de comportarnos como sociedad. Sin duda, uno de los principales efectos es la toma brutal de consciencia de la vulnerabilidad de esta sociedad globalizada, y la sensación de inseguridad frente a crisis inesperadas y desencadenas por la «naturaleza».

En este contexto, lejos de relegar la necesidad de luchar contra crisis climática, se ha puesto en valor, por ejemplo, la mejora de la calidad del aire en las ciudades y la necesidad de revertir la frecuencia creciente de los fenómenos meteorológicos severos y otras crisis naturales.

Debido al parón en seco de la actividad económica y de la movilidad, se ha hecho más evidente que nunca, especialmente en las ciudades grandes, el impacto del transporte en la calidad del aire. Como ejemplo, en Madrid sólo en 4 días, los valores de NO<sub>2</sub> bajaron de 80µg/m<sup>3</sup> a 20 µg/m<sup>3</sup>, por debajo del 40% del límite fijado por la UE y la OMS<sup>3</sup>. Esto ha sido un potente recordatorio de cómo es posible vivir y disfrutar en la ciudad de un aire limpio. En otros ámbitos, algunas especies animales han «reconquistado» parte de lo que anteriormente era su entorno, y la reducción de los niveles de ruido nos ha permitido escucharlos.

Como consecuencia de todo ello, la necesidad de luchar contra crisis climática sigue en la conciencia colectiva como un tema fundamental y que nos va a costar renunciar a estas mejoras. Pese

<sup>2</sup> Segunda edición de la Encuesta del Banco Europeo de Inversiones sobre el Clima <https://www.eib.org/en/surveys/2nd-citizen-survey/climate-change-impact.htm>.

<sup>3</sup> Fuente: GREENPEACE.

La crisis sanitaria del COVID-19 ha tenido y posiblemente va a seguir teniendo, importantes impactos en nuestra forma de comportarnos como sociedad



a que, en el corto plazo, es posible que los vehículos privados de menor ocupación ganen cuota frente al transporte colectivo, por el temor a contagios en las urbes más pobladas, confiemos que sea algo aislado, ya que las ciudades deben ser protagonistas en la descarbonización.

En 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 17 Objetivos dirigidos a favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad. Uno de ellos, el ODS 11, está estrechamente ligado con la rápida urbanización que se está produciendo y cuya adecuada ordenación es clave para la lucha contra el cambio climático. Según este organismo, las ciudades ocupan, hoy en día, el 3% de la superficie de la Tierra, pero generan el 70% de los Gases de Efecto Invernadero.

La rápida urbanización es ya una realidad. Si en los años 50 el 30% de la población mundial vivía en ciudades y zonas urbanas, actualmente este porcentaje alcanza ya el 55% y está previsto que llegue casi al 70% en 2050 de media global. Si se considera el continente europeo, este porcentaje crece hasta el 84% y roza el 90% en el continente americano, según datos de la revisión de 2018 del World Urbanization Prospect de las Naciones Unidas<sup>4</sup>.

El 40% de la energía final total se consume en las ciudades<sup>5</sup>. Si se analiza el impacto que tiene este consumo en las emisiones, desglosado por sectores, se observa que la edificación es responsable de un 30%, mientras que un 55% de las emisiones en las ciudades se deben al transporte (el 15% restante es generado por los residuos). Actuar sobre estos dos sectores (edificación y transporte en las ciudades) es clave en la lucha contra el cambio climático. El sector transporte contamina más, debido a que el 95% de los combustibles utilizados son productos petrolíferos

<sup>4</sup> World Urbanization Prospect, de las Naciones Unidas.  
<sup>5</sup> Fuente: PWC.

(gasolina y diésel), mientras que en la edificación existe un 58% de consumo de electricidad, energía más eficiente, limpia y que no produce emisiones locales, por lo que contribuye a una mejor calidad del aire.

Y esto es así porque la electricidad ha sido la forma de energía que más renovables ha conseguido incorporar. En España la producción de las instalaciones renovables (incluida la hidráulica) representa ya hoy en torno a un 40% de toda la producción de electricidad<sup>6</sup>, algo impensable hace una década, cuando comenzó su despegue. Hace 15 ó 20 años las tecnologías eólica y solar necesitaban de un modelo de apoyo regulatorio para hacerlas viables. Sin embargo, a día de hoy la penetración de renovables responde a dinámicas de mercado y las renovables (eólica onshore y fotovoltaica) son la forma más barata de generar electricidad en muchos lugares, sin necesidad de esquemas complementarios, por lo que el cambio tecnológico parece irreversible.

Así lo indica Blomberg (BNEF), en su informe de costes del sector 2019<sup>7</sup>, donde reconoce que las nuevas plantas fotovoltaicas y eólicas han alcanzado la paridad con los precios medios mayoristas en Europa, China y California, por ejemplo. En las regiones que habitan 2/3 de la población, la generación renovable es más barata que la basada en carbón o gas.

Según datos de la agencia internacional de energías renovables (IRENA) el precio del panel FV ha caído un 80% desde 2009 y el de las turbinas eólicas un 30-40%<sup>8</sup>. La apuesta global por estas tecnologías va a permitir que continúen reduciendo su coste,

<sup>6</sup> Fuente: REE (balances de generación eléctrica en España 2018 y 2019).

<sup>7</sup> Bloomberg NEF Energy Outlook 2019.

<sup>8</sup> IRENA Global LCOE of utility-scale renewable power generation technologies 2010-2018.

La electricidad ha sido la forma de energía que más renovables ha conseguido incorporar

previsiblemente un 30% adicional a 2030, y más en el caso de la eólica marina<sup>9</sup>, conforme aumente su capacidad instalada.

Esta reducción de costes ha provocado que en los últimos 5 años se haya instalado la misma capacidad renovable (solar y eólica) que en los 15 anteriores<sup>10</sup> y, aunque la tendencia se ha estabilizado, lo cierto es que desde 2017 ya se instala más capacidad solar que de cualquier otra tecnología (mundo). En Europa, después del Green Deal cada vez es más difícil pensar que se siga apostando por invertir en nueva generación que no sea libre de emisiones.

Las tecnologías de almacenamiento para gestionar un sistema con alta penetración renovable también están disponibles. El bombeo hidráulico y los sistemas de gestión de la demanda son una realidad competitiva a gran escala.

En conclusión, hoy somos capaces de producir y distribuir electricidad sin emisiones y a un coste competitivo. El problema es que, en la mayor parte de los países industrializados, el peso de la electricidad en el consumo total de energía final es reducido, en torno al 25%<sup>11</sup>. Por ello, «descarbonizar» la economía implica actuar sobre la totalidad de nuestras necesidades energéticas y, para alcanzar la neutralidad en carbono en 2050, debemos transformar todos y cada uno de los sectores.

<sup>9</sup> Fuente: estimación propia Iberdrola.

<sup>10</sup> Fuente: BNEF.

<sup>11</sup> Fuente: IEA.

En Europa las emisiones asociadas a la generación de electricidad no han parado de disminuir en los últimos años<sup>12</sup>, un -36% desde 1990 (un -4.3% en 2019 vs 2018) y a nivel mundial se han estabilizado (el aumento del consumo eléctrico global se compensa con el auge de las renovables). Sin embargo, las emisiones totales de CO<sub>2</sub>, con el transporte a la cabeza, parecen no tener freno y, según algunos estudios (como el Global Carbon Project<sup>13</sup>), alcanzaron un nuevo récord mundial en 2019.

La descarbonización de los usos finales de la energía, mediante lo que se denomina «sector coupling» o integración de sectores, es la estrategia óptima para alcanzar los ambiciosos compromisos de neutralidad de emisiones. Esta estrategia implica el análisis simultáneo de la forma en la que utilizamos la energía - para transporte de pasajeros o mercancías, para calentarnos o refrigerar espacios, o para determinados procesos industriales - y de las diferentes fuentes de suministro disponibles, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema energético en su conjunto. De esta forma es posible, mediante el análisis coste/beneficio de cada alternativa, alcanzar la combinación que más contribuya a la consecución de los objetivos climáticos, sin renunciar a la competitividad económica, a la accesibilidad universal y a la seguridad de suministro de la energía.

En este análisis nos encontramos, en el lado de la demanda, con tecnologías basadas en el consumo de una electricidad renovable

<sup>12</sup> Fuente IEA.

<sup>13</sup> Global Carbon Project.



competitiva (como hemos comentado antes), que ya son más eficientes para los mismos usos que las soluciones que utilizan combustibles fósiles (por tanto, contaminantes). Es el caso, por ejemplo, de los coches o autobuses eléctricos. La eficiencia del vehículo eléctrico puro («del tanque a la rueda») es de 77%, mientras que la del vehículo convencional es de tan sólo del 16% en el caso de la gasolina y del 21%<sup>14</sup> en el caso del diésel. Esta mayor eficiencia de los motores eléctricos respecto a los de combustión, también aplica si la medimos en términos del ciclo de vida completo del vehículo («del pozo a la rueda») durante su uso. Según el estudio de la Universidad de Comillas<sup>15</sup>, el coche eléctrico es de 2 a 3.5 veces más eficiente que los vehículos de combustión (gasolina, diésel, GLP o gas comprimido) y que los de pila de combustible, y resulta entre 4.5 y 9 veces más eficiente que uno de biometano/metano sintético. Por tanto, es indiscutible que su uso conlleva ahorros en energía primaria, pero además: reducción de emisiones de CO<sub>2</sub>, nula generación de emisiones locales (partículas, etc) y fomento del uso de energías renovables.

Algo similar sucede con la electrificación de los usos finales para la producción de calor y frío. El 67% del consumo de energía destinada al calor y frío es de origen fósil<sup>16</sup>, siendo el gas la principal fuente de energía, salvo en países del norte de Europa, donde hay una mayor presencia de la biomasa y el district heating. En este caso también se dispone de la tecnología para climatizar espacios

14 Fuente: Universidad de Comillas (<https://evobservatory.iit.comillas.edu/>).

15 Universidad de Comillas.

16 Fuente: Heat Roadmap Europe 2050 EU grant no.695989.

utilizando electricidad renovable y energía del propio ambiente, mediante los equipos denominados bombas de calor. El aprovechamiento del calor (o frío) del aire exterior permite alcanzar eficiencias del orden del 400%<sup>17</sup> incluso en climas extremos, frente a los límites físicos del 100% de rendimiento de las calderas de combustión (gas o gasoil) que, sin embargo, dominan la calefacción doméstica en casi todas las geografías. Por tanto, es un hecho ya hoy que electrificar es sinónimo de eficiencia. La percepción del menor confort o peores prestaciones que proporcionan las soluciones eléctricas, respecto a las basadas en combustibles fósiles, son una herencia del pasado, que conviene dejar claro que ya no aplica. Los equipos actuales de aerotermia pueden impulsar el agua a los emisores interiores de la vivienda o local comercial (radiadores o suelo radiante) con el mismo principio y, por tanto, sensación térmica que los fluidos impulsados por calderas de condensación de gas, por ejemplo. Y por lo que respecta al transporte, los avances en motorización eléctrica proporcionan mejores prestaciones de respuesta en conducción.

A pesar de sus evidentes ventajas, y de los avances de la ciencia en la generación y el uso de las energías no contaminantes, lo cierto es que el despegue de su empleo de forma mayoritaria está siendo muy lento, y nos preguntamos a qué puede ser debido. Ya hemos visto que no tiene que ver con la tecnología, que lleva años de desarrollo. Es evidente que vencer la inercia del sector energético tradicional necesita señales potentes a nivel geopolítico.

17 Fuente: Datos de COP medios estacionales de fabricantes de equipos.

Por tanto, es un hecho ya hoy que electrificar es sinónimo de eficiencia. La percepción del menor confort o peores prestaciones que proporcionan las soluciones eléctricas, respecto a las basadas en combustibles fósiles, son una herencia del pasado



Tras las crisis del petróleo (años 70 y año 2006) los países europeos impulsaron políticas de fomento de las energías renovables como alternativa a la dependencia de unos pocos países productores de hidrocarburos. Otras energías autóctonas (como el gas de esquisto extraído a partir del fracking, por ejemplo) han tenido un desarrollo desigual, en algunos territorios frenado por motivos de seguridad o de oposición pública. Esta respuesta, decidida por parte de los estados, consiguió reducir los niveles de dependencia energética exterior por debajo del 60% de media en EU<sup>18</sup>. En el actual momento de emergencia climática es necesario de nuevo tomar medidas de calado por los gobiernos que den un impulso significativo al cambio de modelo energético hacia uno más sostenible. Esta crisis global va a generar una gran competencia entre los distintos países por captar capital y talento. Será más esencial que nunca contar con marcos estables, predecibles y atractivos que den seguridad jurídica y atraigan las inversiones y los conocimientos necesarios. El papel de las administraciones públicas es fundamental a la hora de dirigir las actuaciones de los ciudadanos y de los inversores y, por tanto, las señales deben ser inequívocas y audaces.

Es evidente que, además de la competencia geográfica, la transición a una economía sin carbono se encuentra con numerosos sectores productivos en dura competencia por su supervivencia. Por lo que respecta a energía, la supremacía de los combustibles

fósiles a lo largo de toda la historia moderna de la humanidad es abrumadora y el crecimiento en el consumo mundial de petróleo o gas no ha parado de crecer desde 1990<sup>19</sup> (con la excepción de la crisis financiera de 2018, que contrajo temporalmente todo el consumo energético en general). Como muestra, en la actualidad el 70% de la energía primaria en la UE es de origen fósil<sup>20</sup>, con una presencia del carbón que, pese a la reducción de su contribución en el mix europeo, todavía es del 15%, equivalente al peso de la energía renovable como fuente primaria. Esto impacta directamente en la baja eficiencia global del sistema energético europeo.

Algunos intereses geopolíticos y empresariales, al albur de este liderazgo del petróleo, han complicado durante décadas la rúbrica de acuerdos concretos en defensa de las energías limpias, que sólo desde los tímidos compromisos de Kioto en adelante empezaron a tomar forma. Ahora, que parece más claro que nunca, que la transición energética es un hecho, en el que ya estamos inmersos en realidad, no debemos olvidar la historia y pretender que sea una revolución, sino que los diferentes sectores irán de forma progresiva adoptando aquellas actuaciones que de forma natural tengan sentido económico y social, además de avanzar en la dirección de la descarbonización. Esto no significa que deba existir un tratamiento excesivamente condescendencia hacia las tecnologías y los

18 18 Fuente: Eurostat.

19 Fuente IEA: Total Primary energy supply (TPES) by source, world 1990-2017.

20 Fuente: Eurostat.

## A la cabeza de este convencimiento en la lucha eficiente contra el cambio climático, la Unión Europea ya se ha comprometido a reducir sus emisiones en un 40% para 2030

combustibles, que ya sabemos que no van a ser protagonistas del futuro, pero sin que esto suponga medidas traumáticas en particular. Hay que dar tiempo a la reconversión de la economía del petróleo a la economía descarbonizada.

No debemos temer destrucción de empleo asociado a la transición energética, el hecho de que la mitad del PIB mundial se produce en países con compromisos de neutralidad de emisiones en 2050<sup>21</sup>, parece apuntar en la dirección contraria. Las primeras economías del planeta confían que su crecimiento es indisoluble de la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida que conlleva.

A la cabeza de este convencimiento en la lucha eficiente contra el cambio climático, la Unión Europea ya se ha comprometido a reducir sus emisiones en un 40% para 2030 (con respecto a 1990) y la actual Comisión Europea pretende incrementar ese objetivo hasta el 55%. Todo ello como parte de un plan para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050. En su publicación «Neutralidad climática: vías para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo» la Comisión defiende la necesidad de desarrollar modelos y herramientas que evalúen los costes, los riesgos y los beneficios de las inversiones. Por su parte la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) estima que cada euro invertido en renovables en la Unión Europea contribuye a incrementar en 0,8 euros el PIB<sup>22</sup>. Y estas inversiones se apalancan en la creación de empleo cualificado y de futuro.

En el contexto de recuperación de la crisis sanitaria, la hoja de ruta presentada por los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeos<sup>23</sup> es igual de contundente. Lejos de dudar de la idoneidad de mantener los objetivos de clima, identifica la transición verde y la transformación digital como los protagonistas clave y necesarios del relanzamiento y la modernización de nuestra economía. El sector energético, gracias a su probado efecto arrastre, será una herramienta muy útil de ayuda a la reactivación de la actividad y del empleo, aportando las capacidades nacionales y europeas al servicio de la reindustrialización. Los proyectos que se pongan en marcha en los próximos meses contribuirán sin duda a ambos ob-

jetivos y serán la oportunidad de señalar el camino de esa reconversión hacia el empleo de calidad.

Sentar las bases para dar respuesta a la demanda social de una economía descarbonizada es una labor urgente y prioritaria. Aunque hay algunas incertidumbres, la buena noticia es que hay bastantes certezas del camino a seguir y de los próximos pasos en el corto plazo.

Eliminar las barreras a la electrificación de los usos finales conducirá de forma inmediata a mejorar la eficiencia energética, integrar renovables en el consumo final y mejorar la calidad del aire. Para ello los gobiernos deben garantizar un terreno de juego justo entre tecnologías, que permitan que esta transición se lleve a cabo con los ritmos que marquen las lógicas de mercado y del consumo privado, pero sin perpetuar más allá de lo razonable subsidios a combustibles que ya son del pasado. La fiscalidad, en particular la energética, debe ser una herramienta protagonista a la hora de señalar aquellas actuaciones compatibles con los objetivos. Por otra parte, estos objetivos se deberán fijar, a nivel local o nacional, de forma que sean únicos para todos y dejar competir a los actores, sin adelantar cuáles serán los ganadores. En este sentido la buena noticia es que la transición, independientemente de la tecnología que resulte, es una oportunidad de generar riqueza y empleo de calidad en nuevos sectores. Esto es perfectamente compatible con apoyar las tecnologías menos maduras, desarrollando programas de innovación para asegurar su madurez en el momento necesario. La inversión en I+D+i es necesaria y deseable en un entorno globalizado, aunque su impacto en las economías locales no suele llegar en el corto plazo.

Como conclusión, y tal y como apuntaba el título, en estos momentos, en los que hay que tomar tantas decisiones para movilizar con agilidad recursos en la dirección adecuada, se dan las circunstancias para invertir en la transición a una economía más sostenible, apoyándonos en tecnologías maduras y eficientes, con la certeza de que así crearemos empleo de futuro. •

<sup>21</sup> Fuente: Energy&Climate Intelligence Unit (ECIU).

<sup>22</sup> IRENA – Actualización de su propuesta de escenario ReMap Global-Renewables-Outlook-2020.

<sup>23</sup> EU -A ROADMAP FOR RECOVERY Towards a more resilient, sustainable and fair Europe.

# I S M A E L S E R R A N O



Ismael Serrano (1974), cantautor crecido en Vallecas (Madrid), publica su primer disco «Atrapados en azul» en 1997. Desde entonces ha editado 9 discos de estudio y 4 en directo, por los que ha obtenido varios discos de oro y de platino y con los que ha realizado conciertos por toda España y Latinoamérica.

Ha escrito artículos de opinión para los periódicos Diario 16 y Público

También es autor del libro de poemas «Ahora que la vida» (Ed. Mueve tu lengua. 2015), del cuento infantil «La niña que hablaba con los árboles» (Ed. Mueve tu lengua. 2017) y del musical infantil «Oliverio y la tormenta», por el que ha recibido varios premios.

En marzo de 2019, publica su primer libro de relatos «El viento me lleva» (Grijalbo. Penguin Random House).



Ismael Serrano. Cantautor.

“**D**e esta saldremos mejores”, nos decíamos al comenzar el confinamiento. Nos asomábamos a los balcones y buscábamos en la mirada del vecino un espejo en el que reconocernos. Al ver en nuestros compañeros de aplauso el reflejo de nuestro miedo y de nuestra incertidumbre nos sabíamos más fuertes: no estábamos solos. Quizá sí se pueda sacar esa conclusión después de tantos días de encierro: no estamos solos. Quizá poner por fin en valor lo común, y por extensión lo público, sí sea una consecuencia de esta crisis sanitaria.

Es posible que, después de lo vivido, los músicos recuperemos en nuestros relatos las referencias a los anhelos compartidos, al proyecto común, a ese “nosotros” desatendido por los escritores de canciones. Durante un tiempo se impuso de manera hegemónica una estética cultural que proponía el escapismo permanente. El caso era evitar que la mirada política contaminase la obra artística. Mejor hablar de nuestros fracasos sentimentales que de nuestras derrotas políticas. Daba más pudor confesar las simpatías políticas que compartir las intimidades amorosas. No se escribían canciones políticas por temor a caer en el panfleto pero no nos daba miedo pecar de cursis.

Los cantautores padecemos este estigma. Ningún humorista pierde la oportunidad de hacer un buen chiste sobre el cantautor solemne y aburrido. Porque participar en el debate político era eso: algo aburrido y caduco. Es verdad que el 15M cambió el paradigma. De repente gente muy joven empezó a interesarse por la política. La imagen de la Puerta del Sol como ágora de debate efervescente en la que se discutía sobre el futuro de todos o sobre la justicia social alimentó la ilusión de mucha gente que exigía asumir el protagonismo que le correspondía. Eso se trasladó a la música. Grupos que hasta entonces nunca le habían cantado a la desigualdad y a la precarización escribían canciones que aludían a ese “nosotros” hasta entonces omitido.

Convengamos que el 15M ha perdido la fuerza de sus inicios. De desanimar al personal se han encargado los que vieron tambalear su hegemonía: medios de comunicación afines al régimen, defensores del bipartidismo, reaccionarios de toda la vida e incluso izquierdistas acomodaticios que veían aterrados como unos recién llegados pretendían desplazarles de sus cómodas butacas. Pero a pesar de ello el espíritu del 15M aún vive en el ánimo de muchos jóvenes que creen que ya es hora de cambiar las cosas.

Y esa radiación de fondo, fruto de la primera explosión, aún se puede encontrar en las propuestas musicales de algunos artistas.

La imagen de la Puerta del Sol como ágora de debate efervescente en la que se discutía sobre el futuro de todos o sobre la justicia social alimentó la ilusión de mucha gente





En medio de todo esto sobrevino una pandemia.

Componer canciones para cambiar el mundo puede resultar algo vanidoso. Escribimos versos para sentirnos menos solos. Y en los momentos de adversidad sentirse acompañado es tremendamente útil. Nos ayuda a entender que tenemos capacidad de influencia en nuestro futuro en tanto en cuanto hay semejantes con los que compartimos frustraciones y deseos.

En esta pandemia muchos músicos salieron con sus guitarras a los balcones. Otros desde nuestras casas abrimos una ventana al mundo para regalar nuestro trabajo a quienes quisieran escuchar. Se trataba de generar espacios de encuentro, de mitigar esa sensación de pérdida de control. Le cantábamos a esa vida congelada que algún día recuperaríamos, poniendo en el horizonte la posibilidad de fin a la pesadilla del encierro. Buscábamos en las canciones vestigios de esa normalidad arrebatada y nos aferrábamos a ellas como náufragos a una tabla a la espera de divisar pronto la costa.

¿Saldremos mejores de esta crisis? La pandemia ha mostrado las costuras del sistema, ha puesto en evidencia sus contradicciones, ha agravado la precariedad en la que vivimos y eso hace que la mayor parte de la ciudadanía se plantee la necesidad de cambiar el modelo económico y de sociedad en el que vivimos. Ante esta realidad se producirá una reacción y un sector minoritario pero muy poderoso de la sociedad tratará de frustrar todo cambio, resistiéndose a perder los privilegios sobre los que se sustenta el sistema. La polarización es fruto de dicha reacción: aquellos a los que nunca se les ha dicho que no a nada defenderán con uñas y dientes sus posición privilegiada.

Así que es probable que los buenos salgan mejores y los malos peores. Quién sabe.

En el transcurso quizá los músicos hayan perdido el pudor a la hora de escribir versos que hablen de todos nosotros, del proyecto común, de la injusticia social, del cumplimiento pendiente de los derechos negados. Quizá pase de moda la caricatura del triste cantautor que siempre protesta. Quizá en estos tiempos en los que aflora el miedo, la música sirva para establecer vínculos que fomenten la empatía.

La vida sin música es un etcétera y cuando la rutina confinada rodea nuestros pies con una cadena de etcéteras vacíos, cuando la vida queda suspendida en aire como los animales disecados del Museo de Ciencias Naturales, las canciones otorgan movimiento a los relojes que cuentan las horas que quedan para el encuentro, abren ventanas a la esperanza, nos ayudan a levantar la mirada.

Perdonen la cursilería. Quiero pensar que el encierro me ha hecho mejor pero me temo que hay cosas que no cambian. •

Componer canciones para  
cambiar el mundo puede  
resultar algo vanidoso.  
Escribimos versos para  
sentirnos menos solos

# ÍÑIGO URKULLU RENTERIA



Iñigo Urkullu es lehendakari del Gobierno Vasco desde el 15 de diciembre de 2012, día en que juró su cargo bajo el Árbol de Gernika.

El lehendakari Urkullu ha estado desde joven comprometido con la Política. Entre 2007 y 2012 fue presidente de Euskadi Buru Batzar de EAJ-PNV - Euzko Alderdi Jeltzalea/ Partido Nacionalista Vasco. Previamente presidió la Ejecutiva Territorial de Bizkaia (BBB) durante ocho años.

En sus cuatro legislaturas como parlamentario por Bizkaia en el Parlamento Vasco (1994-2007), fue miembro de diversas comisiones, como la Comisión de Educación y Cultura, la Comisión Especial sobre Autogobierno, o la Comisión de Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno, entre otros, y fue presidente durante tres legislaturas de la Comisión de Derechos Humanos (1998-2008). Fue también miembro del Consejo Asesor de Euskera (1994-2001) y previamente del Consejo Social de la EHU-UPV (1986-1989).

El lehendakari Urkullu es de formación profesor. Estudió Magisterio con especialidad en Filología Vasca y ejerció la docencia en Asti-Leku Ikastola de Portugalete y en el Colegio Público Félix Serrano de Bilbao, tras obtener su plaza en la enseñanza pública.



**A**gradezco la invitación a colaborar con las reflexiones que se recogen en la publicación Tendencias sobre el presente y el futuro de nuestra sociedad. Lo voy a hacer desde mi visión como Lehendakari de Euskadi.

Somos testigos de acontecimientos históricos de una realidad desconocida con una complejidad inmensa. Todo está sometido a la posibilidad de cambio, nada es cierto ni seguro. Gestionar la incertidumbre es, hoy más que nunca, un imperativo de realidad.

Acabamos de levantar la situación de alarma de la pandemia del coronavirus en el estado español. Esta crisis sanitaria, en la que aún estamos inmersos, ha afectado a la vida de las personas, de las familias y de sus relaciones. Ha afectado primero a la salud; también a los hábitos de vida. Ha afectado y va a afectar en mayor medida, a la economía y al empleo. Estamos ante una crisis real. Debemos enfrentarla con realismo, unión y determinación.

Todas las mentes y todas las manos van a ser necesarias. También los corazones. Esta es una crisis de calado humano, económico y social.

La dimensión de esta crisis me conduce a subrayar, en cada reflexión, una referencia previa de solidaridad, condolencia y cercanía a las familias de las víctimas y a quienes más han sufrido.

Analizado todo lo ocurrido a lo largo de estos tres últimos meses es importante reconocer el compromiso de la sociedad en su conjunto. En su inmensa mayoría el comportamiento de la ciudadanía ha sido cívico y ejemplar.

En Euskadi hemos contado con la buena gestión de nuestro servicio vasco de salud Osakidetza y la de todos y cada uno de sus profesionales.

Osakidetza ha demostrado su capacidad. A finales del mes de junio tenemos solo 6 personas ingresadas en la UCI, cuando llegamos a tener 240 personas hace escasamente un mes y medio. A pesar de la mejora, seguimos realizando más de 3.500 test diarios, en un gran esfuerzo de vigilancia y control.

Euskadi, antes de la pandemia se encontraba en una fase de crecimiento económico sostenido, sólido y consolidado.

Habíamos logrado situar el paro en el 9,4 %, la tasa más baja del estado.

Recuperar todo el empleo perdido por la pandemia vuelve a ser nuestra principal prioridad como País.

No va a resultar sencillo. Somos conscientes del esfuerzo que tendremos que realizar. Pero no partimos de cero. El trabajo realizado en esta pasada legislatura es una base muy sólida para volver a superar este nuevo reto.

Contamos con unas cuentas públicas equilibradas, desde 2017 cumplimos con el compromiso de déficit cero;

La dimensión de esta crisis me conduce a subrayar, en cada reflexión, una referencia previa de solidaridad, condolencia y cercanía a las familias de las víctimas y a quienes más han sufrido

## La Renta de Garantía de Ingresos, puesta en marcha en Euskadi en los años 80, ha sido una referencia a la hora de aprobar el Ingreso Mínimo Vital por el Gobierno Español.

- La deuda pública se ha reducido hasta el 12,4% del Producto Interior Bruto; y
- En las tres últimas emisiones de Bonos sostenibles de Euskadi, la demanda ha sido cinco veces superior a la oferta.

Euskadi es un País solvente en los mercados internacionales.

Esto nos ha permitido reaccionar, de inmediato, con medidas de choque ante las consecuencias de la pandemia en la actividad económica y el empleo. Desde el Gobierno Vasco, de forma complementaria a las medidas de urgencia aprobadas por el Gobierno español, pusimos en marcha en las primeras semanas, un Fondo Covid dotado con 1.550 millones de euros.

De forma adicional, hemos aprobado una inversión específica de 140 millones de euros para relanzar el empleo, así como las ayudas complementarias para las y los trabajadores que se encuentran en situación de ERTE. Este acuerdo ha sido recientemente suscrito en la Mesa de Diálogo Social en Euskadi.

Hemos reducido un 20% la tasa de pobreza en cuatro años. Estamos siete puntos por debajo de la media europea. La Renta de Garantía de Ingresos, puesta en marcha en Euskadi en los años 80, ha sido una referencia a la hora de aprobar el Ingreso Mínimo Vital por el Gobierno Español.

A lo largo de estos años, hemos sostenido e incrementado los presupuestos en las políticas sociales. Año a año hemos incrementado el presupuesto destinado a los servicios esenciales de Salud, Educación y Protección social.

En materia de igualdad entre mujeres y hombres, hemos aprobado y desarrollado la Estrategia para la lucha contra la brecha salarial.

Es preciso resaltar que en esta pasada legislatura se produjo la disolución de ETA. Tuvo un carácter unilateral y definitivo, tal y como habíamos demandado y exigido.

Hoy en día, el asentamiento de una cultura de paz, convivencia y respeto al pluralismo y los derechos humanos es una realidad enraizada en nuestra sociedad. Es evidente que todavía tenemos tareas pendientes. Completar los procesos de reconocimiento y reparación de todas las víctimas. Compartir una memoria crítica sobre el pasado de violencia y promover una nueva política penitenciaria, más flexible y adaptada a la nueva realidad. Son tareas pendientes para cerrar definitivamente la herida de la violencia en nuestra sociedad.







En materia de Autogobierno, y tras los trabajos en el marco de la Ponencia del Parlamento Vasco, afrontamos la culminación de un nuevo Acuerdo / Pacto para el futuro político de Euskadi.

El objetivo es, por una parte, completar el Estatuto de Autonomía de Gernika, todavía incumplido tras más de cuatro décadas.

Por otra parte, queremos acordar un nuevo estatus político de futuro que reconozca nuestra realidad nacional, la singularidad del Autogobierno vasco asiente una relación bilateral con el Estado y favorezca la presencia y proyección internacional de Euskadi.

Euskadi mira de nuevo al futuro. Una vez más vamos a tener que superar una situación de incertidumbre y dificultad.

La senda está trazada. Vamos a seguir avanzando en el modelo vasco de Desarrollo humano y Crecimiento sostenible, que ha caracterizado nuestra singladura en las últimas cuatro décadas.

Lo tenemos que seguir haciendo desde el diálogo, la negociación y el pacto. Es nuestra forma de hacer política y construir País

Tengo la experiencia de haber liderado dos legislaturas en minoría. Todo lo realizado lo hemos conseguido a través del diálogo, y el acuerdo. Ese es el camino en los momentos buenos y, especialmente, en los momentos de incertidumbre, como el actual.

Somos una sociedad plural. La necesidad de acordar no es una maldición, todo lo contrario, es un principio de realidad que ofrece grandes oportunidades. Esta es la forma de hacer política en la que creo.

Nuestro proyecto para Euskadi tiene un objetivo central: salir de la profunda crisis en que nos encontramos, volver a poner en pie a nuestro País.

Junto a la dimensión social, primamos la reactivación económica y el empleo.

Tenemos que mirar al mundo y a su complejidad creciente. Tenemos que intentar entender los cambios y transformaciones que se están produciendo para avanzar y no quedar atrás.

## El Gobierno Vasco incrementará un 6% anual sus recursos, porque la innovación es la llave de nuestro futuro

Tenemos que hacerlo con mirada larga. Con la proyección de la década que iniciamos.

En este escenario Identificamos tres grandes transiciones globales. Representan tres retos de País. Tres oportunidades.

- Primero. *La transición tecnológica y digital.*

Nuestra respuesta es un gran Acuerdo de País por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Con un objetivo claro: lograr que Euskadi sea una de las Regiones Líderes en innovación en Europa el año 2030.

Apostamos por la industria inteligente, la salud personalizada y la energía limpia.

Además, primamos cuatro territorios de oportunidad: Alimentación saludable, Eco-innovación, Ciudades sostenibles, Industrias culturales y creativas.

Hemos comprometido una inversión en I+D público-privada de 20.000 millones de euros en la presente década. El Gobierno Vasco incrementará un 6% anual sus recursos, porque la innovación es la llave de nuestro futuro.

- Segundo. *La transición energética y medioambiental.*

Es una transición global y nos sitúa ante el reto de la sostenibilidad y la transformación energética.

Nuestra respuesta es un gran Acuerdo por el Clima con cinco ejes de actuación: Movilidad y transporte sostenible; Energías renovables; Cambio climático; Biodiversidad y Economía circular.

- Tercero. *La transición sanitaria y social.*

Nuestro compromiso comienza por redoblar la apuesta por el servicio público de salud. Plantea, además, el desafío de una sociedad equilibrada, cohesionada y justa, basada en la igualdad y la transparencia.

En esta visión estratégica nos alineamos con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Este es nuestro marco global.

Somos un pueblo que ha tenido que afrontar históricamente el reto permanente de adaptarse a las dificultades y los cambios. La experiencia nos muestra cuál es nuestro camino: personalidad propia, esfuerzo permanente y cohesión social.

Esta es el método para construir la Euskadi que queremos, la Euskadi del 2030.

En este marco, hemos definido 15 Objetivos de País para los próximos años. 15 objetivos para suscitar la colaboración y el compromiso de toda la sociedad vasca.

- Uno: volver a situar el paro por debajo del 10%. Esta es nuestra gran prioridad. Mas empleo y de mayor calidad.
- Dos: lograr que la renta disponible por habitante nos sitúe entre los 8 primeros países europeos.
- Tres: elevar la inversión en I+D por encima de la media europea. Hacer de Euskadi un polo europeo de innovación.
- Cuatro: mantener el 100% en el índice de transparencia internacional.
- Cinco: situarnos en el Top 10 mundial del Índice de Desarrollo Humano.
- Seis: colocar a Euskadi entre los 5 países europeos con menor desigualdad social.
- Siete: situar a Euskadi entre los 6 países europeos con mejor índice de igualdad de género.
- Ocho: lograr que las tasas de pobreza sean inferiores al 9%.
- Nueve: reducir el abandono escolar por debajo del 8%.
- Diez: alcanzar una esperanza media de vida de 85 años.

Nuestro compromiso comienza por redoblar la apuesta por el servicio público de salud

- Once: aumentar un 15% los índices de natalidad.
- Doce: reducir un 30% la emisión de gases de efecto invernadero respecto a 2005.
- Trece: lograr que el consumo final de Energía se base en un 20% en Energías renovables.
- Catorce: lograr que más del 90% de la población de menos de 25 años sea vascohablante.
- Quince: alcanzar un acuerdo para un nuevo estatus político, que garantice más y mejor autogobierno para Euskadi.

El empleo vuelve a ser el objetivo compartido, el bien común, la prioridad de País.



El empleo y la reactivación económica son dos caras de la misma moneda.

Con este objetivo estamos elaborando una Estrategia para la reactivación de nuestra economía y la creación de empleo, dotada con 10.000 millones de euros. Una estrategia que queremos compartir con los agentes económicos y sociales y la colaboración público-privada.

Esta estrategia se sustenta en una forma de ver la empresa como un proyecto común compartido de todas las personas que la componen.

La empresa como referente del dialogo social y de la participación. Las empresas participativas son más competitivas y crean empleo, las no competitivas acaban destruyéndolo.

Por eso abogamos por un nuevo modelo de empresa mas inclusivo y participativo. Queremos situarnos a la vanguardia de este nuevo modelo mas humano, mas solidario y, por ende, más competitivo.

Ya fuimos pioneros con el modelo cooperativo vasco. Y vamos a ser pioneros también ahora. Así lo ha manifestado el propio Parlamento vasco que ha apoyado por unanimidad el impulso de este modelo.

Un modelo que alumbrará una nueva empresa para una nueva generación. •







Vista del centro de Llanes con las vías del tren que unía la localidad con Oviedo en primer plano (1905-1925).







TENDENCIAS  
2020